

REVOLUCIONARIOS EN TIEMPOS DE PAZ.

Rompimientos y recomposición en las izquierdas de
Guatemala y El Salvador.

Ricardo Sáenz de Tejada*

Introducción

América Latina parece vivir en los últimos años un nuevo período de movilización social y de victorias políticas de la izquierda que se han manifestado en los triunfos electorales de Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Vázquez en Uruguay y Morales en Bolivia, así como en el protagonismo e irrupción en la política de movimientos sociales en estos y otros países de la región. Aunque Centroamérica no ha permanecido ajena a estos procesos, aparentemente las fuerzas de izquierda no han logrado triunfos electorales significativos y los movimientos sociales no han logrado doblegar a los gobiernos que han impuesto programas de reformas que se han traducido en más pobreza y desigualdad para estos países¹.

Los pueblos centroamericanos son portadores de una larga tradición de lucha que se remonta al período colonial y que durante el siglo XX se manifestó en la resistencia de Sandino a la ocupación norteamericana de Nicaragua, la rebelión campesina de 1932 en El Salvador, el enfrentamiento del gobierno de Jacobo Arbenz contra la United Fruit Company, así como la lucha revolucionaria impulsada por diversos grupos insurgentes en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Después del triunfo de la revolución Sandinista en julio de 1979, se desarrolló un auge de la lucha guerrillera en los otros dos países, alcanzando uno de sus momentos más importantes con la constitución del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN– en el Salvador y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG– en Guatemala en 1981 y 1982 respectivamente. Para evitar que la experiencia nicaragüense se repitiera en estos países, los grupos dominantes con apoyo del gobierno de los Estados Unidos recurrieron a campañas militares de tierra arrasada que costaron la vida de decenas de miles de personas en Guatemala, así como a la abierta intervención norteamericana que sostuvo económica y militarmente al régimen salvadoreño.

Los conflictos armados en Guatemala y El Salvador no concluyeron con la derrota de los grupos guerrilleros ni con un triunfo revolucionario; su desenlace estuvo definido por un proceso hasta entonces inédito de diálogo y negociación entre las insurgencias y los respectivos gobiernos. A raíz de estos procesos se suscribieron en ambos países Acuerdos de Paz que buscaron establecer las bases de solución de las causas de las guerras civiles y las condiciones de inserción en la vida política de las antiguas organizaciones guerrilleras. A partir de ese momento, el conflicto político se trasladó del campo militar al de los sistemas políticos regidos por la institucionalidad democrática procedimental, lo que obligó a estas organizaciones a atravesar un complejo y difícil proceso de cambio y ajuste a estas nuevas realidades. Los resultados en ambos casos han sido distintos: mientras que el FMLN se logró constituir en la primera fuerza política de oposición en El Salvador, en Guatemala la URNG no ha logrado consolidarse como un partido político relevante, tanto en términos de apoyo electoral como de fuerza opositora. Esta investigación busca aportar a la reconstrucción de la saga de las izquierdas armadas en Centroamérica, así como explicar las diferencias en las trayectorias de estas organizaciones.

Es en ese sentido que se propuso el subtítulo de rompimientos y recomposición en las izquierdas de Guatemala y El Salvador: a lo largo de su historia, estas organizaciones han pasado por rompimientos organizativos, políticos, ideológicos y estratégicos que han dado lugar a una permanente recomposición de estos proyectos políticos. Se plantea que la comprensión de estos cambios así como de los entornos en los que se generaron puede contribuir a entender las similitudes y las diferencias en las trayectorias de estos grupos así como los resultados políticos que han tenido en ambos países.

Desde el punto de vista teórico, la investigación se movió en tres planos. El primero se inscribe en la discusión en torno a los procesos organizacionales al interior de los partidos políticos desarrollado en uno de los dilemas propuestos por Pranebianco ¿qué factores son los que condicionan o determinan los cambios dentro de estos? Por un lado, están aquellas visiones que postulan que los partidos responden de manera pasiva a su entorno, buscando la manera de adaptarse al mismo; por el otro, quienes plantean la tendencia de los partidos a tratar de transformar su ambiente para dominarlo. A esta dicotomía el autor en cuestión la denomina el dilema adaptación/predominio.

Sin embargo, para Pranebianco el problema está mal planteado. “En primer lugar, el que la organización tienda a adaptarse o a dominar su entorno depende, obviamente, de las características ambientales. Ciertos ambientes se prestarán más a una estrategia de dominio, otros impondrán a las organizaciones una estrategia de adaptación. En segundo lugar lo que llamamos ambiente es en realidad una metáfora para indicar una pluralidad de ambientes, de escenarios en los que opera, en la mayoría de los casos de modo simultáneo toda organización. Escenarios que en general son independientes y se comunican entre sí, pero que son, no obstante distintos. Esto significa que una misma organización puede perfectamente desarrollar estrategias de dominio en ciertas áreas y de adaptación en otras.” (1995:45)

En ese sentido, se postula y desarrolla una interacción compleja entre el entorno y las organizaciones políticas. Debido a la ubicación geográfica de Centroamérica, y a la constante intervención norteamericana en la región, el análisis del contexto no puede restringirse exclusivamente a los procesos políticos locales, sino que debe considerar el impacto del contexto mundial y regional (Centroamérica) en la política; en el ámbito nacional se incorporan las

variables sociales, económicas y propiamente políticas que se expresan en el sistema político; y, finalmente, el marco más cercano que está constituido por las propias organizaciones de izquierda que se interrelacionan y se influyen mutuamente. Son estos condicionantes los que ayudan a reconstruir el desarrollo de las izquierdas en estos países, y permiten explicar parcialmente su surgimiento como organizaciones clandestinas, la efímera legalidad que disfrutaron durante cortos períodos del siglo XX; el nuevo paso a la clandestinidad, su conversión en grupos guerrilleros y la constitución de organizaciones político militares; y, la nueva transición hacia partidos políticos.

Desde esta perspectiva analítica el aparato teórico y metodológico de las oportunidades políticas - construido en el campo de estudio de los movimientos sociales - puede resultar útil para entender la dialéctica de apertura y cierre del sistema político. No se trata simplemente de que por generación espontánea los sistemas políticos² se abran y permitan la inserción de los movimientos y sus demandas, sino identificar las interacciones más amplias fuera del sistema político - el contexto internacional y regional - y dentro del mismo - alineamientos y realineamientos de las fuerzas políticas y, la propia acción de los movimientos que genera resultados distintos en los dos países.

El segundo nivel de análisis corresponde a la dinámica política al interior de los propios partidos y organizaciones de izquierda; estos no constituyen unidades graníticas sino que a su interior interaccionan grupos diversos que confluyen y divergen en torno al proyecto político (que inicialmente serán definidos como la confluencia entre ideología y programa y que abarcan conjuntos de creencias, intereses, concepciones del mundo, representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad, etc., como lo que orienta la acción política de los diferentes sujetos) (Dagnino; 2002:373); la estrategia política a impulsar (que a su vez tiene diversos planos según el momento histórico); y, la estructura organizativa. Esto implica analizar los distintos posicionamientos, argumentos y acciones que tuvieron resultados relevantes tanto al interior de las organizaciones como respecto al entorno en el que los mismos actúan. En cada período analizado por lo tanto se hará referencia al proyecto político, la estrategia y la organización.

El tercer ámbito problemático, que interacciona con los dos anteriores, corresponde a la democracia. Concretamente se discute la “democrática” de los regímenes políticos en los que se insertan las antiguas insurgencias; las acciones y demandas de cara a modificar o profundizar estas democracias; y los constreñimientos que esta ha impuesto a la estrategia de los partidos de izquierda. Al respecto, se postula la existencia de una distorsión de carácter estructural que impacta y deforma las asimetrías de poder produciendo y reproduciendo condiciones de desigualdad entre ciudadanos y actores políticos.

Metodológicamente, se identificaron tres coyunturas o períodos críticos que han determinado cambios al interior de las organizaciones de izquierda y cuyo desarrollo distinto en Guatemala y El Salvador es explicativo de los procesos y resultados ulteriores. El primero de ellos corresponde al período de la lucha armada; en el caso guatemalteco al período de mayor intensidad de la misma (1978-1984) y en el salvadoreño al período que abarca las ofensivas de 1981 y 1989. Las diferencias en el desarrollo de la acción militar y política resultan determinantes para entender el desarrollo de la segunda coyuntura crítica: los procesos de paz en cada uno de los países (El Salvador 1984-1992 y Guatemala 1986-1996). En el período de negociaciones de paz se construyeron en los dos países coaliciones transicionales y lógicas de

inserción diferentes, que a su vez condicionaron la reinserción de las insurgencias en el sistema político.

El tercer período permite discutir el desarrollo divergente de las insurgencias convertidas ahora en partidos políticos, postulando que el desempeño político (los posicionamientos y acciones políticas que desarrollan a nivel nacional) son determinantes en el desempeño electoral (los resultados concretos) y que las diferencias internas interactúan con el desempeño político. Al respecto, mientras el FMLN se ha logrado posicionar como una fuerza de oposición, la URNG ha tendido a desdibujarse, lo que incide en sus resultados electorales.

Un aspecto problemático adicional corresponde al de la identificación de organizaciones de izquierda. En su conocido trabajo sobre Derecha e Izquierda, Bobbio (1998) logra centrar las diferencias entre ambos posicionamientos políticos en torno al tema de la igualdad. La distinción se construye desde esta perspectiva no sólo por la valoración que se haga de la desigualdad, sino también las acciones que se impulsen para disminuir las desigualdades. En el caso centroamericano, sobre todo durante los gobiernos autoritarios, las posiciones de izquierda no se definieron exclusivamente por posiciones ontológicas en torno a la igualdad, sino por una praxis orientada a la denuncia y el combate de la dictadura y la lucha por la democracia plena sustentadas en los valores de la igualdad, la libertad, la independencia y la justicia. Desde esta perspectiva es que se excluye de este estudio a los partidos demócratacristianos que, aunque teóricamente podrían posicionarse a la izquierda del espectro político, en la práctica en muchos casos avalaron o fueron directamente cómplices de los gobiernos militares. El caso de los partidos y grupos socialdemócratas es más complejo. En El Salvador algunos de estos grupos se integraron al Frente Democrático Revolucionario FDR que se alió al FMLN durante el conflicto por lo que su devenir estuvo ligado al de su aliado hasta 1994. En Guatemala los intentos por constituir partidos socialdemócratas fueron detenidos a sangre y fuego por los gobiernos militares durante la década de 1970. Después de 1984 algunos dirigentes socialdemócratas fueron invitados a participar en la apertura democrática y lograron constituir el Partido Socialista Democrático PSD que se disolvió después de las elecciones de 1995. Durante este período la trayectoria de este partido fue independiente de la de la izquierda revolucionaria, por lo que no fue incluido en este estudio³.

El libro está compuesto por cinco capítulos que siguen a esta introducción. Los dos primeros tienen por objeto contextualizar históricamente las izquierdas de estos países considerando dos momentos que resultan relevantes para entender su devenir posterior. El primero es el momento fundacional, en el que las izquierdas de estos países – constituidas básicamente por los partidos comunistas – se establecen y dan sus primeros pasos en contextos adversos. El siguiente corresponde a la lucha armada, que es el momento de establecimiento identitario de distintas organizaciones político militares que coinciden en el impulso de la guerra y constituyen al FMLN y a la URNG en el Salvador y Guatemala respectivamente. La transición es analizada considerando el marco general de los procesos de paz en Centroamérica, las transiciones a la democracia en estos países y el paso de convertir las organizaciones guerrilleras en partidos políticos legales. Posteriormente, se aborda el desempeño de las guerrillas convertidas en partidos dentro de estos sistemas políticos. Al final se presentan un conjunto de conclusiones y reflexiones finales.

EN EL PRINCIPIO FUE LA VIOLENCIA

Un rasgo que caracterizó y definió históricamente las relaciones políticas, económicas y sociales de El Salvador y Guatemala correspondió a la violencia (rasgo que en buena medida sigue persistiendo⁴). Desde el momento fundacional de estas sociedades, a lo largo de la vida colonial y durante el período republicano, los sucesivos grupos dominantes tendieron a disputar y expropiar los recursos estratégicos de los grupos subalternos, este proceso desarrollado en ciclos sucesivos se sustentó y se ha sustentado en el uso recurrente de la violencia.

La violencia se constituyó en el instrumento más recurrido por los grupos dominantes para apropiarse de recursos y responder a las demandas sociales. Los grupos subalternos respondieron de la misma forma para defenderse y relacionarse con las autoridades. Centenares de motines y levantamientos a lo largo del período colonial y su continuidad bajo otras formas de lucha y protesta hasta la fecha pueden sostener este argumento. Desde esta perspectiva la práctica en el campo de lo político utilizó la fuerza como principal medio para dirimir el conflicto de manera que la historia política de estos países esta dominada por ciclos de violencia, represión, persecución política y momentos breves de apertura y democracia.

En estos países las fracturas sociales, étnicas y geográficas impidieron la constitución de partidos como organizaciones de intermediación política; estos fueron agrupamientos políticos precarios que expresaron los intereses de los poderosos. En Guatemala y El Salvador estos agrupamientos decimonónicos denominados como conservadores y liberales resultaron ser expresiones paradójicas de estas realidades. Los partidos liberales no fueron liberales en un sentido doctrinario, sino que aglutinaron a los sectores económicos emergentes en su disputa con la aristocracia criolla de origen colonial que expresó posiciones conservadoras. No se trató de partidos en el sentido actual del término, sino de grupos a través de los cuales las elites disputaban sus diferencias. Los primeros partidos de izquierda se fueron constituyendo en las primeras décadas del siglo XX entre los trabajadores a partir de la presencia de organizadores extranjeros que contaban con contactos con el movimiento socialista internacional.

Como lo señala Dalton (1982) para el caso salvadoreño y Taracena (1989) para Guatemala, los partidos comunistas que se constituyeron en estos dos países lo hicieron a partir de núcleos de artesanos – sastres, panaderos, carpinteros, etc. – así como por una muy incipiente clase obrera industrial.

El antecedente del Partido Comunista Salvadoreño PCS se encuentra en 1917, cuando grupos obreros formaron la Liga Roja, que fue disuelta poco después; y, en la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños FRTS, constituida en 1923 y perteneciente a la Confederación Obrera Centroamericana. (Anderson; 1976:40-41) Desde mediados de la década de 1920 empezaron a actuar grupos de trabajadores de orientación comunista que en marzo de 1930 constituyeron formalmente el PCS. Dentro del grupo fundador que no superó las 40 personas participaron carpinteros, albañiles, tipógrafos y maestros. (Dalton; 1982:55)

En El Salvador, debido a diversos factores, el PCS logró un inusitado crecimiento, lo que le permitió no sólo ampliarse hacia ámbitos intelectuales – fundamentalmente maestros -, sino también realizar trabajo organizativo entre la población campesina. Este hecho que se empezó a

gestar desde 1929 resultó inédito en la tradición comunista regional debido a la capacidad del PCS para implantarse en las fincas (plantaciones) cafetaleras y apoyar reivindicaciones tales como "... aumento de salarios, la mejora de los ranchos e instalación de botiquines de primeros auxilios. Mas tarde, las reivindicaciones se extendieron a la obtención de raciones de tortilla y de frijoles más abundantes, a la supresión de tiendas de raya y de fichas de pago en las líneas, a mejores tratos, etcétera." (Taracena; 1989:57)

Desde el punto de vista electoral, aunque el PCS no logró convertirse en una fuerza que amenazara en el corto plazo el status quo, obtuvo resultados que le permitieron gobernar algunos municipios. De ahí que, como consecuencia de la crisis de 1929, la dramática caída de los precios del café y el consecuente deterioro de las condiciones de vida de los campesinos, se articuló con el levantamiento rural de 1932, que dio lugar a la feroz represión gubernamental encabezada por el general Hernández que costo la vida de más de 30 mil personas⁵. A pesar de esto, el partido logró sobrevivir y se constituyó en "... el primer partido político permanente y moderno de El Salvador." (Zamora; 2003:7)

En Guatemala, el primer partido comunista, el Partido Comunista Guatemalteco PCG fue fundado en abril de 1923 en el período posterior al derrocamiento del dictador Estrada Cabrera y en el marco de la lucha de los trabajadores ferrocarrileros y las organizaciones mutualistas por constituirse en sindicatos autónomos. (Taracena; 1989:80). Como antecedente del PCG está la Unión Obrera Socialista UOS, fundada en 1921 en la que convivieron posiciones anarquistas y comunistas hasta que estos últimos decidieron formar su partido. (Taracena; 1988:3-4) A partir de 1928 el PCG estableció relación directa con la Internacional Comunista, con lo que logró algunos apoyos para la formación y la organización comunista en Centroamérica.

Aunque durante la década de 1920 la relación del PCG con los gobiernos fue conflictiva - existió una constante persecución contra sus dirigentes - a partir de la crisis de 1929 esta situación se agravó. Con la llegada a la presidencia del General Jorge Ubico – que gobernó Guatemala durante 14 años – se estableció un enfrentamiento directo. Entre diciembre de 1931 y enero de 1932 la mayoría de los dirigentes comunistas fueron encarcelados y condenados a muerte. Aunque se conmutó la sentencia de la mayoría de los líderes – el único fusilado fue Juan Pablo Wainwright de nacionalidad hondureña – el PCG no pudo recuperarse. Con los acontecimientos de 1932 ocurridos en El Salvador, las clases dominantes guatemaltecas desarrollaron una fobia contra las organizaciones de izquierda, y en alianza con la Iglesia Católica empezaron a cimentar el anticomunismo en la sociedad guatemalteca⁶.

La represión contra cualquier disidencia, y sobre todo contra aquella que viniera de los grupos subalternos fue tal que se prohibieron las reuniones en la calle de más de tres personas, así como el uso de la palabra obrero, que fue sustituida por la de trabajador⁷. En estas circunstancias, el partido comunista y las organizaciones de trabajadores entraron en una suerte de estado de hibernación que duró poco más de una década.

El contexto nacional, regional e internacional en el que surgieron los primeros partidos comunistas de Guatemala y El Salvador fueron adversos. Aunque nacieron en períodos de "apertura democráticas limitadas" fueron sujetos de permanente persecución y represión. En el caso guatemalteco, el PCG y las organizaciones sindicales que influían ni siquiera pudieron legalizarse; aunque el PCS logró constituirse en un partido legal que logró importantes

acercamientos con la población campesina, padeció una cruenta represión a partir de la rebelión de 1932. Sin embargo, mientras que los sobrevivientes del PCS pudieron pasar a la clandestinidad y de alguna manera asumir las lecciones aprendidas⁸; la captura de los dirigentes y la desarticulación del PCG implicó la desaparición del primer partido comunista de Guatemala, y, los fundadores en la década siguiente del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) no conocieron ni asimilaron la experiencia de la represión, en tanto lo constituyeron en un entorno distinto.

El resurgimiento

En el caso guatemalteco, la “salida de las catacumbas” ocurrió en una situación política interna e internacional distinta, el liderazgo de las organizaciones de izquierda de los viejos artesanos comunistas que acumularon experiencia política en la década de 1920 fue sustituido por jóvenes revolucionarios, estudiantes y profesionales universitarios que adquirieron protagonismo en la lucha contra la dictadura ubiquista y muchos de los cuales pasaron a ocupar puestos en los gobiernos de Juan José Arévalo y del coronel Jacobo Arbenz Guzmán⁹.

En El Salvador dos años después de la matanza de 1932 los organizadores del PCS ya realizaban actividades políticas en las zonas rurales del país, y para 1934 tenían nuevamente presencia en San Salvador. Este trabajo se realizó de manera clandestina pero constante y progresivamente, lo que permitió que el partido participara activamente en el derrocamiento del dictador Maximiliano Hernández así como cierta influencia entre las organizaciones de trabajadores.

El contexto internacional de este resurgimiento estuvo signado por el fin de la segunda guerra mundial y los inicios de la guerra fría. Esto generó dinámicas de tensión a nivel internacional en las que, en la zona de influencia norteamericana se admitió y promovió la democracia y la libertad, pero se limitó y persiguió las actividades de aquellas fuerzas políticas que pudieron ser identificadas con el comunismo. En el lustro que siguió al final de la segunda guerra mundial el entorno exterior estuvo volcado hacia la instauración de la democracia occidental en el mundo “libre” y liberado. De hecho, esta instauración incluyó e influyó en los países objeto de estudio, en los que el combate al nazismo y el fascismo se identificó con el rechazo a los dictadores tropicales. La política norteamericana de democratización controlada impulsada en los países liberados en Europa fue también aplicada en esta región.

En Guatemala este ambiente contribuyó al desarrollo de las movilizaciones y protestas civiles que se dieron en el primer semestre de 1944 y que provocaron la renuncia del último dictador liberal, Jorge Ubico, y el movimiento cívico – militar que derrocó a su sucesor – Ponce Vaides – en octubre de 1944.

Después de la revolución del 20 de octubre de 1944 en Guatemala, se aprobó un orden constitucional que instituyó un régimen democrático y estableció de manera formal libertades políticas y civiles para cientos de miles de guatemaltecos que anteriormente no habían ejercido derechos de ningún tipo. Esta primavera democrática dio lugar al surgimiento y florecimiento de una pléyade de partidos revolucionarios – en el sentido de considerarse “herederos de la revolución de octubre de 1944” – que ideológicamente podrían calificarse como nacionalistas – revolucionarios desde donde se fueron constituyendo grupos que dieron lugar a la constitución de un nuevo partido comunista guatemalteco.

De acuerdo con Cazali en 1946 se formó un Comité organizador del Partido Comunista de Guatemala dentro de la Central de Trabajadores de Guatemala CTG. Este comité contó con la asesoría de comunistas salvadoreños y la participación de los dirigentes magisteriales Víctor Manuel Gutiérrez y Mario Silva Jonama. De manera paralela, un grupo de estudiantes universitarios y militantes de otros partidos revolucionarios formaron la Asociación Socialista. Ambos esfuerzos confluyeron en la creación de la Vanguardia Democrática Guatemalteca que tenía como objetivo la formación del partido Comunista, que fue fundado en septiembre de 1949 bajo el nombre de Partido Guatemalteco del Trabajo –PGT¹⁰. (1998:22) Debido a la interpretación de un artículo constitucional¹¹ el partido tuvo que actuar de manera clandestina sus primeros años¹².

Por desacuerdos con la línea aprobada por el partido, un grupo de militantes comunistas se separó y fundó el Partido Revolucionario Obrero de Guatemala PROG en mayo de 1950¹³. Un año después, este partido se autodisolvió y varios de sus miembros se integraron al PGT¹⁴.

La composición social del liderazgo del PGT era distinta a la del PCG; ya no se trataba de artesanos y obreros, sino de intelectuales, maestros, estudiantes universitarios y profesionales, algunos de los cuales ocuparon puestos en la administración pública, particularmente durante el llamado “segundo gobierno de la revolución”. La mayoría de las fuentes que han tratado este tema coinciden en señalar que a pesar de que el PGT era un partido cuantitativamente pequeño¹⁵ logró una gran influencia sobre todo durante el gobierno del Coronel Jacobo Arbenz Guzmán¹⁶. Las razones de esta influencia han sido explicadas a partir de la disciplina y constancia de los militantes comunistas y su cercanía al presidente Arbenz y a su esposa. (Grandin; 2004: 52)

Por su parte, el PCS desarrolló entre 1944 y 1980 una estrategia de lucha política de carácter democrática electoral en la que “a nivel de discurso proclamará la inexorabilidad histórica del socialismo, pero en la práctica sostendrá que, para que ello suceda, habrá que aprovechar al máximo, luego de crearla, la legalidad democrático burguesa.” (González; 1994:85)

Coherentes con este objetivo (la necesidad de crear una legalidad democrática), el PCS participó en el derrocamiento de la dictadura de Hernández Martínez. Durante la década de 1950, período en que se mantuvo proscrito, el PCS realizó trabajo político entre las organizaciones sociales, contribuyendo a la creación del Comité de Reorganización Obrero Sindical CROS, y la Acción Estudiantil Universitaria AEU y en 1957 contribuyó a la creación de la Federación General de Trabajadores Salvadoreños.

La estrategia política impulsada por los Partidos Comunistas centroamericanos respondió de manera general a la propuesta del Partido Comunista de la Unión Soviética PCUS respecto al impulso de frentes nacionales que promovieran la democratización y ampliaran la presencia y la capacidad política de estos partidos¹⁷. En Guatemala el PGT llevó a la práctica esto¹⁸, de manera clandestina influyendo en el gobierno y los partidos de la coalición gobernante de Juan José Arévalo y participando activamente en la campaña de Arbenz Guzmán. En 1952 el PGT promovió la fundación del Frente Democrático Nacional –FDN – con las características de Frente Único para apoyar el gobierno de Arbenz. En este frente participaron partidos y la central sindical y campesina. (Urrutia; 1986:66) Durante este gobierno, y en el marco de la

implementación del Programa de Reforma Agraria el PGT logró una importante expansión al mantener y ampliar su influencia en el movimiento obrero y vincularse con los dirigentes de los Comités Agrarios Locales, algunos de los cuales se adhirieron a este partido¹⁹.

Desde el punto de vista organizativo, los partidos comunistas de estos países se ubicaban en una tensión/contradicción respecto al modelo organizativo a seguir: convertirse en un partido leninista clásico en el sentido de ser una organización de revolucionarios profesionales cuyo objetivo era la “toma del poder”, o convertirse en partidos burocráticos en base al modelo del PCUS, un partido en el poder que, además era un partido-estado con todos los recursos necesarios para desarrollarse. Además de esta tensión teórico organizativa, el otro condicionante correspondía al hecho de que, dentro de la estrategia de los frentes nacionales, los partidos comunistas deberían participar y competir y/o aliarse electoralmente con partidos de masas. En ese sentido tanto el modelo leninista de profesionales de la revolución como el pecusiano chocaban con la necesidad de construir partidos de masas.

En Guatemala, la discusión no arribó a ninguna conclusión definitiva en vista de que en menos de una década el partido tendría que discutir su forma de organización ante la necesidad de constituir organizaciones político militares, es decir, como se verá en detalle adelante como modificar la organización y la estructura de un partido para convertirlo en un ejército revolucionario.

Por el contrario, el Partido Comunista Salvadoreño logró resolver esta contradicción a partir de construir un partido leninista de cuadros (clandestino) que actuaba a través de partidos de fachada que se constituyeron en determinados períodos en partido de masas. La conducción comunista actuaba en la clandestinidad orientando e influyendo a la dirección “amplia” o “legal” de estos partidos. Esto indudablemente generó conflictos de todo tipo, pero facilitó –hasta cierto punto - la preservación de dirigentes y estructuras. (Zamora: 2003)

La intervención norteamericana y el auge del anticomunismo

La Revolución Guatemalteca impulsaba un programa de desarrollo capitalista nacional que se basaba en la construcción de infraestructura y centrales eléctricas así como la promulgación de la ley de reforma agraria. Fue la puesta en marcha del decreto 900, Ley de Reforma Agraria la que puso al gobierno de Arbenz en línea de confrontación con el gobierno de los Estados Unidos, lo que se sumaba al conflicto con la oligarquía agraria y la jerarquía de la Iglesia Católica.²⁰

El desenlace de este proceso es conocido: el gobierno norteamericano promovió y organizó la invasión del país desde Honduras por parte de un ejército mercenario, autodenominado de “liberación”; los mandos del ejército de Guatemala decidieron no enfrentar la agresión y provocaron la renuncia del presidente Arbenz. Una sucesión de juntas militares trataron de hacerse con el control de la situación hasta que el líder del movimiento contrarrevolucionario, Coronel Carlos Castillo Armas asumió la presidencia del país²¹ e impuso un régimen de terror caracterizado por la persecución, encarcelamiento y exilio de los dirigentes revolucionarios, y particularmente de los del PGT²². La jerarquía de la iglesia Católica convirtió este proceso en una suerte de cruzada, lo que contribuyó a reforzar el anticomunismo popular.

A partir de junio de 1954 el PGT debió enfrentar una situación compleja y en términos generales adversa. Las nuevas autoridades ilegalizaron a todos los partidos políticos y con particular ahínco se dedicaron a perseguir a los miembros del PGT como a los que consideraron sus colaboradores, para lo que emitieron la Ley Preventiva Penal contra el Comunismo que creó el Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo “dotado de facultades para ordenar a las fuerzas de seguridad la investigación de casos y arresto de personas.” Adicionalmente se establecieron medidas de privación de libertad, libertad vigilada, residencia forzada, expulsión de extranjeros y pena de muerte para castigar “actividades de resistencia susceptibles de ser consideradas como comunistas.” (CEH I; 1999:109) La mayoría de dirigentes de este partido tuvieron que asilarse en embajadas extranjeras y partir al exilio, mientras que centenares de personas fueron encarceladas acusadas de militar en el mismo y decenas fueron asesinadas.

Después de la impresión inicial, los dirigentes del PGT decidieron modificar su estructura organizativa, de tal manera que pudieran continuar trabajando de manera clandestina.²³ En el proceso de reconstrucción y mantenimiento del partido desempeñaron un papel importante las estructuras juveniles y grupos de estudiantes.

En el Salvador, la exclusión política de la izquierda alcanzó, al igual que en Guatemala un carácter legal. Como explica Zamora: “La voluntad de excluir a la izquierda de la participación política, se produce en El Salvador no sólo mediante los usuales decretos de ilegalización de partidos, o las leyes de defensa del orden público o de la Democracia, que durante la guerra fría fueron tan tristemente frecuentadas por nuestros regímenes, sino que se elevó a rango constitucional. Efectivamente, la constitución de 1950, a pesar de incluir en su texto todos los derechos humanos y adoptar el modelo de estado de bienestar, en su artículo 20 inc. 2º prohíbe el establecimiento de organizaciones políticas de carácter internacional o extranjero, lo cual era una tajante prohibición del PCS, en la medida que éste era la sección salvadoreña de la Internacional Comunista. Como si lo anterior fuera poco, en 1962, después de un golpe de estado, los coroneles, pretendieron legitimarse eligiendo una asamblea Constituyente que en una sola noche decretó una nueva Constitución, sin embargo los dos únicos cambios que le introdujeron al texto de 1950 fueron, por una parte, la supresión del carácter laico de la enseñanza pública y por el otro, la extensión a los nacionales de la prohibición del Art. 20. en la constitución de 1983 estas disposiciones fueron suprimidas, pero para entonces ya era tarde, pues la izquierda estaba poniendo en jaque al régimen con las armas en la mano.” (2003:36)

La respuesta del PCS a la exclusión contribuyó a desarrollar la estrategia de creación de partidos de fachada que le permiten participar en procesos electorales y, crear frentes de masas y organizaciones sociales bajo el control partidario. (Zamora; 1998:213)

Siguiendo a Zamora, entre 1930 y 1970 el PCS hegemonizó la representación de la izquierda salvadoreña, en tanto que fue el único partido que a pesar de estar la mayor parte del tiempo en la clandestinidad mantuvo una oposición coherente frente al régimen político. Los grandes debates que se dieron al interior del mismo fueron los referidos a reformismo versus revolución; estrategia y táctica del partido (la validez del partido obrero y la vanguardia frente a la realidad salvadoreña) y lo referido a la cuestión agraria y la política de alianzas; y, la violencia en un doble sentido: la necesidad de defender a su militancia de la violencia del Estado, y, por supuesto, el tema de la violencia revolucionaria. (2003:39)

Desde principios de la década de 1960 al interior del PCS se inició una discusión en torno a la lucha armada en vista de que los frecuentes golpes de estado y la represión permanente parecían imposibilitar el impulso de la estrategia pacífica. En 1961 el Comité Central del Partido planteó la necesidad de impulsar la Revolución de Liberación Nacional Salvadoreña, "...determinando las fuerzas motrices de la misma y señalando la vía armada como la más probable; y reconociendo como cuestión de principio, la necesidad de formar el frente democrático al mismo tiempo que elevar la clase obrera a su papel de vanguardia." (González; 1994:89) En la misma dirección formó los llamados Grupos de Acción Revolucionario GAR.

Sin embargo, el PCS pareció inclinarse más por la lucha política legal²⁴, de manera que después de lograr el control del partido Unión Democrática Nacionalista (UDN) impulsaron junto al partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y el Partido de Acción Renovadora (PAR) la Unión Nacional Opositora (UNO) que en 1972 postuló a la presidencia a José Napoleón Duarte. La UNO ganó estas elecciones, sin embargo, el ejército impuso el fraude electoral y reprimió violentamente las manifestaciones de la oposición. Para muchos miembros del PCS con esto quedó definitivamente cerrado el camino electoral.

En ambos países puede identificarse la manera en que se fueron delineando respuestas diferenciadas al cierre de espacios políticos. En el caso guatemalteco este cierre estuvo marcado por el traumático evento – en términos políticos y sociológicos - de la intervención norteamericana. De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala CEH, la violencia desencadenada a partir de estos hechos costó miles de vidas y perfiló una polarización política que atravesó en su conjunto a la sociedad guatemalteca. Algunos de los partidos que apoyaron a los gobiernos de la década revolucionaria aceptaron la proscripción del partido comunista a cambio de su propia aceptación dentro del juego político.

La contrarrevolución significó para el PGT un viraje radical de su posición en el sistema, frente al gobierno y el estado. Hasta 1954 el partido era parte del sistema político legal, reconocido por sus pares; era parte de la coalición gobernante – de hecho no había sido una fuerza opositora – y postulaba a partir de una coalición de clases y partidos impulsar los cambios estructurales desde y dentro del propio estado. A partir de dicho año, el PGT se convierte en un partido expulsado violentamente de la legalidad, ubicado en la oposición clandestina que deberá encarar en pocos años presiones internas y externas para convertirse no sólo en una fuerza política de oposición al gobierno, sino también al estado. La expulsión violenta de las fuerzas de izquierda del sistema político impuso un dilema a estos grupos: intentar reinsertarse en el mismo para cambiarlo de manera progresiva o, enfrentar con violencia a la violencia y modificar de manera radical el conjunto del sistema político, económico y social.

En el caso salvadoreño, la sucesión de intentos reformistas – aunque frustrados – no impuso de manera temprana el recurso a la violencia, sino mantuvo latente la posibilidad de apertura del proceso político y el impulso de una estrategia que permitiera potenciar los espacios la democracia procedimental – que debía conquistarse – para posteriormente avanzar al horizonte socialista.

La Vía Armada

La creación de organizaciones político militares se dio en distintos momentos en los países objeto de estudio. En Guatemala, las primeras organizaciones insurgentes se constituyeron a principios de la década de 1960 mientras que en El Salvador empezaron a configurarse en la década siguiente y no fue sino hasta principios de la década de 1980 que se desencadenó la guerra civil.

La explicación del surgimiento de organizaciones guerrilleras en Latinoamérica en general y en Centroamérica en particular ha incluido consideraciones en torno a la pobreza y la exclusión estructural, la crisis producida por un proceso de modernización frustrada, la respuesta violenta de juventudes radicales ante el incumplimiento de sus expectativas, la reacción a la violencia autoritaria, a estados militarizados excluyentes y represivos, una guerra caliente en el marco de la guerra fría, etcétera²⁵.

Aunque la dilucidación de las causas de las guerras civiles no es objeto de este estudio, en este ensayo se postula que la violencia revolucionaria en Centroamérica fue el resultado de la articulación en un tiempo relativamente corto, en un espacio físico específico y limitado de conflictos de distinta temporalidad, origen y nivel. Estas sociedades arrastraban clivajes de larga duración en el tiempo y a la vez estaban insertas en un contexto internacional y regional dinámico y conflictivo. Los conflictos de larga duración en el tiempo, algunos de los cuales tienen un origen colonial eran (y en algunos casos continúan siendo) la disputa por la tierra (la contradicción lati-minifundio); el conflicto étnico (indígenas y no indígenas así como entre los distintos pueblos indígenas en el caso guatemalteco); lo rural frente a lo urbano; el enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el Estado.

Los conflictos de mediana y corta duración que desencadenaron la guerra incluyeron algunos de carácter generacional; el desarrollo de la contradicción comunismo – anticomunismo; una agudización de la desigualdad por la vía de una modernización que reprodujo los patrones históricos de acumulación; y, la respuesta autoritaria a las demandas democráticas que se desarrollaron en el seno de estas sociedades. Contrario a la interpretación de las guerrillas como “causantes” de los conflictos armados (cfr. Grenier), se plantea que las insurgencias surgieron y se desarrollaron en el ámbito político a partir de la imposibilidad de las fuerzas de izquierda para participar legal y democráticamente dentro del sistema político; sin embargo la estrategia y táctica guerrillera se intersectó y articuló con otros conflictos y procesos sociales, contribuyendo de esa manera a desencadenar y reforzar nuevas dinámicas y ciclos de violencia.

Un primer aspecto a considerar desde esta perspectiva es el entorno internacional. Desde el punto de vista político, la plena instalación de la guerra fría definió de hecho el establecimiento de zonas o áreas de influencia de las superpotencias que debían ser respetadas y que implicaban la decisión de estos Estados de no apoyar movimientos de oposición en los ámbitos territoriales de sus contrarios. Es en ese sentido que algunos estudiosos del papel de la Unión Soviética en América Latina sostienen que el subcontinente, después de la segunda guerra mundial no era una zona de particular interés para la expansión soviética²⁶. (Mikoyan 1995; Varas 1991)

Sin embargo, para la política exterior norteamericana los partidos comunistas latinoamericanos representaban una suerte de quinta columna, por lo que presionaron a los gobiernos de la región para que los proscibieran y persiguieran a sus dirigentes. Esto coincidía con los intereses de las elites locales, para quienes los comunistas y las fuerzas de izquierda

representaban una amenaza directa a la continuidad del status quo y encontraron en los Estados Unidos a un buen aliado. El caso de la contrarrevolución guatemalteca resulta particularmente ilustrativo: coinciden para esto la oligarquía, los grupos conservadores (que giraban alrededor del ala más retrograda de la Iglesia Católica y de las organizaciones anticomunistas), las compañías transnacionales, y la política exterior norteamericana. En Centroamérica, esto se tradujo en una violenta persecución de los partidos comunistas y sus entornos que, en condiciones de clandestinidad mantuvieron su actividad política y empezaron a discutir la posibilidad de oponer la “violencia revolucionaria” a la “violencia reaccionaria”.

A pesar de esta situación geopolítica, y a diferencia de ciertas interpretaciones, el marco de la guerra fría no estableció un enorme tablero de ajedrez en el que los países y las sociedades eran meros peones de las superpotencias. De hecho, las guerras de liberación de los países africanos y asiáticos y para el caso latinoamericano la Revolución Cubana se constituyeron en desafíos para la estrategia de dominación no sólo de los Estados Unidos de América sino también de la Unión Soviética que, a partir del liderazgo de Krushev no estaba interesada en ampliar su zona de influencia ni enfrentar a su rival.

Para la izquierda latinoamericana el triunfo de la Revolución Cubana representó un parte aguas en tanto que constituía un reto a la estrategia política que hasta el momento habían impulsado los partidos comunistas y despertaba interrogantes respecto a su futuro. Más allá del acontecimiento político, el hecho que un grupo de jóvenes revolucionarios hubiera podido enfrentar y derrotar a un ejército profesional se constituyó en un ejemplo a seguir para los grupos de izquierda. Muchos de los futuros revolucionarios centroamericanos quedaron impresionados e impactados por estos acontecimientos²⁷ y no tardarían en emularlos. Al interior de los partidos comunistas se empezó a cuestionar el continuar utilizando métodos legales y pacíficos de lucha que recibían por respuesta la feroz represión gubernamental y cada vez fueron más aquellos que propugnaron por la vía armada.

La otra variable internacional y regional está definida por el llamado período de crecimiento acelerado que se extendió por tres décadas después del fin de la segunda guerra mundial y que permitió que Centroamérica impulsara un proceso de modernización sustentado en los precios relativamente altos del café – el principal producto de exportación de El Salvador y Guatemala – y una industrialización por sustitución de importaciones que a través de la creación del Mercado Común Centroamericano permitió la constitución de un mercado regional. En las zonas rurales este proceso estuvo acompañado también por la introducción de nuevos cultivos y, en el caso guatemalteco por la llamada “revolución verde” que permitió que las pequeñas y medianas propiedades del altiplano indígena multiplicaran la producción de alimentos y se monetarizaran plenamente las relaciones económicas. Los beneficios de este crecimiento económico se distribuyeron asimétricamente y tendieron a concentrarse en los grandes propietarios de tierra que, en el marco de esta modernización diversificaron sus inversiones hacia la industria, el comercio y las finanzas.

Una de las peculiaridades de este proceso de modernización es que se edificó sobre una base estructural definida por la desigualdad y la exclusión que pasaron a ser parte sustancial del modelo económico particularmente en dos aspectos, la concentración de la tierra y la exclusión de grupos de población. El esfuerzo modernizador se financió y se basó en la agro exportación que a su vez se sustentaba en la economía del latifundio y minifundio que condenaba a la

subsistencia y a la pobreza a la mayoría de la población rural (que era mayoritaria) y reproducía lógicas de exclusión y discriminación étnica – claramente marcadas en Guatemala por el racismo contra la población indígena – y formas más sutiles en el caso salvadoreño en las que la población rural resultaba de hecho excluida.

Paralelamente, en el ámbito socio religioso se desarrollaron nuevos procesos; por un lado, el posicionamiento de un sector de la Iglesia Católica por la opción preferencial por los pobres, que se manifestó no sólo en una nueva práctica discursiva sino en la constitución de organizaciones (acción católica, comunidades eclesiales de base, etc.) que contribuyeron a una suerte de “despertar sociológico” de la población rural; por otro lado, la actividad misionera de diversas denominaciones protestantes – sobre todo en Guatemala – se convirtió en un desafío para el orden comunitario tradicional.

En lo político, tanto en Guatemala como en El Salvador los espacios para la participación democrática permanecieron cerrados para las fuerzas de izquierda. Después de la contrarrevolución de 1954 el primer país vivió una crisis política que se resolvió hasta 1963 con un golpe militar que sentó las bases de la dominación autoritaria. El Salvador por su parte se movió entre momentos de apertura democrática y golpes de estado en una prolongada e irresuelta crisis de dominación.

Se generó una dinámica cíclica en la que la movilización y las demandas sociales fueron respondidas con el cierre del sistema político (por la vía de los golpes de estado) y la represión violenta; a la que seguía un breve período de estabilidad, con nuevas movilizaciones y la repetición del ciclo. Esta respuesta provocó la radicalización al interior de los partidos comunistas en cuyo seno se exigía una respuesta más contundente a la represión.

Guatemala: la primera ola guerrillera

Cuando se hace referencia al inicio del conflicto armado interno en Guatemala generalmente se toma como fecha indicativa 13 de noviembre de 1960 (Hurtado; 1997:8; CEH I; 1999:122-123), día en que se llevó a cabo un levantamiento militar encabezado por oficiales nacionalistas que posteriormente pasarían a conformar la primera organización guerrillera del país²⁸. El fin de la guerra corresponde al 29 de diciembre de 1996, fecha en que se suscribieron los Acuerdos de Paz entre el gobierno de la república y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG.

Se trata de un período prolongado – 36 años – en los que se dieron importantes cambios en el mundo, en la sociedad guatemalteca y entre los propios actores del conflicto. Para analizar este proceso se consideraron tres sub períodos; el primero abarca lo que se ha denominado la primera ola o generación de organizaciones guerrilleras que incluye la década de 1960. El segundo a la segunda ola o generación de guerrillas, y es durante el mismo en el que se constituyen las organizaciones de izquierda revolucionaria que persistieron hasta el final de la guerra y es también el período más cruento del conflicto en este país. El tercer momento, que será abordado en el capítulo siguiente, es el que se refiere a la transición, desmovilización e inserción en la legalidad de las organizaciones insurgentes agrupadas en la URNG.

El objeto de esta parte del ensayo no es hacer un relato o estudio pormenorizado del conflicto armado, sino analizar las organizaciones del período, la estrategia impulsada y las principales diferencias políticas e ideológicas que se dieron entre ellas de cara a entender las continuidades y cambios que se expresaron en los períodos siguientes.

Las primeras organizaciones guerrilleras

El levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960 y la constitución del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre MR-13²⁹ que con las armas en la mano enfrentaron un gobierno que era considerado corrupto e ilegítimo, influyó de manera determinante en los sectores más radicalizados del PGT que, desde la clandestinidad orientaba la mayoría de sus esfuerzos a lograr su reinsertión en el sistema legal, utilizando para ello procedimientos que iban desde la negociación con otros partidos políticos hasta las movilizaciones y protestas. A esto debe sumarse – como se indicó antes – el impacto que la revolución cubana tuvo en las organizaciones de izquierda latinoamericanas.

En ese contexto puede entenderse el intento realizado por el PGT en alianza con el Partido de Unificación Revolucionaria PUR de iniciar acciones guerrilleras en el departamento de Alta Verapaz³⁰ (norte del país). Aunque esta experiencia fracasó, quedó claro que el PGT estaba dispuesto a impulsar la vía militar³¹ de manera complementaria a una estrategia política.³²

Este intento coincidió con un período de movilización social importante, las llamadas “jornadas de marzo y abril de 1962” en las que estudiantes y trabajadores públicos realizaron protestas en contra del gobierno hasta ponerlo en jaque; en este proceso el papel de la Juventud Patriótica del Trabajo JPT, brazo juvenil del PGT fue fundamental, y la respuesta represiva del gobierno contribuyó a una mayor radicalización de los jóvenes comunistas, de tal manera que a fines de ese año se constituyeron las Fuerzas Armadas Rebeldes FAR.

En la formación de las FAR participaron los militares del MR-13, estudiantes de la JPT organizados en el movimiento 12 de abril y el destacamento 20 de Octubre³³. Se organizaron Frentes Guerrilleros en la zona oriental del país, y el PGT asumió la dirección política de la guerrilla³⁴. Las guerrillas tuvieron relativo éxito en su implantación en los departamentos (provincias) de Zacapa e Izabal (oriente del país), así como en Ciudad de Guatemala. Tanto en las zonas rurales como en la ciudad se realizaron operaciones militares que llevaron en pocos años a convertirla en una de las organizaciones guerrilleras más conocidas en América Latina.

Sin embargo, se dieron contradicciones y divisiones en el seno de la izquierda, de manera que la unidad que formaban estas organizaciones se rompió y el MR 13 se separó del PGT y estableció relaciones políticas con los representantes del buró Latinoamericano de la IV Internacional (Trotskistas); la dirección de las FAR propiamente dicha rompió con el PGT frente a las supuestas reticencias de este partido para asumir de manera concreta la lucha armada, y parte de la JPT se unió a las FAR frente a lo que condenaban como vacilaciones de su organización madre para unirse a la guerra.

Estas divisiones se dieron en el marco de una violenta campaña contrainsurgente en la que se utilizaron estrategias de tierra arrasada, desaparición forzada y concentración de población.

El problema central para las organizaciones revolucionarias en este período correspondió a la validez del impulso de la lucha militar, y en ciertos casos de la forma de implementarlo. A pesar de que este problema sobredeterminó los posicionamientos ideológicos y políticos, existieron diversas vertientes ideológicas que conformaron y enriquecieron al movimiento revolucionario.

La organización política a partir de la cual se desarrollaron el resto de organizaciones fue el PGT que a través de sus propias estructuras y de la JPT nutrió a la primera y segunda generación de guerrillas de sus fundadores y cuadros dirigentes. El PGT era un partido comunista más o menos alineado con la política exterior de la Unión Soviética que se constituyó en un período de apertura democrática y al salir de la clandestinidad asumió la estrategia política y la correspondiente estructura organizativa de un partido legal que buscaba arribar al poder político del estado por la vía electoral en alianza con partidos que denominaba de la “burguesía”. Luego de la caída del presidente Arbenz y su paso a la clandestinidad, la acción del PGT se orientó a buscar su reinserción en el sistema político para continuar trabajando por cumplir con las tareas del período (la conclusión de la revolución democrática burguesa) y acumular fuerzas que le permitieran conducir la transición al socialismo³⁵. Esta política denominada por el Partido de “Conciliación Nacional” tenía por objetivo el reencauzamiento democrático del país “... con la cual los guatemaltecos de derecha e izquierda, conservadores y comunistas, puedan convivir, ejercer en un plano de igualdad sus derechos fundamentales” reafirmando la voluntad de los comunistas de luchar por “el desarrollo pacífico de Guatemala.” (PGT citado por Urrutia; 1986:80-81)

La revolución cubana, el levantamiento del 13 de noviembre de 1960, y la radicalización de la juventud comunista a partir de marzo y abril de 1962 introdujeron serios cuestionamientos a los planteamientos políticos, ideológicos y estratégicos de este partido. El peso de la Revolución Cubana se hizo sentir en el III Congreso del PGT, realizado en mayo de 1960 en el que, aunque se ratificó como objetivo estratégico la revolución democrático nacional con participación de la clase obrera, los campesinos, la pequeña burguesía y la burguesía nacional, en la definición de las formas de lucha se empezó a postular la combinación de éstas y se reconoció la existencia de corrientes que planteaban que la forma principal de lucha debería ser la armada. (Urrutia; 1986: 90-92) El levantamiento del 13 de noviembre contribuyó a fortalecer esta corriente al interior del partido que empezó a ser mayoritaria en la juventud. En mayo de 1961 el partido creó la Comisión Militar³⁶ y se oficializó la discusión en torno a la lucha armada.

La creación de las FAR igualmente contribuyó a profundizar los alineamientos y realineamientos internos al interior del Partido. La mayoría de la juventud y algunos miembros del Comité Central criticaron lo que denominaban vacilaciones del partido respecto a la lucha armada, y existió una disputa y competencia por cooptar dirigentes y cuadros a favor de las distintas posiciones.

Por su parte, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre estaba compuesto originalmente por los militares que se habían opuesto al régimen de Idígoras Fuentes y que en parte eran herederos del nacionalismo revolucionario que algunos oficiales del ejército asumieron en la década revolucionaria. Se trataba de un movimiento patriótico que se levantó en armas

contra un gobierno que consideraban corrupto y en contra de la presencia norteamericana en el país. De hecho, después del levantamiento se entrevistaron con dirigentes de diversos partidos, incluyendo los de extrema derecha, y no fue hasta que algunos de sus dirigentes viajaron a Cuba que entraron en contacto con ideas socialistas e iniciaron un proceso de radicalización política. Por su origen y formación militar, los revolucionarios del 13 de noviembre eran prácticos y pragmáticos en términos de buscar las mejores soluciones para el impulso de sus operaciones, de manera que frente a las vaivenes y lo que interpretaban como enredos burocráticos del PGT aceptaron la colaboración de los representantes del buró latinoamericano de la IV internacional quienes les aportaron recursos para resolver los problemas logísticos y asumieron la construcción del discurso político e ideológico del movimiento.

Este posicionamiento del MR-13 abrió el debate político e ideológico más importante de la izquierda revolucionaria guatemalteca de la década de 1960. Desafortunadamente en el mismo empezaron a predominar la difamación y los ataques personales y descalificadores.³⁷ Los postulados políticos e ideológicos del MR-13 fueron más radicales que los del PGT o los de las FAR, en tanto que propugnaban por una revolución socialista y "... la formación de un gobierno de obreros y campesinos, basado en el pueblo armado y organizado en comités, sindicatos y comunas." (Urrutia; 1986:131)

En cuanto a la estrategia militar "...para el MR 13 la guerrilla tenía la misión de organizar y desarrollar la conciencia política de los campesinos y ser instrumento de éstos. Esta estrategia ponía el acento en lo político y no en lo militar. La etapa final de la revolución no radicaba en esta perspectiva en una serie de batallas decisivas entre dos ejércitos, sino en una insurrección armada, dentro de la cual la acción de las guerrillas en la montaña se coordinara con la de los trabajadores y estudiantes en las ciudades y aldeas." (Urrutia; 1986:132)

Las FAR tenían coincidencias en términos prácticos con el MR-13: muchos de sus miembros habían sido compañeros en el ejército de Guatemala, juntos habían pasado por el proceso de radicalización; ambos impulsaban en el terreno la lucha armada y compartían las mismas críticas al PGT en cuanto a sus limitaciones para incorporarse y apoyar efectivamente el trabajo militar. De esa cuenta, el primer comandante de las FAR Luis Augusto Turcios Lima suscribió la declaración de la Sierra de las Minas con el jefe del MR 13 Marco Antonio Yon Sosa.

Sin embargo, y a partir de las presiones del PGT y de Cuba³⁸, Turcios se deslindó de la declaración. El movimiento revolucionario guatemalteco quedó dividido en tres grupos, el PGT que mantenía cierto alineamiento con la Unión Soviética, las FAR que mantenían sus críticas al partido comunista, y el MR 13, que quedó aislado a partir de la captura y asesinato de varios de sus ideólogos y el posterior rompimiento con la IV internacional.

La estrategia: la centralidad de la lucha armada

Desde el punto de vista estratégico, el centro de la discusión en este período correspondió a la lucha armada, al papel que la misma debía jugar, y a la forma en que debía implementarse. Sobre el primer punto, al interior del PGT se impuso el debate, encontrando una fuerte oposición en la "vieja guardia" quienes insistían en debatir y discutir cuidadosamente la lucha armada; por el contrario, la JPT se convirtió en la gran defensora de esta estrategia, al grado de que cuando se

empezaron a dar conflictos con las FAR, muchos de estos jóvenes abandonaron las estructuras partidarias³⁹.

Las contradicciones sobre el tema de la lucha armada al interior del PGT pueden interpretarse de acuerdo con Urrutia en la confrontación de dos visiones de la misma: la “leninista” y la “guevarista”. La primera postulaba que “... aceptar la vía armada de la revolución implicaba tomar el poder a través de la insurrección, momento de utilización de las formas de lucha – como la guerra de guerrillas – momento que presuponia determinadas condiciones sociales y políticas: situación revolucionaria, desarrollo de las condiciones subjetivas (organización y conciencia de las masas trabajadoras – obreros y campesinos) crisis revolucionaria” La segunda partía de considerar “...que ya existían condiciones para iniciar la lucha armada, en la forma de guerra de guerrillas y a la manera cubana, aunque estas condiciones no estuvieran totalmente desarrolladas. En todo caso, sostenían que la guerrilla podía desarrollar y hacer madurar las condiciones, hasta el punto de crear finalmente las condiciones para la insurrección.” (1986:116)

En ese marco es que puede entenderse la gran contradicción que vivió el PGT desde 1962: muchos de sus miembros aceptaban la vía armada desde una perspectiva leninista, lo que implicaba aceptarla como parte del momento insurreccional de la estrategia, una vez se cumplieran las condiciones políticas y sociales necesarias. Otro sector postulaba la lucha armada como catalizadora de las condiciones objetivas y subjetivas y, otros se oponían a la vía armada y seguían tratando de insertarse en el sistema político legal, de tal suerte que las acciones del partido podían interpretarse como incoherentes. Entre estas destacan las señaladas por Urrutia: en 1962 se planteó esperar el momento oportuno para iniciar las guerrillas y a fines de ese año se decide integrar las FAR; en la formación de estas el Partido no participa como tal, sino como destacamento 20 de octubre; y, esta decisión no fue tomada por el comité central sino por la comisión política.

Asociado a las definiciones antes expuestas estaba el problema en torno al papel que la lucha armada debía jugar en este esfuerzo. Para algunos esta debía ser complementaria a otras formas de lucha, de manera que se constituyera en un instrumento de presión sobre el sistema que lograría su apertura⁴⁰ y permitiera que en la arena política se dirimiera el conflicto social. Desde este punto de vista la administración del accionar militar debía subordinarse a las coyunturas políticas. Parte de la dirección del PGT actuó desde esa lógica y para lograr el control del accionar militar abría y cerraba los recursos logísticos de acuerdo con las acciones políticas que impulsara en cada momento.

Desde los frentes guerrilleros el papel de la lucha armada era considerado central y principal dentro de la estrategia política, de tal suerte que de lo que se trataba era de enfrentar y derrotar al ejército en el campo militar, derrocar al gobierno e instaurar otro de carácter revolucionario. Se privilegiaba sobre todo el impulso de la guerra revolucionaria.

Relacionado con lo anterior, se estableció el problema de cómo y a quiénes les correspondía ejercer la dirección del movimiento revolucionario. Como se señaló antes, al fundarse las FAR se estableció que el PGT se encargaría de la dirección política del movimiento y el MR-13 de lo militar. La simpleza de esta solución muestra la ingenuidad con la que se asumían los retos que se planteaban: no se trataba únicamente de separar lo político de lo militar

– cosa que al poco tiempo se vio que era imposible – sino de resolver un conjunto de problemas logísticos, organizativos y operativos. La inicial separación entre lo político y lo militar condujo a que las estrategias impulsadas desde ambos campos resultaran en el mejor de los casos paralelas y no coincidentes y en otros casos contrarias⁴¹. Para solucionar esto se intentó constituir una dirección colectiva en la que participaran tanto “políticos” como “militares”, por lo que la divergencia se dio en torno a que se priorizarían: los objetivos políticos o los militares⁴². Asimismo, el tema de la logística y de la organización se volvió determinante y fuente de nuevos conflictos que condujeron a constantes procesos de enfrentamiento y ruptura⁴³.

El final de la primera ola

En medio de un proceso de división y dispersión las guerrillas de oriente tuvieron que enfrentar una fuerte ofensiva militar que obligó a su repliegue a la ciudad de Guatemala. Muchos de sus miembros y dirigentes murieron en combate, otros fueron capturados y asesinados y algunos buscaron refugio en el exterior.

El PGT concluyó este período con un serio cuestionamiento a su dirección, así como la pérdida de decenas de sus miembros por las acciones de las fuerzas de seguridad y por la salida de militantes que se integraron a otras organizaciones. Para Alvarado el problema principal estaba dado por la presencia de las tendencias, una conservadora y la otra izquierdista al interior del partido. Esta última, de acuerdo con este autor realizó un trabajo de división: “los grupos fraccionalistas presentaron algunas opiniones sobre el proceso revolucionario en el documento del Frente Guerrillero Edgar Ibarra en octubre de 1964 y en el material elaborado desde La Habana a principios de 1967 y aparecido en Guatemala en abril de ese año. Tales exposiciones se basaron en el trasplante mecánico de la experiencia revolucionaria de la isla antillana, en la que destacan las tesis del foco matriz del movimiento guerrillero; la subordinación de lo político a lo militar; la desestimación total de la lucha de masas y por lo tanto de todas las fuerzas que no están con las armas en la mano; la acción constante; el desprecio por la organización; la liquidación del partido existente ya que el verdadero partido surgiría después como consecuencia del triunfo y sobre la base de las guerrillas; la supervaloración del papel del grupo de dirigentes y la escasa atención a la vital necesidad de la incorporación de las masas a la guerra, etcétera.” (Alvarado: 1994:56)

Como se indicó antes, el MR-13 terminó separándose de los representantes de la IV Internacional, y aunque mantuvo contactos con las otras organizaciones, la captura de sus principales dirigentes así como los continuos golpes recibidos llevaron a su desaparición en 1973.

Las FAR no sólo tuvieron que enfrentar los conflictos con el PGT, lo que desquició su logística y comunicaciones, sino tuvieron que enfrentar y resistir las operaciones contrainsurgentes. Igualmente, la dirección de esta organización tuvo que modificarse por la muerte de dos de sus comandantes en jefe y la desertión de otro. Después de un intento fracasado por implantar una columna guerrillera en el norte del país volvieron a la ciudad, desde donde impulsaron una nueva estrategia política y militar.

Guatemala: de la dispersión a la constitución de la URNG

Dentro de las organizaciones insurgentes existen distintas interpretaciones sobre el final de la primera ola o generación de organizaciones guerrilleras. Mientras algunas hablan abiertamente de derrota, otras prefieren utilizar el término de reflujo⁴⁴. Lo cierto es que esa primera experiencia militar sentó las bases para el nuevo período de lucha insurgente en el país. Las organizaciones guerrilleras que surgirían en la década de 1970 tuvieron su origen directo en el PGT y en las FAR.

El contexto en el que se desarrolló esta nueva ola insurgente fue distinto tanto por cambios ocurridos a nivel internacional como en el país. En el ámbito internacional, tres hechos influyeron en la definición estratégica de estas organizaciones: la muerte del Che Guevara en Bolivia, la llamada revolución de 1968, y el ascenso y caída del gobierno de la Unidad Popular en Chile. Aunque los primeros dos procesos ocurrieron durante los sesenta el impacto de estos hechos perduró en las reflexiones de los dirigentes guerrilleros. La captura y muerte del Che, así como la derrota militar sufrida por las guerrillas guatemaltecas en el oriente del país parecían indicar si no el fracaso en términos generales de la estrategia guerrillera, por lo menos un cuestionamiento al papel que se le daba al foco guerrillero y a una vanguardia armada que de manera “voluntarista” podía “hacer la revolución”. Sin embargo, la lucha del pueblo vietnamita mostró las posibilidades de una “guerra popular”. Por su parte, los acontecimientos de 1968 en su conjunto, incluyendo las acciones soviéticas en Europa del Este, abrieron el camino a la irrupción de una suerte de marxismo crítico, influido no sólo por el marxismo – leninismo consagrado por la Unión Soviética sino a otras influencias que iban desde Althousser, Gramsci y Poulantzas hasta las obras de Fanon y Memmi.

El triunfo de la Unidad Popular en Chile levantó entre los grupos de izquierda y particularmente entre los partidos comunistas la posibilidad de lograr a través de la participación electoral y de alianzas el acceso al poder político e iniciar de esa manera una vía pacífica al socialismo. Así como en su momento se siguió con atención el proceso dio lugar al triunfo revolucionario en Cuba, la llegada y la gestión en la presidencia de Salvador Allende concentró la atención de los revolucionarios centroamericanos. El golpe de Estado del 11 de septiembre fue para muchos revolucionarios democráticos una desilusión y pareció dar la razón a aquellos que planteaban que la única posibilidad de lograr un cambio revolucionario estaba determinada por la acción violenta. Seis años después, el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua fue interpretado como el establecimiento de una situación revolucionaria en Centroamérica, y las viejas y nuevas organizaciones insurgentes se lanzaron a disputar el poder político por la vía militar.

Otro hecho que determinó el contexto de este período es la crisis de los precios del petróleo durante la década de 1970 que en la región desencadenó procesos inflacionarios y problemas económicos que afectaron con diverso grado de fuerza a las capas medias, a los sectores populares urbanos y a la población rural y campesina. El final del Mercado Común Centroamericano derivado de las asimetrías económicas entre los países de la región y que derivó al enfrentamiento entre Honduras y El Salvador contribuyó a un final súbito del proceso de modernización y del crecimiento económico. Los sectores medios urbanos y rurales que se habían logrado desarrollar durante este período fueron los primeros en iniciar un período de movilización y protestas para enfrentar a un Estado gobernado por el ejército. Las organizaciones insurgentes por su parte, en algunos casos tuvieron un papel protagónico en este

proceso de organización y movilización y en otros casos se subieron a la ola de movilizaciones y protestas.

Las nuevas organizaciones

Como se indicó antes, existió cierta continuidad entre las organizaciones de la década de 1960 y las nuevas organizaciones. El PGT y las FAR siguieron desarrollando trabajo político y organizativo. En diciembre de 1969 el Partido celebró su cuarto y último congreso, en el que pasó a definirse como “...el partido de los comunistas guatemaltecos, el partido marxista-leninista, y la forma superior de organización de la clase obrera y de las masas trabajadoras de nuestro país. Como destacamento dirigente de vanguardia de la clase obrera expresa los intereses de esta y los de las masas campesinas explotadas y las aspiraciones de todo el pueblo; tiene como tarea principal dirigir la lucha por la instauración del poder revolucionario, popular y antiimperialista; la construcción del socialismo y de la sociedad comunista en nuestra patria.” (PGT; 1974:5) En los estatutos quedó establecida la decisión del partido de impulsar la lucha armada en el país⁴⁵.

Las FAR iniciaron un proceso de recomposición y reorganización interna. Tras el fracasado intento de establecer un nuevo foco guerrillero en el norte del país esta organización se lanzó a realizar trabajo organizativo partiendo de la consigna “de las montañas a las masas para ganar la guerra”. En distintos documentos esta organización realizó un balance crítico de la experiencia guerrillera de la década anterior y sentó las bases para su nueva estrategia⁴⁶.

Por su parte, un grupo de ex militantes de la JPT así como miembros de la Guerrilla Edgar Ibarra constituyeron a principios de la década de 1970 la Nueva Organización Revolucionaria de Combate NORC, que posteriormente se convertiría en el Ejército Guerrillero de los Pobres EGP. Al núcleo inicial de fundadores se sumaron posteriormente grupos de estudiantes católicos que conformaron el grupo CRATER. (CEH; 1999:174) A diferencia de las guerrillas de la década anterior, el EGP decidió establecer su zona de operaciones en la zona occidental del país, buscando reclutar y movilizar a la población indígena. El EGP realizó un proceso de implantación que se inició en enero de 1972 y concluyó con la realización de las primeras operaciones militares en 1976⁴⁷.

Asimismo, producto de la escisión de la Regional de Occidente de las FAR se constituyó en 1972 la Organización del Pueblo en Armas ORPA, que elaboró sus planteamientos a partir de la crítica a la experiencia revolucionaria de la década anterior, particularmente la estrategia foquista e introdujo como tema central para su acción política – como se verá a continuación – el tema de los pueblos indígenas, particularmente el racismo.

Adicionalmente, derivado de diferencias internas dentro de la ORPA se constituyó el Movimiento Revolucionario del Pueblo Ixim MRP Ixim; y derivado de un proceso independiente se estableció a fines de los años setenta la sección Guatemala del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos PRTC⁴⁸.

Los proyectos políticos

Durante este período, las organizaciones mencionadas coincidían en el impulso de la lucha armada como eje central de la estrategia, sin embargo seguían teniendo diferencias políticas, ideológicas y organizativas importantes. El PGT, planteaba al respecto que “no existe otra alternativa a la vía violenta de la revolución guatemalteca; es en el curso de ella que nosotros aprovecharemos de acuerdo con las circunstancias, las más variadas formas de organización y de lucha” definiéndola para el caso como guerra revolucionaria popular o guerra revolucionaria del pueblo⁴⁹. (PGT; 1972:63) Esta guerra fue concebida en distintas etapas: la primera correspondería a la “acumulación de fuerzas y preparación para la lucha en todos los terrenos”; la segunda etapa tendería a “establecer el equilibrio en la correlación de fuerzas mediante el desarrollo y temple de nuestras propias fuerzas y el desgaste del enemigo”; y la tercera supondría la creación de un verdadero ejército popular. (1972:96-101)

Desde el punto de vista organizativo, el PGT reconocía una estructura partidaria tradicional que partía del Congreso, el Comité Central, la comisión política del Comité Central; asambleas, comités y conferencias regionales; asambleas y comités de zona; asambleas y comités de sector; asambleas y comités locales; y, comités de base⁵⁰. Territorialmente la organización partidaria mantuvo presencia en la Ciudad de Guatemala, las Verapaces (norte del país) y en el sur. A pesar de la decisión de impulsar la lucha armada, a lo largo del segundo período de lucha guerrillera el PGT tuvo serias dificultades para participar en la misma y en la práctica nunca logró mantener de manera estable una unidad militar o frente guerrillero⁵¹. Estas limitaciones para sumarse al proceso de guerra reavivaron la tensión entre la tendencia conservadora, que seguía buscando su inserción en la legalidad, y la tendencia de izquierda, que privilegiaba la acción militar. Estos conflictos provocaron la salida de grupos de militantes y el desarrollo de dos escisiones: el PGT núcleo de dirección nacional⁵² y el PGT 6 de enero⁵³.

Por su parte, el EGP se definía como “...una organización político militar cuyo fin es interpretar, llevar a cabo y realizar los anhelos y aspiraciones revolucionarias de nuestro pueblo y concretarlas en conquistas políticas que sean irreversibles, que constituyan logros revolucionarios frente a las clases dominantes y el imperialismo. (Es una organización) Político militar en todos sus aspectos y por eso en su estructura establecimos que todo organismo del EGP debía tener 3 aspectos fundamentales (...) unidad militar, organismo político y equipo de trabajo.” (EGP, una guerra popular revolucionaria 1982) De acuerdo con Hurtado (2005:57) “La definición de su estrategia era: marxista- leninista, nutrida de las experiencias innovadoras de otros pueblos en su proceso de liberación, particularmente de las experiencias de Cuba y Vietnam aplicada a la realidad guatemalteca (...) Luchaba por la toma del poder para instaurar un régimen socialista. (...) Desde sus orígenes, tuvo una sensibilidad particular a la cuestión étnica en Guatemala, llegando a definir que la Revolución tenía dos objetivos principales: un objetivo clasista terminar con la explotación de los trabajadores, y un objetivo étnico nacional; terminar con la opresión de los pueblos indígenas.”

Desde el punto de vista estratégico consideraba que la guerra debería realizarse en tres planos geográficos que tenían especificidades particulares: la montaña, el llano y la ciudad. Igualmente, desarrollaron trabajo organizativo tanto entre grupos rurales como en la ciudad.

La ORPA durante su etapa de implantación privilegió lo militar como “la forma única y principal de lucha –guerra de guerrillas- para construir un ejército revolucionario con capacidad e iniciativa para golpear estratégicamente al ejército hasta derrotarlo militarmente. (...)

Desarrollamos una concepción militar que, en su momento, fue muy novedosa. En los años 70, rompió muchos dogmas bajo el punto de vista militar y de lucha guerrillera, y abrió posibilidades para construir (...) nuestra fuerza militar.”⁵⁴

Las organizaciones revolucionarias y la cuestión indígena

Uno de los debates políticos e ideológicos más importantes durante esta segunda ola guerrillera se dio en torno a la cuestión indígena. Esta discusión y la práctica que la acompañó fue determinante para el desarrollo posterior del movimiento maya en Guatemala. Siendo Guatemala un país con población mayoritariamente indígena, la incorporación a las organizaciones y su papel en la lucha surgió de la práctica concreta. A mediados de la década de los sesenta a raíz del contacto de la insurgencia con un grupo de cakchiqueles que se incorporó a la guerrilla, se empezó a discutir este tema. De acuerdo con Ramírez el abordaje inicial realizado dentro del PGT “... se hizo reflejando no solamente el punto de vista de la burguesía democrática en formación (que las masas indígenas por su atraso no juegan un papel activo en el proceso revolucionario de la toma del poder, y que sólo pueden integrarse a la revolución democrática victoriosa en la medida en que ésta transforme las relaciones de producción y les de tierras), sino también los resabios discriminatorios del colonialismo (que por su inercia e incapacidad de asimilación rápida de los cambios), esas masas constituyen ‘reservas’ de la reacción.” (1967:42)

En marzo de 1967 la Guerrilla Edgar Ibarra (GEI) divulgó el documento titulado “Situación y perspectivas del movimiento revolucionario guatemalteco”, en el que presentaron un balance general de los primeros años de la guerra. Respecto al tema indígena se señaló: “Un papel decisivo tendrá, en el crecimiento y desarrollo de los destacamentos guerrilleros regulares, la población indígena. Sin ella nuestra guerra no puede ser popular ni garantizar el balance de fuerzas a nuestro favor. Pero además son los guatemaltecos más aptos para esa lucha y los que mayor necesidad tienen de liberarse. Son los más despiadadamente explotados, tienen una gran voluntad de lucha y un odio enorme acumulado hacia sus opresores por siglos de sometimiento; constituyen el sector de nuestra población menos contaminado por la ideología burguesa y yanqui y que con más celo ha conservado el carácter de lo guatemalteco contra la intromisión extranjera; habitan regiones donde el aparato de represión es rudimentario, (feudal) que al destruirlo, material y políticamente, no puede ser reconstruido nuevamente del todo; y ocupan terrenos cuya topografía sólo ellos dominan y constituyen de por sí, baluarte contra las fuerzas enemigas, que se ven obstaculizadas en su movilidad, y que son en cambio propicias para las operaciones guerrilleras; y además debido a que están ligadas a una producción regional dedicada básicamente a abastecer el mercado interno y a sistemas semif feudales de tenencia de la tierra, según los cuales la población campesina recibe en pago a su fuerza de trabajo, en lugar de salario, apenas la posibilidad de autoabastecerse (parcialmente mozos-colonos).” Sin embargo, la ofensiva contrainsurgente de finales de la década dejó inconcluso este debate.

Las organizaciones guerrilleras sobrevivientes de la década anterior y las que se constituyeron durante los años setenta tuvieron aproximaciones distintas frente al tema indígena. Para el EGP el análisis de lo indígena en general, pero particularmente las condiciones para su incorporación a la lucha revolucionaria fueron de particular importancia. Esto según unos de sus primeros dirigentes se debió a que en la zona de implantación inicial del EGP –“las zonas selváticas y serranas del tramo quichelense de Los Cuchumatanes”- la incorporación del campesinado pobre como base de apoyo, obligaba al abordaje en términos teórico-prácticos de la

cuestión étnico nacional. (Payeras; 1991:15) En 1980, en su saludo internacional, el EGP planteó la cuestión indígena en los siguientes términos: “Se trata del problema nacional étnico. En Guatemala la mayoría de la población, el 60% de su totalidad, pertenecen a 22 grupos minorías étnicas, indígenas, que en conjunto, constituyen la mayoría de los guatemaltecos, la mayoría de los dueños de la Patria. Este 60% de los guatemaltecos ha permanecido marginado, discriminado y oprimido desde el tiempo de la colonia a los días presentes. En ellos se sintetiza el máximo de la opresión y el máximo de la explotación, pues también son ellos los que aportan la mayor parte de la mano de obra barata y forman la mayor proporción del semiproletariado.”

En la óptica del EGP, no era posible hablar en Guatemala de una nacionalidad integrada, por lo que correspondía a la revolución guatemalteca la tarea de solucionar esta contradicción. “Sólo en el socialismo, que elimina las fronteras de la explotación y de la división de clases, podrán los indígenas guatemaltecos formar parte de la comunidad nacional y cultural sin perder su identidad, pues entonces el factor que cohesione las partes componentes de la nacionalidad guatemalteca será un interés común, y no el dominio de unos sobre otros.” (EGP; 1980:28) El documento más desarrollado sobre el tema elaborado por el EGP fue escrito por uno de sus dirigentes y publicado como una síntesis no definitiva de las experiencias que sobre el tema indígena vivió esta organización. En dicho documento se postula que los grupos indígenas constituyen grupos étnico-nacionales y que, por lo tanto lo que correspondía crear era una patria multinacional donde se terminará con la opresión nacional.

Por su parte, las FAR mantuvieron en la década de los setenta un análisis bastante apegado al marxismo tradicional: “... cuando se plantean determinar cuál es la ‘fuerza motriz de la revolución’ se dice que el papel mayoritario ‘está asignado al campesinado pobre, una clase que históricamente corresponde al sistema feudal, y se caracteriza en esta época por sus actitudes pequeño burguesas, lo que es un obstáculo para que sea la fuerza principal de la revolución.’ Esbozan una caracterización de los indígenas, partiendo de las relaciones de producción: ‘... forman parte en su mayoría de la nacionalidad Maya-Quiché, pero como clase están divididos. Una parte mínima de sus miembros, viven en una economía natural, otros integran al campesinado, otros forman parte del semiproletariado agrícola, con sus características peculiares en sus relaciones de producción, caracterizándose fundamentalmente por sus migraciones y por vender colectivamente su fuerza de trabajo. Y por último tenemos a los que en la costa integran el proletariado agrícola. (Sáenz de Tejada; 1999:90)

No fue sino hasta la década de 1980 cuando las FAR empezaron a modificar su visión en torno al tema a partir de la incorporación de un número importante de indígenas. Esto los llevó a realizar aproximaciones teóricas con las posturas de Héctor Díaz Polanco y Gilberto López y Rivas. En septiembre de 1986 divulgaron un documento denominado “La cuestión étnico-nacional en Guatemala”, en el que expresaron sus posiciones al respecto. Postularon igualmente un conjunto de demandas y derechos étnicos que se convirtieron en la plataforma política de esta organización sobre el tema indígena. Las demandas fundamentales fueron: detener el etnocidio contrainsurgente; reforma agraria; fin de la discriminación racial y sociocultural; y, la supresión de los Polos de Desarrollo y Aldeas Modelo. Los derechos enunciados fueron: respeto y fomento de la cultura indígena; respeto a las lenguas indígenas y a una educación que tome en cuenta los valores de la cultura indígena; derecho a la organización social propia de los pueblos indígenas; y, derechos económicos. (FAR; 1990:39-42) Respecto a la solución al conflicto étnico-nacional, las FAR plantearon la configuración de la nueva nación guatemalteca, en la que se enfatiza el

reconocimiento de su carácter multiétnico, multilingüe y pluricultural, lo que implicaría la transformación del Estado y el cumplimiento de los acuerdos internacionales en la materia. (Ibíd.:43)

Para la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas ORPA, el tema indígena fue abordado desde la óptica del racismo. Para esta organización político – militar el racismo era el elemento clave para la comprensión de las contradicciones económicas, políticas y sociales en Guatemala. Influída profundamente por los planteamientos de Albert Memmi y Frantz Fanon, la ORPA postuló el camino de la violencia como la vía para restituir la humanidad del colonizado.

Desde esa visión, la violencia del natural (indígena) será “... racional, reflexiva e indispensable, política y revolucionaria, sin desbordes ni apocalipsis de ninguna clase, centrada en sus objetivos principales, metódica y orgánica.” (ORPA; 1976:138)

En su IV y último congreso, realizado en 1969, el PGT abordó la cuestión indígena señalando que dicha población “... está constituida por varias pequeñas minorías, cuyo rasgo particular más distintivo es que hablan lenguas distintas. No sólo la diversidad lingüística actúa como elemento separador. Por efectos de la concentración de los indígenas en pueblos particulares efectuada a mediados del siglo de la conquista (como lo han aclarado investigaciones recientes), esas minorías se encuentran hoy aún más fraccionadas y no tienen los rasgos que alguna vez hubieran podido distinguirlas como nacionalidades.” (PGT; 1972:30) Postulaban a manera de conclusión la “plena incorporación de los pueblos indígenas al proceso revolucionario partiendo de su situación de clase y de su carácter de masas explotadas, pero teniendo en cuenta las formas particulares en que se expresa su conciencia social.” (Ibíd.:36)

En el programa unitario propuesto por la URNG en 1982 se estableció que “La revolución garantizará la igualdad entre indígenas y ladinos, terminando con la opresión cultural y con la discriminación. El dominio de los grandes ricos es la causa principal de la opresión cultural y la discriminación que sufre en Guatemala la población indígena. Para terminar con la opresión cultural y con la discriminación lo primero que se necesita es que la población indígena, como parte fundamental del pueblo guatemalteco, participe en el poder político. La participación de la población indígena en el poder político, junto con la población ladina nos permitirá solucionar las grandes necesidades de tierra, trabajo, salario, salud, vivienda y bienestar en general que la población indígena tiene en la actualidad.” (URNG; en EGP 1983:6-7)

Para las guerrillas aglutinadas en la URNG el tema indígena se constituyó en una parte central de su discurso y de sus demandas. Cuando se estableció el temario de la negociación para poner fin al conflicto, los insurgentes plantearon este tema, y muchas de sus demandas se vieron parcialmente reflejadas en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Igualmente, al interior de la URNG se estableció la Instancia Maya Unitaria en la que participaban tanto líderes guerrilleros mayas como dirigentes de las organizaciones indígenas influidas por las guerrillas desde donde se orientaba el trabajo político en esa dirección.

El largo y sinuoso camino a la Unidad

Aunque desde su creación todas las organizaciones revolucionarias guatemaltecas han hablado en torno a la importancia y la necesidad de la unidad, la práctica ha mostrado la

dificultad para alcanzarla. La primera ola guerrillera dejó además de las pérdidas humanas y materiales resultantes de las campañas contrainsurgentes la división y la fragmentación de la izquierda revolucionaria. Las organizaciones guerrilleras proceden de distintos rompimientos entre ellas, quiebres que además de las diferencias ideológicas y estratégicas implicaron también la movilidad de cuadros, recursos y el establecimiento de diferencias personales y rivalidades entre los militantes.

Durante la primera mitad de la década de 1970 la unidad se hizo muy difícil en tanto que, en primer lugar, estaban todavía frescas las heridas del período anterior⁵⁵; y por el otro, cada una de las organizaciones estaba convencida de tener la razón, por lo que impulsaba su proyecto de manera particular sin manifestar interés en lograr aproximaciones con las otras⁵⁶. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico además de las diferencias en torno al tema indígena entre las organizaciones guerrilleras existían diferencias en torno a la articulación entre la guerra de guerrillas y el movimiento social y la definición marxista leninista del PGT, las FAR y el EGP frente a la definición “revolucionaria” de ORPA. (CEH II; 1999:236)

Desde 1971 las FAR empezaron a realizar llamados a favor de la unidad de las fuerzas revolucionarias. Esto empezó a dar sus frutos: “...a partir de 1971 se inició una aproximación con los elementos más unitarios de las Fuerzas Armadas Rebeldes que continuó en forma más regular en 1972 y desembocó en 1973 en la formalización de un proceso de alianza política entre el Partido Guatemalteco del Trabajo y las Fuerzas Armadas Rebeldes.” Las bases o coincidencias de estos acuerdos eran: a) la vía violenta de desarrollo de la revolución que adquiere la forma de guerra revolucionaria popular; b) las fuerzas motrices de la revolución: la clase obrera como clase dirigente los campesinos pobres (semiproletariado) y medios como fuerza principal y la mayoría de las capas medias urbanas, especialmente las capas medias asalariadas; c) el sistema de alianzas que parte de la unidad política e ideológica de la clase obrera urbana y agrícola; la alianza obrero campesina y la alianza de la clase obrera, los campesinos pobres y medios y la mayoría de las capas medias urbanas, especialmente las capas medias asalariadas; d) la instauración de un poder político revolucionario, patriótico y popular dirigido por la clase obrera en estrecha alianza con los campesinos, capaz de realizar un proceso revolucionario único que liquide los remanentes semif feudales en el campo, concluya con el dominio económico y político del imperialismo yanqui en Guatemala, destruya las bases del poder imperialista y oligárquico de nuestro país y lo conduzca a la realización de la revolución socialista, antesala de la sociedad comunista.” (Alvarado; 1994:91-92)

Sin embargo, de acuerdo con un ex comandante de las FAR entrevistado, el PGT trató de imponerse como la vanguardia a ser fortalecida y utilizaron los recursos y relaciones con el campo socialista para intentar cooptar a miembros de la organización guerrillera. Igualmente se asumieron planes conjuntos de carácter militar y político que no se llevaron a la práctica. Finalmente, este proceso de alianza se rompió.

No fue sino hasta bastante avanzada la década que, al calor del avance de la guerra revolucionaria y sobre todo con el triunfo de la Revolución Sandinista que, con la intermediación del Partido Comunista Cubano se constituyó en una primera instancia la llamada tripartita, en la que empezaron a crear coordinaciones el EGP, las FAR y un sector del PGT. Posteriormente se integraría la ORPA. En febrero de 1982 se constituyó la Unidad Revolucionaria Nacional

Guatemalteca, integrada inicialmente por las tres organizaciones guerrilleras sin la participación del PGT.

Sin embargo, cuando se logra crear la unidad, la contrainsurgencia ya había golpeado severamente a las guerrillas. Ya en 1981 el ejército había desarticulado las estructuras guerrilleras de la ciudad y después de las campañas rurales “La guerrilla perdió contacto con amplias bases de apoyo. Se vio obligada a replegarse en el terreno y pasar a una fase defensiva, en la que lo más importante era conservar lo que se tenía para poder avanzar posteriormente.” (Hurtado.1997:15) “Se puede afirmar que la URNG nace con debilidad como entidad y en un momento de debilidad de sus organizaciones integrantes, nace sin dirección orgánica” por lo que “...durante varios años, la primera mitad de la década de los 80, cada organización centró su atención en recomponerse de los golpes enemigos, en lograr su unidad interna y no tanto en el proceso de unidad. Todas las organizaciones fueron afectadas por la contraofensiva enemiga y sus efectos.” (EGP; 1994c:6)

La URNG fue, al igual que el FMLN un frente de organizaciones guerrilleras que, realizaron coordinaciones militares y político-diplomáticas manteniendo la existencia de las organizaciones individuales que seguían contando con su propia estructura, dirección, reglamentos y planteamientos políticos. No fue sino hasta el proceso de negociación cuando las circunstancias fueron obligando a mayores niveles de unidad política, y a distintos intentos de unificación de la acción militar. En lo ideológico nunca se avanzó o se buscó una unidad en este ámbito. Las diferencias de acuerdo a la información documental consultada eran relevantes en tanto que mientras el PGT, las FAR y el EGP se definían como marxistas leninistas, la ORPA no se definía en ese sentido sino que, tal como lo afirmaban en 1995 refiriéndose a esto : “A veces se pensó que lo revolucionario era luchar por el socialismo. Y hay quienes lo piensan todavía. En la organización nunca lo entendíamos así. Afortunadamente, la historia de estos 25 años de práctica nos ha dado la razón de no habernos proclamado socialistas y marxistas leninistas ni habernos encasillado en los esquemas que se plantearon entonces. Para nosotros lo revolucionario es actuar de acuerdo a las condiciones y posibilidades que se nos presentan.” (Proyecto estratégico y situación de desenlace. ORPA 1994 p.3)

La necesidad de afrontar el esfuerzo de guerra y negociación de manera conjunta impidió que estas diferencias afloraran entre las organizaciones – cada una de las cuáles tuvo rompimientos importantes a su interior – y que la URNG no sólo se preservara sino lograra en 1989 la incorporación de un sector del PGT. La unidad de las guerrillas guatemaltecas fue de carácter conceptual en torno a la guerra – las acciones militares conjuntas tardaron varios años en materializarse -, manteniendo abordajes distintos de la cuestión indígena y en torno al socialismo que no fueron obstáculo para mantener una posición conjunta en la mesa de negociaciones.

El Salvador: del PCS al FMLN

El arribo a la estrategia de la lucha armada en El Salvador tuvo dos orígenes diferenciados pero que corrieron de manera paralela en un escenario común de desigualdad, pobreza, exclusión y represión política: las disidencias al interior del PCS y los grupos de estudiantes y cristianos radicalizados. Las diferencias al interior del PCS estuvieron asociadas a la larga pugna en torno a la estrategia revolucionaria a impulsar. A pesar de que en el Congreso del PCS de 1964 se había aprobado una resolución en la que se afirmaba que la lucha armada era el medio fundamental

para tomar el poder, se mantuvo una continua y sistemática práctica de participación política electoral a través de partidos de fachada⁵⁷, una corriente interna cuestionó este punto, dando lugar, en el marco de la guerra entre Honduras y El Salvador (Cienfuegos;1993:8) a la salida del propio secretario general del PCS Cayetano Carpio y un reducido grupo de militantes quienes pasaron a constituir las Fuerzas Populares de Liberación FPL, organización político militar propiamente dicha⁵⁸. (cfr. Carpio 1983; Harnecker 1993) Por su parte, los grupos provenientes de sectores medios, vinculados generalmente a organizaciones estudiantiles y cristiano/católicas vivieron igualmente un proceso de radicalización que los condujo a asumir la lucha armada⁵⁹. De estos grupos surgieron el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP⁶⁰ y posteriormente un grupo disidente, la Resistencia Nacional RN⁶¹.

A diferencia de otros procesos de rompimiento dentro de las organizaciones de izquierda latinoamericanas, los disidentes del PCS que decidieron conformar las FPL optaron por no disputar militantes a su organización de origen e iniciaron un proceso organizativo de carácter clandestino que partió prácticamente de cero. (Carpio; 1983: 47) De acuerdo con los testimonios de sus fundadores, organizativamente las FPL propusieron una transformación radical de la práctica del PCS enfatizando la acción armada.⁶² De acuerdo con González: "... durante los años 70 estos serán los rasgos característicos de las Fuerzas Populares de liberación: a) una ideología marxista – leninista; b) una estructura organizativa político militar regida por el centralismo democrático; c) la instauración del socialismo como objetivo estratégico fundamental a través de una estrategia de Guerra Popular Prolongada; d) una combinación de todas las formas de lucha con predominio de la vía armada; y f) una alianza obrero- campesina como sostén de la lucha revolucionaria." (1994:110)

Al igual que las FPL el ERP criticó las formas parlamentarias del PCS y promovió un "movimiento insurreccional que conduzca al establecimiento de un Gobierno Revolucionario provisional de obreros y campesinos". Aunque ideológicamente se definen como marxistas leninistas, en el mismo se integraron miembros de la Juventud Cristiana influidos por el PDC. (González; 1994:15) A partir de sus vínculos con algunos grupos de la Iglesia Católica el ERP logró una temprana e importante implantación territorial en la provincia de Morazán. (Binford; 2000:1168-1169)

En 1974 se originó una ruptura al interior del ERP, de la que surgieron las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (RN), que impulsan la constitución del Frente de Acción Popular Unificado (FAPU) ligado al desarrollo del trabajo sindical. Igualmente, lograron acercamientos con partidos políticos, el ejército⁶³, la Iglesia Católica y distintas denominaciones protestantes.

Por su parte, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos PRTC, constituido en 1974 postulaba la necesidad de una revolución de carácter centroamericano, por lo que operaban como secciones nacionales bajo la égida de una dirección regional. Dos postulados constituían la identidad/diferencia de esta organización: la primera era el señalado carácter Centroamericano y la segunda correspondía a la necesidad de utilizar todas las formas de lucha, sin descartar ninguna, lo que los contraponía por ejemplo al PCS que privilegiaba lo electoral, y al ERP que se centraba en lo militar⁶⁴.

Las organizaciones que posteriormente serían parte del FMLN establecieron fuertes lazos con algunos sectores cristianos así como con organizaciones populares. La aproximación con los cristianos "... se gestó, más que en el debate teórico, en el terreno de la práctica política. Para que ello fuese posible, se operó al interior de los grupos cristianos involucrados un proceso de conversión religiosa y política que les permitió establecer nexos – a partir de una serie de afinidades sociopolíticas con los núcleos armados que comenzaron a operar en El Salvador a principios de los años 70." (González; 1994:11)

Asimismo, cada organización insurgente estableció nexos con un frente de masas: las FPL se articularon con el BPR, el ERP con las LP-28, las FARN con el FAPU y el PRTC con el MLP. Por su parte, el PCS convirtió a la UDN en un frente de masas. Así, "entre 1977 y 1980 las organizaciones político militares y el movimiento popular organizado establecen vínculos orgánicos, posibilitados por la lucha reivindicativa y política que el segundo impulsa en casi todo el territorio nacional. Esta lucha, que en rigor es una práctica política popular, constituye justamente el punto en que las organizaciones populares de procedencia cristiana pueden confluir con las organizaciones guerrilleras. La matriz simbólica de cada una es distinta, pero el compromiso político por ellas asumido (...) les lleva a confrontarse con los mismos enemigos." (González; 1994:198-199)

En el caso salvadoreño, la coyuntura crítica que determinó los posicionamientos y realineamientos de las fuerzas políticas de izquierda correspondió a la del golpe de octubre de 1979⁶⁵; mientras que el PCS a través de la Unión Demócrata Nacionalista UDN, el Partido Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), el Partido Democracia Cristiana (PDC), la Universidad Centroamericana UCA, algunos sectores de la Universidad de El Salvador UES, parte de las ligas populares 28 de febrero LP-28, la Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños CUTS, la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños FENASTRAS, y otras organizaciones de trabajadores apoyaron inicialmente a la junta, las FPL, el BPR, el ERP, las FARN y el PRTC se opusieron a la misma⁶⁶ (López Valecillos;1982). Para las organizaciones que apoyaron a la junta cívico militar, este nuevo gobierno significaba la posibilidad de dar una salida pacífica a la profunda crisis de dominación que enfrentaba el Estado salvadoreño a través del impulso de un amplio programa de reformas; sin embargo, al interior de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas subsistían diversas posiciones, desde aquellas que efectivamente buscaban implementar reformas hasta las que propugnaban por una solución militar que se impusiera mediante la fuerza.(Cfr. Armstrong y Rubin;1993:115-119) La falta de respaldo a la junta, así como la continuidad de las protestas sociales contribuyeron a que los sectores progresistas de la misma fueran desplazados y se asumiera una política aún más represiva.

Frente al auge de la represión, los sectores democráticos, algunas organizaciones populares y de izquierda integraron en 1980 el Frente Democrático Revolucionario –FDR–, que presentó una plataforma "anti-oligárquica" y antiimperialista". Por su parte, las organizaciones guerrilleras avanzaron en su proceso de unidad constituyendo en mayo de ese año la Dirección Revolucionaria Unificada DRU que estableció relaciones con el FDR. Estas acciones tendieron a agudizar la polarización y a establecer el camino a la confrontación militar.

Los debates ideológicos

De acuerdo con Zamora, los más importantes debates ideológicos y políticos que se dieron a lo largo de la década de los 70 entre las organizaciones de izquierda salvadoreña se desarrollaron en torno a tres ejes temáticos: la naturaleza de la formación social salvadoreña; la política de alianzas; y, el método de lucha para tomar el poder. (2003:45-48)

El primer debate hacía referencia al carácter semifeudal y semi colonial de la sociedad salvadoreña (posición sostenida por el PCS) o bien capitalista de la misma. La resolución de esta tensión tenía consecuencias prácticas en tanto que, de acuerdo con los esquemas de la época si se trataba de una formación semifeudal lo que correspondía era una revolución democrático burguesa, mientras que si era capitalista requería de una revolución socialista⁶⁷.

Respecto a las alianzas, y derivado del análisis anterior, el PCS postulaba la necesidad de alianzas con la burguesía y pequeña burguesía (lo que explicaba su alianza con la Democracia Cristiana y otros partidos) mientras que las organizaciones guerrilleras se centraban en el tema de la alianza obrero – campesina.

Respecto al método de lucha el PCS impulsaba y defendía la lucha legal, frente al postulado de las organizaciones político militares respecto a la utilización de la vía armada.

Siguiendo a Zamora, a pesar de que estas eran las diferencias fundamentales, entre las organizaciones existían diferencias agudas. “La cuestión era la forma cómo usar el instrumento armado; para las FPL se trataba de aplicar el esquema de una larga guerra en la que las organizaciones revolucionarias irían conquistando el espacio, desde el campo hacia la ciudad; mientras que para el ERP y la RN, se trataba de lograr golpes militares contundentes para provocar la insurrección de las masas, aunque a su vez, ambos se diferenciaban en cuanto al peso que se le concedía a las masas o a la fuerza militar en la insurrección.” (2003:47)

Una vez definida la vía armada a partir de la constitución del FMLN, las acciones en el campo militar determinaron el devenir de la guerra: a pesar de que se lanzó la ofensiva general de 1981 no se dio la esperada insurrección popular, por lo que las unidades militares tuvieron que recurrir a una estrategia de guerra prolongada y de posiciones.

La unidad de las organizaciones

En diciembre de 1979, 3 de las 5 organizaciones, - FPL, RN y PCS - crearon la Coordinadora Político Militar en un esfuerzo por empezar a unificarse. El ERP no formó parte de este esfuerzo porque la RN vetó su ingreso aduciendo la responsabilidad de aquella organización en el asesinato del poeta Roque Dalton; y porque, debido a su pasado maoísta, era visto con gran desconfianza por el PCS y las FPL. El PRTC, de reciente constitución, aún no había recibido una respuesta favorable a su solicitud de ingresar a la Coordinadora. La exclusión del ERP, era algo que muy difícilmente podía mantenerse, dada la importancia militar de esta organización y, de hecho, en la preparación de la ‘Ofensiva general’ se le empezó a tomar en cuenta, desvaneciendo las objeciones de la RN y la desconfianza de las otras dos. De acuerdo con Zamora en este cambio fue definitiva la insistencia cubana de que todas las organizaciones político militares debían ser tomadas en cuenta. El 22 de mayo de 1980, las cuatro organizaciones anunciaron que habían constituido la “Dirección Revolucionaria Unificada” (DRU), en un manifiesto que llevaba por título “Unidos para combatir hasta la victoria Final”, y que en su parte pertinente afirmaba:

“... hemos alcanzado un nuevo y superior nivel de la unidad entre nuestras organizaciones revolucionarias... Habrá en adelante una sola dirección, un solo plan militar y un solo mando, una sola línea política nacional e internacional’.” (Zamora; 2003:51)

La unidad del FMLN atravesó por distintas crisis, entre ellas el retiro y posterior reingreso de la RN, el asesinato de la comandante Ana María (segunda responsable de las FPL) y el suicidio de Marcial (comandante en jefe de esta organización), y la incorporación del PRTC. Al igual que la URNG en el FMLN “... durante toda la guerra, cada una de las organizaciones mantuvo vigentes sus estatutos, conservó su estructura orgánica propia, se procuró su propio financiamiento y eligió autónomamente sus direcciones. La militancia mantuvo la disciplina a su organización y no al FMLN, jugando este el papel de sombrilla de coordinación y cobertura a las cinco organizaciones, que eran los reales partidos políticos.” (2003:52)

Las grandes ofensivas: 1981 y 1989

Durante la década de 1980 el FMLN se convirtió en una de las organizaciones guerrilleras más importantes de América Latina, no sólo por la capacidad militar desarrollada – para algunos analistas sólo la intervención y el apoyo del gobierno norteamericano pudo impedir la derrota del ejército- sino también por el aparato político diplomático que logró incluso el reconocimiento por parte de los gobiernos de Francia y México de la beligerancia y la legitimidad de su lucha. Para Sánchez, en Centroamérica fue “el FMLN la agrupación insurgente que logró desarrollar con más alcance y profundidad prácticamente todos los elementos de la estrategia (de las organizaciones político militares): amplio trabajo organizativo en el movimiento de masas, combinación de las distintas formas de lucha, trabajo diplomático de gran alcance, desarrollo en la práctica de su propuesta en las ‘zonas bajo su control’, todo esto sustentado en un vasto despliegue de fuerza militar construida a pesar de las condiciones geográficas adversas al desarrollo de la lucha guerrillera.⁶⁸” (1994:114)

Desde la perspectiva militar, la acción armada del FMLN logró crear dos situaciones estratégicas que determinaron el desarrollo del conflicto y su desenlace, las ofensivas generales – o finales- de 1981 y 1989. Aunque estas ofensivas no obtuvieron los resultados esperados por los mandos del Frente, la derrota de la Fuerza Armada Salvadoreña - crearon nuevas correlaciones de fuerzas e impusieron agendas a los actores involucrados en el conflicto.

De acuerdo con Benítez: “En la ofensiva general de enero de 1981 es importante resaltar que el FMLN intentó impulsar una estrategia insurreccional similar a la que se dio en Nicaragua de mayo a julio de 1979. Pero no logró el derrumbe militar del régimen, tal como algunos sectores sostenían. No obstante, tampoco las fuerzas del gobierno consiguieron victorias estratégicas sobre el FMLN, lográndose así el equilibrio militar necesario para desarrollar la guerra de movimientos.⁶⁹” (Benítez; 1989:255)

La ofensiva de 1981 permitió al Frente tomar la iniciativa militar y mostrar que sus fuerzas militares eran capaces de coordinarse en acciones de gran envergadura⁷⁰. (Lungo; 1991:24-25) Igualmente, el FMLN inició la construcción de una retaguardia estratégica. “En El Salvador, las cinco zonas guerrilleras, o teatros de operaciones que se configuran desde 1981 son Morazán, Chalatenango, Guazapa, Usulutlán y Cabañas – San Vicente. En sus líneas interiores

estos teatros están conformados por las zonas de control total de la guerrilla, caracterizadas porque existe un gobierno popular en ejercicio.” (Benítez; 1989:193)

La junta de gobierno por su parte, reconoció no sólo el riesgo que corría para resistir el embate militar del FMLN sino que la solución del conflicto no se daría de manera rápida por la vía militar. Frente a esto implementó políticas tendientes a fortalecer a las fuerzas armadas para lo que contó con el apoyo del gobierno de Estados Unidos que prestó asistencia de todo tipo incluyendo la presencia de asesores militares. En la misma dirección intentó arrebatar a la guerrilla sus banderas de lucha: convocó a elecciones para constituyente y el ejecutivo; eliminó las restricciones constitucionales para la participación política; e implementó una reforma agraria⁷¹.

Sin embargo, las asimetrías estructurales no podían resolverse de un día para otro, y, lo que es más importante, estas medidas fueron acompañadas de acciones represivas contra organizaciones sociales y políticas vinculadas al FMLN así como por el impulso continuo de ofensivas militares que pretendían acabar con la insurgencia.

A los largo de los siguientes ocho años la situación político militar fue variando de manera compleja. Aunque generalmente se habla de equilibrio o empate, se trató de un proceso que, en lo militar para el FMLN significó momentos de resistencia (durante los primeros años el gobierno buscaba solucionar el conflicto por medio de la derrota estratégica de la insurgencia) y de recuperación de la iniciativa estratégica y táctica. En lo político – como se verá en el siguiente capítulo – la temprana decisión del Frente de plantear la solución a la guerra civil por la vía de la negociación le permitió tanto al interior del país como en el exterior mantener y hasta cierto punto establecer la agenda de solución al conflicto.

Los cambios en el entorno internacional y los propios procesos políticos internos hacían cada vez más complicado el sostenimiento del equilibrio complejo. Brevemente, en lo internacional, la apuesta por la solución vía los acuerdos de Esquipulas II de los conflictos centroamericanos obligaba a impulsar una estrategia centrada en la negociación; a lo interno, el ascenso de ARENA al poder – doctrinaria y políticamente enemigo de la insurgencia – podía conducir a una intensificación del conflicto y/o a la instauración de un régimen político que podía enquistarse en el poder⁷².

Otro factor que se tomó en cuenta para el lanzamiento de la ofensiva fue la necesidad de romper la imagen que el Alto Mando Militar había creado de la capacidad militar del frente en el sentido de que se trataba de pequeños grupos terroristas aislados en las montañas. La ofensiva – que de acuerdo a algunos de los jefes guerrilleros se venía concibiendo desde mediados de los ochentas⁷³ – se planificó para llevar el teatro de operaciones de la guerra a las ciudades y atacar posiciones importantes del ejército.

La ofensiva guerrillera de noviembre de 1989 puede interpretarse en estas coordenadas como un esfuerzo supremo del FMLN de romper el equilibrio complejo y forzar una salida negociada favorable a las posiciones revolucionarias. A pesar de que en distintas entrevistas los líderes guerrilleros postulaban que el objetivo era la toma del poder a partir de desencadenar una insurrección popular, resulta difícil pensar que no se haya contemplado el escenario victorioso sin una intervención norteamericana directa – estando el antecedente de Granada.

Con la ofensiva de noviembre de 1989 el FMLN logró posicionar el conflicto salvadoreño en la opinión pública internacional – la asamblea de la ONU emitió una resolución sobre el mismo – y contribuyó a crear la convicción interna e internacional de que el conflicto sólo podía ser resuelto por la vía política.

En el plano militar el FMLN mostró que estaba en condiciones de ampliar de manera significativa su zona de operaciones llevando la guerra a San Salvador y a los barrios residenciales de los grupos dominantes; de acuerdo a las fuentes insurgentes lograron la incorporación de nuevos combatientes; y, mantuvieron las posiciones durante más tiempo del planificado y, sobre todo dejaron claro que el ejército no era capaz de derrotarlos en el campo militar⁷⁴. Igualmente, la respuesta de las Fuerzas Armadas a la ofensiva se les revirtió, en tanto que el asesinato de los sacerdotes jesuitas se convirtió en una derrota moral más contundente que la que se pudo dar en los combates. Estos ajustes en el equilibrio complejo condujeron a allanar el camino de la solución negociada.

Dos guerras distintas

Para terminar este capítulo se presentarán algunas conclusiones que enfatizan las diferencias entre los dos conflictos armados y la forma en que el mismo condicionó no sólo los rasgos que configuraron a las organizaciones insurgentes y que influyeron en los procesos ulteriores sino que también tienen consecuencias con la imagen y la relación que establecieron con la sociedad, el estado y otras fuerzas políticas. Se consideran aproximaciones de carácter general dadas las características y el interés central de este trabajo.

El primer aspecto que se introduce en la discusión es el tiempo. Como se indicó, el conflicto armado guatemalteco fue uno de los más largos en la historia latinoamericana, lo que implicó no sólo el involucramiento de distintas generaciones en el mismo, sino que a la larga produjo no sólo el desgaste de las organizaciones insurgentes (cuyo origen está en las guerrillas de los años sesenta), sino también algún tipo de agotamiento no sólo en términos individuales (combatientes que pasaron toda una vida en la clandestinidad) sino también en lo referido a mantener la iniciativa militar y política de manera creativa y sostenida. Las direcciones históricas de las organizaciones insurgentes se forjaron y consolidaron durante la guerra y condujeron la lucha clandestina y asumieron, sin mayor cambio y sin experiencia en la lucha política legal la inserción de la URNG en un sistema político que les era adverso y en el que no tenían experiencia. Mucha de la legitimidad de los liderazgos insurgentes se sostenía en el hecho de contar con una trayectoria revolucionaria -medida en años de participación- que se impuso – en el contexto de posguerra - como criterio para asumir cargos de dirección impidiendo o haciendo muy lenta la renovación generacional. La inercia en los métodos y prácticas pronto mostró sus insuficiencias.

En el caso salvadoreño, la duración del conflicto y la juventud de la mayoría de los dirigentes guerrilleros permitió cierta adaptación de los cuadros a la nueva situación. Adicional a esto el PCS y muchos de los cuadros provenientes de este partido tenían experiencia previa en la lucha electoral y hasta cierto punto pudieron – no sin obstáculos y conflictos – conducir la inserción del FMLN en la legalidad y adecuar los métodos de dirección a las nuevas realidades.

El segundo aspecto incorpora consideraciones de carácter geográfico. Sin reducir el análisis a cierto determinismo geográfico, otra diferencia relevante entre los dos conflictos corresponde al medio que sirvió de marco al mismo. Mientras que Guatemala contaba con las mejores condiciones para el establecimiento de focos guerrilleros – montañas y selvas aisladas, posibilidad de construir retaguardias, etc. -; El Salvador presentaba condiciones adversas: territorio pequeño, pocas zonas montañosas y selváticas, carreteras y caminos que comunican la mayor parte del país, y alta densidad poblacional. Sobre esta situación se desarrollaron estrategias organizativas que posteriormente tuvieron consecuencias relevantes. Así, durante la década de los sesenta las guerrillas guatemaltecas se ubicaron en la sierra de las minas (en el oriente del país) considerando que era una zona que se prestaba para el accionar guerrillero, desarrollando en esa área el principal trabajo organizativo entre los campesinos. Durante la década siguiente – después de la represión desatada contra la población civil – las organizaciones guerrilleras iniciaron su implantación en regiones aún más aisladas: en el caso del EGP en las selvas del norte del Quiché y Huehuetenango; las FAR por su parte se ubicaron en las selvas del Petén en el norte del país⁷⁵. Esto implicó la constitución de retaguardias más o menos seguras en zonas aisladas y un trabajo organizativo más sólido en zonas con menor densidad poblacional. Después de las campañas contrainsurgentes de principios de la década de 1980 las guerrillas se replegaron justamente a estas retaguardias desde donde les fue difícil romper el aislamiento y volver a tener peso en los centros urbanos⁷⁶. De esa cuenta, luego de la firma de la paz el trabajo organizativo se logró consolidar en estas regiones, donde han alcanzado sus mejores resultados electorales, en tanto que en las zonas urbanas ha ocurrido lo contrario.

En El Salvador, las condiciones geográficas adversas obligaron a realizar procesos organizativos creativos y a mantener el apoyo de la población en condiciones adversas, manteniendo presencia en los centros urbanos y construir una retaguardia extendida que posteriormente mantuvo su apoyo al Frente.

Finalmente el factor que marcó radicalmente distinciones de cara a los procesos posteriores correspondió a la respuesta contrainsurgente. En el caso guatemalteco, esta tuvo un carácter genocida que implicó el asesinato de decenas de miles de civiles y la destrucción de cientos de lugares poblados con una saña pocas veces vista en tierras americanas. Las consecuencias del terror entre la población civil probablemente hayan dejado miedos que trascienden a la firma de la paz y que sigue paralizando a importantes sectores de la población. En el caso salvadoreño, igualmente se documentaron graves violaciones a los derechos humanos que, sin embargo, no tienen parangón con lo ocurrido en el país vecino.

Considerando el desarrollo del conflicto armado en Guatemala puede pensarse en que en este país el sueño revolucionario se transformó en una pesadilla trágica a partir de una suerte de dialéctica de la derrota en la que las condiciones internacionales y nacionales, las capacidades de las organizaciones y las decisiones de los jefes guerrilleros dieron lugar a resultados opuestos a los esperados.

La situación revolucionaria en Centroamérica y el triunfo Sandinista lejos de favorecer las posibilidades de una victoria guerrillera en el país unificó a los grupos dominantes y al ejército para enfrentar la amenaza comunista, validando cualquier método para lograr este objetivo. Por otro lado, el apoyo revolucionario internacional se centró en la necesidad de preservar el proceso sandinista en Nicaragua antes que a impulsar una revolución en Guatemala.

El ethos revolucionario generado por la movilización popular y guerrillera así como por el propio entorno internacional llevó a que tanto dirigentes sociales como insurgentes sobreestimarán sus propias fuerzas y subestimarán la del enemigo llegando a hacer llamados públicos al derrocamiento del gobierno sin contar con las condiciones para esto⁷⁷.

Entre las organizaciones, el hegemonismo y la rivalidad entre ellas condujo a algunas de ellas a realizar declaraciones y acciones militares espectaculares sin considerar el cuadro general y provocando, directa e indirectamente la identificación de zonas de apoyo y la represión indiscriminada. “Los revolucionarios subestimaron al ejército en su capacidad de acumular información y preparar planes con visión estratégica. Por otro lado, ante la perspectiva de una victoria a corto plazo, se relajaron medidas de seguridad y métodos de trabajo que habían garantizado la sobrevivencia del movimiento revolucionario en medio de la mayor represión. Con esto se ofreció un blanco más vulnerable a la contrainsurgencia.” (Hurtado; 1997:15)

Entre 1978 y 1980 los dirigentes y miembros de base de las organizaciones sociales más combativas fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados. En el segundo semestre de 1981 el ejército inicia una ofensiva en la ciudad en la que casi aniquila la presencia insurgente en la zona urbana⁷⁸ y al año siguiente desencadenó una ofensiva rural que se extendió hasta 1984. La contrainsurgencia rural realizada por el Ejército de Guatemala no tuvo por objeto enfrentar militarmente a la guerrilla sino destruir – en sentido literal - sus bases de apoyo, evitar cualquier respaldo social futuro, y aislar a las unidades insurgentes⁷⁹. Cuando la URNG se logró constituir cada una de las organizaciones trataba de sobrevivir careciendo de capacidad para articular una respuesta unificada. Nunca recibió apoyo exterior que le permitiera contar con los medios para recuperar la iniciativa. Para el ejército y algunos analistas en 1984 la URNG estaba militarmente derrotada.

A diferencia del FMLN la URNG no logró realizar ofensivas generales; tampoco logró la toma de puestos militares fijos importantes; su gran victoria fue resistir⁸⁰, recomponerse y retomar, años después la iniciativa política.

Transición e incorporación

El tema de las transiciones democráticas ocupó un lugar central en el debate de la Ciencia Política a lo largo de la década de los años ochenta y principios de los noventa del siglo XX a raíz de los cambios políticos ocurridos en el cono sur de América - el fin de los regímenes militares - y en los países de Europa del Este – la desrevolución rusa y las revoluciones en los países del este europeo⁸¹-. Con los trabajos compilados por Schmitter y O'Donnell se inició un período de estudios sobre las transiciones democráticas que respondieron en mayor o menor medida al modelo trazado por estos autores que tendieron a centrarse en el cambio del régimen político y a enfatizar el papel de las elites en estos procesos⁸².

Una formulación esquemática del modelo de las transiciones supone una secuencia de procesos que inicia con la liberalización política, un rompimiento que conduce al colapso del régimen y la emergencia de un sistema democrático marcado por la llegada de un nuevo gobierno a través de las elecciones y la promulgación de una constitución. Aunque la etapa siguiente en la

propuesta original queda definida como una incógnita, generalmente se considera que continuaba un período de consolidación de la democracia.

Sin embargo, el caso centroamericano presenta un conjunto de cuestionamientos y anomalías al paradigma de la transición. Un primer aspecto a considerar tiene que ver con el tiempo, y abarca no sólo el problema del inicio de este proceso sino también el de su duración. Y es que tanto en Guatemala como en El Salvador desde principios de la década de 1980 se empezaron a realizar procesos electorales que eran aceptados por una parte de las fuerzas políticas y de los ciudadanos y que contaban con reconocimiento internacional, mientras que continuaba la proscripción de hecho de las organizaciones de izquierda, la violación sistemática de los derechos humanos, la preponderancia del poder militar y los conflictos armados internos. Para Zamora (2003) el Salvador, y lo propuesto puede aplicarse también para Guatemala, pasó por una triple transición: del autoritarismo a la democracia; del control militar al civil, y de la guerra a la paz. En ese marco, las organizaciones guerrilleras pasaron de ser organizaciones político militares a constituirse en partidos políticos.

En este capítulo se examinará cómo fue variando el contexto internacional, regional y nacional de manera que se fueron creando condiciones para el fin de las guerras civiles, y al mismo tiempo cómo las organizaciones insurgentes potenciaron un entorno político adverso para generar condiciones favorables para su inserción política⁸³.

El contexto internacional de la crisis centroamericana⁸⁴

Aunque tiende a afirmarse que la crisis centroamericana se inició con el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua⁸⁵, lo cierto es que la agudización de la misma y su internacionalización se inició con el arribo de Reagan al gobierno norteamericano y la decisión del mismo de “detener el avance comunista” en El Salvador y acabar con el gobierno Sandinista. (Jonas; 1982:123) De acuerdo con los estudiosos de la política exterior soviética, Nicaragua no fue nunca objeto de mayores intereses por parte de la Unión Soviética cuyos expertos en el tema opinaban que Latinoamérica en su conjunto era parte del área de influencia norteamericana y tenían desconfianza de los guerrilleros de estos países quienes, en su mayoría desligados de los partidos comunistas locales, eran considerados unos impetuosos aventureros. Como resultado de esto, la URSS reaccionó con cierta frialdad a la caída de Somoza y muy lentamente fue estableciendo relaciones con el nuevo gobierno nicaragüense. (Mikoyan; 1995)

A pesar de esta posición inicial, debido al descubrimiento de evidencias en torno a la intervención de la CIA en Afganistán, los soviéticos modificaron su estrategia hacia Nicaragua. Después de evadir durante meses las solicitudes cubanas de apoyar militar y económicamente al país centroamericano el liderazgo soviético decidió colaborar con los sandinistas, no tanto por considerar que el proyecto nicaragüense era viable, sino para provocar los mayores dolores de cabeza posibles a los norteamericanos. El volumen de ayuda soviética hacia Nicaragua no llegó a compararse con el apoyo recibido por Cuba, sin embargo, el armamento resultó determinante para que el gobierno Sandinista estuviera en condiciones de enfrentar la agresión norteamericana.

Para la política exterior cubana el desafío representado por el gobierno de Reagan se convirtió en la más peligrosa amenaza enfrentada en décadas, sobre todo porque el discurso anticomunista de dicha administración se tradujo en operaciones militares concretas en Granada y

Libia, así como el apoyo a la contra (nombre genérico dado a las distintas fuerzas contrarrevolucionarias de Nicaragua). La presunta amenaza soviética en el “patio trasero” norteamericano podía resultar en una intervención contra Cuba. Frente a esta situación, la experiencia cubana de 1962 así como las participaciones en Africa mostraban que el apoyo soviético era poco confiable fuera de su área de influencia y, como se expresaría de manera notable a partir de 1985 el régimen soviético manifestaba signos de agotamiento y crisis interna. El gobierno cubano empezó a explorar salidas alternativas al conflicto.

Por su parte, los gobiernos de México y Venezuela que desde tiempo atrás le venían prestando atención a la crisis centroamericana, y habían intervenido previamente en la misma, empezaron a actuar para evitar que los conflictos se internacionalizaran y afectaran la estabilidad regional. La acción de estos países se orientaba tanto a evitar que las “crisis revolucionarias” en Centroamérica activaran a sus propias oposiciones internas, como a que una intervención norteamericana directa se tradujera en un conflicto prolongado que afectaría la propia independencia relativa de ambos países.

Con estas premisas, ambos países promovieron la creación del Grupo de Contadora, al que se sumaron Panamá, Perú y Colombia y postularon una solución “latinoamericana” al conflicto centroamericano mediante el cese del apoyo exterior a las distintas fuerzas y un proceso de negociación.

Igualmente, funcionarios del gobierno cubano intentaron a principios de la década de 1980 promover una salida que permitiría “salvar la revolución nicaragüense” a cambio de promover que las organizaciones revolucionarias de Guatemala y El Salvador aceptaran salidas negociadas a los conflictos armados⁸⁶.

Desde los Estados Unidos, en el marco de la campaña para la reelección de Reagan, en el primer semestre de 1984 el departamento de estado intentó impulsar una propuesta de solución a los conflictos de Nicaragua y El Salvador – posteriormente denominada estrategia de simetría – a partir de obligar a los sandinistas a aceptar las condiciones de la contra negociar la paz y apoyar al gobierno de Duarte en sus negociaciones con el FDR – FMLN en el entendido de que únicamente se tratarían las condiciones de su inserción en la política electoral. El fracaso de la iniciativa se debió a que la lógica del planteamiento obligaba a que si se consideraban legítimas las demandas económicas, sociales y políticas de la contra, igual tratamiento debían recibir las del FMLN, por lo que en ambos casos era necesario realizar amplios cambios antes de realizar elecciones⁸⁷.

De manera simultánea, tanto en Guatemala como en El Salvador se dio un proceso de recomposición de los grupos dominantes que implicó en el caso guatemalteco la decisión del Ejército Nacional de promover una “apertura democrática” con el objeto de derrotar políticamente a las guerrillas consideradas militarmente derrotadas. Esto se dio a partir de un golpe militar encabezado por militares jóvenes que entregaron la jefatura del Estado a viejos militares, la convocatoria a elecciones de Asamblea Nacional Constituyente en 1984 – en la que participaron más del 70 % de los ciudadanos empadronados – y la convocatoria a elecciones generales - presidencia, parlamento y corporaciones municipales – que dieron lugar a la presidencia de un gobernante civil demócrata cristiano – el primero en más de veinte años –.

En El Salvador desde octubre de 1979 se registró un quiebre importante en la forma en que los militares enfrentarían la amenaza guerrillera. Después del fracaso de la junta revolucionaria (conocida también como la primera junta), se ejecutaron las medidas – antes mencionadas- de reforma agraria, nacionalización bancaria y de las exportaciones que no sólo pretendían contener la movilización social, sino terminar con las bases del poder de la oligarquía de dicho país. Posteriormente se inició la reconstrucción del sistema político a partir de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente y la convocatoria a elecciones presidenciales en las que tanto el ejército como los el gobierno de los Estados Unidos de América apoyaron la opción demócratacristiana de Duarte antes que la posición ultraderechista de D’aubisson.

Esta compleja situación regional e internacional, sumada a las difíciles condiciones para la continuidad de la lucha armada llevó a las organizaciones político militares a situaciones límite y en el caso guatemalteco a un nuevo ciclo de desencuentros internos. Para analizar esto se revisará lo relativo a la respuesta insurgente a los procesos de paz y su desmovilización militar e inserción política.

Elecciones en guerra

En el modelo clásico de las transiciones antes descrito, un primer paso del proceso corresponde al de la liberalización, en el que las elites dominantes, o en su defecto los sectores “blandos” de estas inician un proceso de apertura que tiende a autoreforzarse y abre el paso a los procesos de democratización. En los casos que nos ocupan, la convocatoria a procesos electorales más o menos transparentes no puede considerarse en sentido estricto un momento de liberalización, si se parte de entenderlo como una acción eminentemente contrainsurgente cuyo objetivo original fue actuar como una tenaza sobre los movimientos guerrilleros: por un lado golpearlos militarmente hasta derrotarlos o ubicarlos al borde de la derrota; y por el otro, aislarlos políticamente mostrando que el sistema que pretendían enfrentar era democrático. Las elecciones se realizaron en condiciones de estricto control político y militar y el mantenimiento de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos⁸⁸.

Sin embargo, como se ha repetido históricamente, las consecuencias de las decisiones no siempre son las esperadas por los actores políticos, y, la apertura democrática generó en la práctica procesos políticos de diferente alcance y efectos sobre la situación política⁸⁹.

Entre los movimientos guerrilleros, la respuesta a esta nueva coyuntura fue distinta entre los dos países y entre las distintas organizaciones guerrilleras. Así, en una primera reacción, la apertura democrática guatemalteca tuvo distintas interpretaciones. Mientras que la URNG en su conjunto la descalificó, catalogándola como una simple maniobra del ejército para legitimar su dominación, en una de sus organizaciones – las FAR – se asumió que buena parte de la población veía con entusiasmo este proceso que, objetivamente podía golpear a la guerrilla tanto como las ofensivas militares (Ryan; 1994:35)⁹⁰.

Otro aspecto a considerar en el caso guatemalteco es la situación de debilidad que enfrentaban las insurgencias después de las grandes ofensivas militares y sobre todo después de la realización de matanzas indiscriminadas contra la población civil; hechos que golpeaban duramente la moral de los combatientes. Al respecto, en varias de las organizaciones guerrilleras

se desarrollaron problemas internos que tenían su origen en la discusión de la estrategia a impulsar en medio de la nueva situación política. En el EGP, un grupo de cuadros y militantes rompió con la dirección nacional señalando no sólo los errores en la conducción de la guerra, sino la incapacidad para responder a la situación⁹¹. En el PGT, un grupo encabezado por la juventud intentó celebrar el V congreso del partido, lo que originó una nueva ruptura. De ambos desprendimientos se constituyeron dos organizaciones Octubre Revolucionario y PGT 6 de enero respectivamente. Posteriormente iniciaron un proceso de acercamiento y a principios de los años noventa decidieron autodisolverse. En las FAR, el Estado Mayor del Petén (provincia del norte del país en la que contaban con una retaguardia estratégica) decidió de manera unilateral impulsar la Guerra Popular Prolongada – no Revolucionaria -, postulando que no existían condiciones para la toma del poder en el corto plazo. Después de una breve crisis de mando los oficiales insubordinados fueron reemplazados.

En síntesis, frente a una situación de debilidad, la respuesta inicial del movimiento revolucionario guatemalteco a los procesos de democratización impulsados por los militares fue la descalificación del proceso y el impulso de una estrategia defensiva orientada a preservar sus fuerzas. Unos años después, en medio de un proceso de negociación las insurgencias guatemaltecas recuperaron la iniciativa e impulsaron varias propuestas políticas.

En El Salvador la situación se desarrolló de una manera diferente tanto por situaciones militares como políticas. Aunque la ofensiva de 1981 no logró el resultado deseado, la derrota del ejército salvadoreño, el FMLN logró mostrar la suficiente capacidad militar para poner en jaque a la Fuerza Armada, preservar la mayor parte de su fuerza militar y desplegarse por el territorio logrando mantener territorios y zonas bajo su control relativo. Dentro de esto, es pertinente recordar que la respuesta de las Fuerzas Armadas fue contundente, desproporcionada y en muchos casos violatoria de los derechos humanos pero no alcanzó el carácter genocida que la misma tuvo en Guatemala, de manera que no logró separar a la población de la guerrilla ni crear un ambiente total de terror.

El FMLN mantuvo en ciertos períodos la iniciativa en el campo militar – lo que no significa necesariamente mantener la ofensiva militar todo el tiempo – así como en el campo político, haciendo un conjunto de propuestas de diálogo y negociación que, apoyadas también en una acción diplomática exitosa permitieron el reconocimiento internacional del frente como interlocutor válido ante el gobierno y apoyo para el propio proceso de negociación.

Para el FMLN arribar a esta situación tampoco resultó un proceso sencillo, ya que al interior del mismo, y sobre todo desde las FPL se había manifestado resistencia a la posibilidad de solucionar políticamente el conflicto y más bien se tendía a postular la continuidad de la guerra considerando su carácter prolongado. Sin embargo, la mayor resistencia fue superada y el FMLN pudo iniciar años después un proceso de negociación⁹².

Después de la ofensiva de enero de 1981 el gobierno salvadoreño intentó terminar con la insurgencia a partir de las reformas económicas referidas antes y la derrota militar del Frente. Los primeros años de la guerra la guerrilla tuvo que resistir las ofensivas militares, adaptarse a una guerra duradera lo que implicó convertirse en una guerrilla rural y para algunos realizar una guerra de posiciones, y mantener su accionar militar sobre la base de un número relativamente grande de acciones militares de alcance reducido (emboscadas, hostigamientos, etc.)

A partir de 1985 las operaciones guerrilleras se redujeron en número pero pasaron a realizarse acciones de mediana y gran envergadura;- entre otras el ataque a la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, en la que provocó más de 200 bajas y la destrucción parcial de la unidad; la ocupación y destrucción parcial de la 4ta Brigada de Infantería de Chalatenango – del que el gobierno reconoció 69 muertos y la guerrilla reivindicó 650 bajas incluyendo a un asesor norteamericano; la realización de paros de transporte de alcance nacional; y la realización de sofisticadas operaciones de comando⁹³.

Sin embargo, este equilibrio dinámico era difícil de mantener por lo que como ya se indicó, el Frente estaba convencido de la necesidad de provocar un desenlace en la que la negociación era un aspecto aceptado. Además hay que considerar que existió dentro del Frente el reconocimiento a un cierto cansancio por la guerra. Como lo señaló un dirigente del FMLN “... en las masas se sintió que hay un consenso mayoritario o bastante general en el sentido de que la gente quiere que la guerra termine. Si a eso se le llama cansancio, yo creo que sería una verdad a medias, porque la gente quiere que termine la guerra, pero también quiere que terminen los factores que generaron la guerra. Y las masas lo plantean claramente: paz sin represión, paz con justicia social. Esto es concreto.” (Harnecker; 1993:300)

Los procesos de paz

Los procesos de paz de Guatemala y El Salvador se realizaron en el contexto regional de la búsqueda de solución a los diferendos internos y sobre todo buscando evitar que estos se internacionalizaran. A pesar de ese marco común, cada uno de los procesos se desarrolló por distintas vías respondiendo a acciones y reacciones diferenciadas entre los distintos actores. De esa cuenta, aunque la ruta común puede considerarse que se definió a nivel centroamericano a partir de los acuerdos de Esquipulas, los procesos de cada país se apegaron de distinta manera a lo ahí establecido. Para abordar las similitudes y diferencias entre ambos procesos se analizarán los siguientes aspectos: el formato de la negociación, la agenda o contenidos centrales de los acuerdos de paz; el tipo de coalición transicional creada por las organizaciones insurgentes; y los resultados generales del mismo.

Previo a dicho análisis, es importante considerar las condiciones en las que los movimientos insurgentes asumieron el tema de la negociación. La asunción de dicho aspecto se dio a partir de ubicarlo en la estrategia de guerra revolucionaria con un carácter táctico o estratégico. La perspectiva táctica implicaba considerar el diálogo y la negociación como un conjunto de acciones tendientes a “ganar tiempo”, acumular fuerzas y modificar la correlación de fuerzas en el campo militar. La lectura estratégica por su parte postularía que la negociación resultaría fundamental para alcanzar los objetivos planteados por el movimiento revolucionario, lo que obligaría a adecuar el resto de elementos de la estrategia (lo militar, la lucha de masas, y la acción diplomática) al logro de este fin. Estas, que serían las posiciones extremas pueden dar lugar a diversas posiciones intermedias, orientadas en mayor o menor medida a una de ellas⁹⁴. Sin embargo, de manera concreta para los movimientos revolucionarios no resultaba una cosa electiva el optar por uno u otro camino; la posibilidad de iniciar un proceso de negociación estaba directamente relacionada con la propia fuerza de los movimientos, fuerza que no se medía exclusivamente en el terreno militar, sino que abarcaba la fuerza social que pudieran tener y el respaldo internacional con que contaban.

En estos aspectos prevalecían importantes diferencias entre la URNG y el FMLN. Como se señaló antes, en el caso guatemalteco aunque en sentido estricto la contraofensiva del ejército contra la insurgencia de 1982 – 1984 no había acabado con las unidades de la guerrilla; si había logrado parcialmente su aislamiento y creado una situación delicada en el terreno militar. (Las fuerzas guerrilleras habían sido desalojadas de la ciudad; y la “fuerza principal” había sido orillada a ubicarse en regiones relativamente aisladas en zonas montañosas, selváticas y/o fronterizas)⁹⁵. Por otro lado, durante el período mencionado no existían condiciones para negociar tanto porque no existía un interlocutor válido como por el hecho de que dada la ferocidad de la campaña contrainsurgente, los mandos guerrilleros no estaban en condiciones de negociar con quienes se habían convertido en los verdugos de su pueblo⁹⁶. Por esto es que, como se refirió antes, la URNG concentró sus esfuerzos en preservar su fuerza militar e intentar reconstruir su relación con la población y las organizaciones sociales. Desde esta perspectiva, inicialmente esta organización asumió el tema del diálogo – negociación como una cuestión táctica que paulatinamente le permitiría recuperarse e incidir de manera distinta en la correlación de fuerzas. Incluso, el postular el diálogo⁹⁷ de manera diferenciada de la negociación tenía por objeto aclarar a la sociedad pero sobre todo a la militancia que el diálogo con el gobierno y con otros actores políticos no implicaba inicialmente algún tipo de compromiso que llevara implícita una desmovilización de las fuerzas guerrilleras⁹⁸.

Para el FMLN la situación se presentó de manera distinta. En primer lugar, como se indicó antes, la búsqueda de una solución política se empezó a plantear desde la primera mitad de la década de 1980⁹⁹. Al igual que en el caso guatemalteco, ante este tipo de iniciativas la respuesta gubernamental fue exigir el desarme y la desmovilización de los grupos insurgentes como condición previa para cualquier tipo de acuerdo. A lo largo de la guerra civil el FMLN combinó la realización de operaciones de envergadura con el desarrollo de iniciativas políticas tendientes a lograr una negociación que les fuera favorable.

Los caminos de la negociación

Como se señaló al inicio de este capítulo, el riesgo de que los conflictos centroamericanos desencadenaran una guerra entre varios de los países de la región, y la preocupación por una intervención norteamericana directa condujeran a que desde Latinoamérica se promovieran diversas iniciativas con el objeto de evitar la conflagración. Dentro de ese marco, la iniciativa de Contadora propuso que se eliminaran los factores externos del conflicto centroamericano–derivados desde su perspectiva del conflicto Este – Oeste - y “formularon un llamado urgente a todos los países del área centroamericana para que a través del diálogo y la negociación se reduzcan las tensiones y se establezcan las bases para un clima permanente de convivencia pacífica y respeto mutuo entre los Estados.” (Declaración de Contadora; enero de 1983) A partir de la conformación del grupo de Contadora y el llamado grupo de apoyo se promovió la suscripción del documento conocido como “Acta de Contadora para la paz y la cooperación en Centroamérica”, en la que se establecieron una serie de compromisos tendientes a evitar que se desatara la guerra entre los países centroamericanos y lograr la solución de los conflictos al interior de los países. Esto, de manera ambigua se presentó como la promoción de acciones de “reconciliación nacional que permitan la participación popular, con garantía plena en auténticos procesos políticos de carácter democrático, sobre bases de justicia, libertad y democracia y, para

tal efecto, crear los mecanismos que permitan, de acuerdo con la ley, el diálogo con los grupos opositores”¹⁰⁰, para lo que se proponían amnistías generales.

La propuesta de contadora debe interpretarse en el marco general del conflicto centroamericano y no exclusivamente desde la óptica de Guatemala o El Salvador. Al respecto el factor determinante para la moderación de la misma y lo desventajosa que resultaría para los grupos insurgentes tiene que ver con el hecho de que Nicaragua estaba siendo víctima de una agresión exterior, y la diplomacia Sandinista operó para que se condenara a la contra, lo que se tradujo en el mismo trato para los grupos irregulares y que la alternativa que se le diera a las guerrillas fuera la amnistía y ciertas garantías para su inserción en el sistema político. Aunque efectivamente esta iniciativa aportó para reducir las tensiones entre los países, para la solución de los conflictos internos resultaban insuficientes en tanto que no se ofrecía más que lo que anteriormente los gobiernos habían hecho: desarmar a las guerrillas.

El “procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica” suscrito durante la reunión de presidentes centroamericanos de Esquipulas II en la ciudad de Guatemala en agosto de 1987 se movía poco del planteamiento anterior, y proponía el inicio del diálogo con los grupos desarmados de oposición política y con aquellos que se hubiesen acogido a la amnistía. Igualmente se estableció la creación de Comisiones Nacionales de reconciliación que tendrían a su cargo la verificación del cumplimiento de los compromisos que los cinco gobiernos centroamericanos en materia de amnistía, cese al fuego, democratización y elecciones libres.

Frente a este marco general, los grupos insurgentes objeto de este ensayo abordaron el proceso de manera distinta. Mientras el FMLN impulsó de manera persistente una estrategia en la que se privilegiaba la negociación directa con el gobierno fuera del marco de Contadora y de Esquipulas II, en Guatemala la URNG no rechazó directamente la propuesta sino tuvo la capacidad de beneficiarse de los procesos que esta fue generando. Esto marcó no sólo la dinámica sino el resultado del proceso que, en términos generales resultaron favorables para las insurgencias.

Como se señaló antes, desde 1981 el FMLN junto al FDR planteó diversas iniciativas para buscar el diálogo y negociación directa con el gobierno. En esto la declaración franco mexicana de agosto de 1981 tuvo particular relevancia para fortalecer al Frente, ya que en ella los ministros de asuntos exteriores de ambos países reconocieron que “la alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Frente Democrático Revolucionario constituye una fuerza política representativa, dispuesta a asumir las obligaciones y los derechos que de ellas se derivan. En consecuencia es legítimo que la alianza participe en la instauración de los mecanismos de acercamiento y negociación necesarios para la solución política de la crisis.” (Declaración Franco Mexicana, 1981)

Después de la elección de José Napoleón Duarte como presidente en 1984 la insurgencia salvadoreña junto al FDR propuso “el inicio del proceso de diálogo entre su gobierno y nuestros frentes por medio de una reunión entre representantes de alto nivel de ambos en la que podemos abordar asuntos relativos a la agenda, procedimientos, calendario de reuniones y la contribución al diálogo de otras fuerzas políticas y sociales”; para la preparación operativa de la reunión propusieron la participación de la conferencia episcopal salvadoreña.

La respuesta del gobierno de Duarte se presentó ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Definida como una oferta de Paz formulada en el marco constitucional del país, el presidente salvadoreño propuso como primera medida el establecimiento de una amnistía general para delitos políticos y la realización de un diálogo en La Palma el 15 de octubre. El FMLN aceptó dicha propuesta y de la misma se creó una comisión mixta que tuvo por objetivo estudiar los planteamientos presentados por las delegaciones, desarrollar los mecanismos de participación de todos los sectores en la solución del conflicto; estudiar la humanización de la guerra; tratar los aspectos para alcanzar la paz y celebrar una segunda reunión. (Comunicado conjunto. Gobierno de el Salvador, FMLN, FDR 15 de octubre de 1984)

En la explicación que hizo de este encuentro el FMLN a sus militantes se afirmó que el diálogo era el resultado de la acumulación de fuerzas político y militares, que con el mismo se habían logrado espacios políticos nacionales e internacionales y que se abría paso a una nueva situación. Según el FMLN en esta reunión lograron derrotar “algunos de los más demagógicos planteamientos de Napoleón Duarte” ya que, en lugar de desarmarse y dialogar, el diálogo se había iniciado con las armas en la mano; se logró incluir a los representantes del FDR; se estableció la necesidad de “...tratar todos los factores políticos, sociales y económicos que desataron la guerra y todos los aspectos necesarios para la consecución de la paz”. Para la insurgencia “El diálogo por lo tanto, es una conquista del pueblo que debe ser defendida hasta alcanzar la paz. Buscamos paz con libertad para las masas populares, con independencia, soberanía y el pleno respeto de autodeterminación de nuestro pueblo. Una paz con genuino contenido popular, patriótico y revolucionario. Por ello, reiteramos al pueblo salvadoreño, a la comunidad internacional y al pueblo de los Estados Unidos en particular, que es condición básica para alcanzar la paz en la Salvador, el cese de la injerencia de la Administración Reagan en los asuntos que competen a los salvadoreños, en esto consistiría la verdadera desinternacionalización del conflicto.” (Comunicado FMLN. 16 de octubre de 1984)

De cara a la segunda reunión, el FMLN y el FDR presentaron una propuesta global para una solución política negociada y la paz que contemplaba tres etapas: creación de condiciones políticas y de soberanía básicas para una solución negociada; la supresión de hostilidades y acuerdos de garantía; y, la institucionalidad democrática. Por su parte, el gobierno propuso la creación de una comisión especial, integrada por representantes del gobierno y la insurgencia que le dieran continuidad y viabilidad al proceso. De esta reunión se acordó una tregua por las fiestas navideñas y la decisión de continuar el proceso. En declaraciones posteriores el presidente Duarte rechazó las propuestas de la insurgencia y el diálogo entró en una fase de impasse. Con la suscripción de los acuerdos de Esquipulas II el presidente Duarte intentó un último esfuerzo por reanudar el proceso, aunque la insistencia del FMLN en una agenda ampliada y la imposición por parte del gobierno del desarme como condición previa no permitieron que este proceso avanzara más.

Durante los años siguientes y hasta el final del gobierno de Duarte el diálogo estuvo empantanado y ambas partes hicieron esfuerzos por modificar la situación militar que, para la mayoría de los observadores era considerada de empate. Sin embargo los cambios en la situación política fueron correctamente percibidos por el Frente en el sentido de identificar como un riesgo los avances electorales de ARENA que en las elecciones municipales de 1988 logró derrotar a la Democracia Cristiana.

Frente a las elecciones presidenciales de 1989 el FMLN planteó su participación con la condición de que las mismas se atrasaran por seis meses. Esto no fue aceptado por el gobierno, aunque algunos de los grupos integrantes del FDR decidieron participar. Se creó la “Convergencia Democrática” CD integrada por el Movimiento Nacional Revolucionario MNR, el Movimiento Social Cristiano MSC, y el Partido Social Cristiano PSC. El FMLN no apoyó formalmente esta participación. La CD pudo constatar que no existían condiciones políticas adecuadas para la participación electoral por lo que apenas pudo realizar proselitismo y sus resultados fueron mínimos.

Como se esperaba, en las elecciones de 1989 resultó ganador el partido conservador y vinculado a grupos de ultraderecha Alianza Republicana Nacionalista ARENA, con lo que Alfredo Cristiani llegó a la presidencia del país. Desde su discurso de toma de posesión el nuevo presidente propuso un diálogo en el marco de la ley, el establecimiento de una comisión especial y una calendarización. Otro aspecto importante consistió en que en la propuesta se hacía un llamado a no suspender de manera unilateral el proceso. El problema en la propuesta de Cristiani era que en la comisión originalmente propuesta no existían representantes de primer nivel. Sin embargo, después de diversos movimientos entre las partes se abrió la negociación que, aunque se vería suspendida a raíz del ataque perpetrado por el gobierno contra los dirigentes de la FENASTRAS y la ofensiva de 1989, condujeron a la suscripción de los acuerdos de paz en este país centroamericano.

En Guatemala el proceso de paz se extendió durante casi una década. Desde la toma de posesión del primer gobernante civil en 1986, la URNG realizó a través de cartas una propuesta para iniciar el diálogo con el gobierno. Para la insurgencia, originalmente esa iniciativa tuvo un carácter táctico, en tanto que lo que buscó fue lograr recuperarse de las ofensivas militares y modificar la correlación de fuerzas. Para el ejército que, durante este primer gobierno fue el poder real en el país, el éxito de “su” transición democrática dependía de la completa derrota de los grupos guerrilleros, por lo que desde un principio intentó bloquear estos esfuerzos. De esa cuenta, el facilitador del primer encuentro entre la insurgencia y el gobierno, el entonces embajador guatemalteco en España – Danilo Barillas – fue asesinado, y el propio presidente Cerezo tuvo que admitir que no existían las condiciones para el diálogo con la insurgencia. Este primer gobierno civil debió enfrentar igualmente dos intentos de golpe de Estado¹⁰¹. Sin embargo, y con base a los acuerdos de Esquipulas II se estableció la Comisión Nacional de Reconciliación que, conformada por civiles, promovió encuentros entre la insurgencia y distintos sectores de la sociedad guatemalteca: políticos, empresarios, iglesias, cooperativistas, académicos y organizaciones populares.

Estos encuentros permitieron romper no sólo el cerco político hacia dentro que se le había impuesto por la vía militar a la URNG sino conquistar espacios en los medios de comunicación nacionales e internacionales que la volvieron a ubicar como una fuerza política beligerante que se había convertido en interlocutora de importantes grupos de la sociedad guatemalteca. En todos los encuentros las partes afirmaron que el diálogo y la negociación era la vía para la solución del conflicto armado, por lo que en las elecciones de 1990 dicho argumento ganó fuerza y se convirtió en tema de campaña electoral.

El segundo presidente civil, Jorge Serrano Elías al poco tiempo de tomar posesión – en abril de 1991 – propuso una “iniciativa para la paz total de la nación” que planteaba la

terminación de la lucha armada, mayor equidad económica y social, respeto y fortalecimiento del régimen de legalidad y profundización del proceso democrático. La iniciativa de diálogo fue aceptada por la URNG, y el 26 de abril de ese mismo año se suscribió el acuerdo de México, en el que las partes se comprometieron "... a llevar a cabo un proceso de negociaciones que permita, en el menor tiempo posible, la firma de un acuerdo de paz firme y duradera en el cual se consignen los acuerdos políticos, su implementación y la ejecución por las partes y los términos de verificación de su cumplimiento...". El temario general de la negociación comprendió los siguientes puntos: democratización y derechos humanos; fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática; identidad y derechos de los pueblos indígenas; reformas constitucionales y régimen electoral; aspectos socio-económicos; situación agraria; reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado; bases para la incorporación de la URNG a la vida política del país; arreglos para el definitivo cese al fuego; cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos; y, firma del acuerdo de paz firme y duradera y desmovilización.

Con este acuerdo la URNG logró modificar sustancialmente la intención del gobierno y el ejército de discutir exclusivamente la desmovilización de la insurgencia, y se empezó a delinear la diferenciación entre la agenda sustantiva y la agenda operativa. La sustantiva, que era la prioritaria de la negociación tendría por objeto llegar a acuerdos que sentaran las bases para la solución de los problemas que originaron el conflicto armado interno, y correspondía a la mayoría de los temas establecidos en el Acuerdo de México. La operativa, que desde esta perspectiva pasaba a adquirir un carácter secundario postulaba que, una vez resueltos los problemas centrales, la desmovilización e inserción de la guerrilla a la legalidad se darían a partir de acordar un procedimiento específico.

Esta modificación en el esquema de la negociación se coincidió con una crisis política dentro del gobierno de Guatemala, derivada en primer lugar de las limitaciones que tenía el ejecutivo para gobernar siendo minoría en el Congreso, lo que dio lugar a escandalosas compras de voluntades de los diputados; las tensiones al interior del propio ejército en torno a la dinámica que adquiriría la negociación con las fuerzas guerrilleras; y el resurgimiento de protestas y movilizaciones sociales. La respuesta a esto constituyó un intento de autogolpe de Estado que, al estilo Fujimori intentó disolver el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, tanto la oposición política como la movilización social obligaron a que se diera marcha atrás y que el presidente fuera sustituido por el Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio.

Esta crisis política atrasó el proceso de negociaciones, que se reinició con una nueva propuesta del gobierno en la que, con la intención de promover la participación del resto de la sociedad se propuso la creación del Foro Permanente para la Paz. Este quedó establecido como la Asamblea de la Sociedad Civil ASC que podría, de manera indirecta participar en el proceso mediante la presentación de propuestas sobre los temas a las partes. La creación de la ASC permitió la organización, articulación y coordinación de grupos sociales que no habían logrado tener participación en los procesos políticos nacionales en mucho tiempo. De esa cuenta, la diversidad de organizaciones sociales abordaron y llegaron a consensos sobre los distintos temas que la negociación contemplaba. La URNG por su parte, promovió la participación de las organizaciones sociales que influía en las distintas mesas de la ASC y, en muchos casos asumió las propuestas de la ASC en la mesa de negociaciones, con lo que lo que negociaba no era

exclusivamente la posición de la insurgencia, sino de importantes sectores de la sociedad guatemalteca¹⁰².

El gobierno de Ramiro de León fue un gobierno de transición que tenía por mandato concluir el término del anterior presidente, por lo que no tuvo tiempo para concluir las negociaciones que terminaron en el año 1996, bajo el gobierno de Alvaro Arzú¹⁰³ con la modalidad de negociaciones directas entre las partes con la mediación de Naciones Unidas. El 29 de diciembre de ese año concluyó uno de los conflictos armados más largos de América Latina; la negociación la realizaron los insurgentes con cuatro gobiernos distintos y dieron lugar a un conjunto de acuerdos que, en el papel establecían un nuevo pacto social y político para Guatemala.

Los Acuerdos de paz

En la propuesta inicial del diálogo a realizarse con el gobierno de Cristiani, el FMLN propuso un proceso sustentado en tres puntos. La primera fase, el Cese al Fuego incluía reformas al sistema judicial, el cese de toda forma de represión, vigencia de los derechos políticos, esclarecimiento del asesinato de Monseñor Romero; reformas económicas, depuración de la fuerza Armada; reformas constitucionales; realización de elecciones legislativas y municipales anticipadas, y, garantías para la vigencia del cese al fuego.

La segunda parte se refería a los “Pasos iniciales para la Incorporación del FMLN a la Vida Política” que se daría a partir del Acuerdo de Cese al Fuego. La tercera era la “Negociación para el cese definitivo de las hostilidades y la integración total del FMLN a la vida Política” e implicaba el tratamiento de los siguientes aspectos: aprobación por la Asamblea Legislativa de las reformas constitucionales; reestructuración del sistema electoral; acuerdo para el reconocimiento de un solo ejército nacional y su reducción; formación de un solo cuerpo de seguridad bajo mando civil; y, acuerdo para proponer al Congreso de los Estados Unidos “la transformación de la asistencia militar en un fondo para la recuperación económica y social del país” (Propuesta del FMLN. Septiembre de 1989).

Después de la ofensiva de noviembre de 1989 en el acuerdo de Ginebra se establecieron con precisión los temas que serían tratados en la negociación. Estos fueron Fuerza Armada, Derechos Humanos, Sistema Judicial, Sistema Electoral, Reforma Constitucional, Problema económico – social, y verificación por las Naciones Unidas.

En julio de 1990 se firmó el Acuerdo de San José, en el que se establecieron medidas para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. En los acuerdos de México, suscritos en abril de 1991 se avanzó de manera significativa en los temas relativos a la Fuerza Armada, Sistema Judicial, reformas electorales y la Comisión de la Verdad. Igualmente se realizaron los acuerdos políticos necesarios para que se aprobaran un conjunto de reformas constitucionales en las que se consagraba constitucionalmente lo pactado en los Acuerdos. Esto tiene particular trascendencia ya que de esta prolongada ronda de negociaciones salió el texto que posteriormente fue aprobado por la Asamblea Legislativa con relativamente pocos cambios.

En el Acuerdo de Nueva York, suscrito en septiembre de 1991 se acordó la creación de una Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ) que integrada por el gobierno,

representantes del FMLN, y una representación de los partidos políticos con representación parlamentaria así como observadores del Arzobispo de San Salvador y de la Misión de Naciones Unidas en el Salvador ONUSAL. Otro aspecto fundamental de este acuerdo es que se acordó la depuración de la Fuerza Armada en base a la evaluación de todos sus miembros por una comisión específica. En el mismo sentido se acordó la reducción del Ejército de acuerdo a las necesidades reales de defensa del territorio nacional y cambios a la doctrina y formación de sus miembros.

En materia económica y social se estableció un proceso de redistribución de latifundios que superarán las 245 hectáreas y la legalización de la tenencia de la tierra en las zonas de conflicto, reconociendo los derechos de los beneficiarios por las políticas del FMLN en los territorios bajo su control. De una manera más genérica establecieron la creación de un Foro para la concertación económica y social, con la participación de los sectores gubernamental, laboral y empresarial, con el objeto de continuar resolviendo la problemática económica y social. (Acuerdo de Nueva York, septiembre de 1991) De estos acuerdos se derivó lo que se denominó negociación comprimida, los entendidos de los Acuerdos de Nueva York y las Actas I y II de Nueva York.

En enero de 1992 se suscribieron en México los Acuerdos de Chapultepec, en los que se establecieron el conjunto de acuerdos que permitirían el fin de la guerra civil salvadoreña. Estos incluían lo relativo a la fuerza armada, la policía nacional civil, sistema judicial, sistema electoral, tema económico social, participación política del FMLN, cese del enfrentamiento armado, verificación por las naciones Unidas y Calendario de ejecución.

Los acuerdos de paz de Guatemala pueden agruparse en dos grandes conjuntos, los acuerdos sustantivos y los operativos. Además de estos se suscribieron otros tres acuerdos que tenían que ver con los efectos del conflicto armado. El primero de ellos, el “Acuerdo Global sobre derechos Humanos” que entró en vigencia al momento de su suscripción en marzo de 1994 estableció un conjunto de compromisos y garantías del gobierno para la plena vigencia de los derechos humanos en el país, así como la verificación de los mismos por parte de las Naciones Unidas. El “Acuerdo para el reasentamiento de las comunidades desarraigadas por el conflicto armado” de junio de 1994 establecía el procedimiento para el retorno organizado de la población civil que tuvo que desplazarse a partir de las campañas contrainsurgentes de la década anterior. El “Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca” que establecía el mandato de esta comisión de la verdad.

Los Acuerdos sustantivos fueron el “Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas” (marzo de 1995); “Acuerdo sobre Aspectos socioeconómicos y situación agraria” (mayo de 1996); “Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática” (septiembre de 1996); “Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral” (diciembre de 1996); y, “Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los Acuerdos de Paz” (diciembre de 1996).

Los acuerdos operativos corresponden al “Acuerdo sobre el definitivo cese al Fuego” (diciembre de 1996); y “Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad” (diciembre de 1996)

El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en México el 31 de marzo de 1995, estableció una transformación importante de la nación y el Estado guatemalteco que partía del reconocimiento del carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación. Esto implicó el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas (maya, garífuna y xinca). El Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria fue firmado por las partes el 6 de mayo de 1996. En el mismo se postuló la necesidad de fortalecer el proceso de democratización del país a partir de impulsar un modelo de desarrollo participativo que implicara la concertación en distintos ámbitos territoriales y la puesta en marcha del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. El acuerdo recoge el papel central del estado en la promoción, orientación y regulación del desarrollo económico del país. En lo referido a la situación agraria y desarrollo rural se acordó promover la participación de todos los actores involucrados en el tema agrícola; facilitar el acceso a la propiedad de la tierra a través de la creación del Fondo de Tierras; creación de infraestructura productiva básica; dotación de crédito y servicios financieros; programas de capacitación y asistencia técnica; y apoyo para la comercialización.

El Acuerdo sobre Fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática fue suscrito por las partes el 9 de septiembre de 1996. Para fortalecer el poder civil se establecieron propuestas para el organismo legislativo y el organismo judicial que incluían la revisión de la ley de régimen interior del Congreso de la República y para el organismo judicial el establecimiento de la carrera judicial y del servicio público de defensa penal. Asimismo se contempló la creación de una comisión de fortalecimiento de la justicia que tendría a su cargo el elaborar un conjunto de propuestas orientadas a la modernización del organismo judicial. En el tema de seguridad pública se acordó la creación de la Policía Nacional Civil como único cuerpo de seguridad interna del país. Con relación al ejército se acordó un proceso de reconversión que implicó desde la reducción del número de efectivos hasta cambios en su doctrina y sistema educativo. Igualmente se acordó la creación de un órgano de inteligencia civil.

En estos tres acuerdos quedaron establecidos los aspectos torales de la negociación que, desde la perspectiva de la URNG tenían por objeto sentar las bases de solución a los problemas que originaron el conflicto armado interno. De estos tres acuerdos se derivaron dos acuerdos más estrechamente vinculados, el de Reformas Constitucionales y Régimen Electoral y el Acuerdo Cronograma. En el primero se identificaron el conjunto de artículos de la constitución que debían ser reformados para poder cumplir los aspectos centrales de los acuerdos – el reconocimiento de los pueblos indígenas y el nuevo papel del ejército – por ejemplo. El procedimiento – como se verá adelante – consistió en someter estos artículos a la aprobación del congreso y posteriormente someterlos a un referéndum. Para reformar el sistema electoral se acordó crear una comisión multipartidaria que realizaría una serie de propuestas que posteriormente serían aprobadas por el Congreso. En el acuerdo cronograma se identificaron cada unos de los compromisos adquiridos por el gobierno y se ubicaron fechas tentativas para su cumplimiento en tres marcos temporales: noventa días, un año y cinco años. Se trató de acuerdos muy complejos y cuyo cumplimiento de alguna manera se dejó en manos de la buena voluntad del gobierno.

Los resultados de la paz

En Guatemala está por cumplirse una década desde la suscripción de los acuerdos de paz, mientras que en El Salvador se han cumplido 13 años desde el fin del conflicto armado interno. Los cambios en las sociedades, incluido el generacional, hacen parecer el período de guerra como lejano y cada vez más ajeno, de manera que se tiende a desvalorizar los resultados políticos y sociales de la paz en estos países. Es desde esta perspectiva que se cita en extenso las palabras de Salvador Samayoa, uno de los negociadores del FMLN quién en su recuento del proceso de paz salvadoreño, escrito una década después de los acuerdos de Chapultepec señalaba:

“Todavía mucha gente no sabe lo que costó hacer la paz. Los más jóvenes no saben cómo eran las cosas en El Salvador antes de la guerra y antes de la paz. Algunos adultos lo olvidan sin excusa cuando dicen que nada ha cambiado o que la situación es ahora peor que antes. Cuando a un preso político le ponían la capucha, pensaba sólo en respirar para evitar la muerte por asfixia. (...) Cuando tenía la suerte de librarse de la mazmorra, capucha y barrotes podía respirar aire puro y comenzar a anhelar otros dones de la vida. Eso le pasó a grandes sectores de la población salvadoreña. Espero que la libertad que ahora disfrutan, todavía con muchas carencias, no les haga olvidar la importancia vital de haberse sacado la capucha.” (2003:30)

Para Zamora, los más importantes logros del proceso de paz salvadoreño pueden ubicarse en tres grandes ejes: la superación de la violencia, la desmilitarización de la vida política y la reforma a la institucionalidad del Estado. El tema de la violencia hace referencia a que la misma fue erradicada como forma principal para dirimir el conflicto político. Como se ha señalado a lo largo de este ensayo la violencia en sus diversas manifestaciones fue central y determinante para el mantenimiento del sistema, lo que provocó que la misma fuera utilizada como instrumento de control social y como mecanismo para la presión opositora. En ese sentido, la violencia ha dejado de ser un elemento central de la práctica política. Sin embargo, el autor citado alerta que, la matriz social de la violencia sigue estando presente. (2002:27)

El segundo gran cambio correspondió a la desmilitarización de la vida política. Durante la mayor parte del siglo XX la Fuerza Armada fue el gran decisor y actor en la política salvadoreña, papel que fortaleció durante el conflicto armado. Sin embargo, a partir de los acuerdos de paz se redefinió el papel del ejército, se redujo el número de efectivos, se disolvieron los batallones contrainsurgentes y se disminuyó significativamente el porcentaje del presupuesto nacional dedicado a la defensa. La creación de la Policía Nacional Civil resultó complementaria a este proceso. (2002:28-29)

Respecto a la institucionalidad del estado se logró “incrementar la capacidad del Estado para cautelar los derechos humanos”; “autonomizar y despartidizar ciertas instituciones políticas”, e “introducir instrumentos de democracia participativa”. (2002:29)

Para Samayoa, entre los logros relevantes debe considerarse la propia incorporación del FMLN a la legalidad política. Para alcanzar esto se tuvo que pasar por el proceso de desmovilización, amnistía e inserción individual de sus miembros, así como la inserción política colectiva en un sistema que históricamente había vedado y perseguido la participación política de la izquierda. (2003:624) Asimismo, para el ex negociador guerrillero la libertad de expresión puede considerarse otro logro de los acuerdos de paz junto a la tolerancia, la independencia del poder judicial, y la creación del tribunal electoral.

Con motivo de los doce años de la firma de la paz en El Salvador, Schafik Handal, líder histórico del FMLN identificaba los principales cambios ocurridos en dicho país. La libertad política –aunque todavía poco profunda - fue desde su punto de vista una de las principales conquistas de la paz: “El Salvador definitivamente ya no es aquel mismo país, donde el día a día era la persecución de los opositores, las torturas, los encarcelamientos ilegales, los desaparecimientos forzosos, los asesinatos políticos y las masacres, el irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas y la ausencia de espacios de expresión libre y plural.”

Asimismo, señaló que los cambios producto de la reforma política delineada en los acuerdos de paz empezaban a echar raíces: el establecimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; la subordinación al poder civil de la Fuerza Armada; la Policía Nacional Civil como único cuerpo de seguridad interna; el inicio de la transformación del sistema judicial; y, “... un sistema electoral que nos brinda, a los actores políticos y a los ciudadanos, un mayor grado de confianza en cuanto a que la voluntad soberana del pueblo, expresada en las urnas, sea respetada. Pero todavía queda mucho por hacer en este terreno, para que podamos afirmar que las reglas del juego electoral son totalmente transparentes, democráticas, equitativas e imparciales. La vieja amenaza de los fraudes e imposiciones se resiste a desaparecer del todo.”

Algunas de las consideraciones antes referidas son igualmente válidas para el caso guatemalteco; sin embargo, más allá del cumplimiento de compromisos específicos, existen tres aspectos que en el país han tenido especial relevancia a partir de los Acuerdos de Paz. El primero, por elemental que parezca, consiste en el propio cese del enfrentamiento armado; se trató de un conflicto que duró más de tres décadas, involucró a varias generaciones de guatemaltecos y costó la vida de cientos de miles de hombres y mujeres. El fin del conflicto a partir del acuerdo entre las partes enfrentadas fue un logro no sólo de los actores directamente involucrados sino de la sociedad en su conjunto; los costos de la guerra impactaron de tal manera a la sociedad guatemalteca que difícilmente se volverá a pensar en recurrir a la violencia para dirimir el conflicto político.

Vinculado a lo anterior, está también el reconocimiento a nivel societal de la barbarie que implicaron las campañas contrainsurgentes de principios de la década de 1980. La divulgación del informe de la CEH y su incorporación a los contenidos educativos ha permitido superar la negación de la violencia y asumir las múltiples y diversas responsabilidades por la sangre derramada. Sin embargo, esto se ha dado de manera contradictoria e incompleta. Por un lado, el poder ejecutivo, a nombre del Estado, ha reconocido su responsabilidad en la violación grave y sistemática de las violaciones a los derechos humanos¹⁰⁴ pero al mismo tiempo, este no ha sido capaz de identificar y juzgar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos. Se ha establecido de esa manera la autoría abstracta de estos hechos que elude la responsabilidad que militares, políticos y empresarios tuvieron en la represión indiscriminada contra una parte importante de la población civil.

Para terminar este recuento el cambio más visible e importante a partir de la firma de los acuerdos de paz es el reconocimiento de la sociedad guatemalteca sobre su carácter pluriétnico, multilingüe y pluricultural en el que los pueblos indígenas y particularmente el pueblo maya es reconocido como un actor fundamental en la Guatemala del presente y el futuro.

En el último apartado dedicado a los procesos de paz se analizará cómo las diferencias en el formato de la negociación, así como en el contenido de las agendas contribuyeron a crear distintos tipos de coaliciones transicionales¹⁰⁵ que incidieron tanto en la inserción de ex insurgencias en el sistema político como en sus resultados posteriores.

Sobre el tipo de acuerdos, como se pudo constatar, existen diferencias importantes en cuanto al alcance y problemas abordados en cada una de las negociaciones. Mientras que el FMLN centró la mayor parte de su esfuerzo en el área política y particularmente en garantizar la desmilitarización de la sociedad y crear mejores condiciones para su inserción como fuerza política; la URNG se orientó a la discusión de una enorme agenda que, dividida en temas sustantivos y operativos abarcó temas relevantes para la totalidad de la sociedad guatemalteca. En el mismo sentido la lógica de la interlocución varió.

Desde 1981 el FMLM junto con el FDR lanzó iniciativas para negociar directamente con el gobierno salvadoreño la solución política del conflicto. Este posicionamiento se mantuvo de manera conjunta hasta el fin del gobierno de Duarte. Posteriormente, algunos dirigentes del FDR valoraron que la situación política permitía la participación con ciertas garantías, lo que dejó al FMLN como la única fuerza de oposición extralegal que siguió planteando un diálogo con el gobierno. En ese sentido es importante señalar que el FMLN realizó todos los esfuerzos posibles para que no se cumpliera en El Salvador el procedimiento establecido en los acuerdos de Esquipulas II: la creación de una Comisión de Reconciliación Nacional que promoviera el diálogo con los grupos desarmados; por el contrario, el Frente postuló la necesidad de un diálogo directo, y posteriormente la consulta con otros sectores de la sociedad. Dentro de esa lógica, el FMLN preservó su protagonismo exclusivo y construyó una coalición transicional sustentada en su propia fuerza (las cinco organizaciones político militares y las organizaciones sociales que influían y se subordinaban a su dirección). Esta estrategia se sustentó en la capacidad militar del Frente (la ofensiva del 89 demostró que la situación de empate militar era real) y la acción política interna e internacional que obligó a aceptar dicho protagonismo.

En Guatemala en cambio, tanto la temática como la modalidad de la negociación se tradujo en la conformación de una coalición transicional más horizontal, diversa y heterogénea en la que, el proceso de negociación fue aprovechado por amplios sectores de la sociedad (se podría utilizar el concepto de sociedad civil, pero por su ambigüedad se prefiere hacer referencia a organizaciones sociales) para organizarse y posicionar en la agenda nacional sus diversos planteamientos y propuesta dentro de la discusión de los Acuerdos de Paz. Así, la creación de la Asamblea de la Sociedad permitió la participación no sólo de las organizaciones influidas o relacionadas directamente con la URNG, sino que generar procesos de acercamiento y coordinación entre una diversidad de dirigentes y grupos que nunca antes habían podido relacionarse entre ellos ni tener espacios autónomos para la elaboración y la propuesta.

Los dirigentes de la URNG tuvieron la habilidad de orientar a sus propios representantes en la ASC para no necesariamente hegemonizar las distintas mesas y permitir el desarrollo de diversas iniciativas que, en muchos casos fueron asumidas por la URNG en la mesa de negociaciones¹⁰⁶. De esa manera, la posición de la URNG en la mesa de negociaciones estuvo

sustentada no sólo en su exclusiva fuerza militar o política, sino en las redes de respaldo que fue tejiendo desde la mencionada asamblea.

En el caso guatemalteco, el éxito de la URNG durante la etapa final de la negociación consistió en haber contribuido a articular un bloque político y social que presentó un conjunto de propuestas frente al gobierno¹⁰⁷. Este bloque era desarticulado y heterogéneo y estaba constituido por los grupos organizados que habían sido excluidos de la transición democrática protagonizada por militares, políticos “aprobados por el sistema” y empresarios. Esto se tradujo en la generación de apoyo social importante a la finalización del conflicto, al apoyo a la negociación, y, parcialmente el apoyo a las posiciones de la URNG en la mesa de negociación; la URNG no representaba exclusivamente los intereses del movimiento revolucionario, sino también de importantes grupos sociales que antes no habían sido incluidos en la toma de decisiones¹⁰⁸.

En conclusión, la dinámica de los procesos de negociación permitió construir dos tipos de coaliciones transicionales que lograron resultados positivos semejantes aunque no tuvieron el mismo desarrollo posterior. El FMLN construyó una coalición transicional conformada por sus propias organizaciones (las cinco organizaciones guerrilleras y las organizaciones sociales que influían) que logró no sólo reconocimiento sino también apoyo internacional. Por su parte, la URNG se articuló en una coalición mucho más amplia y menos subordinada a sus propios planteamientos y propuestas, por lo que tuvo que flexibilizar, logrando apoyo no de manera directa a su posición, sino a la dinámica del proceso en su conjunto.

Conflictos, reajustes y cambios

La reinscripción a la legalidad representó para los movimientos revolucionarios la necesidad de enfrentar un conjunto de problemas políticos, ideológicos y prácticos en un tiempo relativamente corto y con distintos niveles de preparación.

En el caso guatemalteco un aspecto que puede resultar explicativo es tomar en cuenta que inicialmente la URNG consideró, y manifestó en los documentos públicos que el diálogo era táctico, en términos de ganar tiempo para modificar la correlación de fuerzas militares sin perder la esperanza de tomar por asalto el palacio de invierno. Sin embargo, quince años después del inicio del mismo los dirigentes guerrilleros reconocen que no existía otra alternativa para el movimiento revolucionario guatemalteco¹⁰⁹.

Esta falta de convencimiento y de decisión probablemente ha incidido en que los insurgentes guatemaltecos hayan tardado en entender las nuevas condiciones de lucha política y que la competencia electoral – que finalmente es la que las guerrillas aceptaron – no haya sido asimilada por buena parte de su militancia¹¹⁰.

Sin embargo, el proceso de diálogo – negociación contribuyó a un cambio en la correlación de fuerzas favorable a la URNG, que no se manifestó en el campo militar sino en el político a partir de constituir una suerte de “coalición transicional alternativa” alrededor de la cual se aglutinaron las organizaciones sociales de diversa índole que habían sido excluidas del pacto cívico militar que dio lugar a la transición guatemalteca. El proceso de paz permitió romper el cerco militar y político establecido por el ejército y catalizar la acción de las

organizaciones sociales, tanto las influidas directamente por la URNG como las que funcionaban de manera autónoma¹¹¹.

En el caso guatemalteco pareció existir una preparación y una conciencia desigual entre y dentro de las organizaciones que conformaban la URNG. Evidentemente para la Comandancia General y su círculo cercano de apoyo a la negociación establecido en México, la irreversibilidad y cercanía del final del conflicto armado estaba suficientemente claro desde los primeros años de la década de 1990¹¹²; sin embargo, para el impulso de la estrategia política, que se sustentaba en el accionar militar¹¹³, era necesario mantener elevada la moral de los frentes guerrilleros y, subjetivamente era y es distinto arriesgar la vida por la toma del poder y la revolución que por concluir un proceso de negociación¹¹⁴. Como se indicó antes, se llegó incluso a hablar de “traición”: “Por otra parte, piensan algunos, basándose en otros casos y experiencias, que la negociación ha sido una traición. Ha habido innumerables traiciones de otro tipo, que no tienen nada que ver con la negociación. Ha habido traiciones muy dolorosas en la lucha armada y muy grandes frustraciones en la lucha popular. Eso no es culpa de la lucha armada o popular, sino de quienes fueron inconsecuentes con lo que pensaban o quienes no supieron utilizar y conducir las estrategias que tuvieron a su alcance.” (Proyecto estratégico... p.12)

A esto hay que agregar las limitaciones de comunicación e información propias de una situación de guerra y clandestinidad.

Para los revolucionarios guatemaltecos, durante la década de los noventa el objetivo de la revolución era construir la democracia real, funcional y participativa con justicia social, a partir de la interacción del factor militar, la lucha de masas, la lucha política y el trabajo político diplomático. El problema fue que el objetivo de construir esta democracia era entendido de manera distinta entre las organizaciones y dentro de estas. Por ejemplo, en la conferencia de cuadros de 1994 el EGP resolvió que “Nuestro objetivo estratégico fundamental sigue siendo la revolución y el socialismo, pero construidos dentro de la realidad política, económica y social y en base a las condiciones objetivas de las leyes del decurso histórico de la humanidad.” (EGP: 1994a; 6)

Por su parte, desde enero de 1995 la ORPA empezó a circular entre sus militantes un conjunto de documentos en los que se preparaban las condiciones para finalizar la guerra e iniciar la inserción en la legalidad¹¹⁵. En estos materiales queda de manifiesto que durante la guerra y la negociación habían quedado subordinadas las diferencias políticas e ideológicas existentes entre las organizaciones pero que, en la situación de desenlace cada una de ellas era distinta, y, para el caso de ORPA se postulaba la continuidad de este proyecto político: “...otro de nuestros propósitos es fomentar el sentido de pertenencia a la Organización. Todos los resultados posibles son producto del trabajo compartido. La Organización es nuestra y nosotros somos la Organización. Este sentido de pertenencia y apropiación tiene que inspirar a toda la militancia.” (Grandes proyectos de la organización, ORPA; 1995:8)

Desde principios de la década de los noventa, el desarrollo de las organizaciones guerrilleras había sido desigual. Por un lado, aunque en la estrategia revolucionaria lo militar continuaba teniendo un carácter estratégico y prioritario, cada vez se hizo más difícil reclutar combatientes para los frentes guerrilleros, mientras que las estructuras políticas urbanas y rurales, vinculadas a las organizaciones sociales y a los organismos no gubernamentales tuvieron

importantes niveles de desarrollo, y paulatinamente fueron adquiriendo mayor peso político en la sociedad aunque no al interior de las direcciones guerrilleras. Esto empieza a producir una tensión importante que se manifestó al momento de la incorporación política y giraba en torno a la conducción y dirección de la URNG en la nueva etapa. Esta discusión que abarcaba no solamente la integración específica del organismo de dirección del partido, sino de la composición y el tipo de organización en que se convertiría.

Sobre el primer problema, la cuestión se estableció entre la continuidad de la dirección “histórica” de las organizaciones en la que participaban hombres y mujeres con décadas de experiencia y que en algunos casos habían sido fundadores de las organizaciones, o si esta se abriría a otros dirigentes, provenientes de experiencias no militares. Esto no se llegó a plantear explícitamente porque para constituir la dirección unificada cada una de las organizaciones tuvo que resolver sus propios problemas internos y llegar a acuerdos de equilibrio en los que prevalecieron las direcciones históricas.

En cuanto a la composición social del partido y su posible apertura a otros grupos existió una diferencia entre los que postularon abrirse a la sociedad y aquellos que promovieron el desarrollo de una militancia “pura” y “probada”: “A veces se insiste sólo en la participación obrera, campesina, etc., Pero tenemos que interesar a los sectores que tradicionalmente no se valoran en una alianza, como serían los sectores empresariales. Y tenemos que seguir buscando alianzas con segmentos del ejército.” (p 15) De manera unitaria se postuló que : “El partido que debemos construir debe ser una fuerza partidista útil tanto para conquistar espacios de poder político dentro de los mecanismos institucionales, como para movilizar al conjunto de la sociedad en la lucha por el logro de sus reivindicaciones.(...) El partido debe dar cabida no solamente a los actuales miembros de URNG, sino a los miles de personas patriotas, progresistas y democráticas de diferentes generaciones, no organizados que ansían y ven con esperanza la nueva alternativa histórica que se presenta para nuestro país. Debe ser un partido enraizado y comprometido con el Pueblo y no ajeno a él, para que al mismo tiempo que recoja la mejor tradición de lucha revolucionaria de nuestro Pueblo analice y asimile lo nuevo de las condiciones que se desenvuelven en la realidad (...) un partido político democrático, pluralista, como diversa sean las fuerzas que se sumen a nuestras filas.” (URNG; 1997:10)

Esta apertura ofrecida se vio limitada por los criterios concretos de organización en los que para ingresar al partido se estableció una suerte de filtro, así como la decisión de continuar con un centralismo democrático en el que tendía a prevalecer más el centralismo que la democracia: “La democracia interna más que en un conjunto formal de derechos y obligaciones, es un método para fomentar la participación, la promoción, la renovación y la responsabilidad de todos sus integrantes; establecer variados mecanismos internos que facilitan las relaciones fluidas entre estructuras, de manera que se logre la participación colectiva, la representación y compenetración de los miembros de variado origen que conformarán el partido y la toma de decisiones que afiancen la unidad en la diversidad y que permitan crear consensos y lineamientos obligatorios en un solo sentido. La disciplina con que nos curtimos en la lucha guerrillera como fuerzas militares revolucionarias, adquiere ahora un nuevo valor y nuevas cualidades. Ahora como antes, sigue siendo el reflejo de la lealtad consciente a lineamientos objetivos y valores, y a una organización, ahora, el partido URNG.” (1997:12) Advirtiendo que “Los pronunciamientos públicos de miembros del Partido en contra de las decisiones emanadas de sus organismos serán considerados como desleales a la unidad y ajenos al Partido. También

son manifestaciones desleales la difusión de rumores contrarios a las orientaciones y posiciones adoptadas por los organismos del Partido.” (1997:13) Estos materiales de la URNG escritos en el marco de su transición parecen escritos por distintas personas y expresan un deseo de ampliación y al mismo tiempo temor a la democratización y al debate interno.

En cuanto a los aspectos ideológicos, en los que se empezaron a presentar diferencias se optó por evadir las definiciones doctrinarias y proponer más bien un paulatino proceso para el establecimiento de la dirección ideológica del partido: “¿Quiere esto decir que debemos aparecer amparados por un código ideológico predeterminado y esquemático? No; de ninguna manera. La idea de la elaboración del cuerpo ideológico en la medida en que se va ejercitando la práctica de la constitución del partido, se funda en la conclusión conceptual a que hemos llegado, de que una elaboración sistemática a priori de la ideología de un partido, conduce como lo ha demostrado la práctica histórica reciente, a un esquematismo inflexible y muy poco receptor de la dialéctica de la historia y de la vida.” (URNG; 1997:11) De manera unitaria se obvió para postergar la discusión ideológica que en la práctica se tradujo en la imposición de la renuncia al socialismo a pesar de que la mayoría de las organizaciones que integraban URNG provenían de esta matriz de pensamiento político y buena parte de sus miembros fueron formados en dicha tradición¹¹⁶.

Respecto a las tareas a impulsar, en un primer momento se estableció que “La URNG puede y debe jugar un papel determinante en la concertación de un proyecto nacional alternativo a las variantes neoliberales, que produzca un país verdaderamente moderno, con desarrollo económico, sostenible y sustentable, una democracia plena con equidad social, de unidad nacional de los pueblos que lo conforman, que sea capaz de insertarse en la globalización económica mundial sin perder su identidad, su autonomía y su capacidad de ser sujeto en esta etapa histórica, y no sencillamente objeto pasivo, sumiso, fuente de la extracción de la riqueza de los nuevos poderes económicos, relegando su destino a la pobreza, la miseria y el atraso.” (URNG; 1997:7) Para lo que se postulaba un partido “...abierto a las justas e inmediatas necesidades y demandas de los pueblos que conforman la unidad nacional, a las luchas y reivindicaciones obreras, campesinas y rurales, de los sectores medios, urbanos, estudiantiles, profesionales, empleados del estado, de los productores, empresarios e industriales que propugnan una Guatemala de progreso y a los patriotas de toda proveniencia, siempre que acepten las normas y principios del partido.” (1997:16)

Como se verá en el apartado siguiente, muchas de las indefiniciones al interior de la URNG contribuyeron a que, al exterior no pudiera definir una posición política concreta y ubicarse como una fuerza de oposición y que a lo interno se creará el ambiente para que las disputas por el control del partido no tuvieran un sólido basamento político e ideológico.

En el caso del FMLN, a principios de 1992, de acuerdo con Oscar Miranda, miembro de dirección se estableció el consenso en torno a la necesidad de construir “... la más amplia alianza de fuerzas sociales y políticas hasta formar un espectro que vaya desde la izquierda revolucionaria hasta la democracia cristiana, incluyendo a otros sectores que también existen. Una gama lo más amplia posible.” Esto requería mantener la unidad del frente para “... pasar de ahí a la unidad popular y después a la unidad nacional. Se trata de conformar una unidad de oposición, pero también es una unidad de proposición, porque en los acuerdos tenemos una auténtica plataforma política y tenemos banderas.” (Revista envío No. 132 enero 1992)

A pesar de existir este “consenso” inicial sobre la necesidad de preservar y ampliar la unidad, al momento de decidir su estructura orgánica las direcciones de las organizaciones optaron por mantener al Frente como un partido compuesto por cinco organizaciones que continuarían operando de manera autónoma, con su propia identidad, dirigentes y procedimientos internos. Esto provocó problemas que iban desde la definición de las candidaturas (cuál sería el criterio para definir cuotas por organización) hasta el manejo de la política partidaria (cómo definiría el Frente sus posiciones políticas) pasando por el tema financiero (si cada estructura mantenía sus propias estructuras financieras cómo se pagarían los gastos de campaña electoral).

Adicional a esto, retrospectivamente, el ex secretario general del PCS y ex miembro de la comandancia general del FMLN señaló la necesidad de evaluar las implicaciones políticas de la apertura del Frente a la participación de bases del partido demócrata cristiana que, a pesar de provenir de sectores populares eran portadores de una cultura política construida a partir de su participación en dicho partido. Además, se incorporaron también grupos provenientes del PCN que incluyeron ex militares y ex patrulleros. El problema para Handal no fue la apertura en si misma, sino que la misma no estuvo acompañada de un esfuerzo partidario de formación política e ideológica que permitiera el desarrollo de una identidad y cultura política revolucionaria, sino que se introdujeron en el frente prácticas políticas tradicionales. (2004:4)

Después de la primera crisis interna del FMLN, la salida del ERP y de la RN, la Convención Nacional (Congreso) de 1995 decidió disolver las organizaciones, aunque autorizó la existencia de tendencias al interior del partido. En esta dirección se avanza aún más en 1997, cuando se prohibió la existencia de estructuras paralelas al interior del partido y desaparecieron las tendencias. “Sin embargo, la realidad fue más compleja, pues la eliminación de las tendencias no se concretó, y si bien las organizaciones originales tendieron a desaparecer, la cuestión de las tendencias más bien mostró nuevas erupciones; la reforma estatutaria de 1997 fue retirada del TSE, por las autoridades del partido y nunca se convirtió en ley interna de este. La existencia de tendencias al interior del FMLN era tan real que en la misma convención que las suprimió, cuando llegó el momento de elegir autoridades, se produjo un fuerte enfrentamiento entre la corriente renovadora y la ortodoxa; sin embargo el hecho que ambas corrientes estaban lideradas por miembros de la misma organización histórica (las FPL) fue una clara demostración que las viejas estructuras de las 5 organizaciones históricas eran ya parte de la historia de la izquierda y que otro tipo de divisiones era lo que estaba agrupando y concitando legitimidades al interior de la organización.” (Zamora; 2003:79)

El otro gran problema enfrentado por el FMLN ha sido el de la distribución del poder, en particular de cargos al interior del partido así como para responsabilidades de elección popular. Para ello se avanzó del sistema de cuotas al de distribución proporcional, hasta que en el año 2000 se acordó la realización de elecciones para la designación de dirigentes y candidatos. Como lo señala Zamora: “Pero el cambio más radical se introduce en la XIII convención nacional ordinaria del 17 de diciembre del año 2000, cuando se aprobaron las reglas y los organismos para desarrollar elecciones primarias como forma de escoger a sus autoridades a nivel local, departamental y nacional, incluyendo al Coordinado Nacional, así como los cargos de elección popular. De esta manera el FMLN rompía con la tradición del centralismo democrático y adoptaba una forma radicalmente distinta de generar la distribución del poder al interior del partido.” (Zamora; 2003:82)

La decisión de someter a elecciones internas tanto los cargos de dirección partidaria en los diversos niveles y las postulaciones para elección popular constituye un avance importante para la democracia interna del partido. A pesar del establecimiento de estos procedimientos siguen persistiendo los señalamientos de ser un partido antidemocrático y dogmático. Frente a esto, la problemática que se plantea corresponde a la de la profundización de la democracia interna y la posibilidad y necesidad de construir mayorías internas sin que esto se considere “mayoriteo”¹¹⁷.

En lo ideológico, el Frente pasó de una indefinición inicial a asumirse como una fuerza política socialista. En el momento de su inscripción como partido político el Frente se definió con base a tres características: pluralismo, democracia y revolucionario. “En la Declaración de principios y objetivos, el contenido ideológico que allí plasmó estaba más cerca del lenguaje social cristiano o social demócrata que del marxista leninista. Efectivamente, en ese documento el FMLN se define por el ‘humanismo Revolucionario’ que asume a la persona humana como ‘el centro de nuestra actividad’ y se propone como meta ‘la humanización profunda de las relaciones en la sociedad, de sus sistema económico, social y político...’, por lo que se adhiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos.” (Zamora; 2003:65)

Siguiendo a Zamora, “... no es sino hasta 1995 que aparece la referencia al socialismo en los textos oficiales del partido. Una resolución del Consejo Nacional, adiciona una nueva característica fundamental a las tres señaladas (arriba) (...) quedando la definición ideológica del partido compuesta por 4 elementos: pluralismo, democracia, revolución y socialismo.” (Zamora; 2004:66)

En la convención Nacional de diciembre 1997 se “... completó la tarea, incorporando a los estatutos del partido la caracterización socialista en el artículo primero de los mismos; al mismo tiempo que reformó la Declaración de Principios y Objetivos, añadiendo un octavo: “OCHO. Luchar por construir un régimen económico-social de carácter socialista. Orientar la lucha del partido en procura de transformaciones políticas, económicas sociales y culturales que garanticen en el largo plazo, la consecución de un sistema de convivencia social basado en los postulados esenciales de libertad, justicia, humanismo, solidaridad, igualdad de género, equidad económica y participación democrática, que se oriente y desarrolle en el sentido de superar la explotación y marginación de la mayoría de seres humanos por una minoría de ellos y/o del estado o del mercado sobre el conjunto de la sociedad. Todo esto en base a nuestra propia experiencia y asimilando crítica y creadoramente el pensamiento humanista y socialista universal.” (Zamora; 2003:67)

Esta última definición desencadenó diferencias al interior del frente, pues mientras para algunos se trataba de una declaración de principios innecesaria que podía generar rechazo en la población, para otros representó una vuelta a los orígenes y a la identidad de esta organización revolucionaria. Este debate no es menor en tanto que estableció las bases de los alineamientos y realineamientos que definirían el devenir del FMLN en torno a las posiciones socialistas-revolucionarias y las posiciones reformistas que en diversos momentos intentaron acercar al Frente a la Internacional Socialista IS.

La reinscripción

Para iniciar este apartado la primera reflexión que debe hacerse consiste en pensar la dificultad para captar y describir la enorme complejidad política, económica, social, cultural y sobre todo humana que implican este tipo de procesos. El problema de la reinserción de excombatientes insurgentes se basa en la incorporación a la vida social de un contingente de hombres y mujeres que optaron por arriesgar y sacrificar los mejores años de su vida para transformar una sociedad que consideraban injusta y a la que debieron regresar –en muchos casos- en condiciones aún más adversas.

Parte de la complejidad de este proceso estuvo dada por la ambigüedad en la que se encontraron las fuerzas guerrilleras después de la firma de la paz. No eran un ejército revolucionario victorioso que como tal podían convertirse en “el” ejército nacional; tampoco constituían guerrillas “derrotadas” que pedían perdón por los “crímenes” cometidos¹¹⁸. Se trataba de luchadores sociales que, ahora desarmados, tenían que afrontar la tarea de continuar con la acción revolucionaria para transformar al sistema, con reglas que no habían contribuido a crear. Pero la continuidad de su participación colectiva estaba mediada por su inserción económica y social en un medio en el que continuaba prevaleciendo la pobreza y la desigualdad.

Guatemala: el inicio de los problemas

La inserción de los combatientes y miembros de la URNG se dio a partir de lo establecido en el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la legalidad, suscrito entre el gobierno y la guerrilla en la etapa final de negociación. Las condiciones para la inserción de los miembros de la URNG fue objeto de una negociación, en la que obviamente las aspiraciones de los insurgentes no se vieron reflejadas ya que, de acuerdo a varios miembros de las direcciones de las organizaciones entrevistados, la debilidad de la URNG en la mesa de negociaciones era mucho mayor debido al llamado escándalo Novela.

Después de que la URNG en su conjunto acordó de manera unilateral el cese de operaciones ofensivas y detener el cobro del llamado “impuesto de guerra”, un comando de la ORPA secuestró a la señora Novela (matriarca de una de las familias burguesas más importantes del país, monopolizadores de la producción y comercio del cemento). Esta operación fue realizada sin el conocimiento del resto de las organizaciones guerrilleras ni se informó a la comandancia general de la URNG. En la segunda quincena de octubre de 1996, cuando ya estaba programada la firma de la paz para diciembre de ese año, un miembro de la dirección de ORPA y otro de sus cuadros fueron capturados por el ejército cuando negociaban el pago del rescate. Sin conocer la identidad de los secuestradores, uno de ellos fue asesinado (probablemente a causa de las torturas) y el otro se identificó como comandante guerrillero y procedió a negociar su propia liberación a cambio de la secuestrada¹¹⁹.

A partir de esto, el gobierno de Guatemala decidió de manera unilateral suspender las negociaciones hasta que se crearan las condiciones adecuadas para su reanudación. Estas condiciones implicaron la salida del comandante Gaspar Ilom (Rodrigo Asturias) de la mesa de negociaciones y un serio debilitamiento de las posiciones de la URNG derivadas de las consecuencias que en términos de credibilidad tuvo la violación del cese de actividades ofensivas y de carácter ético político implícitas en el secuestro de una anciana.

A lo interno de la URNG, este secuestro tuvo también graves consecuencias en tanto que las direcciones nacionales de las organizaciones sólo fueron informadas del hecho y se les prohibió pedir explicaciones¹²⁰. La Comandancia General de la URNG asumió la defensa del comandante en Jefe de la ORPA y este a su vez se atribuyó la “responsabilidad política” del hecho, aunque afirmó no tener conocimiento del mismo. Igualmente, el asesinato de uno de los miembros del comando se convirtió en el primer semestre de 1997 en un nuevo motivo de conflictos: el gobierno no reconoció la captura y muerte del insurgente, mientras que la URNG pidió de manera moderada la aclaración de su desaparición.

En esas condiciones la URNG negoció e inició su proceso de inserción a la legalidad¹²¹.

Las peculiaridades del conflicto guatemalteco se manifestaron también en el proceso de incorporación. Tratándose de un conflicto que duró más de tres décadas y en el que dos de esas organizaciones (el PGT y las FAR) procedían de principios de la década de 1960. A lo largo de esos treinta años fueron miles las personas que se involucraron en las cuatro organizaciones guerrilleras. Por diversas causas y en diferentes momentos, muchos de ellos se retiraron, incluso poco tiempo antes de la firma de la paz.

En la negociación del acuerdo, probablemente derivado de la premura y el contexto adverso en el que esta se desarrolló, los negociadores de la insurgencia no contemplaron o no pudieron dejar establecida esta realidad, de manera que en el acuerdo sólo quedaron contemplados aquellos miembros de la insurgencia activos – en estructuras políticas y militares – que participaran en la desmovilización. Esto provocó que las bases de apoyo históricas quedaran fuera del proceso, un olvido imperdonable hacia la población que en los años más duros de la contrainsurgencia continuó apoyando a la guerrilla. Además, en el proceso de identificación de militantes existieron muchos errores de manera que, como la propia instancia encargada por la insurgencia de la desmovilización reconoció que “no todos los que entraron en el programa deberían haber estado. Hubo otros y otras que por razones ajenas a su voluntad y de las organizaciones a las que pertenecieron no lo estuvieron.” (Fundación Guillermo Toriello FGT; 2003)

Otro aspecto que incidió en el resultado global de la incorporación a la legalidad correspondió al tema de las expectativas¹²². A partir de la declaración del cese de operaciones ofensivas en los frentes guerrilleros se realizó un esfuerzo de información sobre el proceso de incorporación. Este trabajo se realizó previo a la suscripción de los acuerdos, por lo que lo planteado no correspondió estrictamente con lo suscrito. El resultado de esto fue el desarrollo de elevadas expectativas por parte de los excombatientes, que no se tradujeron en todos los casos en condiciones de vida dignas.

La reinscripción de la mayoría de los combatientes fue a localidades pobres y excluidas, volvieron a la situación a la que habían salido: los pobres a la pobreza, los que venían de las capas medias a las capas medias, etcétera. Como lo señaló un ex comandante guerrillero: “Entonces los que se desmovilizaron llegaron a un mundo que no tenían oportunidades, no tenían trabajo, no tenían tierra y todos aquellos bonitos proyectos nunca se cumplieron. Algunas fincas se compraron, pero no las compró el gobierno, esa fue una negociación que hicieron las organizaciones guerrilleras a través del gobierno. O sea, que están exactamente igual de cómo cuando comenzó la guerra. Tienen tierras que no generan mayor producción, no han terminado de

pagar esas tierras, los intereses de la tierra crecen sin tener ellos capacidad de pago, están en la misma posición de antes pero sin armas. Y es el caso nuestro que nos aventamos tres décadas en la montaña, ahora que soy civil ¿qué hago? Pues yo tengo que trabajar para poder comer y mantener a mi familia, voy presento mi currículum y me dicen: usted sólo sabe hacer la guerra. Nosotros no teníamos la oportunidad de insertarnos por completo en la sociedad sino teníamos un cartón universitario (...) nosotros cumplimos los que no cumplieron fueron ellos, el gobierno.”

En el mismo sentido, un ex miembro de la Comandancia General de la URNG apuntó: “Yo siento que esto provocó en la realidad de la incorporación una situación distinta el de una realidad que no era la apetecida para los combatientes, que en la fase de concentración en los campamentos tuvieron que ir asimilando aceleradamente, entonces, ya empezaron las opciones. Las orientaciones vocacionales teóricas fueron muy superficiales, la información también muy poca que estaba encaminada más bien a un tipo de proyectos que ofrecían, que eran proyectos de tierra a través de ingresar a cultivar la tierra ó el proyecto que fue más grande que fue el micro empresario, que no llega ni a micro. Esa invención de hacer un empresario con un capital de mil dólares para poner una tienda suponiendo que ese va a ser estilo de vida y de supervivencia, eso creo yo que distorsionó mucho porque no se logró resolver con esos proyectos el problema de los ingresos de los combatientes. Entonces esto generó una situación de una gran incertidumbre, a partir de que se ejecutan esos proyectos a los tres meses esos proyectos comienzan a tronar (quebrar). Con los de la tierra siete años después todavía no se llegan a resolver, no han logrado arreglar la ayuda técnica, no han resuelto los problemas crediticios y encima tienen pendiente una deuda que les quedo de la tierra que les dieron, donde estas tierras eran o son improductivas o fincas en estado de abandono que ponerlas a producir y poderlas llevar adelante sino tenían estos otros componentes era muy difícil.”

Los resultados económicos de la inserción no fueron los esperados: “Después de siete años, viendo los resultados de las inversiones productivas, salvo un porcentaje reducido entre el 20 y el 30%, éstas no han tenido el éxito esperado. (...) Actualmente están a la deriva gran cantidad de compañeros en el campo, ganando, cuando encuentran trabajo, menos del salario mínimo legal y emigrando a USA o a México. En definitiva, expulsados dolorosamente por el país donde soñaban incorporarse en dignidad y seguridad.” (FGT; 2003:6)

De acuerdo con el presidente de la FGT: “Donde creo yo que entro en crisis (la incorporación) fue en la primera fase, que es la incorporación definitiva donde el desmovilizado tenía que ser parte activa de un ciudadano, ¿pero por qué?, no por la voluntad de los desmovilizados sino que se dice que la estrategia es participar en los programas y proyectos del gobierno de desarrollo, de seguridad y resulta que nos incorporamos a una situación donde no hay seguridad o poca inversión del gobierno; el entorno no favoreció la incorporación, el entorno era de fuerzas nacionales y de política nacional, ahí esta la clave de donde se comienza a quebrar y a debilitar la incorporación. Cuando el gobierno tiene que asumir responsabilidad tiene que crearles condiciones a los combatientes, también a los retornados, no solo para decir aquí están en este campamento, sino incentivar procesos de desarrollo, nunca una estrategia de desarrollo local (...) ahí es donde radica la crisis fundamental de sostenibilidad y el compromiso del Estado guatemalteco con ese acuerdo. URNG cumplió los desmovilizados cumplieron, la propia comunidad internacional cumplió, entonces, ahí falló mucho el entorno que se incorporaran porque no reunía las condiciones y no habían sido transformadas, ¿por qué?, porque no se cumplieron otros acuerdos como el socioeconómico que lleva a la equidad.”

En el caso de las mujeres, la situación fue aún peor, ya que de acuerdo con la Fundación Toriello “Ha habido una involución en la participación política y pública, a pesar de que se han ganado liderazgo después de la firma de la paz. Ellas lo resumen de esta manera, ‘no tenemos ni dinero ni tiempo para nada’.” (FGT2003:7)

Como parte de estos problemas, en la administración e implementación del proceso de incorporación se empezaron a expresar las diferencias y contradicciones que atravesaba la URNG: el intento de las diferentes organizaciones por ocupar la mayor cantidad de espacios (y plazas de trabajo posibles); las tensiones históricas entre los llamados cuadros políticos frente a los mandos militares y combatientes; las diferencias entre los “técnicos” y los “políticos”; etcétera. Además del contexto general adverso en el que se realizó este proceso, las personas nombradas por la Comandancia General de la URNG para dirigir este proceso cometieron errores de todo tipo cuyos costos fueron pagados por los ex combatientes.

Obsesionada con cumplir al pie de la letra el proceso de desmovilización de sus unidades militares de acuerdo con lo establecido en los acuerdos, la URNG no se tomó el tiempo para garantizar las mejores condiciones para la incorporación de sus miembros; y, cuando los problemas empezaron a manifestarse, la primera reacción de los responsables de este proceso fue evadirlos, para posteriormente responsabilizar al gobierno sin promover acciones específicas de presión¹²³.

El énfasis que las instituciones cooperantes pusieron en el desarrollo de proyectos individuales – que con limitado financiamiento y sin recursos adicionales fracasaron rápidamente – se tradujo en general en el establecimiento de una suerte de consigna “sálvese quién pueda”, que terminó en la búsqueda individual de la subsistencia familiar y el abandono de muchos combatientes y mandos del proyecto político al que habían entregado los mejores años de su vida, al grado que una buena cantidad de ex oficiales y combatientes emigró a los Estados Unidos en busca de condiciones dignas de vida.

Adicional a lo anterior, la URNG encaraba su inserción político-partidario en una situación de conflictividad política interna (el comandante en jefe de la ORPA no había podido ingresar siquiera al país a raíz del secuestro Novela) y debilidad externa, en tanto que no podía posicionarse políticamente. De acuerdo con uno de los miembros de la comandancia general, “Iniciamos el proceso de desmovilización de nuestras fuerzas militares y la construcción del Partido, con nuestras fuerzas prácticamente desarticuladas, con una Dirección Nacional recientemente instalada, sin un grado de consolidación mayor, que no podía dirigir las fuerzas del partido porque estas no estaban integradas, porque esas fuerzas se encontraban dispersas y en medio de enormes problemas producto de la desmovilización y la reinserción.”

El Salvador: la primera batalla de la paz

En el caso salvadoreño, se estableció de manera general el fin de la estructura militar del FMLN y la reincorporación de sus integrantes dentro de un marco de plena legalidad a la vida civil, política e institucional del país. La desmovilización de las fuerzas militares del FMLN se condicionó al cumplimiento de ciertos compromisos establecidos en los acuerdos de paz y la creación de condiciones para la reinserción de los ex combatientes.

Desde la perspectiva del FMLN, los seis mil ochocientos combatientes del frente quedarían "... con algo en las manos, ubicados, reconocidos. Todas nuestras estructuras y nuestros hombres se enrumbarán hacia tres caminos. El grueso, que son los combatientes de origen campesino, irá a la producción agrícola en las tierras que nos han quedado. Un porcentaje a las estructuras de la Policía Nacional Civil y otro a la organización del partido político en el que nos vamos a transformar." La inserción por la vía campesina partía de que las tierras en las zonas del conflicto pasarían a manos de los ex combatientes o sus familias. El Frente buscó organizar formas de producción que promuevan la organización, la participación, la productividad y la justa distribución de las riquezas. Los vamos a convertir en puntales económicos y políticos." (Entrevista con Oscar Miranda; Revista Envío No. 123 enero de 1992)

Durante el período de desmovilización (casi todo 1992) el FMLN moduló el proceso de desmovilización de sus fuerzas de acuerdo con el grado de cumplimiento de los compromisos acordados. El gobierno adujo que los retrasos se debían a que la cooperación internacional no fluía como se había ofrecido inicialmente.

Para la inserción de los ex combatientes se planteaba que estos "... tendrán acceso a la tierra, a la nueva PNC o a becas de formación profesional y se negociará la creación de fondos de subsistencia transitoria, planes de vivienda y pensiones para los veteranos del FMLN"; sin embargo, para mediados del año, el gobierno sólo había ofrecido un plan básico que incluía "transferencia de tierras, créditos y programas vocacionales y se comprometió a tener para el 15 de julio un programa más amplio que incluya becas para estudios, siempre y cuando comience a llegar antes de esa fecha la ayuda que se comprometió a otorgar a El Salvador la comunidad internacional." (Inforpress; 9 de julio 1992:2)

Dentro de la visión gubernamental, el plan nacional de reconstrucción contempló el programa de reinserción y apoyo para ex combatientes tanto del FMLN como de las Fuerzas Armadas. Con el apoyo del gobierno alemán se decidió la ejecución de un programa de vivienda; mejoramiento y ampliación de sistemas de agua y alcantarillado en las zonas afectadas por el conflicto (que fueron las zonas en las que se reinsertaron los excombatientes); y, programa de becas, integración y fomento a la educación para excombatientes de ambos bandos. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos (de acuerdo con un compromiso adquirido con la ONU) apoyó programas de asistencia humanitaria para la desmovilización del FMLN.

El atraso en el inicio de los programas provocó que algunos desmovilizados regresaran a los campamentos donde estaban concentradas las fuerzas insurgentes debido a que no encontraron condiciones óptimas para su reinserción.

El principal programa de la reinserción fue el de transferencia de tierras, que incluyó excombatientes y bases del Frente, ex miembros de las fuerzas armadas y otros beneficiarios. De un universo total de 36 500 beneficiarios, 25 000 correspondieron al FMLN y 7500 a las fuerzas armadas.

Aunque inicialmente el programa se concibió para transferir tierras mediante mecanismos de mercado, a partir de la movilización y la negociación se logró la cancelación total de la deuda agraria y la entrega de títulos de propiedad a la mayoría de los beneficiarios.

De acuerdo con Inforpress "... la mayoría de las tierras entregadas se concentraron en cinco departamentos (Cuscatlán, Chalatenango, San Miguel, San Vicente y Usulután), en donde se encuentran aproximadamente tres cuartos de la superficie transferida e igual proporción de propietarios. Al trasladarse los beneficiarios junto a sus familias (en su mayoría numerosas) se ha provocado una mayor presión sobre las parcelas, reproduciéndose el esquema minifundista en estas áreas.) (6 de febrero de 1997:2)

Un estudio realizado por Hernández y Dada para FUNDE sobre los programas de reinserción rural concluyó que la reinserción "agropecuaria no es sostenible, ni en términos económicos, sociales o medioambientales." Entre las sugerencias se destacó el diseño de una estrategia de reinserción que incluyera "... crédito, asistencia técnica y capacitación en función de una inserción sostenible, comercialización, acceso a almacenamiento y agroindustrialización, formas de producción agrícola sostenible, etc.; y la reorientación de la política macroeconómica en función de crear condiciones favorables para el sector agropecuario en general y para los beneficiarios de la inserción agropecuaria en particular." (1995:18)

Al igual que en el caso guatemalteco, los programas que se orientaron a la microempresa fracasaron tanto por la quiebra de estas como por las deudas impagables que se contrajeron. De esto se responsabiliza a las fallas en los programas de asistencia técnica, la inexistencia de una proyección sostenible y eficiente de los programas de microempresas, la discontinuidad de la política financiera; la limitada cobertura del programa de vivienda; y, la falta de apoyo a programas de mediano y largo plazo.

Los beneficiarios del programa de transferencia de tierras enfrentaron una serie de problemas que incluyeron la restricción de recursos financieros, la deficiente capacitación; la desintegración y atraso del crédito y la asistencia técnica; la inadecuada organización para la producción; y dificultades para diversificar y desarrollar la producción. (Fundación 16 de enero; 1996) A raíz de esto sólo el 4% de los 4567 excombatientes beneficiados de tierra estuvieron en condiciones de pagar sus créditos.

En lo referente al apoyo a los familiares de los muertos en combate así como los discapacitados, los resultados tampoco fueron los esperados en tanto que no se dio apoyo continuo para el desarrollo de estos¹²⁴.

Para los miembros del FMLN que no fueron beneficiados por el programa de transferencia de tierras se crearon programas de capacitación y créditos para emprender pequeñas empresas; becas para apoyar la nivelación de estudios y programas específicos dirigidos a apoyar la reinserción de los mandos políticos y militares del Frente.

Retrospectivamente los responsables de la reinserción por parte del Frente encontraron que "... los programas y proyectos de que se hablaba en los Acuerdos de Paz parecían como meras formulaciones carentes de contenido. No se hablaba de la cantidad y calidad de las tierras que serían transferidas ni del número de excombatientes y tenedores beneficiarios, no se especificaban los montos de los créditos para crear las empresas, de las viviendas y sus características, de los tipos de becas, etc."

A cuatro años de la desmovilización la Fundación 16 de enero señalaba: “Los objetivos iniciales de la reinserción todavía no se han logrado. Para el FMLN la inserción significaba darles empleos permanentes a los excombatientes y que éstos tuvieran rentabilidad en sus actividades económicas. Para el gobierno, los proyectos de mediano plazo debían posibilitar su inserción productiva permanente. En este momento no hay empleo seguros, la rentabilidad es casi nula y la permanencia de las actividades no está garantizada. Los propios beneficiarios de los distintos programas temen que en el futuro sus empresas estén en peores condiciones que hoy.” (1996:134)

A partir de esta situación se dieron conflictos sostenidos entre las asociaciones de desmovilizados (principalmente de ex miembros del ejército) y el gobierno por el incumplimiento de compromisos. Por su parte, los desmovilizados del Frente se agruparon en la Asociación de veteranos que ha trabajado tanto en temas económico – productivos como en plantear posiciones políticas al interior del partido político.

Las trayectorias de la transición

Para concluir este capítulo se propone discutir la transición a la democracia en los países objeto de estudio considerando el papel desempeñado en estos procesos por las insurgencias armadas. Como lo han señalado algunos estudios sobre este tema, esta transición no fue, como en las experiencias del cono sur una vuelta a la democracia después de un interludio autoritario. Se trató y hasta la fecha se trata de la construcción de un orden democrático que es nuevo respecto a la tradición autoritaria y excluyente que caracterizó la práctica política en estos países.

Ahora bien, no sólo se trató de la construcción de un sistema democrático sobre las bases de una larga tradición autoritaria y excluyente, sino que el impulso o la intención de la democratización fue principalmente derrotar a las insurgencias, a través de enfrentarlas no a gobiernos militares sino a gobiernos electos con cierta legitimidad nacional e internacional. Aunque los alcances y la profundidad de estas democracias fueran limitados y se dieran en el marco de desigualdades y asimetrías estructurales – que se discutirán en el capítulo siguiente -, la realización de elecciones organizadas por órganos independientes y que movilizaban la participación de ciudadanos electores hacía pensar que estos países habían efectivamente iniciado esta transición.

Sin embargo, y a diferencia también de los países de América del Sur y de algunos países de Europa del Este, en el inicio de estas transiciones a la democracia el “demos” estuvo ausente. No se encuentran en este período (1984-1985) movilizaciones masivas exigiendo democracia política como se vieron en el Chile gobernado por Pinochet¹²⁵, tampoco existía en ese momento una sociedad civil organizada como la polaca o la checoslovaca capaz de enfrentarse a los regímenes totalitarios con una agenda democrática. Las organizaciones sociales y sus liderazgos habían sido barridos por la contra-insurgencia.

En el caso guatemalteco, el ejército, en un escenario vacío – en tanto que el resto de actores sociales y políticos estaba fuera de escena – decidió iniciar su apertura democrática como complemento a su estrategia contra-insurgente, contando para eso con el aval o complicidad – según el momento en que se incorporaron a este proyecto – de los partidos políticos que habían colaborado en la legitimación de los gobiernos militares; los nuevos partidos “permitidos”; y los

empresarios. Esto, en el marco de la política exterior norteamericana. Se estableció así no sólo una “pacto de dominación” sino también un “pacto de exclusión” que pretendió mantener el estado de cosas introduciendo algunos elementos democráticos en el juego político entre los actores “permitidos”.

En El Salvador, los componentes de la ecuación son distintos porque desde principios de la década de 1980 la Democracia Cristiana y particularmente su dirigente José Napoleón Duarte, la Fuerza Armada y el Gobierno de los Estados Unidos impulsaron un conjunto de reformas económicas que tuvieron por objeto y parcialmente lograr minar el poder de la oligarquía agraria. Adicionalmente, la convocatoria a una constituyente y la posterior entrega del poder a un presidente electo fueron intentos de crear las condiciones para una apertura política. Sin embargo, nuevamente los actores políticos y sociales representantes de las “mayorías populares” –en el sentido utilizado por Ellacuría – estuvieron ausentes porque fueron excluidos o porque la represión los había obligado a sumarse a la lucha armada como condición de sobrevivencia física y política.

Se delinearon así las trayectorias de las transiciones desde arriba. Sin embargo, estos pactos de dominación y exclusión no lograron – en el caso salvadoreño – contener el desafío insurgente ni – en el caso guatemalteco – crear las condiciones para la estabilidad política. Y es que la exclusión de expresiones políticas importantes no permitió el establecimiento de pactos políticos fundacionales que sirvieran de base a un orden democrático que fuera más allá de las elites.

En El Salvador, la conducción moderada del proceso a cargo de la Democracia Cristiana fracasó en derrotar a la guerrilla y neutralizar a las posiciones de ultraderecha. Por su parte, los grupos económicos más importantes – imbuidos de anticomunismo - lograron articular alrededor de ARENA un proyecto nacional –hegemónico dentro de las clases dominantes – para quienes era prioritaria la conclusión de la guerra para re-dirigir la inserción del Salvador en la economía mundial y establecer un nuevo modelo económico.

En el caso guatemalteco los grupos dominantes no lograron articular un proyecto nacional que fuera capaz siquiera de aglutinarlos, mucho menos de lograr ampliar su base social. Los gobiernos de la Democracia Cristiana DC y el Movimientos de Acción Solidaria MAS no contaron con el apoyo de las elites, de manera que el primero tuvo que apoyarse en el sector “institucionalista” del ejército para concluir su mandato mientras que el segundo fue sustituido con la intervención de las fuerzas armadas antes de concluir su período.

A partir de dicha fractura se configuraron dos proyectos desde arriba, el conformado por los capitales tradicionales – oligárquicos – que buscaban su reconversión y nuevas formas de inserción en la economía mundial; y, los llamados capitales emergentes – o nuevos – algunos de los cuales eran de origen ilícito y que disputaban el poder del Estado para utilizarlo como medio de acumulación. Políticamente, el primero se expresó en el Partido de Avanzada Nacional PAN, liderado por Alvaro Arzú Irigoyen – oligarca tradicional perteneciente a la aristocracia de origen colonial – y el Frente Republicano Guatemalteco FRG encabezado por el general retirado Efraín Ríos Montt – ex jefe de estado responsabilizado de actos de genocidio durante las campañas contrainsurgentes de principios de 1982 -.

La trayectoria de la transición democrática desde abajo¹²⁶ tiene importantes diferencias entre ambos países. En El Salvador el FMLN unido durante la mayor parte de la década de los ochenta al FDR logró articular, hegemonizar y mantener un bloque popular – revolucionario que se contrapuso al proyecto oficial y que, sobre la base del poder militar obligó a la apertura del sistema político en las condiciones que el Frente consideró favorables para la continuación de su lucha. Como se indicó, la agenda de los revolucionarios se restringió a los temas de democratización y desmilitarización porque estimaron que su proyecto estaba en condiciones de derrotar electoralmente a la derecha. Con la inserción del FMLN se inició la transición a la democracia, transición inconclusa hasta que – como se decía en el México de antes del 2000 – se de la alternancia.

En Guatemala esta trayectoria democrática desde abajo tiene dos vertientes. Una, conformada por la URNG y las organizaciones a las que influía que desde fines de la década de 1980 y la primera mitad de la década siguiente fueron construyendo una fuerza política social importante, marginada y automarginada del sistema político electoral cuya agenda reivindicativa estaba articulada al programa revolucionario radical, por lo que la democracia liberal procedimental no era parte de su agenda. La otra vertiente estuvo conformado por la pléyade de organizaciones y movimientos sociales que surgieron de manera autónoma a se autonomizaron de la URNG y cuyas reivindicaciones y demandas – culturales, económicas, sociales, políticas y de diverso género - no pueden ser resultas y satisfechas por un Estado autoritario ni por un sistema político excluyente. Estas constituyeron de hecho un proyecto político democratizador – en el sentido utilizado por Dagnino para caracterizar el caso brasileño – no por la dimensión electoral de esta, sino en el sentido de ampliar – con mayor participación del demos – el pacto de 1985 en el que estos grupos no fueron incluidos.

En plena negociación, cuando la URNG define la imposibilidad de la revolución armada y enuncia la lucha por la “democracia plena, funcional y participativa con justicia social” como su planteamiento principal, estas vertientes confluyen para proponer una amplia agenda de reformas que fueron negociadas por la URNG y fijadas en los acuerdos de paz. Este proceso en su conjunto permitió la incorporación de varios de los sectores excluidos al sistema político – hoy negocian con el Estado y otros actores en múltiples espacios fuera del sistema de partidos- y el bosquejo de un pacto político y social que iba más allá de la Constitución vigente.

El cruce de las trayectorias democratizadoras desde arriba y desde abajo se dio con los acuerdos de paz, que pueden o no considerarse los momentos iniciales de la transición, pero de cualquier manera deben reconocerse como hitos importantes de este proceso, en el que las insurgencias jugaron un papel relevante. Sin embargo, el fin del ciclo de la confrontación armada coincidió con un período de cambio más abarcador que incluyó transformaciones radicales en el mundo y en estos países, de manera que, cuando se arribó a la democracia o se inició el camino sin retorno a la misma, esta ya no era lo que fue, y las fuerzas guerrilleras enfrentaron un escenario que ellos habían contribuido a crear y que les era adverso.

Revolucionarios en Tiempos de paz

El FMLN desde 1993 y la URNG desde 1997 se constituyeron en fuerzas políticas legales que se insertaron en sistemas políticos que, aunque en el caso salvadoreño realizó cambios importantes producto de la negociación, les son adversos. Se trata de sistemas democráticos en

los que quedan todavía muchas limitaciones por superar y que, en general, siguen reproduciendo de manera más sutil lógicas de exclusión que se expresan en limitaciones para la participación, la representación y la competencia política en condiciones justas.

Este período –desde una perspectiva internacional - se caracterizó por la consolidación de la ola neoliberal y la constitución del llamado momento unipolar en el que la hegemonía es ejercida por los Estados Unidos de América. Este entorno internacional, que durante los conflictos armados tuvo consecuencias determinantes parece no haber sido suficientemente valorada por las izquierdas centroamericanas. En los países en los que esta se ha convertido en opción de poder – Nicaragua y El Salvador – la intervención norteamericana en los procesos electorales se ha vuelto descarada, y su acción sigue respondiendo a la lógica de la guerra fría.

A pesar del predominio norteamericano en América Latina, desde los años finales del siglo XX en esta región se empezó a configurar una suerte de renacimiento de la izquierda a partir del arribo al poder – a partir de distintas experiencias políticas y organizativas – de partidos y coaliciones de partidos de izquierda. Se trata de procesos distintos que incluyen triunfos electorales después de un largo proceso de acumulación de fuerzas – como los casos del PT y el Frente Amplio en Brasil y Uruguay -; la irrupción de fuerzas de izquierda a partir de liderazgos carismáticos en contextos excepcionales – el caso de Hugo Chávez en Venezuela -; y, la articulación de movimientos sociales y partidos políticos – después de momentos insurreccionales - como en Bolivia. A pesar de las peculiaridades de cada uno de estos casos, el acceso al poder político del Estado ha pasado por procesos electorales, y los esfuerzos para la refundación de estos estados se ha dado en el marco de las democracias constitucionales¹²⁷.

Para las izquierdas revolucionarias centroamericanas este proceso tiene dos implicaciones relevantes. La primera, es la ratificación de que en las condiciones actuales la única posibilidad para que estas fuerzas políticas conquisten posiciones de gobierno que les permitan impulsar transformaciones está mediada por la disputa electoral. Si durante la lucha armada lo militar fue el factor determinante para modificar correlaciones de fuerzas y alcanzar objetivos revolucionarios, en la lucha democrática los resultados electorales son los que permiten acumular fuerzas y acceder a recursos.

Segundo, más allá de la caricatura que presentan los medios de comunicación hegemónicos sobre la revolución bolivariana, los alcances de iniciativas continentales como la Alternativa Bolivariana para la Américas son importantes para los pueblos de la región y los partidos de izquierda. Por lo que se conoce públicamente, hasta el momento el en Centroamérica tanto el FMLN como el FSLN han logrado importantes acuerdos con Venezuela para promover la comercialización de combustible y fertilizantes a bajo costo desde los gobiernos municipales bajo control de este partido. Asimismo, con Cuba se coordina la operación milagro, que ha permitido que miles de personas con escasos recursos puedan recibir gratuitamente sofisticados tratamientos oftalmológicos. Los impactos políticos a mediano y largo plazo de estas formas de solidaridad entre pueblos no pueden estimarse, aunque ya pueden observarse resultados positivos para estos partidos. En conclusión, aunque la dominación norteamericana en la región sigue siendo indiscutible, desde la lucha democrática las fuerzas de izquierda han logrado articular un desafío no confrontativo a esta potencia.

En los ámbitos nacionales, las sociedades en las que se insertaron las antiguas guerrillas han pasado por importantes mutaciones económicas, sociales y culturales. En lo económico, tanto en Guatemala como en El Salvador se asistió durante las últimas décadas del siglo XX a la crisis terminal del modelo agroexportador. Esto implicó cambios importantes que iban desde la composición del empleo – lo agrícola empezó a dejar de ser importante – hasta el cambio de las elites económicas: los oligarcas tradicionales, los señores de la tierra, han sido sustituidos por otro grupo de empresarios que, aunque de vocación oligárquica no asumían el ethos señorial de sus predecesores; además, la cada vez más importante presencia de corporaciones internacionales y la adquisición de empresas nacionales por estas ha provocado la transnacionalización de la elite en la que los decisores dejan de ser los “dueños” de las empresas que son sustituidos por los altos ejecutivos de estas.

En el caso salvadoreño, el cambio de modelo económico fue asumido por una nueva generación empresarial que no sólo se hizo cargo del control monopólico del sistema financiero – que sería vital en el futuro – sino a través de ARENA ha mantenido el control del ejecutivo durante más de 15 años, adoptando desde ahí medidas como la privatización y la dolarización de la economía. El nuevo modelo económico salvadoreño se basa en el desarrollo del sistema financiero y a partir de eso el comercio y los servicios, teniendo como soporte los cientos de millones de dólares que ingresan al país por remesas familiares enviadas por los salvadoreños que viven y trabajan en los Estados Unidos de América. De hecho, un elemento central del mismo es la exportación de trabajadores –muchos de ellos calificados – que constituyen la base de la economía.

Este tipo de desarrollo ha dado lugar a nuevos procesos sociales y culturales que se expresan en cambios importantes en la identidad y cultura salvadoreña, que tiene una fuerte influencia de la cultura “latino-estadunidense”, transformaciones en la estructura familiar, así como nuevos fenómenos de organización social que pueden rozar lo ilícito, como las pandillas juveniles conocidas como maras.

En Guatemala, el final de la República Cafetalera no parece haber abierto el camino hacia un modelo de desarrollo económico que se traduzca en mejores condiciones de vida para la población. Lo que se ha mantenido son las inercias del pasado, así como el surgimiento de determinados enclaves productivos como las maquiladoras, los productos llamados no tradicionales, y los servicios. Esto ha dado lugar al crecimiento del sector informal que absorbe a la mayoría de la población económicamente activa. Igualmente, se ha mantenido la pobreza en las zonas rurales y tiende a crecer la pobreza urbana, en un clima igualmente marcado por la violencia y la inseguridad.

Otro de los cambios más importantes para la sociedad guatemalteca ha sido la irrupción del Pueblo Maya como sujeto social y político que postula la necesidad de la refundación del Estado en todos sus niveles para responder a una realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe.

En este capítulo se discutirá el desempeño político y electoral de las antiguas insurgencias a partir de su inserción a la legalidad. Un primer problema a discutir es el de las democracias en las que estas organizaciones se insertaron. No se trató de democracias en el sentido estricto descrito por Dahl – por ejemplo -, sino de sistemas políticos caracterizados y definidos por profundas asimetrías de poder y por inercias en términos de racismo y exclusión. En este

contexto si no adverso por lo menos complejo, a partir de su inserción en la legalidad tanto el FMLN como la URNG enfrentaron procesos de división interna que concluyeron en el primer caso en sucesivas divisiones y en el segundo en una fractura. El desempeño político se analiza considerando los resultados electorales y sus implicaciones; y, analizando cuáles han sido las más importantes batallas políticas libradas por estos partidos en el período de paz.

Democracias Inconclusas

La inserción de las insurgencias en la legalidad se dio en el marco de complejas y heterogéneas transiciones a la democracia. En sentido estricto puede pensarse que las guerrillas convertidas en partidos políticos se introducen a sistemas que no son democráticos; estas fuerzas políticas se insertan en sistemas políticos en proceso de cambio siendo actores – antes y después – del mismo. En ese sentido, hablar de democracias en estos países se convierte en una hipótesis a demostrar, ya que es a partir de la incorporación de la izquierda revolucionaria que se empieza a configurar la posibilidad de democratizar los sistemas políticos.

Desde esta perspectiva en este apartado se revisarán dos problemas que resultan centrales para entender la inserción de las insurgencias en la lucha política legal. El primero es una reflexión no tanto sobre la calidad sino sobre el tipo de democracia que se ha construido en estos países. El segundo, tiene que ver con las propias limitaciones que las insurgencias tuvieron para incorporarse a la lógica democrática procedimental.

Como se sabe, no existe una definición unívoca de democracia; y de hecho, como lo ha señalado Bobbio, a lo largo de la historia han existido diversas concepciones y visiones de este régimen político. En la actualidad, y en términos muy generales, las grandes teorías de la democracia pueden dividirse en aquellas que enfatizan el carácter procedimental y mínimo de la democracia frente a las que postulan su carácter sustantivo.

La visión mínima de la democracia hace énfasis en el régimen político y en el establecimiento de procedimientos que permitan elegir autoridades. La democracia y la política pueden concebirse como un problema de agregación de preferencias individuales que permiten elegir a quienes tomarán decisiones. Los problemas desde esta visión son de carácter técnico y tienen que ver con crear los mejores mecanismos para convertir votos en representantes. Desde esta visión, los problemas de la democracia pueden ser de participación, representación y competencia. La democracia es un medio para elegir autoridades.

Por su parte, desde la perspectiva sustantiva la democracia es una forma de organización social que implica no sólo la plena garantía de las libertades políticas, sino también de condiciones sociales que permitan la participación y el disfrute ciudadanos de estas mismas libertades. A diferencia de la concepción mínima, en las visiones sustantivas no existen indicadores precisos del desarrollo democrático; puede hablarse de grados que dependen de los pactos o acuerdos políticos de cada sociedad que se adecuan tanto a las demandas ciudadanas como con los niveles de desarrollo económico y tecnológico.

Utilizando cualquiera de las dos visiones para evaluar las democracias en los países objeto de reflexión, se encuentran carencias importantes que han marcado su desarrollo político. Siguiendo con la discusión teórica, el círculo virtuoso de la democracia estaría dado por la

enorme fuerza de la igualación política derivada del principio una persona un voto. Así, la igualdad política puede contribuir – y en muchas experiencias históricas ha ocurrido – a lograr cierta igualación social que a su vez refuerza las condiciones para el desarrollo democrático. Un problema que queda presente en esta perspectiva corresponde a cuáles son las (pre) condiciones sociales necesarias para que la igualación política tenga efectos; o si, en cualquier circunstancia la igualación política se puede producir estos resultados virtuosos¹²⁸.

El problema de las democracias de Guatemala y El Salvador¹²⁹ es que se desarrollan en contextos de alta desigualdad social. Históricamente estas sociedades se han caracterizado por la pobreza y la desigualdad. Estos rasgos societales han impactado todas las esferas de praxis social y de manera particular la política, que se ha convertido en el ámbito más importante de producción y reproducción de la pobreza y la desigualdad. En el sistema político se expresan las asimetrías de poder entre actores políticos e individuos, de manera que la política se ha convertido en un ámbito de acumulación – a partir de la utilización del Estado se han constituido los más importantes grupos económicos desde la oligarquía cafetalera hasta los capitales financieros – y de exclusión de ciudadanos y grupos políticos.

Se postula entonces que en situaciones de alta desigualdad social se genera una suerte de distorsión estructural que impacta en la totalidad de las instituciones políticas; produciendo y reproduciendo cíclicamente procesos de exclusión. De esa cuenta, la igualación potencial del régimen democrático puede verse neutralizada. El empoderamiento implícito en la posibilidad de elegir y ser electo se ve, en Guatemala por ejemplo, limitado para determinados grupos sociales. Una mujer indígena, pobre, rural, analfabeta y monolingüe tiene desventajas difíciles de franquear frente a un hombre, blanco, con recursos económicos y educación universitaria.

La pobreza y la desigualdad, rasgos estructurales de estas sociedades han no sólo definido su devenir sino generado inercias que se presentan y afectan los diversos órdenes del sistema político. En ese sentido, la estrategia de los grupos dominantes ha sido limitar el acceso al sistema político a las mayorías populares; en el siglo XIX a través del establecimiento de ciudadanía restringida (asociando los derechos políticos a la propiedad o la riqueza); y, durante buena parte del siglo XX excluyendo a través de las prohibiciones legales; los fraudes electorales y la violencia a aquellos grupos políticos que desafiaron el status quo.

Como se indicó antes, el inicio de los procesos de democratización en estos países no fueron el resultado de consensos o del desenlace favorable a los sectores excluidos del conflicto político; fue parte de una estrategia contrainsurgente cuyo fin no era fundar un orden social democrático sino aislar políticamente a la guerrilla. Estas democracias iniciaron en el marco de conflictos armados; sin avanzar o considerar siquiera –sobre todo en el caso guatemalteco- la necesidad de crear condiciones sociales mínimas para el ejercicio de los derechos políticos, y, se construyeron sobre las bases excluyentes previas.

Los inicios de estos regímenes democráticos estuvieron marcados por la violación sistemática de los derechos humanos, la persecución de opositores, y la exclusión de hecho de las fuerzas que cuestionaban el status quo. Con el paso del tiempo y a partir de los propios procesos democráticos y sobre todo debido a los cambios desencadenados a partir de los procesos de paz, estas condiciones han ido cambiando; los sistemas políticos se han ido abriendo aunque quedan muchos aspectos pendientes.

La primera característica que tiene consecuencias negativas para la inserción política de las insurgencias es la correspondiente a las condiciones económicas y sociales de la mayoría de la población. Desde fines de la década de los setenta se iniciaron procesos de empobrecimiento que agudizados por la crisis de los ochenta tendieron a estabilizar el porcentaje de pobres por arriba del 50%, existiendo variaciones regionales en las que en algunos municipios este porcentaje abarcaba a más de cuatro quintas partes de la población. Lejos de concentrar recursos y energías en enfrentar este desafío, durante la década de los noventa el principal esfuerzo gubernamental estuvo orientado a aplicar – con diferencias locales importantes – la llamada agenda del Consenso de Washington que no produjo los resultados económicos ni sociales esperados.

Los acuerdos de paz contemplaban el tema socioeconómico, pero no se crearon las condiciones óptimas para su cumplimiento. En el caso salvadoreño, lo que quedó establecido fue la creación de un foro de concertación económica y social, en el que representantes de diversos grupos de la sociedad podrían dialogar y acordar medidas orientadas a nuevas formas de desarrollo nacional. El hecho de que sus acuerdos no fueran vinculantes y que no existiera una agenda que orientara las discusiones condujo a que los resultados de este casi no tuvieran impacto en las condiciones de vida de la población.

En el caso guatemalteco, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria formulaba una concepción de desarrollo alternativa al modelo liberal; contemplaba diversidad de temas que iban desde la solución del problema agrario por la vía de la creación de un Fondo de Tierras y la creación de empresas campesinas asociativas; reforma educativa; plena vigencia de derechos laborales, etcétera. Sin embargo, el cumplimiento de los compromisos ahí establecidos quedó sujeto a la voluntad política del gobierno, cuyas acciones en muchos casos se orientaron en dirección opuesta a dichos compromisos.

Asimismo, los cambios económicos propios de la crisis final del modelo agroexportador y el establecimiento de nuevas condiciones de inserción económica de la región en la economía mundial provocaron cambios en las condiciones laborales que iban desde el desmantelamiento de las organizaciones sindicales hasta el crecimiento del autoempleo, y la consiguiente individualización. Las grandes organizaciones sindicales y populares no pudieron enfrentar las reformas, y los partidos de las antiguas insurgencias estaban pasando por el tránsito a su legalidad cuando estos se dieron, de manera que, se insertan en un sistema político en el que el Estado carece de las pocas capacidades que pudo en algún momento tener para orientar y participar en el desarrollo nacional.

Si los aspectos sustantivos de estas democracias eran deficientes, los aspectos formales también presentaban serias limitaciones. Los aspectos centrales de la democracia procedimental pueden valorarse en términos de participación, representación y competencia. La participación puede abordarse a partir de considerar al ciudadano individual y a los grupos políticos. En ambos casos se reproducen las asimetrías de poder.

En el caso guatemalteco, para participar los ciudadanos requieren por lo menos tres documentos que tienen costo (certificado de nacimiento; cédula de vecindad y boleta de empadronamiento) y, los centros de votación están ubicados exclusivamente en las cabeceras municipales¹³⁰ de manera que, la población rural – que sigue siendo mayoritaria en el país – tiene

que pagar mayor costos para el ejercicio de de sus derechos políticos. Se trata – para decirlo en códigos institucionalistas – de un diseño institucional que favorece a determinados grupos de población (urbana de capas medias para arriba) en detrimento de otros (población rural y pobre) que tienen mayores obstáculos para el ejercicio del derecho al voto.

En cuanto a la posibilidad de participación de diversas fuerzas políticas, con la incorporación del FMLN y la URNG a sus respectivos sistemas políticos formalmente el espectro ideológico terminó de abrirse, de manera que está presente desde la extrema derecha hasta la izquierda revolucionaria. Sin embargo, los costos para entrar y sobre todo para mantenerse son relativamente altos, de manera que no existen las condiciones para la fácil creación de partidos políticos.

Respecto a los problemas de representación, en muchos casos el diseño de los distritos electorales no facilita (debido a su magnitud) la representación de las diversas fuerzas políticas existentes, y a pesar de los esfuerzos realizados siguen existiendo limitaciones en la participación de mujeres como candidatas y autoridades electas y, en el caso guatemalteco, la representación indígena en los partidos y en el parlamento sigue siendo baja.

Es en el tema de las condiciones de competencia en el que puede captarse en su plena magnitud la forma en que las asimetrías electorales han limitado el desempeño político y electoral de las antiguas insurgencias. El primer indicador corresponde del financiamiento electoral. Ni en el Salvador ni en Guatemala han existido en los procesos electorales límites al financiamiento privado, topes de gastos o controles sobre el mismo. Esto ha permitido que, en el caso salvadoreño, los grupos hegemónicos financien de manera millonaria las campañas de ARENA, teniendo el FMLN que buscar recursos que en ningún caso han llegado a acercarse siquiera a lo invertido por el primer partido mencionado que ha gobernado durante cuatro períodos consecutivos. En Guatemala, aunque los grupos empresariales no han logrado unificarse en un solo proyecto político partidario, diversos capitales lícitos e ilícitos han financiado las campañas electorales de los distintos partidos de derecha que se han sucedido en el poder desde el inicio de los procesos electorales.

Otro aspecto que resulta determinante en las condiciones de competencia corresponde a la carencia de pluralidad de medios de información. En ambos países existen oligopolios que controlan los medios de comunicación escritos y electrónicos, lo que le ha permitido a los grupos dominantes ejercer una suerte de cerco mediático para evitar que la población conozca a los grupos opositores o bien desatar campañas tendientes a dañar la imagen de los antiguos insurgentes. Asimismo, los partidos que han logrado la presidencia han hecho uso directo e indirecto de los recursos públicos para desarrollar campañas electorales sin que existan mecanismos que controlen y castiguen ese tipo de situaciones.

Finalmente, y como si lo anterior fuera poco, otro elemento que afecta las posibilidades de competencia electoral de los partidos revolucionarios es la constante intervención norteamericana en los procesos políticos internos. Esto se ha manifestado con mayor fuerza en el caso del FMLN que, como segunda fuerza política del país ha estado en varias ocasiones cerca de ganar la presidencia del país. Sea a través de su embajador o de otros funcionarios del departamento de estado, el gobierno de los Estados Unidos ha amenazado con sancionar a El Salvador en el caso de un triunfo de la izquierda. En una sociedad en la que la mayoría de las familias dependen de

las remesas enviadas por sus familiares establecidos en el país del norte, estos amagos han tenido consecuencias relevantes en los resultados electorales.

Ahora bien, la mayoría de estas condiciones adversas para la participación democrática existían al iniciarse los procesos de negociación y los grupos insurgentes eran conscientes de las mismas. Sin embargo, dos factores complicaron esa inserción. El primero fue la dificultad de los grupos guerrilleros para adaptarse y adecuar su práctica a la democracia procedimental; el segundo estuvo dado por una suerte de sobreestimación tanto de los cambios políticos que generarían las reformas electorales como de su propia fuerza.

El primer aspecto abarca un problema de fondo: la dificultad de las izquierdas revolucionarias para articular un discurso y una práctica que correspondan a la democracia liberal procedimental en la que aceptan insertarse. Como lo ha señalado Edelberto Torres Rivas, el elemento democrático estaba presente en los programas revolucionarios de una manera genérica. La lucha revolucionaria era una lucha de carácter popular cuyo triunfo significaría el ejercicio directo del poder por parte del pueblo, sin que necesariamente mediaran procedimientos e instituciones electorales.

En ese sentido, dentro de cierta tradición marxista leninista latinoamericana – hegemónica en las guerrillas – se rechazaba y condenaba por principio la “democracia burguesa” que, en las versiones conocidas en estos países efectivamente era una caricatura en la que mediante la sucesión de elecciones y golpes de estado se pretendía legitimar regímenes autoritarios. La democracia en su versión procedimental nunca fue objeto central de elaboraciones ideológicas o programáticas de las insurgencias; la victoria revolucionaria conduciría a una suerte de democracia popular que solventaría este problema¹³¹.

Sin embargo, a partir de los procesos electorales de la primera mitad de la década de los ochenta, estos empezaron a adquirir legitimidad. De hecho, la URNG no negoció con dictadores militares sino con gobernantes electos que tenían reconocimiento interno e internacional. Ante dicha situación, el discurso público insurgente asumió y aceptó las reglas del juego democrático y en la mesa de negociación no se planteó el paso a una forma distinta de gobierno sino su inserción en el mismo.

En esa dirección puede pensarse que faltó – sobre todo en el caso de URNG - asimilar esta aceptación factual. Esta aceptación no produjo postulados de carácter político e ideológico que explicaran las razones para la aceptación de la Democracia Liberal Procedimental y se establecieran líneas de acción y preparativos para caminar en esa dirección. Tanto los estatutos de la URNG como los del FMLN recogen el carácter democrático de dichos partidos y la decisión de utilizar las formas democráticas para alcanzar el poder del Estado. Sin embargo, en el momento de la transición de estas organizaciones no existió suficiente discusión política, ideológica y estratégica sobre las implicaciones de la participación en democracias electorales, cuyos alcances y límites no fueron percibidos con precisión por los guerrilleros convertidos ahora en demócratas.

Es por eso que se considera que de parte de las insurgencias existió una sobre estimación de las reformas planteadas y de sus propias capacidades en el terreno electoral. Sobre lo primero, en el caso salvadoreño los acuerdos se orientaron a garantizar cierto nivel de autonomía y

neutralidad de las instancias electorales y las condiciones de inserción del FMLN. Puede colegirse de esto que el FMLN consideraba que, una vez garantizado un arbitraje neutral de los procesos electorales estaría en condiciones de disputar y ganar el poder en las urnas, sin considerar en su conjunto el entramado de las instituciones electorales que inducen determinados resultados políticos¹³².

En el caso de la URNG, muchas de las falencias del sistema electoral fueron plenamente identificadas y de alguna manera enumeradas como temas a tratar en el acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral. Sin embargo, la propuesta de reformas electorales fue encomendada a una comisión integrada por los partidos políticos con representación parlamentaria (por lo que la URNG quedó automáticamente excluida) y los resultados de la misma serían propuestas de reformas que deberían ser aprobadas por el Congreso de la República, en las que las fuerzas de izquierda tenían muy baja representación¹³³.

Las insurgencias se insertaron de esa manera en un sistema de competencia electoral para disputar el poder político cuyas instituciones estaban diseñadas para garantizar el predominio de las fuerzas políticas dominantes y dificultar la participación de los sectores y grupos subalternos. Además de enfrentar un entorno político adverso, las organizaciones guerrilleras, convertidas ahora en partidos políticos pasaron por un proceso de ajuste de cuentas interno que culminó con un ciclo de divisiones y fracturas que, cuando menos atrasaron sus avances en la disputa por el poder.

Divisiones y fracturas

Durante el período de lucha armada, las condiciones propias de la clandestinidad amortiguaron los efectos de las disputas internas y, hasta cierto punto hicieron que las mismas se resolvieran de manera discreta sin darse a conocer al gran público. Una de las consecuencias de la inserción de las insurgencias en los sistemas políticos democráticos fue que las diferencias internas arreciaran y que las mismas se dilucidaran de manera pública con una cobertura negativa por parte de los medios de comunicación¹³⁴. Sin embargo, más allá del tema de la imagen el problema de fondo en ambos países ha sido la incapacidad para dilucidar los desacuerdos políticos e ideológicos sin que estas terminen en rupturas y rompimientos al interior de los partidos.

Parte de la explicación de esto está en la relación de las organizaciones guerrilleras con la democracia interna. Las condiciones de guerra y clandestinidad obligaron a asumir como método de funcionamiento interno el llamado “centralismo democrático” que en la práctica era más centralismo y menos democracia. Durante buena parte de la guerra las decisiones importantes fueron tomadas por las direcciones guerrilleras con poca consulta o participación de la mayoría de miembros, y en algunos casos las comandantes en jefe de las organizaciones actuaron de manera inconsulta. Al hacerse innecesario el centralismo y sin condiciones clandestinas las disidencias y posiciones encontradas se manifestaron sin contar con mecanismos para su canalización.

El otro elemento de la explicación puede estar en la consolidación de liderazgos fuertes en cada una de las cinco organizaciones que formaban el FMLN y las cuatro que integraban la URNG. Estos liderazgos, comandantes en jefes de sus organizaciones, se fortalecieron con

identidades y lealtades particulares que eran difíciles de conciliar con la práctica política abierta. En el caso del FMLN, los liderazgos y alineamientos alrededor de las organizaciones fueron dando lugar a una diferenciación ideológica en la que la Corriente Socialista Revolucionaria fue construyendo una hegemonía en las bases y expulsando a los liderazgos que no aceptaron este predominio. En la URNG, las rupturas se fueron dando a partir de agrupamientos y correlaciones de fuerzas entre las antiguas organizaciones guerrilleras, expresando sus rompimientos problemas que se venían arrastrando desde principios de la década de 1970.

El FMLN: la construcción de la hegemonía socialista revolucionaria

En el caso salvadoreño el FMLN ha enfrentado en poco más de diez años cuatro rompimientos internos que se fueron articulando alrededor de las posiciones socialistas revolucionarias – peyorativamente denominados como “los ortodoxos” – y distintas expresiones reformistas – conocidos a partir de 1998 como “renovadores” -. Mientras que para algunos analistas estas rupturas corresponden a disputas por el poder sin contenido, los planteamientos expresados por los grupos en pugna permiten inferir que tales divisiones son la expresión de divergencias significativas de carácter ideológico que determinan la estrategia y la táctica del Frente¹³⁵.

Luego de la firma de la paz en El Salvador el FMLN se planteó constituirse en un partido-frente formado por cinco partidos políticos. Partieron para esta propuesta de reconocer que se trataba – de acuerdo con Gerson Martínez – de “... cinco organizaciones, muchas de ellas con orígenes diferentes (...) Somos cinco realidades, cinco maneras de pensar.” Para este ex dirigente guerrillero durante la guerra El FMLN logró construir una identidad, una “fuerza adhesiva” política, en tanto que ideológicamente se reconocieron diferencias. En el frente existían socialdemócratas, socialcristianos, comunistas y marxistas de manera que en “...el plano ideológico pueden haber más diferencias, y en plano político menos diferencias y mayor identidad. La unidad siempre ha sido política: unida de programa y de estrategia y de táctica. De línea política. Veamos la parte ideológica. El FMLN es una semi-pluralidad. Incluso al interior de una organización pueden haber matices ideológicos; pero particularmente la definición del Frente es esencialmente política. Hasta ahora la izquierda siempre ha tratado de unirse y definirse por principios fundamentalmente ideológicos. Creemos que un partido y un frente político como el nuestro debe definirse por bases esencialmente políticas: su programa y su estrategia. Eso es lo que nos une, junto con una dirección común de carácter político¹³⁶.”

Lo real fue que ni la unidad política ni la dirección común fueron suficientes para evitar que algunas de estos partidos buscaran su propio camino. La primera de estas divisiones se originó luego de las elecciones de 1994 cuando los dirigentes del ERP y de la RN, así como algunos de sus seguidores se separaron del partido¹³⁷. “A nivel público la disputa se planteó entre ortodoxos y renovadores y al interior del FMLN, entre revolucionarios y reformistas; los primeros insistían en mantener el carácter revolucionario del FMLN, reconociendo su herencia marxista leninista y su definición socialista; por el contrario el ERP y la RN planteaban una definición socialdemócrata para el FMLN; además, estos últimos creían que con la firma de la paz se había entrado a un período totalmente nuevo en el que había que desarrollar una política de acuerdos con el gobierno; las otras organizaciones eran mucho más cautelosas para analizar la

situación, desconfiaban de que los Acuerdos de Paz fueran un paso definitivo y planteaban que la posibilidad del enfrentamiento militar no podía descartarse y que había que perfilar al FMLN como una fuerza de oposición real al gobierno, sin subordinar las luchas sociales a la consolidación de las reformas políticas. Todo lo anterior tenía su expresión en la concepción del partido y de las alianzas, pues por un lado, tanto el ERP como la RN insistían en una apertura del FMLN, incluso planteaban que debía cambiársele el nombre, mientras que las otras organizaciones mantenían un modelo de partido más apegado a los cánones tradicionales del centralismo democrático, veían las alianzas con otras fuerzas con un carácter más instrumental y eran más celosas de mantener la identidad de izquierda.” (1998:250)

Se entendió, como lo señaló un analista político “... que el FMLN no puede ser como la Santísima Trinidad, una sola naturaleza y cinco partidos distintos”, de manera que se convocó a una convención nacional para discutir la organicidad del frente. A lo largo del proceso previo no participaron los representantes municipales del ERP y la RN, organizaciones que terminaron por retirarse del Frente¹³⁸. Encabezados por Joaquín Villalobos crearon el Partido Demócrata que realizó alianzas puntuales con ARENA en la asamblea legislativa¹³⁹ y terminó desapareciendo en las primeras elecciones en las que participó individualmente.

En la convención nacional extraordinaria el FMLN resolvió, entre otras cosas “Avanzar con paso firme hacia la unificación del FMLN como un partido democrático, revolucionario y pluralista” y “Trabajar por el fortalecimiento de un amplio movimiento de fuerzas sociales y políticas a nivel nacional y local, comprometidas con la democratización de nuestro país.”

Además de los problemas inter organizacionales, de acuerdo con Handal, el acceso a cargos de elección popular empezó a generar ciertas deformaciones entre los cuadros del partido: “La incursión del FMLN a los espacios de poder institucional, con el subsiguiente acceso a privilegios e influencias, no podía dejar de hacer mella en la textura ideológica de algunos cuadros. (...) El desempeño de esos cargos generó poder, más poder al interior del Partido que poder en la toma de decisiones que impactan al país. En realidad los cargos públicos son cargos extrapartidarios que inciden en la lucha interna por los cargos de dirección, los cuales se fueron convirtiendo en la óptica de muchos, en una especie de rada, de escalera, para arribar en su momento a los cargos públicos. Algunos alcaldes que querían ser reelectos, empezaron a utilizar el poder de su alcaldía para generar una incidencia fuerte al interior del Partido.” (2004:7)

La segunda crisis orgánica se debió a un realineamiento al interior de la militancia proveniente de las FPL, y dos de sus dirigentes Facundo Guardado y Salvador Sánchez Cerén que compitieron en 1997 por la coordinación del FMLN. Guardado logró ganar la coordinación del Frente sin que las diferencias se solucionaran. “Guardado se presenta como el abanderado de la renovación al interior del FMLN en tres aspectos centrales; primero, la definición del partido, proponiendo abiertamente y sin ambages que el FMLN debía definirse como partido de ideología socialdemócrata; y de hecho, en su primer discurso como nuevo Coordinador General del FMLN en diciembre de 1997, declara al FMLN en esa línea. (...) propone la democratización interna, mediante la apertura y flexibilización de las estructuras partidarias y de los mecanismos para elegir autoridades, así como propiciar el ingreso de nuevos miembros al partido y confiarles puestos de responsabilidad. Finalmente los Renovadores se presentan como críticos a la conducción tradicional del Frente en el campo de las alianzas, abogando por la necesidad de ampliarlas y darles un carácter menos instrumental y más estratégico.” (Zamora; 2003:110)

El ascenso de Guardado fue visto por buenos ojos por la derecha salvadoreña que vio en la moderación de este dirigente la posibilidad de contar con una contraparte aceptable para negociar acuerdos políticos. Sin embargo, su elección como coordinador no expresó el predominio del pensamiento socialdemócrata en el frente sino la capacidad de su reducido pero políticamente hábil equipo de trabajo¹⁴⁰.

Este proceso coincidió con las elecciones y el Frente se dividió entre los llamados Renovadores y los Ortodoxos de la Corriente Socialista Revolucionaria. Aunque esta última perdió la Convención en la designación de candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país, logró después del fracaso electoral el control del partido, expulsando a varios de los dirigentes renovadores¹⁴¹.

Contrario a la imagen creada por los medios de comunicación – monopolizados por los grupos de derecha – la propuesta de la Corriente Socialista Revolucionaria no era la de la lucha por un comunismo estalinista sino la de la “transición democrática revolucionaria” que postulaba “poner en el centro de la actividad política a la persona humana, oponiéndose a la lógica perversa de sujetar la vida a las ganancias” posición cercana a la doctrina social de la iglesia. Asimismo se postuló impulsar para la realización de esta transición “la lucha social y reivindicativa, la lucha parlamentaria y la lucha electoral”. El FMLN asumió la necesidad de vincularse con el pueblo y “constituir un bloque social y político de fuerzas”.

A pesar de estas definiciones el problema que siguió latente a lo largo de los años siguientes fue la existencia o no de tendencias, corrientes o posiciones, y si las mismas correspondían efectivamente a diferencias ideológicas o a agrupamientos que disputaban el poder. Aunque la caricatura construida en torno a las diferencias entre ortodoxos y renovadores planteaba a los primeros como radicales defensores del status quo interno del partido, y a los segundos como progresistas, la situación real era más compleja en tanto que los llamados ortodoxos mantenían una posición de cuestionamiento al estado de cosas del país con una posición crítica al gobierno y al sistema en su conjunto. Además, ambas corrientes fueron señaladas de estar conducidas por métodos centralistas y verticalistas.

Los ciclos de conflictos al interior del frente han coincidido con períodos para la designación de dirigentes partidarios y/o postulaciones a cargos de elección popular de manera que las diferencias ideológicas y políticas se confunden y mezclan con intereses por cargos. Algunos ex - dirigentes que han salido del frente para intentar formar otros movimientos políticos lo han hecho en situaciones en las que por razones estatutarias ya no pueden ser reelectos en sus cargos. Estos ciclos de conflicto han sido aprovechados por ARENA para minar el apoyo al frente y para fracturar la unidad parlamentaria en beneficio de sus propias iniciativas.

En el 2002 se reanudó el conflicto entre “ortodoxos” y “renovadores”, concluyendo con la salida de un grupo de diputados que intentaron construir el Movimiento Renovador. La pugna se repitió en la convención del 2004; la Corriente Socialista Revolucionaria postuló de cara a dicha convención nacional el documento elaborado por Schafik Jorge Handal “El FMLN y la vigencia del pensamiento revolucionario en El Salvador”. “La fidelidad a la misión, la fidelidad a las ideas revolucionarias y al compromiso con el pueblo’ son las palabras claves para entender el texto de Handal. A ellas el FMLN debe su nacimiento; a ellas también debe agarrarse en los

momentos de incertidumbres, viene a decir el diputado efemelenista. Porque ‘la mayor dosis de pobreza e injusticia agregada por el capitalismo neoliberal, legitiman y fortalecen aún más’ la misión del partido.” (Revista proceso no 114 p.5)

Por su parte, desde la corriente renovadora “Ortiz hace campaña para una apertura hacia la sociedad. No para controlar a la sociedad, sino para recibir insumos incluso críticos provenientes desde la misma. Ortiz cree en buena medida que la solución de los problemas del país pasa por un nuevo análisis del partido, a fin de que se presente de manera más potable a los ojos de la población. Dicho de otra manera, podría decirse que asume la postura de los que Schafik denuncia que se dejan moldear por el sistema antes que cambiarlo. ‘Coincidieron – dice el texto de los renovadores. Las distintas encuestas realizadas en el marco del pasado proceso electoral en que la mayoría de la población estaba a favor de un cambio. Sin embargo, la dirección de nuestro partido equivocó el camino y las aspiraciones de cambio fueron aprovechadas por el partido en el gobierno, que es el responsable del grave deterioro social y económico del país’. Esta lectura sostiene que el fracaso electoral se debe a la incapacidad de los dirigentes efemelenistas. (...) Para ser verdadera opción de poder, dice Ortiz, ‘debemos construir una estrategia de poder acorde a las realidades del país, y no una estrategia simplista y superficial en función sólo de los intereses partidarios o particulares de la dirección actual del FMLN, que ve el problema del partido y del poder en el país como su patrimonio personal.’ En consecuencia hay que reestructurar el partido. ‘Para que el Frente sea una alternativa y se profile con seriedad a ser la fuerza de recambio en las presidenciales del 2009 –dice el texto-, se necesita una fuerza que en su interior contribuya a que el FMLN cambie y mejore. No se trata solamente de cambios de caras, sino de cambio de estrategia, de ideas, métodos y actitudes que actualmente violan los principios revolucionarios y la democracia partidaria.” (Revista proceso no. 1114)

En las primarias la militancia del FMLN decidió apoyar a la corriente socialista revolucionaria que postulaba retomar la misión histórica del FMLN. Como lo señaló Handal a partir de la firma de los acuerdos de paz “... dejábamos las armas, nos convertíamos en un partido legal para participar activamente en la lucha política, entrábamos así dentro del sistema con la decisión de mantener una lucha persistente para consumir la revolución democrática inconclusa, orientada a cambiar el sistema, asegurar el desarrollo social, en un curso más o menos duradero rumbo a una sociedad socialista.” (2004:2)”

El más reciente desprendimiento del FMLN se dio nuevamente en la antesala de el proceso de elecciones municipales y legislativas de 2006 y en el participó el mismo alcalde de San Salvador así como algunos diputados que aparentemente no serían propuestos como candidatos a cargos de elección popular. Este grupo formó el Frente Democrático Revolucionario –FDR – apropiándose del nombre y las siglas del aliado del FMLN durante el conflicto. Nuevamente, y repitiendo la historia del PD y el Movimiento Renovador, esta escisión del Frente no pudo superar la prueba de las urnas.

El resultado de los sucesivos rompimientos al interior del frente, cuyas razones no son exclusivamente ideológicas, parecen haber conducido a la hegemonía de la visión socialista revolucionaria. Esta hegemonía continúa siendo objeto de duras críticas por los antiguos dirigentes que en distintos momentos abandonaron este proyecto político.

Para Ana Guadalupe Martínez la práctica del grupo de dirigentes del Frente nucleados – en el momento de las declaraciones - alrededor de Handal es sectaria y limitante del desarrollo de la izquierda, en tanto que dejan fuera y no están interesados en dialogar o acercarse con expresiones socialdemócratas y socialcristianos. Los dirigentes del Frente “lograron que se establezca que los únicos de izquierda son los que están militando ahora y dirigen al FMLN. Eso es un error gravísimo y muchas veces nosotros mismos jugamos a eso. Y yo creo que este país tiene una riqueza de experiencia, de participación, de compromisos que va más allá de ese estereotipo de izquierda que ahora estamos viviendo con el FMLN a la cabeza. Y lo digo así porque hay un montón de gente de las iglesias, no sólo católica sino que de las iglesias de diversas denominaciones que de verdad quieren justicia social, quieren más democracia, quieren estar en otro nivel de participación mucho más abierta y estarían comprometidos en un esfuerzo de cambio, de alternancia, sino se quedara limitado al estereotipo izquierda-FMLN conducido por Shafik y su grupo actualmente.” (Conversatorio de elfaro.net)

La crítica de Facundo Guardado hacia el frente es aún más radical en tanto que afirma que “...el FMLN es un satélite, una sucursal de la paranoia de Fidel Castro y de la plata de Hugo Chávez (...) no tiene proyecto de país. No hay una sola decisión de trascendencia que no se toma en La Habana. Hay una decisión del Partido Comunista Cubano de interferir en los asuntos internos del FMLN y las cosas se deciden absolutamente allá, en base a cuál es el interés de la revolución cubana. Entonces yo creo que sí hay una diferencia sustancial entre quienes responden al interés de Hugo, Fidel y compañía y los que creemos que debería de haber una fuerza política de carácter nacional, transversal, una fuerza de progreso, no clasista.” (Conversatorio de elfaro.net)

Para finalizar este recuento de críticas al frente desde la perspectiva de las personas que abandonaron dicho proyecto se incorporan las de Ileana Rogel quien señala la inexistencia de debate interno al interior del partido al grado que “... cuando se ha intentado debatir, el debate termina en que si sos neoliberal o si sos de la CIA (...) Entonces eso no ha permitido que avance, desde mi punto de vista, la formación de cuadros de cara a ese fortalecimiento de militantes progresistas dentro del FMLN.” Asimismo, señaló prácticas manipuladoras en los procesos internos.

Estos señalamientos, realizados de manera retrospectiva, permite confirmar lo que se señaló respecto a la construcción de una hegemonía socialista revolucionaria que ha venido delineando un perfil político en el que no caben otras expresiones ideológicas y se alinea con la izquierda latinoamericana identificándose con el proyecto de la Revolución Bolivariana. Sobre el primer aspecto, la hegemonía ideológica de los socialistas puede afirmarse que este es el resultado de un esfuerzo político organizativo de muchos años que estuvo acompañado de un trabajo de formación ideológica importante. Una revisión de los planes de estudio de la escuela de formación de cuadros Farabundo Martí permite visualizar la intencionalidad y la solidez de este esfuerzo que ha permitido el desarrollo de dirigentes municipales y regionales con un pensamiento homogéneo. Esto, lejos de pensarse como una debilidad puede considerarse una fortaleza. Ahora bien, si la homogeneidad ideológica interna se convierte en un obstáculo para construir alianzas con sectores de izquierda no socialistas, esto puede ser un obstáculo para alcanzar el poder. Sin embargo, la evidencia de los resultados electorales muestra que en hasta el momento no existe una opción de izquierda e incluso de centro que sea viable políticamente y que permita concentrar la fuerza necesaria para desplazar a ARENA del poder. Mientras esto no

ocurra, probablemente el FMLN continúe intentando construir por sí mismo esta mayoría política.

Con relación al alineamiento internacional, los señalamientos de Guaradado son exagerados. Efectivamente el FMLN, al igual que el FSLN, la URNG y la ANN en Centroamérica mantienen una relación importante con otros partidos de izquierda. Espacios como el Foro de Sao Paulo y el intercambio bilateral entre los partidos ha permitido ir constituyendo convergencias que no operan como una internacional a la que los partidos se subordinan, sino que permite la coordinación de estrategias y acciones políticas en el plano regional. Si se considera que el gobierno de los Estados Unidos interviene de manera impune en la política interna de estos países y que ARENA se comporte en algunos casos como un operador de los intereses del país del norte, es comprensible que el discurso y la práctica antiimperialista sea relevante y pertinente en el Frente.

En cuanto a los procedimientos internos, las sucesivas reformas a los estatutos han institucionalizado las elecciones internas y creado órganos de control que hacen improbable la utilización de prácticas ilícitas.

Guatemala: el eterno retorno

Los conflictos dentro de la izquierda guatemalteca y particularmente dentro de la izquierda revolucionaria han sido una constante a lo largo de su historia. Cada una de las grandes organizaciones guerrilleras (FAR, EGP y ORPA) fueron el resultado de desprendimientos del PGT y posteriormente de las FAR. A su vez, cada una de las organizaciones sufrió rupturas internas. Estos rompimientos fueron el resultado de la imposibilidad de resolver las diferencias que surgieron entre grupos de militantes a raíz de distintas interpretaciones sobre la situación de la guerra y la estrategia a seguir. Aún después de la constitución de la URNG se dieron disputas importantes al interior de cada una de las organizaciones guerrilleras. A pesar de esto, por las propias condiciones del conflicto estos rompimientos fueron manejados con discreción y fueron relativamente poco divulgados y conocidos fuera del aparato insurgente.

Después de la firma de la paz los problemas empezaron a aflorar entre las organizaciones que formaban la URNG, y las decisiones de buena voluntad de disolver las estructuras individuales empezaron a mostrar que fueron eso: actos de buena voluntad con pocos resultados prácticos. La situación en ese período fue particularmente compleja ya que tanto las organizaciones como sus miembros pasaban de la clandestinidad a la legalidad, sin el conocimiento y la experiencia necesaria para realizar las actividades y acciones políticas en el nuevo contexto. Sin clandestinidad ni compartimentación las limitaciones de los líderes revolucionarios para responder a la nueva situación fueron mucho más evidentes, provocando permanentes cuestionamientos y críticas.

Analíticamente, los conflictos dentro de la URNG pueden agruparse en aquellos cuyo origen y dimensión era de carácter interno y tenían que ver con la distribución del poder y las estructuras partidarias; los conflictos alrededor del cambio y la renovación de los dirigentes; y, las diferencias de carácter políticas e ideológicas propiamente dichas. A partir de estas es posible analizar aquellas diferencias en torno a la posición que la URNG debía mantener hacia la

sociedad y el estado: frente al gobierno; la construcción de alianzas; la relación con las organizaciones sociales; y, la participación electoral.

Desde antes de la firma de los acuerdos de paz, la URNG inició un proceso tendiente a unificar a las cuatro organizaciones que la constituían. Para ello, se trató de impulsar un proceso de arriba hacia abajo. Desde mediados de la década de 1980 se constituyó la comandancia general de la URNG, órgano máximo de dirección de este frente de organizaciones en el que participaban los comandantes en jefe del EGP, las FAR y ORPA y el secretario general del PGT. A su vez cada una de las organizaciones mencionadas contaba con un órgano de dirección propia que conducía las estructuras particulares. Teóricamente, desde la comandancia general se emitían las directrices únicas que debían ser ejecutadas por cada una de las organizaciones. Las diferencias en las formas de interpretar y ejecutarlas fueron generando la necesidad de crear órganos intermedios de coordinación para el trabajo militar, el trabajo de masas (conducción de las organizaciones sociales), relaciones internacionales, etc.

Los resultados en estos procesos de integración fueron heterogéneos, de manera que mientras en algunos campos se lograron niveles importantes de coordinación en otros no. En la etapa final de las negociaciones de paz se intentó acelerar estos procesos de integración a través de la constitución de una dirección nacional provisional DNP que permitiría superar lo reducido que resultaba la comandancia y “democratizar” la dirección del nuevo partido. Para esto se convocó a las direcciones nacionales de las cuatro organizaciones para elegir entre ellos a los 11 miembros de la DNP electos que serían completados con la comandancia.

Un problema que se manifestó fue el grado distinto de cohesión que tenían cada una de las direcciones; la composición de estas, de acuerdo al procedimiento establecido se fijó en 11 personas, independientemente de la organización que existiera, de manera que en algunas organizaciones se integraron personas para alcanzar esta cifra y en otras se tuvo que convocar sólo a dicha cantidad de dirigentes. Sin suficiente conocimiento previo entre los miembros de las distintas direcciones y en algunos casos arrastrando problemas internos se eligió una DNP integrada por 15 personas cuya composición expresaba no necesariamente el peso político de cada una de las organizaciones, ni una democracia en la que las bases participaran realmente¹⁴². sino la cohesión interna de cada una de las organizaciones.

Durante el desarrollo de este proceso se dio la denuncia del secuestro de la señora Novela, por lo que la ORPA quedó en una situación de particular debilidad a partir de que su máximo dirigente no pudo ingresar al país durante varios meses de 1997, período en el que avanzó la constitución del partido. Asimismo, dentro de la DNP se planteó la necesidad de “avanzar mas” en la democratización de la URNG. Esta consistía en ir paulatinamente restando poderes de decisión a la comandancia general para que estos fueran asumidos por la DNP. Esto provocó un desfase prolongado en materia de dirección en el que la antigua comandancia no tenía atribuciones para tomar decisiones – pero se veía obligada a tomarlas – y la dirección amplia no lograba afinar un funcionamiento que le permitiera asumir la conducción del partido.

Para enfrentar el trabajo de legalización de URNG como partido político se crearon diversas estructuras partidarias a partir de comisiones (organización, formación, relaciones internacionales, relaciones con el movimiento social, etcétera) cuya composición estuvo marcada por una disputa de espacios; en cada estructura se pretendió que hubieran miembros de las cuatro

organizaciones guerrilleras, independientemente de la experiencia o capacidad que tuvieran en dichas áreas de trabajo.

Se creó de un aparato formal grande y caro que no sólo no era sostenible en el tiempo, sino que promovía la competencia entre las distintas comisiones y la disputa de recursos. Después del primer año en el que el apoyo de la cooperación internacional permitió financiar esta estructura, la misma empezó a colapsar, orientándose la mayoría de recursos y esfuerzos del partido a su legalización.

De manera paralela a este proceso, se dio una disputa silenciosa en torno a los cambios y la renovación de la dirección nacional del partido. Por un lado, las direcciones de cada una de las organizaciones y la propia dirección nacional provisional estaban integradas por los dirigentes históricos de cada una de las organizaciones; muchos de ellos eran mandos militares, algunos habían tenido responsabilidades políticas en la clandestinidad, la antigua comandancia general en pleno era parte de la dirección. Con excepción de los miembros de la comandancia general y algunos jefes militares, los dirigentes de URNG eran desconocidos para la mayoría de la población guatemalteca.

Por otro lado a lo largo de la década de los noventa, sobre todo dentro de las organizaciones sociales, los grupos insurgentes se habían logrado expandir incorporando a una nueva generación de dirigentes sindicales y populares a las organizaciones. Algunos de ellos se incorporaron como parte de la URNG al FDNG; otros esperaban poder incorporarse al nuevo partido político. Se trataba de una generación de dirigentes de organizaciones sindicales, campesinas, mayas, de mujeres, estudiantiles, de pobladores¹⁴³, y de todo tipo que eran conocidos y reconocidos por amplios sectores de población. Para la dirección de la URNG incorporar a estos líderes a su proyecto no fue una prioridad, y las pugnas por los espacios de poder fueron cerrando la posibilidad de participación de estos dirigentes a quienes se les ofreció una militancia de base.

El resultado de esto fue que muchos de estos dirigentes tomaron tres caminos: permanecer dentro del FDNG; mantenerse como funcionarios de organizaciones no gubernamentales; o retirarse a la vida privada, cortando de esa manera los vínculos que la URNG tenía con muchas organizaciones sociales. Se trató de un lento desprendimiento de militantes y dirigentes que, por el hecho de no darse de golpe no fue considerado como un rompimiento, aunque el partido perdió una cantidad importante de líderes sociales.

La dirección histórica terminó por imponerse a partir de un falso discurso meritocrático ya que, aunque efectivamente la mayoría de sus miembros tenía una larga trayectoria de participación revolucionaria, en los hechos, los oficiales y combatientes guerrilleros con igual o mayor trayectoria fueron desplazados paulatinamente de la dirección del partido que se fue aislando no sólo de sus bases sino del resto de la sociedad. Este aislamiento fue reconocido por el propio partido que señaló que el mismo "...produce un efecto de ausencia y de incomunicación que se revierte y aísla a la estructura partidaria de su entorno o de lo que debiera ser y esto es mas grave, de su campo de acción y proyección; no permitiéndole por otra parte, la necesaria retroalimentación y actualización de las problemáticas sociales concretas, de las inquietudes ciudadanas y las diferentes visiones que se pueden tener de los distintos fenómenos que necesariamente se van presentando en el desarrollo social." (Estrategia URNG; URNG 1994 p.4)

Además de la disputa por los espacios de poder, de manera paralela al proceso de incorporación se fueron manifestando diferencias de orden político e ideológico. La primera de ellas, previsible dado el marco en el que se desarrolló este proceso correspondió al tema de la estrategia política a impulsar, que tenía implicaciones organizativas e ideológicas. En particular, el problema se postulaba en torno a determinar cual sería la estrategia a partir de la inserción en la legalidad.

Antes de la firma de la paz, la mayoría de los documentos de las organizaciones seguían haciendo referencia a la estrategia de guerra popular revolucionaria que se impulsaba a partir de la interacción “dialéctica” de sus factores: la lucha militar; la lucha de masas; la lucha política diplomática y la negociación. Aunque se mantuvo el discurso de que el factor determinante de esta estrategia descansaba en el factor militar, en la práctica en la última fase del proceso de paz todos los esfuerzos y recursos políticos se concentraron en la negociación, de manera que una vez logrado el resultado “exitoso” de esta, la firma de los acuerdos de paz, la URNG no contaba con una estrategia precisa para enfrentar su nueva realidad. De acuerdo con Pablo Monsanto, secretario general adjunto en ese período y posteriormente secretario general “Ha sido limitada nuestra capacidad para adecuar el pensamiento de la Dirección del Partido hacia los problemas estratégicos: es evidente que en el Partido no han madurado las condiciones para que se genere un pensamiento estratégico adecuado a las necesidades que este momento histórico nos demanda; esta debilidad subsiste hasta este momento.” (Pablo Monsanto; Hacia una estrategia 2000)

Para solucionar este proceso se intentó una solución de carácter doctrinario en la que, a partir de la discusión por parte de la dirección nacional de las “tesis de la URNG” se podría definir la estrategia política a seguir. Aunque los borradores de estos documentos se elaboraron, nunca fueron “aprobados” por la dirección del partido, de manera que no se lograron esclarecer las definiciones básicas que abarcaban interrogantes como ¿Qué es ser revolucionario hoy? Hasta la política de alianzas que impulsaría el partido. Si las definiciones políticas no llegaron a esclarecerse mucho menos lo hicieron las de carácter ideológico. Históricamente, tres de las organizaciones guerrilleras (PGT, FAR, y EGP) se habían asumido como marxistas leninistas; sin embargo, en la segunda conferencia guerrillera realizada por el EGP se dejó de lado el leninismo para definirse como marxista¹⁴⁴. Las otras dos organizaciones nunca renunciaron explícitamente a estos basamentos ideológicos, aunque tampoco hicieron esfuerzos para que la URNG los asumiera en su conjunto. Por su parte la ORPA nunca aceptó definirse de esa manera. En los documentos oficiales del partido se habló de cierto “pluralismo ideológico” y el impulso de un recorrido encaminado a esclarecer estas definiciones y construir una ideología propia de la URNG.

Otro mecanismo establecido para intentar dirimir estos temas fue el de la realización del primer congreso del partido. Sin embargo, cuando el mismo se realizó la división del partido era ya un hecho.

Estas indefiniciones y pugnas internas tuvieron consecuencias en el posicionamiento político de la URNG como fuerza de oposición. Con relación al gobierno del Partido de Avanzada Nacional (PAN) el dilema que enfrentaba la URNG era cómo, por una parte apoyar y comprometerse con el gobierno a cumplir la agenda de la paz y al mismo tiempo significarse políticamente y distanciarse de las políticas neoliberales que el mismo impulsaba. A lo largo de

1997 la acción práctica se orientó a apoyar el cumplimiento de los acuerdos de paz sin fijar distancia del gobierno. De esa cuenta dirigentes de la URNG participaron activamente en giras destinadas a recabar fondos de la comunidad internacional para el cumplimiento de los acuerdos. Y, aunque los aspectos torales de los acuerdos empezaron a ser incumplidos, la posición de la URNG fue demasiado moderada – supuestamente la ley electoral el prohibía hacer actividades políticas- lo que llevó a crear la percepción y el señalamiento publico de una suerte de maridaje con el PAN¹⁴⁵.

Este desdibujamiento de la URNG fue aprovechado por el Frente Republicano Guatemalteco FRG que asumió un firme papel opositor y durante la campaña de 1999 asumió un discurso “de izquierda” que le permitió alcanzar el apoyo de amplios sectores de la población y ganar las elecciones. Frente al FRG la URNG, inmersa ya en disputas internas tampoco fue capaz de asumir un discurso y una práctica opositora. Además, algunos dirigentes de ORPA asumieron cargos en posiciones importantes del gobierno. Esto fue interpretado por algunos grupos al interior de la URNG como un acuerdo entre un sector del partido y el gobierno; lo que fue utilizado dentro de las disputas como una denuncia de “cogobierno”.

Respecto a las organizaciones sociales, después que la URNG fue un ente articulador y movilizador del renacimiento de la sociedad civil, en el proceso de inserción este liderazgo y conducción fue desapareciendo. Antes de la firma de la paz la URNG y las organizaciones que la conformaban contaban con equipos de trabajo político que trabajaban directamente con las organizaciones sociales influidas por estas. Esto incluía el trabajo campesino, estudiantil, sindical, con desarraigados, con mujeres, con organizaciones indígenas y con organizaciones de derechos humanos. En el primer semestre de 1997 estos equipos de trabajo fueron disueltos y sustituidos por una comisión que a pesar de sus esfuerzos no pudo mantener la conducción y la relación con las organizaciones sociales. Este proceso de desmantelamiento del trabajo con el movimiento social se realizó en el marco de una pretendida revisión de la línea de trabajo con las organizaciones sociales.

La discusión propuesta era válida y pertinente, ya que se pretendía revisar el tipo de relación que la URNG debería establecer con las organizaciones sociales. Se buscaba pasar de una relación denominada de “influencia” - que en realidad era de conducción por parte de la insurgencia y subordinación de parte de la organización social – a una en la que la organización se desarrollara de manera autónoma y estableciera acuerdos con el partido. Teóricamente esto permitiría a URNG establecer relaciones y acuerdos con un mayor número de organizaciones sin que necesariamente esto implicara una vinculación orgánica. Antes de que concluyera el debate –que no terminó – se dejaron de atender y acompañar estos equipos, dando como resultado el aislamiento de la URNG y la desmovilización¹⁴⁶ – temporal -del movimiento social. Como se verá adelante, el manejo que un sector de la URNG hizo en el tema del pacto fiscal contribuyó a este distanciamiento.

En el campo de la política de alianzas, desde el período de la negociación la URNG había planteado la necesidad de articular un frente con los “sectores progresistas, democráticos, y revolucionarios del país”, coalición en la que deberían participar desde los sectores más cercanos política e ideológicamente – partidos, organizaciones y grupos de izquierda – hasta sectores empresariales con los que se tuvieran coincidencias¹⁴⁷. Sin embargo, en la primera experiencia electoral en la que URNG participó como partido legal rompió con el FDNG a raíz de la disputa

por cargos a elección popular y, aunque logró aliarse con el partido DIA y el comité pro formación UNID, estas alianzas tuvieron corta duración y mostraron la incapacidad del partido y su dirección de lograr acuerdos de mediano plazo con otras fuerzas políticas. Respecto a los sectores empresariales, en esa primera elección sólo se hicieron algunos acercamientos que no tuvieron resultados. Como lo señaló la propia URNG, el sectarismo de muchos de sus militantes contribuye a aislar a este partido. El sectarismo –señala el documento partidario “...se expresa excluyendo, descalificando o denostando a quien no comparte totalmente una posición política o ideológica, no forma parte de un grupo o de una organización o no tiene los parámetros de clase o estilo de vida, que suponen garantía ideológica.”.

Así, mientras en las elecciones de 1999 la URNG participó como parte de la Alianza Nueva Nación ANN (integrada además por el partido DIA y el comité UNID), con la que logró alcanzar el 12 % de los votos para la presidencia, en las elecciones de 2003 lo hizo sola, logrando poco menos del 3% de votos a la presidencia.

Para fines del año 2000 la sumatoria de problemas internos era latente. Después de la muerte de Rolando Morán – primer secretario general de la URNG – la dirección del partido tuvo dificultades para asumir de manera colectiva la conducción del partido, por lo que se dieron realineamientos internos en los que el segundo secretario general de este partido – Pablo Monsanto – fue perdiendo el apoyo del EGP¹⁴⁸. En este proceso, un grupo de militantes de base emplazó al Comité Ejecutivo Nacional a resolver los problemas internos y a definir la posición política e ideológica de la URNG. Este planteamiento no tuvo respuesta.

En febrero de 2001, un grupo de dirigentes, cuadros y militantes de las entonces ya disueltas FAR crearon la “Corriente por el Rescate Revolucionario de la URNG” que desde dentro del partido intentó dar una lucha política tendiente a lograr un cambio en la práctica partidaria. Las demandas principales de esta corriente fueron el posicionamiento partidario en contra de las políticas impulsadas por el FRG; la revisión, incluyendo una auditoría financiera del proceso de incorporación de los ex combatientes de la URNG; y, la negociación de las condiciones para la realización del primer congreso del partido¹⁴⁹.

La respuesta de la mayoría de los miembros de la dirección del partido no fue la discusión de los puntos propuestos sino la descalificación del planteamiento y la condena de los que denominaron como “la fracción”. A lo largo del 2001 se dio una intensa guerra de declaraciones – aprovechada por los medios de comunicación – que concluyó en la derrota en la Asamblea Nacional (55% de los delegados oficialistas contra 45% de la corriente revolucionaria) de esta posición, que fue orillada a abandonar el partido y constituir la Alianza Nueva Nación ANN.

Analizando retrospectivamente este conflicto puede constatarse a partir de las entrevistas realizadas que, desde la perspectiva de los miembros de dirección de URNG que se han mantenido al frente del partido desde entonces, no existía un problema político de fondo en el partido; el problema en todo caso, era el liderazgo de Pablo Monsanto. De acuerdo a un ex miembro de la dirección del partido después de la muerte de Moran, Monsanto “... no tuvo la misma capacidad de mantener unidad, de hacer consensos, de concertar las organizaciones, se polarizó mucho. Entonces Pablo (Monsanto) fue perdiendo mucho el apoyo aunque se lo ofrecimos, incluso los que éramos del EGP se lo ofrecimos como se lo habíamos ofrecido a Rolando (Morán) que apoyaríamos toda esta estrategia. Monsanto (...) fue polarizando y fue comenzando a querer marginar a una de las

organizaciones, a ORPA y esa no era la visión de Rolando, y por ende se comenzó a romperse cuestiones internas. Ahí Pablo tiene una responsabilidad, tenía que haber sido más unitario para decirlo de un modo. Ese tipo de jueguitos empezaron a estar presentes en URNG, y por eso yo creo que la conducción y la dirección falló y hay un quiebre. Eso sí, tenía una autoridad entre los comandantes y ante los cuadros intermedios muy grande” (Mayo 2005)

En la misma dirección uno de los secretarios adjuntos de URNG señala: “Son varios factores (que provocaron el rompimiento) pero si a mí me obligaran a decir uno, pensaría en lo que decíamos antes: el papel que las personas juegan en los procesos. Yo creo que Pablo con otra actitud hubiera podido jugar un mejor papel y es más, era su obligación. Siento que a Pablo le pasó lo que le pasó a las Naciones Unidas y a MINUGUA en el pacto fiscal: tomaron posición, y cuando alguien toma posición deja de lado su papel, que era de conducción global y de conducir un grupo. Y yo sí creo que cuando se toma posición se pierden posibilidades de conducir porque se toma partido. A mí parecer la tarea de él era de conducir globalmente a URNG por encima de su gente, que sí creo que, guardando las distancias creo que parte del éxito de Rolando fue mantener distancia. Los problemas existían y no surgen con Pablo siendo éste mucho más fuerte y enérgico y contribuye con la separación. Pero yo creo que muchos de este grupo creían que era necesario, que la ruptura era una salida.” (Mayo de 2005)

Por el contrario, desde la perspectiva del grupo que abandonó URNG para formar la ANN los problemas no se reducían al liderazgo sino a diferencias en torno a la posición política del partido frente al gobierno y la sociedad; la forma de dirimir las diferencias dentro del partido; y, el manejo que se había dado del proceso de incorporación. Sobre el primer punto, se planteaba la necesidad de que la URNG asumiera un discurso y una práctica de oposición firme al gobierno del FRG, de manera que se terminara con la imagen de “cogobierno” o “alianza tácita” que venía arrastrando. Sobre las diferencias al interior del partido, se propusieron cambios a la metodología y a la organización del primer congreso, de manera que este fuera un ejercicio verdaderamente democrático en el que pudieran participar la mayor parte de miembros del partido en igualdad de condiciones. En el tema de la incorporación se partía de señalar las lamentables condiciones en las que se encontraban la mayoría de los desmovilizados, en particular los oficiales y combatientes guerrilleros. Ante esta situación se pedía la intervención de la Fundación Guillermo Toriello para realizar una evaluación de lo realizado – que incluyera una auditoría financiera- y se tomaran medidas para corregir el rumbo de este proceso. Estos temas no fueron debatidos, sino que los grupos enfrentados se descalificaron mutuamente y se disputaron la organización territorial del partido de cara a la Asamblea Nacional.

El desenlace del conflicto fue la primera gran división al interior de la URNG. Un grupo importante de dirigentes y militantes provenientes de las FAR abandonaron el partido y conformaron el partido ANN. En su conjunto, la izquierda guatemalteca de origen revolucionaria ha tendido a fragmentarse y dispersarse en diversos agrupamientos políticos y una importante cantidad de organizaciones que, desarticuladas entre sí, no han logrado construir un proyecto político unificado.

Los resultados electorales

A partir de la suscripción de los acuerdos de paz en ambos países, las antiguas organizaciones guerrilleras, transformadas en partidos políticos aceptaron explícitamente que la lucha por el poder se libraría fundamentalmente en el marco de la democracia procedimental, es decir la disputa del poder a través de elecciones. El desempeño electoral permite discutir los

avances y logros que estos partidos han tenido para alcanzar espacios de poder y darle continuidad a la lucha por transformar estas sociedades.

Los resultados electorales no son la expresión mecánica de una correlación de fuerzas. Son, en primer lugar, una manifestación de la adhesión de los electores al proyecto político propuesto por las insurgencias. Esta adhesión está condicionada por el contexto socioeconómico en el que se da la disputa electoral, y de la capacidad de estos partidos de comunicar y transmitir sus propuestas. También los resultados electorales permiten inferir la forma en que ha sido valorado el desempeño político de estos partidos, de manera que su votación refleja parcialmente el apoyo a la posición política que han mantenido frente al gobierno y la sociedad. Sin embargo, esta traducción de adhesión y/o apoyo no es automática sino que está mediada por una institucionalidad electoral que puede generar sesgos o distorsiones en contra de estos proyectos. Las condiciones de financiamiento, acceso a medios de comunicación y a otros recursos ha sido determinante de estos procesos, la asimetría en las condiciones de competencia se ha reflejado en los resultados electorales.

También a través del estudio del desempeño electoral es posible captar la manera en que las antiguas insurgencias han asumido el elemento electoral dentro del nuevo campo de lucha democrática. En este punto es en el que existen mayores diferencias entre la URNG y el FMLN. Mientras el contexto institucional y de igualdad de competencia es adverso en ambos países, la manera en que estas organizaciones han asumido el papel de las elecciones en su camino al poder es distinto: mientras el FMLN desde la firma de los acuerdos de paz asumió la lucha electoral como aspecto central de la lucha revolucionaria, en la URNG hasta su segundo congreso todavía se discutía la preponderancia de lo electoral frente a otras formas de lucha.

La lucha electoral es lucha revolucionaria

Al analizar la participación electoral del FMLN surge de entrada lo que podría pensarse como una paradoja: por un lado, cierto dogmatismo o cierre ideológico como resultado de la hegemonía de la corriente socialista revolucionaria, que presenta a este partido como una fuerza antisistema que desde el sistema pretende impulsar cambios radicales; por el otro, un pragmatismo y creatividad en materia electoral que les ha permitido en 12 años multiplicar el número de votos recibidos, superar el cerco mediático y crear nuevas estrategias de comunicación popular.

Desde su incorporación a la legalidad el FMLN ha participado en tres elecciones para la presidencia del país y 4 legislativas y municipales. Desde su primera participación el FMLN ha aumentado en términos absolutos la cantidad de votos obtenidos y, aunque ha triunfado globalmente en elecciones legislativas no ha podido alcanzar la presidencia del país. Para abordar este proceso se revisará de manera breve el contexto de las elecciones, la situación del Frente y los resultados de estas.

Las primeras elecciones en las que el FMLN participó fueron calificadas como las “elecciones del siglo” no sólo por ser las primeras en las que participaron los ex insurgentes sino porque coincidían las votaciones para presidente, asamblea legislativa, alcaldías y parlamento centroamericano. Para los partidos que en ese momento integraban el Frente existió la comprensión de que dichas elecciones no podían verse separadas del proceso de paz y de la

reinserción y que tanto la posibilidad de cumplir los acuerdos como hacer de la izquierda revolucionaria una opción de poder dependían de los resultados electorales.

A pesar del acuerdo básico sobre la importancia de la participación electoral existían diferencias en torno a cómo llevarla a cabo. El ERP y la RN planteaban la necesidad de que el FMLN estructurara una alianza de centro izquierda que incluyera a la Democracia Cristiana para lo que proponían como precandidato a Abraham Rodríguez, dirigente histórico del PDC; por su parte las FPL, el PCS y el PRTC proponían una coalición exclusiva de izquierda – que incluyera a Convergencia Democrática CD y al Movimiento Nacional Revolucionario MNR -.

A pesar de la dificultad para alcanzar consensos internos, el FMLN se alió con CD y el MNR postulando a Rubén Zamora y a Francisco Lima como candidatos a la presidencia y la vicepresidencia respectivamente. (Ramos; 1998a:20) Esta participación le permitió al frente una exitosa inserción en el sistema político en tanto que logró disputar la segunda vuelta electoral con ARENA y obtener veintiuna diputaciones en la asamblea legislativa. Sin embargo, la buena posición adquirida por el Frente pronto se vio afectada por la salida del ERP y la RN y la disminución del número de diputados.

Frente a las elecciones municipales de 1997, en el sistema de partidos políticos salvadoreño se empezaba a configurar el bipartidismo polarizado con ARENA y el FMLN como polos de este. En esta campaña ARENA recurrió al ataque sistemático contra su adversario, apelando, en primer lugar al tema del conflicto, acusando al Frente de ser sinónimo de guerra, destrucción e inestabilidad. En estos ataques ARENA contó con el respaldo del PD, uno de cuyos dirigentes, Joaquín Villalobos se prestó a las agresivas acusaciones contra sus ex compañeros guerrilleros por los hechos ocurridos durante el conflicto armado. (Revista Envío, No. 181 abril de 1997) Otra estrategia usada por ARENA fue apelar al discurso religioso, en el que incluso se llegó a comparar la cruz de Jesús con la que preside la bandera de este partido. Igualmente, a lo largo de esta campaña se denunció el uso de recursos públicos y la participación del presidente del país en actividades de proselitismo.

La campaña del Frente se centró en la denuncia de los gobiernos de ARENA, que desde su perspectiva eran responsables del deterioro de las condiciones de vida y el aumento de la pobreza, y el llamado a iniciar cambios en el país. Los resultados en las elecciones legislativas favorecieron al FMLN que pasó de 21 diputados en 1994 (de los cuales 7 pasaron al PD) a 27 diputados; mientras que ARENA se redujo de 39 a 28 diputados. En las elecciones municipales, ARENA consiguió 106 alcaldías de las 262 en disputa, mientras que el FMLN alcanzó 48 en forma individual y 5 en coaliciones. A pesar de que en números absolutos las elecciones municipales favorecieron al partido de gobierno, el Frente triunfó en varios de los municipios más poblados, incluyendo San Salvador, lo que le permitió a este partido mostrar que era capaz de gobernar la ciudad más grande del país sin que se diera desestabilización o conflictos. En materia parlamentaria, la composición del legislativo teóricamente debía obligar a que los principales partidos negociaran acuerdos nacionales, aunque ARENA optó por cooptar a los partidos minoritarios para alcanzar las mayorías parlamentarias necesarias para aprobar sus propuestas de ley. (Revista Envío, No. 181 abril de 1997)

De cara a las elecciones presidenciales de 1999 al interior del Frente existía el reconocimiento de dos cosas, en primer lugar, la izquierda revolucionaria estaba en condiciones

de disputarle la presidencia del país a ARENA y, en segundo lugar que –luego del fracaso electoral del PD – el FMLN era el único partido capaz de conducir una coalición de fuerzas en esa dirección. Estas consideraciones explican en parte la enconada lucha interna que se libró en el Frente para definir la candidatura presidencial, que sería resuelta en una Convención Nacional pública.

Como precandidatos presidenciales inicialmente se postularon Salvador Arias, quien contaba con el apoyo del PCS y parte de las FPL, quienes también apoyaron a Victoria de Avilés; el coordinador general del FMLN Facundo Guardado apoyó las candidaturas de Héctor Silva – alcalde de San Salvador y Héctor Dada. Al momento de realizarse la Convención Nacional de agosto, compitieron por la candidatura presidencial Avilés y Silva. En la primera convención no se logró una definición, por lo que se convocó a una segunda convención. (Ramos; 1998: 29-30) Fue una convención muy polarizada que, transmitida por los medios de comunicación, dañó severamente la imagen del frente. Para la siguiente convención, el FMLN enfrentó la renuncia de Silva a la candidatura presidencial, quien adujo pretendía contribuir a la despolarización de la situación. Avilés no logró reunir los votos necesarios por la cantidad de votos de abstención que se dieron y se convocó a una tercera Convención, en la que se propuso la fórmula conformada por Facundo Guardado y Nidia Díaz, frente a la de Victoria de Avilés y Salvador Arias. La primera propuesta fue la que obtuvo el triunfo.

Como señala Ramos “De esta forma y en estas condiciones el FMLN (coaligado con la USC) debió prepararse para la campaña. Y si bien los candidatos planteaban por sí mismos serias dificultades para la estructuración técnica de la campaña, y de la estrategia de venta de imágenes, dos factores adicionales se constituyeron en el verdadero escollo, que al concluir 1998 no había sido superado; en primer lugar la conformación de un contingente considerable de militantes convencidos que el partido no estaba ya en la capacidad de ganar las elecciones y por tanto se sumaron a la campaña con baja motivación e impulsados más por el compromiso partidario; en segundo la persistente actitud de grupos inicialmente opuestos a Facundo Guardado que no mostraban mayor disposición para involucrarse sustantivamente en el trabajo electoral, y que contextos difíciles los hacían susceptibles a impulsar contracampañas internas.” (1998: 36)

Los resultados de estas elecciones fueron particularmente negativos para el Frente¹⁵⁰, y los costos de los mismos le fueron cobrados al grupo de Guardado que no sólo fue candidato presidencial sino estaba a cargo de la coordinación del Frente. Un análisis del período señala que “Hay quienes quieren vender la idea de que no fue el FMLN el que fracasó, sino Facundo Guardado. Pero ello no es tan cierto, pues hacer de Guardado el único responsable del fracaso electoral es verlo como alguien que llegó de fuera y que, por su cuenta y riesgo, se incorporó a la competencia por la presidencia. Pero Guardado no llegó de fuera, sino que salió del interior del partido, y en su nominación – en el modo cómo terminó siendo el candidato del Frente – jugaron un papel importante tanto los que lo apoyaron – los ‘renovadores’- como los que hicieron una franca oposición a la misma –los ‘ortodoxos’-. Ambos grupos, partes integrantes del Frente, querían imponer su fórmula presidencial excluyéndose mutuamente y ambos grupos son igualmente ambiciosos. En el marco del conflicto irresuelto entre ellos fue que Facundo guardado se erigió como candidato; pero no sólo eso: también en el marco de ese conflicto fue que se comenzó a gestar el fracaso electoral del FMLN, del cual la fórmula electoral es sólo uno de los componentes. En este sentido, tanto ‘ortodoxos’ como ‘renovadores’ son responsables directos de la debacle del frente en las elecciones de 1999- las ansias de poder de quienes

abanderan ambas tendencias, el mesianismo excluyente de algunos de ellos, la pretensión de otros de ser quienes van a salvar el país... todo ello se tradujo en un partido sin ideas claras y sin capacidad de convencimiento, con una oferta política confusa y pésimamente comunicada; en resumen un partido que, lejos de estar compitiendo por ganar, se estaba encaminando hacia el fracaso.(CIDAI;1999:176)

Hacia el interior del Frente los resultados electorales contribuyeron al avance de la corriente socialista revolucionaria, la derrota y expulsión de los dirigentes que abiertamente planteaban un discurso y una práctica socialdemócrata; y, a debilitar, al menos temporalmente esta opción política. Frente al Estado y la sociedad, la derrota del partido revolucionario fue contundente. No se trató sólo del retroceso electoral, sino que el fracaso contribuyó a la consolidación de ARENA en el poder que, con un candidato improvisado – Francisco Flores – volvió a controlar el ejecutivo e inició un nuevo ciclo de reformas económicas contrarias a los intereses de las mayorías populares. Ante la sociedad, los antiguos guerrilleros mostraron en sus convenciones públicas un encono para enfrentarse entre ellos digno de mejores causas y que, a pesar de establecer un procedimiento democrático para resolver las diferencias, este por si mismo es insuficiente si no se respalda con una práctica deliberativa que permita alcanzar los mejores acuerdos.

Recuperándose todavía de estos resultados el FMLN enfrentó nuevamente elecciones municipales y legislativas en el año 2000 en las que llegó a sobrepasar a ARENA en número de diputados y logró 30 alcaldías más que en 1997, alcanzando un total de 78, reelegiéndose en la de San Salvador con Héctor Silva. Esta situación se mantuvo en las elecciones municipales y legislativas de 2003 en las que el FMLN logro 31 diputados y el 33.78% de los votos para legisladores mientras ARENA consiguió 27 legisladores y el apoyo del 32% de los electores. Dos datos importantes surgieron de estas elecciones; el primero, la desaparición electoral de la propuesta renovadora – el grupo encabezado por Guardado que fue expulsado del Frente e intentó construir un instrumento electoral propio; y, la retención de la alcaldía de San Salvador sin la presencia de Silva. Ambos datos llevaron a algunos dirigentes del FMLN a pensar que el electorado continuaría votando por el partido independientemente del candidato del que se tratara.

Los avances electorales del FMLN serían puestos a prueba en las elecciones presidenciales de 2004, en la que los antiguos insurgentes tendrían la oportunidad de romper el equilibrio que habían logrado consolidar en el legislativo y disputar la jefatura del ejecutivo. Al principio de este proceso electoral el FMLN contó con las mejores condiciones de su historia; coincidió la caída de la aprobación del gobierno de Flores, la victoria en las elecciones intermedias de 2003 y el reconocimiento de la buena administración partidaria de las ciudades en las que gobernaba. A finales de mayo de este año, el Frente contaba de acuerdo con las encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública IUDOP con un 40.6% de intención de voto, mientras que Arena se había quedado atrás con un 23.9% de la preferencia¹⁵¹. Este apoyo al partido era a inicios del proceso independiente del candidato presidencial, que de hecho el Frente no tenía y debería elegir en elecciones primarias de acuerdo con su legalidad partidaria.

En las primarias resultó electo Schafik Handal, dirigente histórico del Frente, ex secretario general del PCS y miembro de la Comandancia General del FMLN durante el período del conflicto, que fue identificado por los medios de comunicación como líder y representante del ala

“ortodoxa” del partido. En este caso, el ejercicio democrático realizado por el Frente - Handal fue electo por las bases y no por la cúpula partidaria – desató una campaña de desprestigio en la que participaron líderes del partido oficial, miembros de la elite empresarial y de manera activa y determinante el gobierno norteamericano¹⁵². Las declaraciones de funcionarios norteamericanos fueron utilizadas por los medios de prensa subordinados a Arena para hacer creer que el triunfo de la izquierda implicaría el cese del flujo de remesas familiares provenientes de EUA y la expulsión de los trabajadores salvadoreños del país del norte.

Las posibilidades reales del triunfo revolucionario provocaron pánico entre los grupos dominantes que, de acuerdo con Handal “... recurrieron a una operación gigantesca de atemorizamiento, en que participaron altos funcionarios de Estados Unidos, asesores extranjeros de alta calificación, golpistas venezolanos, contrarrevolucionarios cubanos, para aterrorizar a las gentes con la amenaza de que Estados Unidos prohibiría el envío de remesas a El Salvador, y el chantaje laboral de cerrar las empresas si triunfaba el FMLN; recurrieron también a la compra masiva de votos, trajeron miles de centroamericanos a votar aquí fraudulentamente, etc. Y difundieron miedo con las mentiras de que les quitaríamos a la gente sus casas, tierras, hijos menores, cosechas, biblias, etc.” (2004:13)

ARENA desató una auténtica cruzada anticomunista que puso en evidencia las limitaciones de la democracia electoral salvadoreña, en la que gobierno, empresarios, ARENA y el gobierno norteamericano hicieron todo lo que estuvo en sus manos para evitar una alternancia que llevará al poder al FMLN. Lejos de ser radical, la propuesta de Handal “Plataforma del FMLN para el cambio seguro dentro de la Constitución de la República” proponía hacer de El Salvador una sociedad “... profundamente democrática, soberana, justa, culta, altamente productiva, próspera, saludable, solidaria y con alta calidad de vida.”¹⁵³ Sin embargo en la campaña no prevaleció la discusión programática sino los ataques contra el candidato de izquierda.

Aún en esas condiciones adversas, el Frente logró la mayor votación de su historia, más de 800 mil votos, aunque no logró conseguir el porcentaje de votos necesario para provocar una segunda vuelta electoral. En estas elecciones quedó claro que las condiciones asimétricas en la competencia (capacidad para reunir e invertir recursos; sesgo en los medios de comunicación; intervención de actores no políticos e internacionales en la campaña anticomunista; las denuncias del frente sobre la movilización de miles de electores extranjeros de las zonas fronterizas de Guatemala y Honduras; etc.) tuvieron consecuencias determinantes en los resultados. Sin embargo, la revisión de los resultados electorales del FMLN desde 1994 obliga a preguntarse si no se ha llegado a una suerte de tope electoral de la propuesta izquierdista dentro de la sociedad salvadoreña que no es remontable sin establecer acuerdos con otros partidos y buscar otros nichos electorales.

En las elecciones municipales y legislativas nuevamente el FMLN resultó ser el partido más votado, logrando conservar un porcentaje importante de los votos obtenidos en las presidenciales de 2004. El número de diputados obtenido le permite a este partido tener la “llave” de la mayoría calificada, por lo que, para cierto tipo de decisiones ARENA deberá negociar con el partido de izquierda; por un número reducido de votos logró conservar la alcaldía de San Salvador, aunque perdió el dominio en varias ciudades importantes.

Tanto en las elecciones presidenciales como en las municipales la tendencia del FMLN desde 1994 ha sido la de crecer tanto en términos absolutos como relativos. Sin embargo, al analizar los resultados históricos se encuentran diferencias importantes en los resultados de las elecciones presidenciales y las legislativas y municipales y que tiene más que ver con el apoyo que ARENA alcanza en las primeras y que no logra mantener en las segundas. El FMLN – como puede observarse en los cuadros 1 y 2 ha logrado un crecimiento sostenido y parejo en los dos tipos de elecciones, llegando a un máximo histórico en las elecciones presidenciales del 35.68% en 2004 (poco más de 800 mil votos), y un máximo del 39.28% en las elecciones legislativas de 2006.

Cuadro 1
Porcentaje de Votos en Elecciones Presidenciales

Partido	1994	1999	2004
FMLN	24.99	29.1	35.68
ARENA	49.11	51.9	57.71

Fuente: Artiga 2000 y TSE 2004

Cuadro 2
Porcentaje de Votos en Elecciones Legislativas

Partido	1994	1997	2000	2003	2006
FMLN	21.4	33	35.22	33.78	39.28
ARENA	45	35.4	36.04	32	39.21

Fuente: Revista Proceso UCA.

Si se analizan estos resultados en términos absolutos, considerando el número de votos obtenidos por cada partido, se encuentran los datos de los gráficos 1 y 2.

**GRAFICO 1
NÚMERO DE VOTOS EN ELECCIONES PRESIDENCIALES
ARENA Y FMLN**

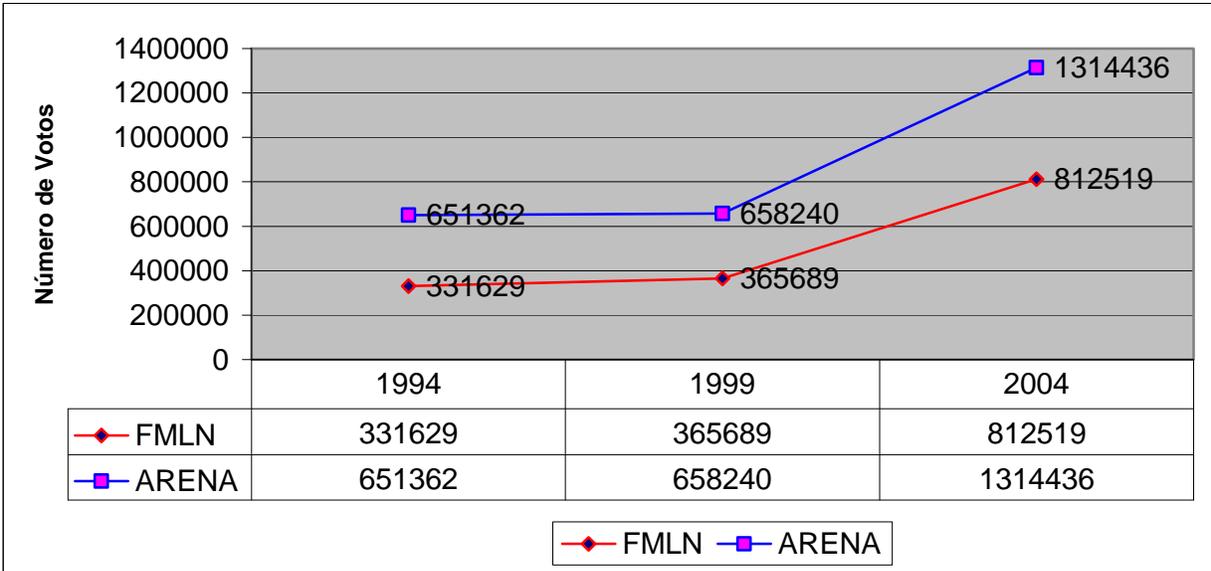
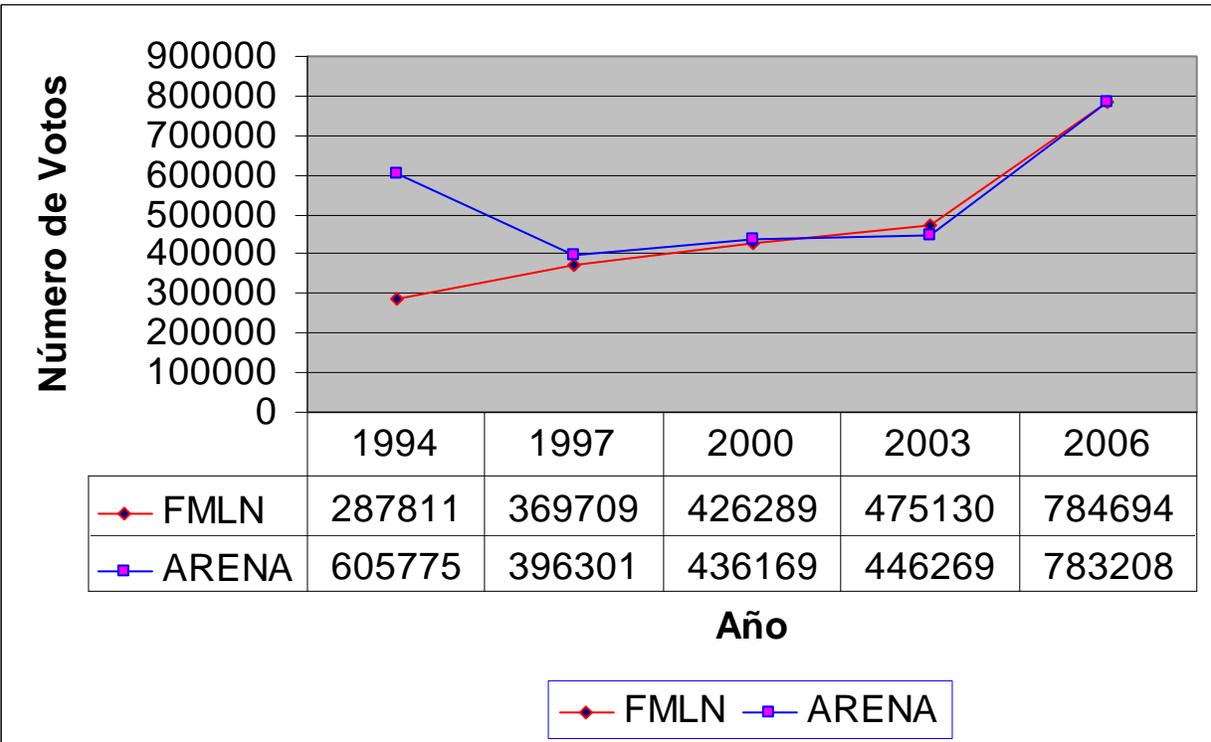


GRAFICO 2
 NUMERO DE VOTOS EN ELECCIONES LEGISLATIVAS
 FMLN Y ARENA



Mientras que en las elecciones presidenciales el FMLN, a pesar de haber duplicado el número de votos entre 1999 y 2004 no ha logrado cerrar la brecha que lo separa de ARENA (también duplicó sus votos en este período), en las legislativas el Frente ha mantenido una situación de empate desde 1997. Desde esta perspectiva, y más allá de los señalamientos de

prácticas poco transparentes por parte de ARENA, el FMLN tiene el reto de ampliar el número de votos a su favor para disputar la presidencia. Estos votos no se encuentran en el centro político – en las últimas elecciones presidenciales el resto de partidos apenas superó el 6% de los votos -, se encuentran probablemente entre los votantes que siguen respondiendo a las campañas de miedo que impulsa ARENA y, sobre todo entre los cientos de miles de ciudadanos que dejan de participar en las elecciones. Para esto, el FMLN ha avanzado en la sofisticación del trabajo político electoral, en el que ha acumulado una gran experiencia.

Por otro lado, el empate en el legislativo tampoco ha favorecido al Frente, ya que, como se indicó antes, los partidos minoritarios han optado por aliarse con ARENA antes que apoyar las propuestas de cambio impulsados por los izquierdistas. Y es que, la propia definición antisistema dentro del sistema del FMLN limita su capacidad para construir alianzas legislativas.

La participación electoral de la URNG

Como partido político la URNG ha participado en las elecciones de 1999 en coalición con el partido DIA en la Alianza Nueva Nación (coalición) y en 2003 de manera individual. Sin embargo, como parte de los preparativos para su incorporación a la legalidad, de cara a las elecciones de 1995 la URNG decidió convocar a la creación de un frente en el que participaran diversas fuerzas políticas y sociales. Las organizaciones sociales influidas por los insurgentes se sumaron a los esfuerzos que otros grupos políticos de izquierda realizaban para integrar el Frente Democrático Nueva Guatemala FDNG. Esta organización fue sustancialmente hegemonizada por los grupos sociales vinculados a la URNG que obtuvieron no sólo el control del partido sino la mayoría de candidaturas a puestos de elección popular. Esta situación provocó algunos roces con las organizaciones de izquierda y sociales no vinculadas a la URNG¹⁵⁴ El FDNG obtuvo en esta primera participación electoral poco más del 7 % de las votaciones a la presidencia y constituyó una bancada de 6 diputados, hecho que mostró que, a pesar de la premura con la que se hizo la campaña y los pocos recursos con que se contó para realizar proselitismo existía un importante grupo de electores decididos a votar por una opción de izquierda.

Después de la firma de los acuerdos de paz y una vez constituida en partido político la URNG participó en las elecciones de 1999 en alianza con el partido DIA con quien conformó la Alianza Nueva Nación ANN a la que pertenecía también el comité pro formación de partido político Unidad de Izquierda Democrática UNID¹⁵⁵ algunos dirigentes del FDNG que decidieron mantenerse en la Alianza a pesar de la expulsión de este partido.

La expulsión del FDNG de la ANN se debió a disputas en torno a la distribución de candidaturas a diputados. Luego de su salida el FDNG decidió participar de manera individual en las elecciones obteniendo – ya sin el respaldo de la URNG – el 1.28% de votos para la presidencia del país.

La selección del candidato presidencial de la ANN fue menos conflictiva de lo que pudo esperarse dados los antecedentes del caso salvadoreño. Desde la dirección de URNG prevaleció la idea de que para insertar a los ex guerrilleros en el sistema político era necesario postular a un

candidato ajeno al partido, de preferencia cercano a los sectores empresariales que permitiera ganar la confianza de los diversos sectores sociales. Al interior de URNG se levantaron voces contrarias a este planteamiento, señalando la necesidad de posicionar a un candidato de la izquierda; sin embargo este debate no se dio de manera amplia y los antiguos comandantes guerrilleros decidieron realizar un pacto interno por el que se comprometían a no proponerse como candidatos a cargos de elección popular¹⁵⁶.

Después de sondear a posibles candidatos a la presidencia se postuló al ingeniero Alvaro Colom, un ex funcionario de gobierno vinculado además a empresas maquiladoras. Como candidato a la vicepresidencia fue propuesto el reverendo Vitalino Similox, dirigente de la Confederación de Iglesias Evangélicas de Guatemala y cercano a la URNG. Durante la campaña no se dieron mayores incidentes, con excepción de la decisión del candidato presidencial de no asumirse como persona de izquierda, lo que dio lugar a un discurso moderado que no fue capaz de enfrentar el radicalismo del discurso del candidato del FRG – partido de ultraderecha que paradójicamente se apropió de parte del discurso revolucionario -.

La ANN alcanzó en estas elecciones el 12 % de los votos a la presidencia, 9 candidatos fueron electos como diputados y 14 como alcaldes. Con estos resultados en su primera participación la URNG como parte de la ANN se ubicó como tercera fuerza política del país, aunque muy por debajo del FRG (47% de votos a la presidencia, 63 diputados y 160 alcaldes) y del PAN (30% de votos a la presidencia, 37 diputados y 106 alcaldes).

Con estos resultados la intención de la URNG fue consolidar y ampliar la Alianza Nueva Nación para estar en condiciones para disputar la presidencia del país. Las cosas no ocurrieron así. En menos de un año, el ex candidato presidencial Alvaro Colom anunció que abandonaba la ANN para formar su propio partido la Unión Nacional de la Esperanza UNE – que se convirtió en las elecciones del 2003 en la segunda fuerza política – y al poco tiempo la URNG sufrió la escisión de parte de su militancia que pasó a formar el partido independiente ANN.

Entre las elecciones de 1999 y 2003 la URNG perdió a su candidato presidencial, se dividió y no tuvo la capacidad de posicionarse como una fuerza política de oposición. Como lo señaló Urrutia “La URNG, por su parte, ha jugado un papel desdibujado, con una casi nula oposición al actual gobierno, queriendo ubicarse sin convicción como tercera fuerza equidistante de los poderes fácticos, lo que le ha restado protagonismo.” (2003:2)

En estas condiciones, la URNG decidió participar sin aliados en las elecciones de 2003, para las que postuló al ex comandante Rodrigo Asturias (Gaspar Ilom) a la presidencia del país y como vicepresidente a Pablo Ceto. Se trató de una propuesta encabezada por dirigentes revolucionarios con una larga trayectoria de lucha política pero que, en el caso de Asturias, después de la firma de la paz – en la que no pudo participar personalmente- perdió protagonismo público y, en el caso de Ceto era poco conocido fuera de los círculos de la izquierda. Con esta fórmula, la URNG no logró alcanzar el 3% de los votos y gracias a que obtuvo un diputado por Huehuetenango y otro por listado nacional logró mantener el registro como partido político.

Por su parte, el grupo escindido de la URNG que formó la Alianza Nueva Nación ANN (partido), intentó al principio de la campaña electoral impulsar la candidatura presidencial de Rigoberto Quemé Chay, ex alcalde de Quetzaltenango y reconocido dirigente maya, a través de

una coalición de partidos y organizaciones sociales. Este esfuerzo naufragó por las disputas en torno a las candidaturas a diputados por lo que la ANN decidió participar sólo con candidatos a diputados y alcaldes. La figura de Nineth Montenegro – reconocida dirigente social y diputada por el FDNG y la primera ANN – en ese momento dirigente del partido ANN fue determinante para que este partido lograra resultados importantes en la zona metropolitana de Guatemala, alcanzando en total 6 diputaciones (3 en el distrito central, 2 en municipios de Guatemala y 1 por listado nacional¹⁵⁷). A diferencia del caso salvadoreño, el grupo que rompió con la URNG logró sobrevivir su primera prueba electoral.

En la evaluación de las elecciones de 2003 la URNG señaló que este resultado “constituyó un revés de tal envergadura que nos lleva a poner a discusión concepciones, prácticas y métodos del funcionamiento político del partido.” En primer lugar responsabilizan a la “fracción” (el grupo de militantes y cuadros que abandonó la URNG para formar la ANN) del fracaso, señalan que “Con el apoyo de un sector del CACIF, la fracción intentó desprestigiar a URNG al publicitar sistemáticamente la supuesta alianza con el FRG; buscando proyectar ante el electorado una imagen de URNG como fuerza desarticulada sin perspectiva y sobre todo como un proyecto por el que no vale la pena votar. En su doble discurso la ANN se presentó ante ese sector como la ‘izquierda aceptable’ funcional al sistema para el gran proyecto del poder económico, y como tal, jugó el papel de neutralizador de la URNG.”

Resulta relevante señalar que en primera instancia URNG responsabiliza a la ANN de su fracaso electoral. Si se compara con la experiencia salvadoreña, a pesar de haber sufrido tres escisiones importantes en menos de diez años, nunca pasó por un desplome electoral como el que padeció la URNG. El problema de fondo que afrontó desde su incorporación este partido y que apenas quedó insinuado en el documento de evaluación ha correspondido a su incapacidad para posicionarse frente a la sociedad y a su potencial electorado como una fuerza de oposición a los gobiernos y al sistema económico y social prevaleciente en el país. Si durante los primeros años después de su inserción privilegió mantener una relación “cordial” con el gobierno de turno para impulsar los Acuerdos de Paz, frente a los incumplimientos debió haber asumido una posición más firme, distanciándose de las políticas gubernamentales. Esta indecisión e indefinición fue la que tuvo costos electorales ya que fueron los partidos de derecha y centro derecha los que asumieron ese rol.

En la evaluación mencionada se reconocen algunos errores del Comité Ejecutivo Nacional de la URNG entre los que están la sobre estimación del voto duro¹⁵⁸, del grado de organización del partido, y ofrecimiento de fondos. En el desarrollo de la campaña existió contradicción dentro del binomio presidencial “la problemática presentada como la crisis del binomio presidencial, residió en la contradicción entre la estrategia acorde a las condiciones del sistema político electoral y la posición del candidato vicepresidencial que exigió presencia en la imagen corporativa y en el desarrollo de las diversas fases de la campaña, acorde a la participación y la representatividad de los pueblos indígenas, problemática que no pudo resolver el CNC (comando nacional de campaña) y que se trasladó a la IE (Instancia Electoral) para su tratamiento.”

Igualmente se planteó un fracaso en la política de alianzas en tanto no se logró ir más allá de las bases históricas del partido debido entre otras cosas a cierto desprecio de la dirigencia de URNG al resto de expresiones de izquierda. (síntesis de la evaluación del CEN de nuestra participación en el proceso electoral de 2003, febrero 2004).

Desde fuera de la izquierda partidaria, algunos estudiosos como Figueroa han planteado que la principal lección de las elecciones de 2003 para la izquierda es que esta “tiene que renovarse, o se extinguirá”, desde su perspectiva “el centralismo, autoritarismo y doctrinalismo, han ido sacando a la izquierda de los puntos decisivos del debate político nacional” y, en el caso de URNG su fracaso “fue el resultado largamente labrado de una forma autoritaria y sectaria de concebir la política, que dio como resultado una larga cadena de desprendimientos, divisiones y deserciones... hoy hay todo un mundo de izquierda que no está con URNG”. (Inforpress; no. 1538 noviembre 2003).

A diferencia del ejercicio realizado para el caso salvadoreño, en Guatemala no se puede realizar –aún – un balance histórico de la participación electoral de la izquierda revolucionaria. En primer lugar, porque la URNG como tal sólo ha participado en dos procesos electorales, y en segundo, porque a diferencia del país vecino en Guatemala no existe hasta el momento un partido que unifique a los grupos dominantes y frente al cuál pueda contrastarse el desempeño de la izquierda. Desde la firma de la paz han gobernado tres partidos de derecha el PAN, el FRG y la coalición GANA. Hasta la fecha ningún partido se ha reelegido en el ejecutivo ni ha logrado construir un proyecto político capaz de lograr la hegemonía dentro de estos grupos.

Cuadro 3

Guatemala Porcentaje de votos en elecciones presidenciales

Partido	1995	1999	2003
FDNG	7.7	1.28	
URNG		12.36	2.58
PAN	36.5	30.32	8.35
FRG	22.04	47.72	19.32
GANA			34.32
UNE			26.36

Fuente: Tribunal supremo Electoral Guatemala.

Como se observa en el cuadro 3, el desempeño electoral de la URNG y de la izquierda influida por esta antes de 1996 (FDNG) tuvo, después de un crecimiento importante del 8 al 12% un retroceso grave que puso a la URNG al borde de perder el registro como partido político.

Un primer elemento que ha incidido en el desempeño electoral de la URNG ha sido el abordaje que este partido ha hecho de la cuestión electoral. Después de la incorporación de la URNG a la legalidad hubo quienes postularon que, así como en la guerra el elemento determinante había sido el militar, en la nueva lo electoral cumpliría este papel. Esta posición no fue compartida por una parte importante de la militancia del partido, discrepancia que ha quedado establecida en los dos congresos que ha realizado este partido.

En el documento marco del primer congreso se propuso que “La estrategia general de URNG en la etapa actual es política electoral. Y podemos resumirla como el conjunto de expresiones de luchas políticas y sociales que se articulan alrededor de la lucha electoral para conquistar el poder a diferentes niveles y consolidarlo en función de llevar a cabo su programa.

(...) URNG se plantea el objetivo de la toma del poder para impulsar las transformaciones estructurales de amplio beneficio popular y la construcción de la Nueva Nación. Nuestra actividad política tiene como perspectiva clara la participación y la victoria electoral en los distintos eventos y niveles con espíritu revolucionario. La lucha electoral será el factor principal de nuestra estrategia y alrededor de la misma URNG debe coordinar y combinar sus luchas y alianzas.” (URNG; 2001:19)

La formulación aprobada presenta cambios importantes sobre la ubicación de lo electoral: “La estrategia de URNG para la presente etapa es política, integrada por diferentes componentes, entre los cuales la lucha electoral es uno de los factores decisivos. Su objetivo es construir una fuerza social y de masas articuladas en una gran alianza nacional conjuntamente con las fuerzas progresistas del país que asegure – por medio de un proceso de lucha desde distintos y complementarios campos - una correlación de fuerzas favorables para limitar y desplazar del poder real a las clases dominantes, para impulsar las transformaciones revolucionarias que Guatemala necesita y construir la Nueva Nación. (...) La lucha electoral será un factor decisivo de nuestra estrategia y alrededor de la misma URNG debe coordinar y combinar esfuerzos.” (URNG; 2002:41)

Esas diferencias sutiles entre estrategia político – electoral y política a secas, así como entre factor principal y factor decisivo, no son menores en tanto que expresan la dificultad que ha tenido este partido para definir el papel de lo electoral – en el caso del FMLN la lucha electoral es considerada lucha revolucionaria – y cuál es la vía para alcanzar el poder, a pesar de la experiencia reciente de los partidos de izquierda en el sur del continente. De acuerdo con la evaluación de la participación electoral realizada por la propia URNG al interior del partido existen visiones distintas sobre la estrategia electoral. “Este fue un aspecto de fondo que tiene que ver con los objetivos que nos planteamos como partido, cuya principal expresión de lucha política es lo electoral, para el ejercicio del poder. Durante la campaña fue perceptible que esta definición no fue compartida por todos.” (Síntesis de la evaluación...URNG. 2004)

El segundo elemento que puede contribuir a entender los resultados electorales de la izquierda revolucionaria es el relativo a las condiciones objetivas de participación electoral. El marco establecido por la ley electoral y de partidos políticos es particularmente adverso para las organizaciones políticas que pretendan representar y actuar a favor de los intereses de las mayorías populares. La carencia de recursos, la ausencia de pluralidad de medios, la exclusión hasta 2003 de la población rural – en la que URNG tiene mayor presencia organizativa- son factores que no pueden obviarse para entender estos resultados electorales.

Para concluir la enumeración, un tercer factor que pueda contribuir a entender la debilidad política de la izquierda revolucionaria en la posguerra es la ausencia de un proyecto definido al cual enfrentar. Durante el período anterior los gobiernos militares y el ejército fueron ubicados como enemigos inmediatos, lo que facilitó la unidad de las organizaciones insurgentes en el impulso de la lucha armada contra este rival. En la posguerra, la derecha empresarial no ha logrado articular un proyecto político unificado; el PAN fue un interlocutor aceptable para cumplir los acuerdos de paz; frente al discurso antioligárquico del FRG la izquierda se dividió, algunos lo enfrentaron y otros apoyaron su enfrentamiento con algunos sectores empresariales; la GANA tampoco ha logrado articular un proyecto consistente, por lo tanto es difícil de enfrentar. Tal vez el surgimiento de una fuerza política que exprese claramente un proyecto de derecha

obligue a que la izquierda se unifique y actúe con coherencia. Mientras tanto, sus expresiones partidarias corren el riesgo incluso, de perder su registro electoral.

Las batallas de la paz

En este apartado se revisarán y discutirán cuáles han sido los avances y retrocesos de las antiguas insurgencias a partir de la suscripción de los acuerdos de paz y de su inserción en el sistema político. Lo primero que puede señalarse es que la propia realización de los procesos de paz y su éxito puede considerarse una victoria de carácter ideológica e histórica de los movimientos revolucionarios en estos países.

El triunfo de carácter ideológico y moral estuvo dado a partir del reconocimiento interno e internacional de que las causas de la lucha revolucionaria en estos países era justa y necesaria; de que la inhumanidad de las condiciones sociales y económicas produjeron el estallido revolucionario. Al suscribir y avalar los Acuerdos de Paz no sólo los actores políticos directamente involucrados sino las sociedades de estos países es su conjunto reconocieron lo inequitativo e injusto del viejo orden, condenando en el marco de las comisiones de la verdad establecidas en ambos países los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad contra la población civil al amparo de la represión contrainsurgente.

Se trata desde esta perspectiva además de una victoria histórica en la que la alianza entre las oligarquías agroexportadoras y las fuerzas armadas fueron – como se indicó – política y moralmente derrotadas sino además pasaron al inventario del pasado. En los últimos diez años el papel y el peso de los ejércitos se han visto sustancialmente reducidos al grado de parecer impensable algún golpe o asonada militar, mientras que las oligarquías agrarias prácticamente han desaparecido en su forma clásica en El Salvador y agonizan desde hace buen tiempo en Guatemala. La acción política y militar de las insurgencias contribuyó a partir la historia de ambos países en un antes y después que es y debe ser reconocido.

En el ámbito político el logro más visible fue el haber logrado ampliar el sistema político de manera que todas las expresiones políticas e ideológicas puedan competir – con las limitaciones que se han señalado antes – por el poder político del Estado. Con esto, se inició una senda irreversible hacia la democratización de estas sociedades, no significa esto que con la incorporación de las izquierdas revolucionarias al sistema político se haya instalado plenamente la democracia, sino que el camino hacia la misma y en un futuro hacia su profundización se ha iniciado y que su avance depende en buena medida de la acumulación de fuerzas que estos actores logren.

Siendo los Acuerdos de Paz el principal instrumento construido por las insurgencias para iniciar los procesos de cambio en sus sociedades, los principales esfuerzos políticos durante su período de incorporación se orientaron al cumplimiento de los mismos. En este esfuerzo sin embargo se encontraron diferencias importantes.

Como se señaló, en los acuerdos suscritos en El Salvador, el FMLN priorizó su inserción en el sistema político en las mejores condiciones posibles: garantizando la plena subordinación del poder militar al civil incluyendo la depuración de sus oficiales; la desarticulación de los aparatos represivos y la creación de una nueva policía nacional civil en la que se incorporaron

miembros del Frente; garantías relativas de la independencia del poder judicial y del tribunal electoral. La agenda económica y social se trasladó a un Foro sobre el entendido de que la propia participación del FMLN implicaría cambios y transformaciones en esta materia. Los compromisos asumidos por el gobierno deberían cumplirse en un plazo menor a un año, tiempo que duraría la desmovilización de las unidades del Frente de manera que la entrega de armas estuvo todo el tiempo condicionada y modulada de acuerdo con el grado de cumplimiento de los compromisos. Una vez cumplidos aquellos compromisos que podían cumplirse en los 270 días establecidos en los acuerdos el FMLN orientó sus baterías hacia otros temas y utilizó mecanismos de presión para exigir al gobierno lo acordado.

El Acuerdo Cronograma suscrito por el gobierno de Guatemala y la URNG establecía una distribución de compromisos en tres períodos distintos, el último de los cuáles trascendía los tres años. Esto era coherente con el tipo de acuerdos suscritos que, como se vio, abarcaban cambios sustanciales para la sociedad, la economía, la cultura y la política de este país pero que requerían de un esfuerzo humano que los militantes de URNG exclusivamente no estaban en condiciones de realizar en tanto que simultáneamente estaban inmiscuidos en su propia incorporación individual – de la cuál dependía su propia subsistencia – y en la construcción del partido URNG que, de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos debía cumplir con un conjunto de requisitos organizativos.

El FMLN la principal fuerza de oposición en El Salvador

Desde su incorporación a la legalidad el FMLN se ha convertido en la principal fuerza de oposición no sólo a los sucesivos gobiernos de ARENA (Cristiani, Calderón Sol, Flores y Saca) sino también al modelo económico y social salvadoreño. A partir de la hegemonía de la Corriente Socialista Revolucionaria dentro del Frente, este partido no sólo ha reasumido su carácter socialista sino que se ha postulado como una fuerza antisistema¹⁵⁹; en palabras de uno de sus dirigentes: “Nosotros creemos que es necesario cambiar el sistema al socialismo, que es cambiar la esencia del modelo. En el marco del período histórico del FMLN, este período corresponde al de la búsqueda de la democracia, no estamos planteando para mañana un gobierno socialista.” (Entrevista Ramiro Vázquez; comisión política FMLN)

No obstante la necesidad y la importancia de las definiciones políticas e ideológicas, estas por si mismas son insuficientes en un contexto de acción política delimitado en el que la disputa permanente – y las necesidades e intereses de los electores- no están centrados en el cambio del sistema, sino en los problemas que agobian cotidianamente a la ciudadanía. En esto los resultados del FMLN han sido dispares. En los gobiernos municipales el FMLN ha demostrado no sólo ser un buen administrador, sino también ser capaz de mejorar algunos aspectos de las condiciones de vida en los municipios que gobierna. El hecho de conservar durante cuatro períodos la alcaldía de San Salvador ha tenido un efecto demostrativo en torno a lo que implica el gobierno local del FMLN. Pero los gobiernos municipales enfrentan límites estructurales reales que impiden realizar desde dicho ámbito el programa de transformaciones profundas que el Frente plantea.

En el legislativo, a pesar de que en las últimas elecciones el FMLN ha sido el partido más votado y con mayor número de diputados, la propia consistencia y coherencia de sus planteamiento le ha imposibilitado concertar alianzas en un marco de polarización en el que los

partidos ubicados en el centro no sólo son minoritarios sino que no expresan un proyecto político, de manera que prefieren acuerdos coyunturales con ARENA, lo que les permite algunos beneficios, antes que lograr acuerdos con el FMLN que terminarían fortaleciendo a la izquierda.

Esta situación ha definido el alcance de la acción política del Frente. Así, en el cumplimiento de los acuerdos de paz el FMLN enfrentó no sólo la falta de voluntad del gobierno de cumplir los compromisos, sino que paralelamente a las negociaciones y a la implementación de acuerdos se impulsó un programa de ajuste económico tendiente a liberalizar la economía y reducir al estado que no sólo se contraponía sino que imposibilitaba impulsar un modelo de desarrollo económico y social distinto. Además, como se indicó antes el tema económico era relativamente débil en los acuerdos de Chapultepec, ya que el establecimiento de el Foro de Concertación Económica no garantizaba ni los resultados de la mesa ni que estos fueran vinculantes. La apuesta del FMLN fue jugarse todo a su capacidad para derrotar electoralmente a ARENA, lo que garantizaría cumplir los acuerdos y evitar que se consolidara el nuevo modelo económico. Los resultados de las elecciones del siglo (1994) no fueron los esperados por el Frente, que pasó los siguientes años en una disputa interna en la que concentró buena parte de sus energías.

Luego de la etapa del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la acción política del FMLN se ha orientado en primera instancia a disputar por la vía electoral espacios de poder importantes que se expresan en el continuo crecimiento del número de alcaldías bajo su administración así como su presencia en la Asamblea Legislativa.

En esta última, debido a un diseño institucional que favorece a los partidos minoritarios, el Frente no ha podido construir mayorías legislativas, por lo que ha tenido que librar batallas desde la oposición en oposición a las medidas orientadas a transformar el modelo económico de este país.

El FMLN se ha opuesto al desmantelamiento del Estado salvadoreño. Logró que el legislativo derogara el decreto de privatización de ANTEL – la empresa de telefonía pública -, aunque después no pudo evitar que ARENA le arrebatara la mayoría legislativa para alcanzar este objetivo. Frente al intento de reestructurar los servicios de salud, el partido de izquierda apoyo abiertamente al gremio médico, logrando el apoyo de importantes sectores medios.

Este partido se opuso igualmente a la dolarización de la economía y a la suscripción del Tratado de Libre Comercio. En el primer caso, cuando el FMLN logró articular una oposición fuerte desde 76 alcaldías, ocurrió el terremoto que impidió que la movilización social obligara a la vuelta del Colón (moneda de El Salvador); en el segundo caso a pesar de las protestas populares ARENA logró negociar la mayoría parlamentaria suficiente para lograr esta aprobación. Estas experiencias llevaron a este partido a privilegiar en su estrategia política y electoral alcanzar y mantener “la llave” de la mayoría parlamentaria (un número de diputados que impide que el resto del parlamento alcance mayorías calificadas) con lo que obliga a ARENA a negociar ciertos temas directamente con el Frente lo que lo pone en posición de alcanzar sus propios objetivos.

Otro aspecto importante en la estrategia del FMLN ha sido reconstruir sus relaciones con las organizaciones sociales. En los años posteriores a la firma de la paz el partido pasó por una

suerte en ensimismamiento político a partir de concentrar sus energías en su constitución como partido político y, luego de las elecciones de 1994 en ejercer los gobiernos municipales y trabajar en la Asamblea Legislativa.

Después de las elecciones de 1999 y la posterior fractura al interior del frente “... se hizo una reunión ampliada del partido donde se abordó entre otros el tema de la relación entre dicha organización política y el movimiento de masas. Y se decidió hacer un gran viraje hacia una reinserción del FMLN en el movimiento popular: en ese momento, el partido resolvió definirse a sí mismo como ‘la más grande organización social del país registrada como partido político.’” (Harnecker; 2003:2)

Para llevar a la práctica esta decisión el FMLN se involucró en el movimiento contra la privatización de la salud, alcanzando acuerdos y logrando coordinaciones importantes con este gremio, al grado que el presidente del Colegio de Médicos de El Salvador fue postulado a la vicepresidencia del país en las elecciones de 2004.

Con sus logros y fracasos, el FMLN es hoy un referente fundamental de la política salvadoreña. Dado el bipartidismo polarizante que se ha instalado en el sistema político de dicho país, el Frente es una parte sustancial y determinante del mismo. Ineludiblemente, las políticas públicas tienen que ser concertadas con este partido de manera que en los esfuerzos de concertación convocados por el gobierno ha privilegiado los temas de pobreza, salud, desempleo, agua, salarios, reforma fiscal, transporte y otros de interés social.

En palabras de Handal, la estrategia del FMLN va más allá de ganar las elecciones presidenciales: “Para nosotros es indispensable llegar al gobierno, pero no es suficiente; es necesario preparar las condiciones que hagan posible que emprendamos verdaderas transformaciones estructurales, capaces de superar las causas que dan origen a la injusticia social, a la pobreza y al sistema político autoritario. Me estoy refiriendo a ganar el corazón y la mente del pueblo, elevar su conciencia revolucionaria mediante una intensa y sistemática lucha de ideas y propuestas concretas de soluciones a sus problemas y sufrimientos, construyendo una extensa, ramificada y poderosa organización popular, concertando y movilizándolo un amplísimo sistema de alianzas sociales y políticas, vinculando profundamente al FMLN con un creciente movimiento social; en fin, logrando un gran vuelco de la correlación de fuerzas a nuestro favor, como la fuerza revolucionaria capaz de transformar el país para el bien de la gente.” (2004:16)

Guatemala: la lucha por los Acuerdos de Paz

Tanto por la amplitud de los compromisos establecidos en los Acuerdos de Paz como por el cronograma de su cumplimiento, buena parte de los esfuerzos iniciales de la URNG se orientaron hacia el cumplimiento de los acuerdos de Paz. Al respecto, la mecánica para el cumplimiento establecida en los propios acuerdos incluyó la creación de una “Comisión de Acompañamiento” integrada por gobierno, representantes de la sociedad civil y la propia URNG que tenía a su cargo el monitoreo y seguimiento de estos acuerdos; igualmente, para el cumplimiento de varios compromisos específicos se estableció la creación de comisiones y comisiones paritarias en las que tendrían participación representantes de las organizaciones sociales.

El cumplimiento de los Acuerdos de Paz presentó a la URNG el reto de lograr avances simultáneos e integrales en los distintos temas y al mismo tiempo la posibilidad de articular un movimiento nacional que permitiera coordinar en los distintos espacios creados por los acuerdos y le diera continuidad a la coalición transicional que se estructuró en la etapa final de las negociaciones.

Sin embargo, la URNG no contaba con "... un plan estructurado de cómo desarrollar una serie de acciones y actividades en dirección a que el gobierno de Arzú y las instituciones del Estado se sintieran presionadas para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz". (Monsanto; 2000:17) Además, en un plazo relativamente corto la URNG rompió sus relaciones orgánicas con la mayoría de las organizaciones sociales cercanas, iniciando un proceso de aislamiento que la terminó debilitando en todos los planos.

En el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, dos fueron las coyunturas en las que la URNG invirtió su capital político para lograr avances en los mismos: las reformas constitucionales¹⁶⁰ y el pacto fiscal. Como se indicó antes, algunos de los cambios contemplados en los Acuerdos de Paz, particularmente en el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas requerían reformas constitucionales. La aprobación de estas reformas fue sometida a referéndum nacional en mayo de 1999¹⁶¹.

El ejecutivo asumió el compromiso de presentar al legislativo la iniciativa de ley para las Reformas Constitucionales sesenta días después de la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Sin embargo, la iniciativa fue presentada hasta el 15 de mayo de 1997. La propuesta contemplaba modificaciones a 11 artículos de la Constitución. Las leyes vigentes establecen un procedimiento para la aprobación de las reformas constitucionales por parte del Congreso de la República. La etapa de conocimiento y discusión en el congreso constituyó el obstáculo temporal más importante para su aprobación. Se estableció una "comisión multipartidaria" en la que participaron delegados de todos los partidos con representación parlamentaria que empezó a debatir y a ampliar las reformas. Catorce meses más tarde, el Congreso aprobó la modificación de cincuenta artículos constitucionales en lugar de los once originalmente propuestos.

Durante los catorce meses que duró este proceso, la importancia social y política de los acuerdos de paz en general y de las reformas constitucionales en particular disminuyó. Esto se debió a que ni la URNG ni las organizaciones sociales participantes en el cumplimiento lograron construir una estrategia integral a través de la cual se lograra una efectiva apropiación popular de los Acuerdos de Paz. Actores fundamentales como los medios de comunicación, las universidades y los maestros para mencionar concretamente a algunos, no desarrollaron acciones positivas, concretas y efectivas para lograr una participación amplia en el cumplimiento de los acuerdos. En ese marco, las acciones de divulgación tuvieron un impacto muy relativo, ante todo por la abstracción que se hizo de los acuerdos.

A lo anterior, puede agregarse que, las condiciones concretas y materiales de existencia centran la preocupación de la mayoría de la población en los temas de seguridad, costo de vida y empleo. El segundo semestre de 1998 y el primero de 1999 se caracterizaron por la recesión económica. La crisis financiera, la caída del quetzal ante el dólar influyeron en el cierre de numerosas empresas. Esto incidió en el aumento de la tasa de desempleo, lo que sumado al

aumento al costo de la vida, condujeron a profundizar la ya difícil situación económica del país, haciendo que las preocupaciones de los ciudadanos se centraran en los problemas antes citados.

Paralelamente, se constituyó una amplia coalición de grupos opositores al cumplimiento de los Acuerdos de Paz y a la aprobación de las consultas populares. Esta coalición estaba conformada por grupos anarco capitalistas que en su cruzada por dismantelar el estado se oponían a que el mismo adquiriera nuevas atribuciones; anticomunistas de viejo cuño; denominaciones protestantes que se oponían al reconocimiento de la espiritualidad maya a la que calificaban de ritos satánicos; y, otros grupos conservadores. Con el apoyo de los medios de comunicación lograron desarrollar una campaña sistemática en contra de la consulta que tuvo impacto sobre todo en las zonas urbanas.

Otro de los factores que incidieron en la “devaluación” de los acuerdos de paz fue lo que podría llamarse la relativa cupularización del proceso: la Comisión de Acompañamiento creada por los Acuerdos de Paz, la Secretaría de la Paz del gobierno, la MINUGUA y algunas organizaciones sociales se involucraron de lleno en el cumplimiento de Acuerdos. Sin embargo, dejaron de hacer un trabajo efectivo de integración de otros sectores y personas al proceso. A esto se suma una campaña de desprestigio que, sin estar desprovista de argumentos, denunciaba una supuesta alianza entre el partido de gobierno (PAN) y la URNG en cuanto a que, por un lado el partido de gobierno impulsó políticas de ajuste estructural que afectaban la misma sobrevivencia de la población de escasos recursos, mientras que la antigua guerrilla no asumía una posición beligerante de oposición.

Este resultó ser un error estratégico de la URNG, que prefirió concentrar los esfuerzos por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz no en la promoción de la movilización y las demandas sociales sino en privilegiar la relación directa e íntima con el gobierno en la Comisión de Acompañamiento¹⁶². Ante los frecuentes incumplimientos gubernamentales, la URNG asumía trabajos de gestión e incluso de búsqueda de recursos de la mano del gobierno sin pronunciarse de manera contundente ante la situación. En el caso de los acuerdos incumplidos en los tiempos estipulados por el acuerdo Cronograma, la URNG aceptó renegociar un nuevo calendario de los mismos sin dimensionar que las medidas dilatorias expresaban y expresaron la falta de voluntad de cumplir los compromisos.

Adicional a lo anterior, la Consulta Popular se llevó a cabo seis meses antes del proceso de elecciones generales. Para los partidos mayoritarios, el PAN y el FRG, el riesgo de comprometerse plenamente con alguna de las alternativas los enfrentaba a un proceso de desgaste que no estuvieron dispuestos a afrontar. Por su parte, la URNG estaba en el tránsito de convertirse en partido político y encarar su primera participación electoral, por lo que descuidó la consulta en si misma.

El domingo 9 de mayo de 1999 la mayoría de los ciudadanos guatemaltecos que acudieron a los centros de votación se pronunciaron en contra de las Reformas Constitucionales. El manejo que de esta consulta hicieron los medios de comunicación y los sectores más conservadores del país fue presentarla como un plebiscito en torno a los acuerdos de paz en su conjunto, logrando articular una movilización de los sectores medios y grupos dominantes en contra de los mismos.

En ningún documento público la URNG realizó una valoración objetiva del significado profundo de estos resultados, de manera que no se modificó ni la estrategia para cumplir los acuerdos de paz – que siguió centrada en la negociación directa con el gobierno – ni la estrategia política de la URNG – que no contó con el respaldo de los sectores medios urbanos.

El siguiente gran momento en la lucha por el cumplimiento de los acuerdos de paz correspondió a la negociación del Pacto Fiscal (1998-2000) orientado a alcanzar las metas de recaudación tributaria establecidas en los acuerdos de paz (12% respecto al Producto Interno Bruto). Desde la perspectiva de URNG el pacto fiscal era “... la gran oportunidad de que, por primera vez en la historia de Guatemala, no sea exclusivamente el gran capital el que defina la política tributaria, el tipo de Estado, la orientación del gasto y las reglas del juego, incluyendo la normatividad jurídica. Este foro previsiblemente eliminaría la exclusividad del debate, de las negociaciones sobre las cuestiones fiscales, que no sean solamente esos dos actores, gobierno y sector privado, los únicos que discutan, sino que también participe más activamente el Congreso y otros sectores de la sociedad civil.” (URNG, 1999, citado por Nuila Hernández; 2004:32) Para ello, nuevamente desde la Comisión de Acompañamiento la URNG desempeñó un papel protagónica para promover la negociación entre las organizaciones sociales y las asociaciones empresariales.

Las organizaciones participantes en la discusión del pacto se aglutinaron en dos polos, el Colectivo de Organizaciones Sociales COS y la articulación empresarial formada por el CACIF, CIEN y Liga Pro Patria. En el COS en el año 2000 estaban aglutinadas las organizaciones sociales todavía influidas por la URNG¹⁶³ y otros grupos cercanos. De acuerdo con Palencia las condiciones de negociación entre ambos polos fueron desiguales: “El CACIF, como comité coordinador empresarial, contaba con una comisión de finanzas con asesores expertos en el tema y con experiencia en el manejo de sus intereses fiscales frente al poder público, tenía también claridad e los límites para ceder, y además asumía una posición política de alto interés para negociar alianzas sociales y generar opinión pública con el fin de enfrentar, si fuera necesario, al gobierno del FRG, frente al cual notoriamente mostraba distancia debido a que este, desde el inicio, asumió una posición antioligárquica y populista. El COS, por su parte, mostró muchos desbalances internos: no todas las instancias miembros tenían igual dominio del tema, representaban intereses políticos e ideológicos diferentes y no poseían como conjunto experiencias de negociación fiscal. (...) Por otra parte, al interior del COS era notorio que la mayoría de organizaciones tenían vínculos directos o indirectos con la URNG. YY en tanto que la URNG también estaba en la CAAP y asumía allí una posición de coordinación, desde el principio se mostró una codependencia entre el accionar de la URNG adentro de la CAAP y el accionar de sus organizaciones afines adentro del COS.” (Palencia; 2002:141)

Desde esta posición doble posición – coordinadora y parte del proceso- la URNG promovió la suscripción del Acuerdo Político ante la presión del gobierno del FRG de impulsar una reforma tributaria de manera independiente y la amenaza de los empresarios de abandonar el espacio. Desde la perspectiva de algunas de las organizaciones sociales desde la CAAP la URNG presionó para que el COS aceptara este acuerdo, aún manifestando desacuerdos.

Finalmente, el acuerdo político no fue cumplido en los términos acordados y el gobierno optó por implementar sólo el aumento del IVA, lo que golpeó la economía de los sectores

populares. En este caso, la URNG pecó nuevamente de exceso de confianza y, quedó la imagen de haber realizado el trabajo sucio del gobierno¹⁶⁴.

En su balance sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Paz realizados en 2004 la URNG señalaba que "... con la firma de la paz se inició (por parte del gobierno) un ciclo permanente de aceptación retórica de los compromisos negociados y de aplicación continua de mecanismos de evasión que finalmente han significado su falta de cumplimiento en los aspectos sustantivos. Esta actuación se explica en lo fundamental porque los Acuerdos de Paz además de plantear compromisos de carácter operativo, propugnaban por el establecimiento de un conjunto de reformas políticas, sociales, culturales, económicas y fiscales que siguen siendo indispensables para resolver los factores causales del conflicto armado y posibilitar al país encaminarse en el proceso de desarrollo y de su inserción justa y equitativa en el concierto internacional."

Desde la óptica de la URNG la lucha por los acuerdos de paz es presentada como una batalla perdida en la que, por un lado, se asume la responsabilidad que este partido tuvo en esto por su pasividad ante los distintos gobiernos y al mismo tiempo se reconocen los costos políticos que esto ha tenido. De acuerdo con Pablo Ceto, dirigente de este partido y ex candidato a la vicepresidencia del país: "En estos últimos nueve años, después de la firma de la paz, la URNG ha sido un movimiento político que ha tratado de contribuir para que los gobiernos de turno cumplieran con lo que establecen los Acuerdos de Paz. URNG se planteó como una política no intervenir, no presionar, no forzar, sino confiar a que los grupos políticos que administraran el Estado después de la firma de los Acuerdos de Paz pudieran cumplir con los compromisos de Estado que significaban los Acuerdos de Paz. URNG ha sido un movimiento político revolucionario con una amplia cancha de tolerancia, de espera, que ha apostado a lo que se dice comúnmente dar un tiempo prudente para que las fuerzas políticas y económicas que asuman el control del Estado cumplan con los Acuerdos de Paz. Eso ha sido URNG y eso le ha significado costos políticos que lo llevan a tener un espacio bastante reducido, digamos, en su presencia política en el país, pero con un sustento estructural organizativo y una proyección política, sobre todo en el área rural y en comunidades indígenas, bastante consistente que no es percible ni es descubierto por los medios de comunicación y que no llega a ser una amenaza para los grupos económicos que gobiernan el país. En general, la visión política que prevalece es que la URNG es un grupo minoritario, marginal, inofensivo, para la clase política del país." (Entrevista a Pablo Ceto realizada por Byron Barrera, agosto de 2005)

Las valoraciones negativas en torno al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, el revés electoral de la URNG en las elecciones de 2003 y la ruptura con el grupo que formó la Alianza Nueva Nación ANN ha puesto a la izquierda revolucionaria en una de las situaciones más difíciles por las que ha tenido que atravesar. Los revolucionarios guatemaltecos se encuentran en una situación comparable a la que vivieron a finales de la década de 1960: derrotados militarmente, reducidos a su mínima expresión, divididos y dispersos.

Dentro de esta división y dispersión pueden identificarse por lo menos cuatro agrupamientos importantes que podrían contribuir a la reconstrucción de una alternativa revolucionaria en el país. La llamada izquierda social en Guatemala está constituida por una pléyade de organizaciones sociales y organismos no gubernamentales que a lo largo y ancho del país impulsan propuestas y proyectos organizativos orientados a la transformación social pero limitados por su propio ámbito de acción. Las organizaciones campesinas son en términos

cualitativos y cuantitativos las más importantes de esta izquierda, y su planteamiento de reforma agraria integral es radicalmente revolucionario. En distintos momentos se ha planteado un acercamiento o convergencia política – social que permita la disputa del poder en el terreno electoral, aunque hasta el momento esto no se ha materializado.

La Alianza Nueva Nación ANN, el partido formado a partir del desprendimiento de la URNG logró superar su primera participación electoral, y actualmente parece impulsar una estrategia de pragmatismo político que le permita estar en condiciones de competir en las siguientes elecciones. Desde la perspectiva de los dirigentes de este partido, la lucha electoral es determinante para la acumulación de fuerzas, por lo que lo que corresponde hacer es crear las mejores condiciones para esta participación, que en las condiciones actuales está en buena medida determinada por la posibilidad de movilizar recursos para la campaña. Esto ha llevado a este partido a impulsar un proceso de apertura y de incorporación de personas, grupos y organizaciones que no necesariamente pertenezcan al campo de la izquierda revolucionaria¹⁶⁵; y a fortalecer sus relaciones con la izquierda latinoamericana, intentando convertirse en el referente nacional de la Revolución Bolivariana de manera equivalente al FMLN y al FSLN. El resultado de este proceso ha sido contradictorio en tanto que en el plano internacional se ha ubicado como un referente para la izquierda en el país la línea de apertura hacia otros sectores ha provocado un distanciamiento de la ANN del resto de organizaciones de izquierda y reducido las posibilidades de una reunificación o coalición electoral con la URNG.

Por su parte, el grupo encabezado por Nineth Montenegro que se separó de la ANN impulsa la construcción de un partido de centro izquierda denominado Encuentro por Guatemala. La constitución de este nuevo partido ha sido acompañada de una campaña de ataques en las que se ha acusado a este comité pro formación de partido político de ser apoyado y financiado por una de las corporaciones empresariales más importantes del país y de la región – el grupo Gutiérrez Bosh -. Estos señalamientos han sido desmentidos de manera contundente por Montenegro quien además ha hecho públicas las finanzas de este esfuerzo. El EG de acuerdo con algunos de sus dirigentes pretende ocupar el espacio de la izquierda socialdemócrata, es decir, una posición moderada que no propone grandes transformaciones sino reformas limitadas al estado. En este caso, al momento de ser inscrito este partido disputará el espacio político al partido de Alvaro Colom, la UNE, que recientemente se definió como socialdemócrata y realiza los trámites para incorporarse a la Internacional Socialista.

La URNG parece encontrarse en un momento de definiciones. Los principales liderazgos históricos de este partido encarnados en la comandancia general de la URNG están fuera del mismo (los comandantes Rolando Morán y Gaspar Ilom han fallecido; Pablo Monsanto renunció a la URNG y Carlos González se retiró) por lo que tiene la posibilidad de impulsar un proceso de renovación no sólo de dirigentes, sino de su estrategia política y electoral.

Sobre el primer punto, tanto por fallecimiento como por abandono del proyecto de varios de sus dirigentes, la URNG ha promovido nuevos liderazgos a la conducción de este partido. Sin embargo, el simple cambio de personas no garantiza una modificación de la dirección del proyecto. Este es probablemente el aspecto clave que definirá el futuro de la URNG. Persistir en la estrategia de persistir es insuficiente. La resistencia fue el único recurso que la URNG tuvo para soportar las ofensivas militares, sin embargo, en política dominada por la disputa electoral, la resistencia pasiva sólo conduce a la marginalidad política. La URNG es, efectivamente una

fuerza política que existe y que es una prueba de la pluralidad política en el país pero que, en este momento no es una opción de poder ni es una amenaza al sistema. El sólo mantenerse con una estrategia de guerra popular prolongada – adaptada a la lógica democrática - en la que se acumulen fuerzas para después librar la batalla decisiva ha producido el efecto contrario al deseado: la URNG se ha reducido política y electoralmente, al grado que corre el riesgo de desaparecer.

A pesar de esta difícil situación, URNG ha hecho avances importantes en su definición ideológica y en asumir en el discurso y la práctica el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la sociedad guatemalteca. La proyección de estos planteamientos podría permitirle a este partido dar el salto adelante que le permita convertirse en una alternativa política real.

Guatemala y la izquierda revolucionaria requieren que con creatividad y audacia estos partidos sean capaces de impulsar un proyecto político – que no es exclusivamente partidario – que articule los procesos políticos y organizativo que se desarrollan en el país y permitan construir una alternativa política y electoral que desde el sistema democrático impulse las transformaciones que el país necesita.

CONCLUSION

Menos que una conclusión en el sentido estricto del término, en este capítulo final se presentan un conjunto de consideraciones que buscan contribuir a entender el desarrollo de las izquierdas revolucionarias de Guatemala y El Salvador a partir de revisar los ejes de discusión propuestos y que orientaron la investigación: la relación de los partidos y sus entornos; las diferencias al interior de estas izquierdas, y, la discusión en torno a la democraticidad de los sistemas frente o dentro de los cuáles han actuado.

Sobre el primer aspecto, una lectura mecánica de este proceso puede conducir a señalar que fueron las condiciones autoritarias, represivas y excluyentes prevalecientes en estas sociedades y particularmente en sus sistemas políticos las que provocaron la expulsión de los partidos y expresiones de izquierda y revolucionarias, condujeron a la lucha armada y concluyeron con acuerdos de paz que establecieron las condiciones para la reinserción de estos grupos. Desde esta óptica la zaga de las insurgencias centroamericanas consistiría en un largo recorrido para instaurar sistemas políticos democráticos en los que estas pudieran insertarse.

Lo cierto es que estos procesos ocurrieron de una manera mucho más compleja en los que interactuaron las condiciones y características históricas de estas sociedades; un entorno internacional cambiante y en general adverso para las fuerzas progresistas; y, las distintas formas de interpretar y enfrentar esta situación por parte de los grupos de izquierda. Para esto puede proponerse la identificación de cuatro momentos determinantes en este proceso y que permiten captar esta interrelación, pero que, por el hecho de ser generales limitan el análisis de las particularidades. Estos momentos, coyunturas o períodos críticos son los de fundación, expulsión, respuesta a la expulsión y reinserción.

Las organizaciones de izquierda (entendiendo por estas a los grupos socialistas, comunistas y anarquistas) surgieron en estos países en los años 20 del siglo pasado, en contextos

sociopolíticos premodernos – para denominarlos de alguna manera – en los que la mayoría de la población de estos países estaba social, económica y políticamente excluida. Estas organizaciones no surgieron de un movimiento obrero desarrollado, sino de grupos de artesanos y educadores cuyas bases sociales podrían ser las masas de campesinos empobrecidos y cuyo adversario no era una burguesía interesada en desarrollar mercados internos y pactar con los trabajadores sino oligarcas, señores de la tierra asociados a los ejércitos de estos países que estaban dispuestos a mantener el estado de cosas a sangre y fuego; y lo hicieron como se mostró en El Salvador en 1932. La violenta represión anticomunista de la tercera década del siglo XX no los expulsó de un sistema político – en ese momento inexistente- sino vedó la posibilidad de construir un orden político medianamente democrático.

Mientras en que en El Salvador el PCS pasó a la clandestinidad desde la década de 1930 hasta finales del siglo; en Guatemala el primer partido comunista fue destruido por la represión, y el segundo surgió durante la década revolucionaria. La “expulsión” de estos partidos se dio en dos momentos diferentes; en el caso salvadoreño como se indicó, la represión de la rebelión campesina de 1932 fue determinante en el devenir de este partido, que tuvo que forjarse y desarrollarse desde ese período en la clandestinidad. En Guatemala el PGT pasó de ser parte de la coalición oficial a ser un partido proscrito y perseguido por la contrarrevolución. En este caso, el entorno dominado por la guerra fría resultó ser determinante no sólo para la persecución de los comunistas sino para abortar las posibilidades de construir un orden democrático en este país.

La respuesta a la expulsión y cierre del sistema político se fue diferenciando en el tiempo. Inicialmente tanto el PCS como el PGT definieron la prioridad de la lucha por la democracia que les permitiera insertarse en el campo de la lucha política y, a partir de alianzas con otros grupos y fuerzas sociales – incluyendo posibles acuerdos con la “pequeña burguesía” y “burguesía”- concluir con las tareas de la “fase democrática burguesa” que posteriormente permitiera avanzar al socialismo. El PCS fue consistente con esta propuesta hasta 1979, utilizando para impulsar esta estrategia partidos y frentes de masas de fachada. El PGT inmediatamente después de la intervención norteamericana se propuso impulsar una estrategia similar, intentar pactar con los “partidos de la burguesía” para crear condiciones democráticas.

Desde 1960, a partir del triunfo de la revolución cubana, al interior del PGT se desarrolló una corriente interna que postuló el impulso de la lucha armada como eje de la estrategia revolucionaria. Hasta las campañas contrainsurgentes de finales de la década de 1970 – que mostró que en definitiva no era posible impulsar formas de lucha legales – el movimiento revolucionario guatemalteco quedó marcado por la contradicción entre los que planteaban el impulso de las formas de lucha no violentas para construir un orden democrático y quienes impulsaban la lucha armada para impulsar una revolución socialista – cuyo modelo era Cuba -. Esto explica la coherencia y consistencia de grupos del PGT que intentaron acuerdos con los partidos que llevaron a la presidencia a Méndez Montenegro; el apoyo parcial al Frente Nacional de Oposición en 1974; y, la relación que algunos miembros de este partido mantuvieron con el vicepresidente Villagrán Kramer hasta 1978. Por su parte, el programa de la izquierda armada no era “abrir” el sistema político, sino construir un orden político distinto, una democracia popular o revolucionaria.

En el caso salvadoreño el recurso a la lucha armada se empieza a plantear formalmente hasta principios de la década de 1970 y es hasta 1979 que tanto las organizaciones guerrilleras

como el PCS definen que esta es la única vía para enfrentar la represión gubernamental. Parte de la izquierda socialdemócrata y socialcristiana aglutinada en el FDR apoyó esta decisión durante buena parte del conflicto. En ambos casos el viraje fue no sólo en torno a la forma principal de lucha, sino de los objetivos de esta. Tanto en Guatemala como en El Salvador, la valoración en torno al recurso de la lucha militar por parte de la izquierda tiene que tomar en cuenta que, por un lado, la violenta represión gubernamental no sólo contra las organizaciones de izquierda sino contra el conjunto de organizaciones sociales y en el caso salvadoreño la propia iglesia católica no permitieron visualizar otra opción para darle continuidad a la acción política y para la sobrevivencia de las organizaciones y sus dirigentes. Puede pensarse que, a fines de la década de los setenta y principios de los ochenta el entorno inmediato impuso la violencia como la única forma para dirimir el conflicto político.

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es que las propias condiciones económicas y sociales de la mayoría de la población eran favorables a una rebelión. No se trató sólo de que la respuesta represiva coincidiera con la decisión de las organizaciones de impulsar la guerra revolucionaria, sino que existió entre sectores importantes de la población urbana y rural la percepción positiva de la opción revolucionaria.

El momento de reinserción estuvo definido por cambios importantes en el ámbito internacional, regional y de las aspiraciones y planteamientos de los grupos insurgentes. La desaparición del campo socialista, la derrota sandinista y el aislamiento de Cuba fueron elementos determinantes para este viraje. Asimismo la imposibilidad de resolver militarmente el conflicto, el agotamiento por la guerra, y los cambios sociales que ocurrieron en estas sociedades contribuyeron a que por un lado las elites dominantes impulsaran lo que se ha denominado una trayectoria de transición democrática desde arriba – que se sustentaba en la renovación de un pacto de dominación y exclusión – y que los movimientos revolucionarios promovieran ya no una revolución socialista sino la democratización de estas sociedades. Esto se tradujo en una trayectoria de democratización desde abajo que permitió que los grupos excluidos participaran – tardía y de manera desventajosa – en este proceso. La forma en que estas trayectorias se definieron en cada país fue distinta: en El Salvador una coalición transicional vertical dirigida por el FMLN y en Guatemala una coalición más horizontal articulada alrededor de la URNG y sus organizaciones pero que iba mucho más allá de esta. Esto permite resaltar el aporte – distinto para cada país – que los insurgentes hicieron para construir un orden democrático, que trasciende los aspectos formales y procedimentales para abarcar la necesidad de construir un pacto político y social más amplio y que parte del reconocimiento de las profundas injusticias y desigualdades que siguen presentes en estas sociedades. En Guatemala no puede obviarse el aporte que las organizaciones integrantes de la URNG hicieron al levantar la bandera de la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Decenas de los actuales dirigentes mayas no sólo se formaron en su seno sino desde dicho espacio empezaron a discutir y formular las demandas y reivindicaciones alrededor de la cuestión étnico nacional – como se decía entonces – y que hoy son parte de la propuesta política maya.

La forma en que las guerrillas convertidas en partidos le dieron continuidad a estas coaliciones transicionales y sus proyectos políticos, así como su desempeño político y electoral es analizado en los capítulos 4 y 5 de este libro. Como se muestra, el desarrollo de estos proyectos políticos no dependió sólo de las decisiones tomadas por los dirigentes insurgentes convertidos en políticos democráticos, sino del entramado institucional que regula la disputa por el poder

político en estos países y que en general es adverso a aquellas fuerzas y partidos políticos que cuestionen el status quo y favorece a los grupos que cuentan con poder económico. .

En el tema de las diferencias entre las izquierdas armadas convertidas en partidos políticos, la revisión de los procesos de ruptura y fragmentación en ambos países permite proponer una interpretación de estas. En el caso salvadoreño, las diferencias tienen un marcado carácter ideológico derivado de diferencias de fondo entre las organizaciones que conformaron el FMLN. Entre 1979 y 1981 en los grupos guerrilleros que formaron el FMLN se integraron luchadores sociales provenientes de distintas experiencias políticas y organizativas. No eran sólo marxistas convencidos como el núcleo duro del PCS y las FPL, también se involucraron en la guerrilla grupos demócrata cristianos radicalizados, cristianos revolucionarios, socialdemócratas y socialcristianos sobre todo en el FDR y otros grupos.

La represión desatada contra las organizaciones sociales, el asesinato mismo de monseñor Romero y la imposibilidad de encontrar otras vías de solución condujeron a que estos grupos aceptaran y se comprometieran con la lucha armada. La unidad fue ante un enemigo común, de manera que las diferencias políticas e ideológicas fueron dejadas de lado. Cuando las condiciones políticas empezaron a cambiar algunos de los grupos que constituían el FDR buscaron su inserción política de manera independiente del FMLN.

Luego de que el FMLN se insertó en la legalidad, aunque los partidos que lo constituían coincidían en la necesidad de disputar el poder por la vía electoral, no existía una coincidencia en torno a que tipo de partido debía ser. Mientras que para algunos el Frente debía ser un partido revolucionario y socialista ideológica y políticamente homogéneo, para otros, estaba llamado a ser un partido plural que se moviera entre el centro y la izquierda. Algunos incluso postularon que debía definirse como socialdemócrata. Estas diferencias se entrelazaron con disputas de poder por el control del partido y puestos de elección popular que han hecho más enconados los enfrentamientos internos. El resultado de sucesivos rompimientos dentro de este partido ha sido la hegemonía de la corriente socialista revolucionaria y la salida de aquellos grupos que no coincidían con esta posición.

Contrario a lo que pudo pensarse, esta hegemonía no ha provocado ni una debacle electoral ni el aislamiento del Frente. Con la candidatura presidencial del dirigente comunista Schafick Handal¹⁶⁶ en 2004 este partido alcanzó el mayor número de votos en su historia, apoyo que logró conservar en las elecciones legislativas y municipales del 2006. Las interrogantes sobre el futuro de este partido giran en torno a si por si mismo el FMLN logrará alcanzar los votos necesarios para ganar la presidencia, o si tendrá la capacidad de construir alianzas que le permitan construir la mayoría política necesaria para gobernar El Salvador.

En Guatemala, las divisiones y rompimientos entre las izquierdas tienen una larga historia y se derivan de las fracturas fundacionales al interior del PGT y rompimientos entre las propias organizaciones insurgentes. Las organizaciones guerrilleras particulares lograron a lo largo de décadas consolidar identidades, grupos y liderazgos que hicieron difícil, en la paz, construir un partido unitario. Desde esta perspectiva, puede pensarse que en la URNG no es que se haya roto la unidad, sino que no fue posible construirla tanto por lo tardío que resultaron las definiciones ideológicas como por diferencias en torno a como impulsar la lucha política.

Desde esta perspectiva, el principal rompimiento que se dio en la URNG después de la firma de la paz correspondió a la salida del grupo conformado principalmente por militantes de las FAR y que dio lugar a la creación de la ANN como partido político. En esta división se manifestaron diferencias entre los liderazgos y formas distintas de concebir la estrategia del partido. La definición ideológica, que fue una demanda central del grupo que salió de URNG, fue satisfecha con creces después del rompimiento, cuando en su Primer Congreso la URNG se definió como un partido revolucionario y socialista que, además recogía la tradición del pensamiento de Marx y Lenin.

Lo que dividió a estas fuerzas políticas fue lo referente al papel de lo electoral en la lucha política de los revolucionarios en tiempos de paz; la identificación de los adversarios a derrotar; la forma de ubicarse como fuerza de oposición; y, la necesidad y forma de realizar alianzas. Como se señaló en este trabajo, mientras la URNG ha tomado una actitud conservadora, o de resistencia, en términos de mantenerse en el ámbito de los grupos y organizaciones de izquierda, equidistante de los conflictos entre los grupos dominantes y moderada en sus planteamientos frente al gobierno; la ANN ha intentado impulsar una estrategia pragmática centrada en lo electoral, en la que ha buscado acercamientos y construir alianzas grupos políticos y sociales que van más allá del campo de la izquierda. Ambas estrategias son arriesgadas pues pueden conducir al aislamiento y a la marginalidad política en el primer caso, y a la pérdida de la identidad política en el segundo. Lo cierto es que la situación actual de ambos partidos es difícil, y lo que se juegan en las elecciones del 2007 es su sobrevivencia como instituciones políticas legales.

El tercer aspecto que se consideró en este trabajo fue el referido a la democraticidad de los sistemas políticos en los que se insertaron las insurgencias. Al respecto, puede señalarse que fue la ausencia de sistemas políticos democráticos lo que en parte provocó que las izquierdas revolucionarias apelaran a las armas, y que, como lo ha señalado Torres-Rivas en diversos ensayos, sin tener esta intención – por lo menos al inicio de la lucha guerrillera – hayan contribuido a la construcción aún no concluida de democracias en estos países.

La estructuración de estos sistemas políticos democráticos se inició en las últimas décadas del siglo XX en contextos adversos: la intención de los grupos dominantes de cambiar para que nada cambiara; un entorno internacional dominado por la revolución conservadora; y, un contexto social caracterizado por enormes desigualdades sociales que imprimían asimetrías graves a la práctica democrática.

Guatemala y El Salvador parece que llegaron tarde a la fiesta democrática, cuando la democracia ya no era capaz de reducir las desigualdades sociales sino que asumía el papel de productora y reproductora de las desigualdades. La tragedia de la guerra dio lugar al desarrollo de una democracia política sobre las bases de Estados débiles y desmantelados que no sólo no tuvieron los recursos ni la voluntad de cumplir con los pactos sociales y políticos que permitieron el fin de las guerras sino que no tienen capacidad de responder a las desigualdades dinámicas generadas por la aceleración de la globalización económica.

Las democracias en las que se insertaron las antiguas guerrillas tienen carencias procedimentales y sustantivas. Como se indicó en el capítulo V se tienen limitaciones en materia de participación, representación y competencia, de manera que el diseño institucional induce resultados políticos y electorales favorables a los grupos que cuentan con recursos económicos y

que no están interesados en modificar el estado de cosas. El financiamiento privado sin control, la ausencia de pluralidad de información y medios de comunicación, la exclusión sutil y explícita de determinados grupos de población son algunas de las características de estos sistemas que ponen en duda la democraticidad e los mismos.

Desde la perspectiva sustantivista de la democracia las cosas no mejoran. La posibilidad del ejercicio pleno de los derechos políticos requiere un mínimo de condiciones económicas y sociales que permitan el desarrollo de las capacidades ciudadanas. En sociedades en las que más de la mitad de la población es pobre y no se cuentan con servicios sociales básicos se dificulta construir un orden democrático que para su funcionamiento requiere la participación ciudadana en el sentido más amplio del término.

Para los revolucionarios en tiempos de paz esto tiene dos implicaciones. La primera es que es necesario modificar significativamente las condiciones formales de la democracia de manera que permita que estos proyectos puedan competir por el poder en condiciones justas, y que esta reivindicación no debe ser sólo de los partidos políticos sino de la sociedad en su conjunto. La segunda, es que las condiciones sociales demandan hoy, más que nunca, un proyecto político – que trascienda los partidos políticos – igualitarista, radicalmente igualitarista que desde el Estado y el gobierno impulse políticas que terminen con las formas autoritarias de dominación y la exclusión económica, política y social de las mayorías populares de estos países.

Bibliografía.

Alvarado, Huberto

1994 Apuntes para la historia del Partido Guatemalteco del Trabajo.
Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 102 p.

Anderson, Thomas

1976 El Salvador. Los sucesos políticos de 1932.
Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana. 250 p.

Armstrong, Robert y Janet S. Rubin

1989 El Salvador. (El rostro de la Revolución).
El Salvador: UCA Editores. 237 p.

Artiga-González, Alvaro

2000 La política y los Sistemas de Partidos en Centroamérica.”
El Salvador: FUNDAUNGO. 233 p.

2000a “Electores, partidos y la caja de Pandora”

En: Estudios Centroamericanos (ECA) 617. Pp. 267-287.

ASIES Asociación de Investigación y Estudios Sociales

2001 El programa de Incorporación. Un camino pendiente para los Ex Combatientes.
Guatemala: ASIES. 229 p.

Bauer Paiz, Alfonso

1996 Memorias de Alfonso Bauer Paiz. Historia no oficial de Guatemala.
Guatemala: Editorial Rusticatio. 452 p.

Benítez Manaus, Raúl

1989 La teoría militar y la guerra civil en El Salvador.
El Salvador: UCA Editores. 365 p.

Binford, Leigh

2000 “El Ejército Revolucionario del Pueblo en Morazán: la hegemonía dentro de la revolución salvadoreña.” En: Estudios Centroamericanos ECA 625-626. Pp.- 1165-1194.

Bobbio, Norberto

1998 Derecha e Izquierda.
España: Editorial Taurus. 187 p.

Bornschein, Dirk

- 2000 Las izquierdas en Guatemala.
Guatemala: Fridrieich Ebert Stiftung. 209 p.
- Bravo, Mario Alfonso
2003 “‘Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo’: Historia del Partido Guatemalteco del Trabajo – PGT–“En: ¿Hacia dónde vamos? Guía electoral 2003. Universidad de San Carlos de Guatemala. Pp. 13-28.
- Calderón, José Ma. Et al
1980 El Salvador en la hora de la revolución latinoamericana.
México: Editorial Nuestro Tiempo. 178 p.
- Cardoza y Aragón, Luis
1994 La Revolución Guatemalteca.
Guatemala: Editorial del Pensativo. 215 p.
- Carothers, Thomas
2002 “The End of the transition paradigm”
En: Journal of Democracy. Volume 13 No.1. Pp. 5-21. EUA.
- Carpio, Salvador Cayetano
1983 La lucha de clases, motor del desarrollo de la Guerra Popular de Liberación.
Sin información editorial.
- Castañeda, Jorge
1995 La utopía desarmada: intrigas, dilemas y promesas de la izquierda en América Latina.
México: Joaquín Mortiz. 579 p.
- Cazali Avila, Augusto
2002 Historia de Guatemala: Siglo XX. La contrarrevolución y los gobiernos del liberacionismo. (1954-1958). Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 95p.
- 1999 El gobierno del Doctor Juan José Arévalo. 1945-1951.
Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 59p.
- 1998 La Revolución de Octubre y la Junta Revolucionaria de Gobierno. 1944-1945.
Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 74 p.
- CEH I Comisión para el Esclarecimiento Histórico
1999 Guatemala Memoria del Silencio. Tomo I.
Guatemala: UNOPS. 288 p.
- CEH II Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
1999 Guatemala Memoria del Silencio. Tomo II.
Guatemala: UNOPS. 528 p.
- CIDAI Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación
2000 “Las elecciones del 12 de marzo: ¿triunfo del FMLN o fracaso de ARENA?”
En: Estudios Centroamericanos (ECA) No. 617. pp. 225-247.
- 1999 “Triunfo electoral de ARENA; ¿cinco años con más de lo mismo?”
En: Estudios *Centroamericanos* (ECA) No. 604-605. Pp. 169-190.
- Cienfuegos, Fermán
1980 El Salvador. La Revolución Inevitable.
Glypho, taller de gráfica. Sin otros datos. 56 p.
- 1993 Veredas de audacia. Historia del FMLN.
El Salvador: Editorial Arocoiris. 201 p.
- Cruz, José Miguel

- 1999 “El resultado de las elecciones de 1999: una aproximación desde la opinión pública”. En: Estudios *Centroamericanos* (ECA) No. 604-605. Pp. 191-215.
- Ching, Erick
 2001 “Los archivos de Moscú y una nueva interpretación de la insurrección del 32”
 En: *El Salvador, 1932. Los sucesos políticos*. (Thomas R. Anderson). Biblioteca de Historia Salvadoreña. El Salvador: CONCULTURA. pp. 57-63.
- Dada Hirezi, Héctor
 2001 “El 15 de octubre de 1979”
 En: El faro. Net <http://www.elfaro.net/dlgalp/10151979/hdh.asp>
- Dada Hirezi, Héctor (coordinador)
 2002 Más allá de las elecciones. Diez años después de los acuerdos de paz.
 El Salvador: FLACSO. 154 p.
- 1998 Las elecciones de 1997: ¿Un paso más en la transición democrática?
 El Salvador: FLACSO.
- Dagnino, Evelina
 2002 “Sociedad civil, espacios públicos y construcción democrática en Brasil: límites y posibilidades.” En: Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Brasil. (Evelina Dagnino compiladora) México: Fondo de Cultura Económica. Pp.379-397.
- Dalton, Roque
 1982 Miguel Mármol: los sucesos de El Salvador 1932.
 México: Ediciones Cuicuilco. Escuela Nacional de Antropología e Historia. 564 p.
- Debray, Régis
 1975 Las pruebas de fuego. La crítica de las armas.
 México: Siglo veintiuno editores. 339 p.
- ECA (Editorial de la revista Estudios Centroamericanos)
 2001 “Valoración del siglo XX desde los mártires”
 En: *El Salvador: la transición y sus problemas*. Rodolfo Cardenal y Luis Armando González (compiladores). (El Salvador: UCA Editores). Pp. 13-28.
- EGP Ejército Guerrillero de los Pobres
 1994 Las categorías de organización.
 Guatemala: EGP. 12 p.
- 1994a Comunicado interno especial.
 Guatemala: EGP. 10 p.
- 1994b Las estructuras del EGP.
 Guatemala: EGP. 16p.
- 1994c Nuestra concepción de la unidad revolucionaria.
 Guatemala. EGP. 20p.
- FGT Fundación Guillermo Toriello
 2003 “Lecciones de la incorporación a siete años de la firma del Acuerdo”.
 Mimeo. Guatemala. 8p.
- Flores, Marco Antonio
 1994 Fortuny: un comunista guatemalteco. Memorias.
 Guatemala: Editorial Oscar de León Palacios. 351 p.
- Figueroa Ibarra, Carlos
 2001 Paz Tejada. Militar y revolucionario.
 Guatemala: Editorial Universitaria. P. 481 p.

- 1995 “Naufragio y sobrevivencia: la izquierda en Centroamérica.”
En: *Estudios Latinoamericanos* No. 3. Pp. 71-86
- Frank, Louisa
1976 “Resistencia y revolución: el desarrollo de la lucha armada en Guatemala.”
En: *Guatemala: una historia inmediata*. (Jonas y Tobis compiladores). México: Siglo Veintiuno editores. Pp. 291-320.
- Fortuny, Jose Manuel
2002 *Memorias de José Manuel Fortuny*.
Guatemala: Editorial Oscar de León Palacios. 235p.
- Fundación 16 de enero
1996 *De la esperanza a la realidad. 4 años de inserción del FMLN*.
El Salvador: Fundación 16 de enero. 135 p.
- Galich, Manuel
1977 *Del pánico al ataque*.
Guatemala: Editorial Universitaria de Guatemala. 388p.
- Gilly, Adolfo
1981 *Guerra y política en El Salvador*.
México: Editorial Nueva Imagen. 196 p.
- Gleijeses, Piero
1991 *Shattered Hope. The Guatemalan Revolution and the United States, 1944-1954*.
Estados Unidos de América: University of Princeton Press. 429 p.
- González, Luis Armando
1994 *Izquierda marxista y cristianismo en El Salvador 1970-1992. (Un ensayo de interpretación)* México: FLACSO. Tesis presentada para optar al grado de Maestría en Ciencias Sociales. 237p.
- González, Luis Armando y Roody Reserve
2004 “El FMLN en la encrucijada.”
En: *Estudios Centroamericanos ECA*. No. 668. pp. 617-620.
- Goodwin, Jeff
2001 *No other way out. States and Revolutionary movements, 1945-1991*.
Estados Unidos de América: Cambridge University Press. 407 p.
- Grandin, Greg
2004 *The last colonial massacre. Latin America in the Cold War*.
Estados Unidos de América: University of Chicago Press. 311 p.
- Grenier, Yvon
1999 *The emergence of Insurgency in El Salvador. Ideology and Political Will*.
University of Pittsburgh Press. 222 p.
- Handal, Schafik Jorge
2004 “El FMLN y la vigencia del pensamiento revolucionario en El Salvador.”
Mimeo. 23 p.
- Harnecker, Marta
2003 “El Salvador: un partido al servicio de los movimientos sociales.”
En: *Rebelión 24-10-2003*. 3 p.
- 2001 *La izquierda después de Seattle*.
Mimeo. 65 p.
- 1993 *Con la mirada en alto. Historia de las FPL Farabundo Martí a través de sus dirigentes*.
El Salvador: UCA editores. 376 p.

- Hernández Pico, Juan
 2005 Terminar la guerra, traicionar la paz. Guatemala en las dos presidencias de la paz: Arzú y Portillo (1996:2004). Guatemala: FLACSO. 632 p.
- Hernández Romero, Pedro Juan y Oscar Dada Hutt
 1995 “Los Programas de Reinserción Rural: Bases Frágiles para la Estabilidad y el Desarrollo Sustentable.” En: *Alternativas para el Desarrollo*. Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) pp. 11-19.
- Huntington, Samuel
 1972 El orden político en las sociedades en cambio.
 Argentina: Editorial Paidós. 404 p.
- Hurtado Paz y Paz, Juan José
 2005 La propaganda política del ejército guerrillero de los pobres –EGP- durante el conflicto armado. Una experiencia de comunicación política. (1975-1980). Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Guatemala: Universidad Rafael Landívar. 156 p.
 1997 “Elementos de la historia del movimiento revolucionario guatemalteco.”
 En: Cuadernos Africa América Latina. No. 31 Pp. 5-18.
- Jonas, Susanne
 2000 De centauros y palomas: El Proceso de Paz Guatemalteco.
 Guatemala: FLACSO. 511 p.
 1982 “Central America as a theater of U.S. Cold War Politics.”
 En: *Latin American Perspectives*. Vol. IX No. 3 Pp. 123-128
- Le Bot, Yvon
 1995 La Guerra en Tierras Mayas. Comunidad, violencia y modernidad en Guatemala (1970-1992). México: Fondo de Cultura Económica. 327 p.
- Lungo Uclés, Mario
 1991 El Salvador en los años 90: contrainsurgencia y revolución.
 Cuba: Editorial Casa de las Américas. 222 p.
- Löwy, Michael
 1982 El marxismo en América Latina. (De 1909 a nuestros días) Antología.
 México: Editorial ERA. 430 p.
- McClintock, Cynthia
 1998 Revolutionary Movements in Latin America. El Salvador’s FMLN and Peru’s Shining Path. United States Institute of Peace press. EUA 492 p.
- Menjívar Ochoa, Rafael
 2006 Tiempos de Locura. El Salvador 1979-1981.
 El Salvador: FLACSO El Salvador. 306p.
- Millar, Nicola
 1989 Soviet Relations with Latin America 1959-1987
 Gran Bretaña: Editorial de la Universidad de Cambridge. 252 p.
- Mikoyan, Sergo
 1995 “The Soviet Union and Latin America: the political and Strategic Domain”.
 En: *The Soviet Union’s Latin American Policy*. Edited By Edmé Dominguez.
 Suecia: Universidad de Göteborg. Pp. 34-53
- MINUGUA Misión de Naciones Unidas en Guatemala
 2001 Proceso de negociación de la paz en Guatemala.
 Guatemala: MINUGUA. 468 p.

- Miranda, Alicia
 2001 “Cuando se trata de conglomerar a organizaciones con diferentes matices.”
 En: El Faro. Net. El Salvador. <http://www.elfaro.net/dlgalp/formación/matices.asp>
- Mires, Fernando
 2005 El orden del caos. Historia del fin del comunismo.
 Argentina: Libros de la Araucaria. 311p.
- Monsanto, Pablo
 2000 “Hacia una estrategia de la URNG”.
 En: Encuentros departamentales. Guatemala: URNG. Pp. 1-34.
- 1994 Corregir el rumbo para fortalecer el proyecto.
 Guatemala: FAR. 68p.
- Montoya, Aquiles
 2004 “El Salvador: la izquierda que la derecha quisiera.”
 En Rebelión. 27-08-2004.
- Movimiento Mexicano por la Paz.
 1982 La guerra popular en El Salvador.
 Ediciones de la Paz. 279 p.
- Noriega, Arnoldo et al.
 2001 Cuando la Sociedad Guatemalteca se encuentra: la negociación política del pacto fiscal.
 Guatemala. IPES. 371 p.
- Nuila Hernández, Ramón
 2004 El pacto fiscal. La impostura de la falsa democracia.
 España: Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala. 42 p.
- 2005 El pacto fiscal. La impostura de la falsa democracia. (II)
 España: Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala. 54 p.
- Obando Sánchez, Antonio
 1978 Memorias. La historia del movimiento obrero.
 Guatemala: Editorial Universitaria. 161 p.
- Palencia Prado, Mayra
 2002 El Estado para el capital: La arena fiscal, manzana de la discordia entre el empresariado y el poder público. Guatemala: FLACSO. 283 p.
- Pranebianco, Angelo
 1995 Modelos de Partido.
 España: Alianza Editorial. 512 p.
- Partido Guatemalteco del Trabajo PGT
 1972 El camino de la revolución guatemalteca.
 México: Ediciones de Cultura Popular S.A. 150 p.
- 1974 Estatutos
 PGT Guatemala. 63 p.
- Payeras, Mario
 1991 Los fusiles de octubre.
 México: Juan Pablos Editor. 210 p.
- 1989 Los días de la selva.
 México: Joan Boldó i Climent Editores. 143 p.
- 1987 El trueno en la ciudad. Episodios de la lucha armada urbana de 1981 en Guatemala.
 México: Juan Pablos Editor. 105 p.
- Ramírez, Ricardo

- 1967 Turcios Lima.
Cuba: Editorial Tricontinental. 190 p.
- 2002 Saludos Revolucionarios. La historia reciente de Guatemala desde la óptica de la lucha guerrillera. (1984-1996) Guatemala: Fundación Guillermo Toriello. 488p.
- Ramos, Carlos Guillermo
1998 “El año pre-electoral: dinamismos y escenarios de los actores políticos.”
En: *Actores, agendas y escenarios en El Salvador 1998*. (Ramos et al). El Salvador: FLACSO. Pp. 1-53.
- 1998a “Los actores de la contienda electoral: trayectorias y comportamientos políticos.”
En: *Las elecciones de 1997: ¿Un paso más en la transición democrática?* (Dada coordinador) El Salvador: FLACSO. Pp- 1-57
- Ryan, Jeffrey
1994 “The impact of Democratization on Revolutionary Movements”
En: *Comparative Politics, vol. 27 no1*. Pp. 27-44.
- Sáenz de Tejada, Ricardo
1990 La Antropología en Guatemala (1960-1995)
Guatemala: Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 141p.
- 2001 El Pueblo Maya en Guatemala. El surgimiento de un sujeto político (1950-2000)
Tesis para optar al grado de Maestro en Antropología Social. México: CIESAS. 195p.
- Samayoa, Salvador
2003 El Salvador. La reforma pactada.
El Salvador: UCA Editores. 673 p.
- Sánchez Ramos, Irene
1994 “La insurgencia salvadoreña y el ciclo de los movimientos armados en América Latina.”
En: *Estudios Latinoamericanos No. 2* Nueva Epoca. Pp. 105-117.
- 1989 “Caracterización del diálogo negociación en El Salvador (1980-1989)”
En: *Estudios Latinoamericanos 6-7*. Pp. 114-121.
- SEPLA Seminario Permanente sobre Latino América
1979 El Salvador: Alianzas políticas y proceso revolucionario.
México: SEPLA 76 p.
- Sieder, Rachel
1998 “Derechos Indígenas y poder local.”
En: Guatemala 1983-1997 ¿Hacia dónde va la transición? (Armon et al).
Guatemala: FLACSO. Pp. 103-123.
- Solórzano, Mario
1987 Guatemala: Autoritarismo y democracia.
Costa Rica: FLACSO. 340 p.
- Stoltz Chinchilla, Norma
1980 “Class Struggle in Central America: Background and overview”
En: *Latin American Perspectives*. Vol. VII No. 2 y 3. Pp. 2-23.
- Taracena Arriola, Arturo
1988 “Presencia anarquista en Guatemala entre 1920 y 1932.”
En: Mesoamérica 15. Pp. 1-23.
- 1989 “El primer partido comunista de Guatemala. (1922-1932). Diez años de una historia olvidada.” En: *Anuario de Estudios Centroamericanos 15 (1)*. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Pp. 49-63.
- Tock, Rosa

- 1998 Participación de la izquierda democrática en Guatemala: el caso del Partido Socialista Democrático. Tesis de Licenciatura en Ciencias Políticas. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- Torres-Rivas, Edelberto
- 1997 Negociando el futuro: la paz en una sociedad violenta. La negociación de paz en 1996. Guatemala: FLACSO. 148p
- 1996 Encrucijadas e incertezas en la izquierda centroamericana. (Ensayo preliminar de interpretación.) Guatemala: FLACSO. 100 p.
- Torres-Rivas, Edelberto (editor)
- 1994 Historia General de Centroamérica. T. VI. Historia Inmediata. FLACSO Costa Rica. 253 p.
- URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
- 2005 Documento Marco. Segundo Congreso URNG Guatemala: URNG 40 p.
- 2002 Documento Final del Primer Congreso de URNG Guatemala: URNG. 95 p.
- 2001 Documento Marco. Primer Congreso URNG. Guatemala: URNG, 34 p.
- 1997 El Partido político que Guatemala necesita. Guatemala: ediciones URNG 26 p.
- 1997a Proyecto de Estatutos del Partido URNG en formación. Guatemala: URNG:44p.
- 1988 Línea política de los revolucionarios guatemaltecos. México: Editorial nuestro tiempo. 169 p.
- Urrutia, Edmundo
- 2003 “Los caminos de la izquierda y las próximas elecciones. (Notas críticas)” En *Diálogo* No. 29. FLACSO Guatemala. Pp. 2-6.
- 1986 El Movimiento Revolucionarios Guatemalteco 1949-1967. Constitución y crisis de su identidad política. Tesis para obtener el título de Maestro en Ciencias Sociales. FLACSO México. 197 p.
- Varas, Augusto
- 1991 De la Komitern a la Perestroika. América Latina y la URSS. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. FLACSO Sede Chile. 325 p.
- Weeks, John
- 1986 “An interpretation of the Central American crisis.” En: *Latin American Research Review*. Vol. XXI No. 3. Pp. 31-39.
- Wood, Elizabeth
- 2000 Forging Democracy from below: insurgent transitions in South Africa and El Salvador. Reino Unido: Cambridge. 247 p.
- Zamora, Rubén
- 2003 La izquierda partidaria Salvadoreña: entre la identidad y el poder. Programa FLACSO El Salvador. El Salvador. 147 p.
- 2002 “A diez años de Chapultepec: un balance del proceso salvadoreño”. En: “A cinco años de la firma de la paz en Guatemala: un balance crítico”. (Rubén Zamora et al). Pp. 17-46.
- 1998 El Salvador: Heridas que no cierran. Los Partidos Políticos en la Post.Guerra. El Salvador: FLACSO. 333 p.

Documentos citados:

La unidad de las fuerzas revolucionarias. FAR. Marzo de 1971.
Los Fundamentos teóricos de las FAR. FAR. 1973.
Situación y perspectivas del movimiento revolucionario. Guerrilla Edgar Ibarra. Marzo 1967.
Conclusiones del pleno de 1984. FAR. 1984.
Comunicado interno sobre la maniobra fraccionalista encabezada por Benedicto. EGP. Febrero de 1984.
Articulación para el desenlace. ORPA. Enero de 1995
Proyecto estratégico y situación de desenlace. ORPA. Enero de 1995
Grandes proyectos de la organización. ORPA. Enero de 1995
Coyuntura y situación actual del país. ORPA. Enero de 1995.
Elementos característicos del momento actual: expresiones especiales de una crisis final.” ORPA; 1982
Aspectos conceptuales: modelo, periodo de transición y estrategia. FMLN. Julio 2004.
24 aniversario del FMLN. Por la vida de la gente la lucha continúa. Octubre de 2004.
Documentos para la Reflexión Año 2. No. 20. Diciembre 1995. FAR.
Carta de los cuadros, militantes y combatientes que rompen con la DN del EGP, a la DN y a los compañeros de esa organización.... 1984.
Comunicado conjunto de La Palma, Gobierno de El Salvador, FMLN, FDR 15 de octubre de 1984
Comunicado de la comandancia del FMLN a los combatientes revolucionarios y a todo el pueblo salvadoreño, 16 de octubre de 1984
Propuesta del FMLN para lograr la democratización, el cese de hostilidades y la paz justa y duradera en El Salvador, septiembre de 1989
Síntesis de la evaluación del CEN de nuestra participación en el proceso electoral de 2003. URNG febrero de 2004.
Plataforma de la corriente por el rescate revolucionario del a URNG. URNG. 20 de julio de 2001.

Además se consultaron distintos documentos de las organizaciones insurgentes

Se revisaron distintos números semanales de la Revista Proceso publicada por el Centro de Investigación y apoyo a la Investigación CIDAI de la Universidad Centroamericana de El Salvador publicados entre 1996 y 2005 y la Revista Envío de la UCA Nicaragua.

Siglas:

AEU Acción Estudiantil Universitaria (El Salvador)
ANN Alianza Nueva Nación (Guatemala)
ARENA Alianza Republicana Nacionalista (El Salvador)
ASC Asamblea de la Sociedad Civil (Guatemala)
CD Convergencia Democrática (El Salvador)
CROS Comité de Reorganización Obrero Sindical (El Salvador)

EGP Ejército Guerrillero de los Pobres (Guatemala)
 ERP Ejército Revolucionario del Pueblo (El Salvador)
 FAPU Frente de Acción Popular Unificado (El Salvador)
 FAR Fuerzas Armadas Rebeldes (Guatemala)
 FDN Frente Democrático Nacional (Guatemala)
 FDR Frente Democrático Revolucionario (El Salvador)
 FGT Fundación Guillermo Toriello (Guatemala)
 FMLN Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (El Salvador)
 FPL Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (El Salvador)
 FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional (Nicaragua)
 FROG Federación Regional Obrera de Guatemala (Guatemala)
 GAR Grupos de Acción Revolucionaria (El Salvador)
 JPT Juventud Patriótica del Trabajo (Guatemala)
 MNR Movimiento Nacional Revolucionario (El Salvador)
 MR-13 Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (Guatemala)
 MRP-IXIM Movimiento Revolucionario del Pueblo Ixim.
 MSC Movimiento Social Cristiano (El Salvador)
 ORPA Organización del Pueblo en Armas (Guatemala)
 PAR Partido de Acción Renovadora (El Salvador)
 PCG Partido Comunista Guatemalteco (Guatemala)
 PCS Partido Comunista Salvadoreño (El Salvador)
 PCUS Partido Comunista de la Unión Soviética
 PDC Partido Demócrata Cristiano (El Salvador)
 PGT Partido Guatemalteco del Trabajo (Guatemala)
 PRTC Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (Guatemala y El Salvador)
 PSC Partido Social Cristiano (El Salvador)
 PSD Partido Socialista Democrático (Guatemala)
 PUR Partido Unidad Revolucionaria (Guatemala)
 UDN Unión Democrática Nacionalista (El Salvador)
 UNE Unidad Nacional de la Esperanza (Guatemala)
 UNO Unión Nacional Opositora (El Salvador)
 URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
 UOS Unión Obrera Socialista (Guatemala)

Notas

*Guatemalteco. Licenciado en Antropología por la Universidad de San Carlos de Guatemala; Maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS México DF; Candidato a Doctor en Ciencias Sociales FLACSO Sede México.

¹ Un ejemplo de esto lo constituyó la resistencia contra la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica por parte de los congresos de los países centroamericanos que, a pesar de lograr importantes movilizaciones no lograron impedirla.

² En este caso la noción de sistema político resulta particularmente problemática. Tradicionalmente hace referencia a un espacio político relativamente autónomo del sistema social y el sistema económico propio de las sociedades democráticas en el que se disputa y distribuye poder, particularmente el del Estado, que a su vez es actor; y en el que los partidos políticos juegan un papel de mediación de las demandas sociales. Sin embargo, los sistemas políticos autoritarios limitan la pluralidad de actores y el peso relativo de estos, excluyendo en los países objeto de estudio a la mayoría de las fuerzas de izquierda. Ante esto, los actores de izquierda revolucionaria plantearon abrir el sistema para poder ser reconocidos como parte del mismo y tener derecho a disputar el poder o bien, transformar el propio sistema político a partir de tomar el control del estado por la vía militar.

³ Tock (1988) estudió el desarrollo del PSD.

⁴ El Salvador y Guatemala son los países centroamericanos con mayor incidencia de crímenes violentos. Aunque es necesario precisar que aunque el auge de estos se dio en el período pos conflicto, no tiene una relación directa/causal con los procesos de desmovilización de las fuerzas en pugna.

⁴ De acuerdo con Ching, el papel del PCS se vio rebasado por la insurrección de 1932 que de hecho no dirigió sino que tuvo que sumarse a ella ante la inevitabilidad de la misma. (2001:57-63).

⁶ Sobre este período, Alvarado señala cuatro debilidades al trabajo del PCG: 1) “Falta de ligazón de la ciencia marxista con el movimiento obrero, (...) 2) copia dogmática y mecánica de las orientaciones y resoluciones de la III Internacional comunista, que llevó al partido a posiciones izquierdizantes y sectarias en la organización de los sindicatos y al planteamiento de consignas como el establecimiento de soviets en Guatemala y a la realización inmediata de la revolución socialista en el país. 3) Métodos artesanales de trabajo (...); 4) Falta de lucha ideológica interna y en el seno de las masas, especialmente para combatir las tendencias oportunistas de derecha vinculadas al imperialismo yanqui y las posiciones izquierdizantes que enarbolaron los anarco-sindicalistas (...)” (1994:6-7)

⁷ El ambiente represivo de la época está descrito en Bauer Paiz (1996: 57-63) Galich (1977) así como otros testimonios del período.

⁸ De acuerdo con González, en este período se dio un intento del PCS por nacionalizar el marxismo. (1994:81)

⁹ La década revolucionaria en Guatemala llamada por Luis Cardoza y Aragón como la “primavera democrática en el país de la eterna dictadura” abarcó tres gobiernos: el de la junta revolucionaria que se constituyó en octubre de 1944 y que estuvo formada por Guillermo Toriello y los militares Francisco Javier Arana y Jacobo Arbenz Guzmán; y los gobiernos electos de Arévalo (1944-1950) y Arbenz (1951-1954).

¹⁰ El primer comité central del partido quedó integrado por José Manuel Fortuna, Mario Silva Jonama, Bernardo Alvarado Monzón, Víctor Manuel Gutiérrez, Alfredo Guerra Borges, José Luis Ramos, Antonio Ardón, Carlos René Valle, Octavio Reyes Ortiz, Huberto Alvarado, Pedro Fernández y los salvadoreños Daniel Castañeda, Virgilio Guerra y Eduardo Camporeales. (cfr. Alvarado; 1994:9-34; Bravo; 2003: 14-16; Fortuny; 2002:53-54; Flores; 1994: 141-184; Urrutia; 1986:63-65).

¹¹ El artículo 32 de la constitución de 1945 estableció la prohibición a la formación de organizaciones políticas de carácter internacional o extranjero.

¹² Según Fortuny (2002:55) el propio presidente Juan José Arévalo se opuso a la existencia del partido. Ya en 1946 se había clausurado la Escuela “Claridad” en la que se divulgaba el pensamiento socialista.

¹³ De acuerdo con Urrutia, el argumento de Gutiérrez era que si el PGT “... era el partido de la clase obrera sus dirigentes forzosamente debía ser obreros.” (1986:65)

¹⁴ En este proceso de unificación inédito en la historia de la izquierda guatemalteca desempeñó un papel fundamental la consecuencia y coherencia revolucionaria del dirigente magisterial Víctor Manuel Gutiérrez. (Alvarado;1994:20)

¹⁵ Entre 1949 y 1954 el PGT pasó de menos de 100 militantes a poco más de 500. (Grandin;2004:52)

¹⁶ Según Alvarado “nuestro partido (el PGT) brindó amplia y decidida colaboración al gobierno del Presidente Arbenz, quien escuchó con atención las opiniones del Partido y lo respetó en reconocimiento de la lealtad con que defendía los intereses del Pueblo y de Guatemala.” (1994:27) Según Bravo “El PGT llegó a constituirse en uno de los soportes político ideológicos del ejercicio de gobierno de Jacobo Arbenz, y de su seno surgieron iniciativas como las de la Reforma Agraria, concebida como el elemento clave para propiciar el desarrollo capitalista en el país, frente a los resabios semif feudales que caracterizaban hasta entonces el país.” (2003:16)

¹⁷ Sobre esto, debe entenderse que no se trató de una cuestión mecánica, sino que esto fue también el resultado de debates y de la evaluación de experiencias anteriores; al respecto, la radicalización de los partidos comunistas antes de la segunda guerra mundial condujo a su aislamiento y a que fueran duramente golpeados en diversos países; la nueva estrategia no sólo respondía a los intereses y necesidades de la Unión Soviética sino que se adaptaba a las realidades políticas de América Latina. (Cfr. Millar 1989 y Varas 1991)

¹⁸ Para el PGT, uno de los errores cometidos durante la década revolucionaria fue precisamente el manejo que hicieron de su relación con la burguesía nacional democrática: “nuestro Partido no asumió una consecuente actitud crítica frente a la burguesía democrática, a veces se fue complaciente con ésta, olvidando que la alianza con la burguesía no debe atar las manos al Partido para criticarla y para censurar sus múltiples vicios y sus actos inconsecuentes con el pueblo y el movimiento revolucionario.” (Lowie;1983:201) Sobre el frente nacional, aunque se afirma que se siguió “...una correcta línea de alianza con todas las fuerzas democráticas y antiimperialistas contra los terratenientes feudales, la burguesía reaccionaria y el imperialismo yanqui” se reconoce que “en la aplicación de la justa línea de frente único el partido concedió más importancia a la alianza con los partidos democrático burgueses, que a la forja de una firma alianza de clase obrera y los campesinos.” (Lowie;1983:203)

¹⁹ En el documento de su comisión política “La intervención norteamericana en Guatemala y el derrocamiento del régimen democrático” publicada en 1955 el PGT afirma que “Nuestro partido, gracias al trabajo abnegado de sus

escasos cuadros y de sus militantes, en su mayoría ganados recientemente para la causa del socialismo, logró romper el bloqueo político que desde su nacimiento quisieron imponerle las fuerzas reaccionarias, conquistó el apoyo y la simpatía de un gran sector de la clase obrera, de importantes masas campesinas y de los intelectuales y profesionales progresistas. Nuestro Partido fue el motor principal, el organizador y el dirigente de la lucha por la unidad de la clase obrera, el defensor más consecuente de la unidad cuando ésta cristalizó en su forma orgánica con la constitución de la CGTG, el organizador y el dirigente de las principales batallas de los trabajadores por sus reivindicaciones, el guía de la clase obrera en defensa de las reivindicaciones de los campesinos, y, en primer lugar, por la realización de la reforma agraria, el impulsor de la lucha por la rápida entrega de la tierra a los campesinos.” (Lowie; 1983:198)

²⁰ Un análisis detallado de la década revolucionaria en Guatemala se encuentra en Gleijeses (1991); así como en Cardoza y Aragón (1994); y Cazali (1998 y 1999).

²¹ Una revisión de este proceso se encuentra en Cazali (2002).

²² De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en el período posterior a la caída de Arbenz se dieron entre 9 mil y 14 mil detenciones y entre 2 mil y 5 mil ejecuciones. (CEH I;1999:108)

²³ “El núcleo de dirigentes que se quedó en el país encabezados por el Secretario General Bernardo Alvarado Monzón, Mario Silva Jonama, Secretario del Comité Central, y Carlos René Valle y Valle, miembro de la Comisión Política del CC, tomaron inmediatamente medidas para la reestructuración del partido y la Juventud en diversas escalas y en el plano nacional. Esta tarea fue difícil dado que el partido no tenía ninguna experiencia en trabajo clandestino y no estaba preparado para desarrollar su actividad interna y externa en condiciones tan duras. Fue necesario aprender en la propia lucha y esto significó errores y debilidades, aunque los aspectos positivos del trabajo garantizaron primero la supervivencia del partido y después la continuidad de su labor revolucionaria.” (Alvarado; 1994:36) Al respecto, Bravo señala que “reagrupados los que salvan la vida y no marchan al exilio se insertan en el movimiento social en especial en el movimiento sindical que el régimen de Castigo Armas trata de articular con la fundación de la –FAS–, Federación Autónoma Sindical, con el apoyo de sindicatos norteamericanos, la cual es infiltrada por sus cuadros tomada su dirección que se convertiría en su central sindical hasta su destrucción en 1982.” (2003:17)

²⁴ Para Zamora “...el Partido ensaya en esta época formas de presencia mediante otros instrumentos políticos, entre los que destacan dos: por una parte la creación de frentes de masas en determinadas coyunturas y por el otro la constitución de partidos legales que le sirven de cobertura para su accionar.” (2003:41)

²⁵ Al respecto existe una amplia bibliografía en la que se aborda esto, y va desde las propuestas conservadoras de Huntington (1972) y Grenier (1999), hasta explicaciones más complejas como las expresadas por Weeks (1986), Stoltz (1980), Goodwin (2001), Castañeda (1995) así como Le Bot y Lungo (1989), para los casos de Guatemala y El Salvador Respectivamente.

²⁶ Sobre Centroamérica en particular Millar señala que antes de 1979 la Unión Soviética tuvo poco interés en la región, sobre todo por los tres fracasos previos: El Salvador 1932, Costa Rica 1948, y Guatemala 1954, por lo que los especialistas no consideraron posible el éxito de los insurgentes. (1989:191)

²⁷ Cfr. Harnecker (1993; 23); en el mismo sentido Urrutia señala que la relación personal del Che Guevara con comunistas guatemaltecos a partir de su propia estancia en el país durante el gobierno de Arbenz fue un factor que contribuyó a acelerar la radicalización. (1986)

²⁸ Además de trabajos testimoniales sobre las guerrillas guatemaltecas de los años 60, en los trabajos de Debray (1975), Frank (1976) y CEH I (1999) se encuentran análisis de este proceso; de particular utilidad para el período 1960-1967 fue la poco conocida tesis de Urrutia (1986).

²⁹ El 13 de noviembre de 1960 un grupo de oficiales del ejército guatemalteco se levantó en armas contra el gobierno del también militar (de origen ubiquista) Miguel Idígoras Fuentes; las razones del levantamiento estuvieron relacionadas con la presunta corrupción del gobierno así como la autorización para que oficiales norteamericanos utilizaran el territorio nacional para entrenar mercenarios cubanos de cara al intento de invasión. No todos los oficiales alzados cumplieron con apoyar el movimiento y los que mantuvieron su compromiso se refugiaron en la base militar de Zacapa (provincia del oriente del país). Después de algunos combates, los alzados se refugiaron en Honduras y El Salvador, desde donde volvieron al país para fundar el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre MR-13. (Debray;1975)

³⁰ De acuerdo con Hurtado, “...el PGT intentó implementar 2 grupos guerrilleros como mecanismo de presión en apoyo a las luchas urbanas. Uno fue el frente que, con el nombre de ‘Destacamento 20 de Octubre’, se intentó implantar en las montañas de Concuá, en Baja Verapaz, pero que debido a la precipitación con que se montó, fue detectado y prácticamente aniquilado por el ejército. El otro fue un intento de combatientes que desde México, penetraron por el norte de Huehuetenango. Sin embargo, por descuido, los guerrilleros dejaron abandonada una

granada de mano en una vivienda campesina y un niño la activó. El hecho motivó la indignación de la población que capturó y entregó a los guerrilleros.” (1997:9).

³¹Cfr. Alvarado (1994); CEH (1999); Figueroa Ibarra (2001); y, Debray (1975).

³² Urrutia señala que la intención de impulsar el destacamento guerrillero 20 de octubre no era asumir la guerrilla como forma estratégica de lucha, sino “como un recurso táctico para presionar a un posible gobierno democrático surgido de la crisis política de marzo y abril de 1962 y lograr participar en él.” (1986:117)

³³ Según Alvarado “... el movimiento revolucionario 13 de noviembre, el movimiento 12 de abril, organizado por estudiantes democráticos al calor de las jornadas de marzo y abril, y el PGT, actuando con el nombre de Movimiento 20 de Octubre organizaron en diciembre de 1962 las Fuerzas Armadas Rebeldes”. (Alvarado; 1994:49)

³⁴ La CEH señala que “En la constitución de las FAR el PGT aportó apoyo logístico, financiero y algunos de sus cuadros de base. El MR-13 por su parte, debía ocuparse de las actividades militares, operativas. La división del trabajo la sintetizó el líder del MR-13, Marco Antonio Yon Sosa en estos términos: ‘ustedes encárguense de lo político y nosotros nos ocuparemos de lo militar.’” (1999:128)

³⁵ Siguiendo a Urrutia, pueden identificarse contradicciones sobre la forma en que el PGT llevó a cabo los esfuerzos de reinserción en el sistema entre 1954 y 1962. Mientras que oficialmente este partido declaró como infructuosos los intentos “de grupos aislados que pretenden asaltar el poder por sorpresa, mediante cuartelazos, revoluciones de palacios o cualesquiera otras acciones a espaldas de las masas” y reiteraba el llamado a la creación de un frente único en el que participaran demócratas, patriotas y antiimperialistas; algunos autores han señalado que el “PGT durante esta época participó en conspiraciones e intentos de golpe de estado”. (1986:78)

³⁶ Esta Comisión tuvo como tarea prioritaria estudiar las experiencias de las revoluciones triunfantes, particularmente la rusa, la china y la cubana.

³⁷ La versión de Debray y Ramírez puede resultar ilustrativa de estas visiones: a partir del apoyo recibido por la guerrilla de Yon Sosa por parte de Amado Granados se inició una suerte de infiltración trotskista en Guatemala: “Inmediatamente su puso en marcha un guión invariable, diez veces repetido después en otros lugares: la infiltración ideológica y política del trotskismo empieza con el cumplimiento de pequeñas tareas de solidaridad ‘fraternal’. Permiten éstas ganar la confianza de los combatientes sobre el terreno, que están encantados de poder hallar al fin una solidaridad material. Después la logística se extiende como una mancha de aceite y se pasa a la propaganda: se ofrecen a difundir en el exterior los documentos y volantes de la organización e insensiblemente pasan a redactarlos (las comunicaciones son difíciles y hay que ganar tiempo; de todos modos, todo es por la causa). De agente viajero y correo pasan a representantes y consejeros. , tercera fase, los ‘cuadros experimentados’ son enviados al país, para mejorar y acelerar los contactos in situ, llevar el dinero y los papeles falso, y aun abrir algún comercio con una buena pantalla que sólo un extranjero puede tener. Una vez en la plaza, se va ocupándola trozo a trozo, aunque haya que desplazar de la antigua dirección nacional a los reticentes o suspicaces – hasta que la organización de que se trate se encuentra casi sin darse cuenta convertida en una ‘sección’ de la IV Internacional y con una publicidad mundial.” (1975:270)

³⁸ Inicialmente, la posición cubana no fue de condena al MR-13, en una carta enviada por el Che Guevara a esa organización aunque se alerta sobre la peligrosidad de ciertas influencias no existió una condena explícita; posteriormente, Fidel Castro si condenó la influencia del trotskismo en los revolucionarios latinoamericanos, declaración que condujo a la desaparición de esta organización. (Adolfo Gilly, comunicación personal).

³⁹ Sobre este aspecto Bravo señala que “La lucha ideológica se vivió intensamente dentro de las filas del PGT durante la mitad de los años 60. La actitud ambigua de apoyar no programáticamente la lucha armada permitió que un sector de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT), que se había incorporado a las FAR, desplazara al sector que apoyaba la lucha e masas dentro del Comité Central.” (2003:18) Una explicación argumentada de las razones por las cuáles algunos miembros de la dirección del PGT se oponían firmemente a la lucha armada se encuentra en las memorias de Fortuny editadas por Flores (1994:257-264 y 323-331)

⁴⁰ Esto explica en parte porque ciertos grupos al interior del PGT apoyaron en 1963 la posibilidad de que el ex presidente Juan José Arévalo compitiera por la presidencia del país (lo que condujo a un golpe de estado en marzo de ese año) y en 1966 se apoyara la candidatura de Julio César Méndez Montenegro.

⁴¹ De acuerdo con las FAR “La ausencia de una concepción dialéctica de la guerra dio lugar a que no se interpretara la lucha política y la lucha armada como una unidad, desvalorizándose la acción armada al considerarla como un instrumento de la política. Este criterio originó el aislamiento del Movimiento Guerrillero de la Organización política (...).” (Documento La unidad de las fuerzas Revolucionarias, marzo de 1971)

⁴² Para Alvarado, el problema principal que enfrentó el PGT después de 1965 fue el enfrentamiento entre las posiciones de derecha y las de izquierda: “Ya no se trataba únicamente de hacer frente al trotskismo que, en ese momento, en lo fundamental estaba derrotado, sino a diversas corrientes e influencias ajenas al marxismo – leninismo, a los peligros del izquierdismo militarista y al conservadurismo apegado a formas esquemáticas

tradicionales.” (Alvarado;1994:56) Para Hurtado el movimiento guerrillero carecía de una estrategia definida: “...habían problemas de coordinación entre los frentes guerrilleros y los organismos políticos que debían conducir desde la ciudad. Esto hizo que cada uno de los frentes actuara con autonomía y fuera adquiriendo identidad propia, con diferentes concepciones y métodos de trabajo.” (1997:11)

⁴³ De acuerdo con un dirigente de las FAR entrevistado: “...los dirigentes del PGT pretendieron que las FAR se convirtiera en su brazo armado. Cuando en los 60’s la dirección revolucionaria provenía del PGT, nos utilizaron para presionar al Gobierno y poderse legalizar; pero sin proponerse desarrollar la guerra, ni librarla hasta sus últimas consecuencias. De todos modos estuvimos poniendo los muertos; y en la campaña electoral donde ganó Julio César Méndez Montenegro, utilizaron a las guerrillas, para hacer propaganda armada a favor de ese candidato. Su lógica era que, aunque ganara (el candidato civil Méndez Montenegro), el ejército no lo dejaría asumir la primera magistratura. Pero el cálculo fue subjetivo. El Ejército lo hizo presidente y lo militarizaron; al final lo manejaron y se inició la debacle de las fuerzas revolucionarias con las ofensivas antiguerrilleras en la Sierra de las Minas y todas las regiones. Los escuadrones de la muerte hicieron su aparición y el terror fue política de Estado. Las poblaciones fueron obligadas a formar Patrullas Civiles (aunque no le llamaron así, pero ese fue el primer experimento de ese fenómeno). El resultado es por demás conocido: Redujeron a las guerrillas a su mínima expresión. Nunca hicieron un análisis autocrítico de esa situación. Por eso y por otras causas rompimos con el PGT en 1967.”

⁴⁴ Para Hurtado se trató de una derrota causada por el reducido número de las fuerzas guerrilleras – que no pasaron de 300 combatientes armados –; la ausencia de una estrategia definida – que en la práctica aplicó el foquismo; la carencia de unidad entre las fuerzas guerrilleras; y, la limitada participación indígena. (1997:6)

⁴⁵ En los estatutos aprobados en su citado cuarto congreso el PGT establece que “En las condiciones económicas, sociales y políticas de Guatemala, ante el régimen de terror y represión impuestos por el imperialismo y las clases reaccionarias en el poder, establecido con el fin de frenar y detener el avance de las fuerzas progresistas y revolucionarias y ante la imposibilidad de realizar transformaciones revolucionarias, utilizando formas pacíficas y legales de lucha, es necesario responder a la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria, impulsando y desarrollando las tareas de la lucha armada revolucionaria de todo el pueblo, hasta lograr el derrocamiento del poder de las clases reaccionarias, y la derrota del imperialismo y la instauración de un gobierno verdaderamente revolucionario, integrado por la clase obrera, los campesinos y las capas medias de la población, capaz de realizar las tareas de la etapa agraria, antiimperialista y popular y pasar a la realización de los objetivos socialistas de la revolución guatemalteca.” (1974:11)

⁴⁶ Particularmente interesante resulta el documento titulado Los fundamentos teóricos de las FAR, en el que se critica tanto las posiciones del PGT como del grupo que posteriormente conformaría el Ejército Guerrillero de los Pobres EGP.

⁴⁷ El testimonio de Payeras (1989) reconstruye el proceso de implantación del futuro EGP en el norte del Quiché.

⁴⁸ Estas organizaciones fueron víctimas a principios de la década de los años ochenta de la brutal represión gubernamental que prácticamente las aniquiló. Aunque como organizaciones no participaron en la constitución de la URNG, algunos de sus miembros se integraron a esta.

⁴⁹ De acuerdo con esta perspectiva la guerra tendría un carácter popular, entendida como una guerra de masas; carácter prolongado, en tanto que “la correlación de fuerzas desfavorable durante cierto período condiciona el carácter relativamente prolongado del movimiento revolucionario”; carácter multilateral y desigual, a partir de la heterogeneidad geográfica y social del país; y, un carácter integral a partir de expresar “las diversas y multiformes manifestaciones de la lucha de clases, expresada en los terrenos económico, social, político, militar e ideológico”. (1972)

⁵⁰ Según sus estatutos, “La estructura, organización y funcionamiento del Partido Guatemalteco del Trabajo están basados en los principios del centralismo democrático que significa: ejercicio de la más amplia democracia interna bajo una dirección centralizada. Los principios fundamentales del centralismo democrático son: a) Carácter colectivo de todos los órganos del partido desde la dirección de los Comités de Base hasta la integración del Congreso. b) Informes periódicos de todos los órganos del partido a todos los órganos y organizaciones inferiores viceversa, es decir, informes periódicos de las organizaciones y órganos inferiores a los superiores. c) Subordinación de la minoría a la mayoría; de los órganos inferiores a los superiores; de todos los órganos, organizaciones y militantes al Comité Central, mientras no esté reunido el Congreso que es el órgano de dirección más alta del partido. d) Disciplina igual para todos los miembros del Partido, de la dirección a la base.” (25)

⁵¹ En una entrevista concedida en 1984 el secretario general de este partido, Carlos González señaló que “En 1978 se inició un proceso de reorganización del PGT a fin de que este pudiera ejercer mayor influencia en la marcha de la guerra popular revolucionaria e impulsar su desarrollo. Este proceso nos planteó problemas de orden ideológico, político, militar y particularmente organizativo. Lo llamamos ‘reorganización del partido adecuada a las nuevas

tareas de guerra popular'. Los plenos del PGT realizados en febrero de 1981, noviembre de 1982 y mayo de 1983 desempeñaron un importante papel en esta labor.” (Guatemala crece la resistencia del pueblo; Mimeo. P. 54)

⁵² En represalia a la matanza de decenas de campesinos en Panzós Alta Verapaz en Mayo de 1978, la Comisión Militar del PGT COMIL emboscó y aniquiló una unidad de la Patrulla Militar Ambulante, acción que fue rechazada por la propia dirección del partido, lo que provocó un conflicto interno entre aquellos que defendían la lucha armada y quienes privilegiaban la estrategia de lucha de masas. “En el seno del partido se formó una corriente que adoptó el nombre de Núcleo de Dirección y Conducción de la lucha interna”, en la cual confluyeron miembros del Comité Central como José Alberto Cardoza (Mario Sánchez) e intelectuales como Bernardo Lemus y Carlos Centeno; así como los principales cuadros militares integrantes de la Comil (...). Afinales de la década de 1970 el PGT se encontraba dividido en tres fracciones: el PGT Comité Central, el PGT Núcleo de Dirección Nacional y el PGT Partido comunista “integrado este último por los seguidores de los cuadros militares de la ‘Comil’ ubicados en la región Central y en el zonal de Alamos y por cuadros de reciente incorporación al PGT, provenientes de las FAR.” (Bravo;2003:25)

⁵³ A principios de 1983 un grupo de miembros del Comité Central, Comisión Política y delegados de estructuras militares y regionales desconocieron la dirección oficial del PGT y constituyeron el PGT 6 de enero.

⁵⁴ Documento de ORPA Proyecto estratégico y situación de desenlace. P. 6

⁵⁵ A principios de los 70 el PGT todavía se refería en los siguientes términos a las organizaciones guerrilleras del período anterior “Aunque estas organizaciones dicen partir también del marxismo – leninismo, sus concepciones, su estrategia, sus métodos de lucha, como lo señala el informe, no corresponden al mismo. Sin regatearles méritos indudables, en el curso de este período representan, desde el punto de vista de clase, los intereses y las aspiraciones políticas de las capas medias empobrecidas y radicalizadas y, en cierta medida, la desesperación de algunos sectores campesinos. Políticamente han manifestado una tendencia ultra izquierdista y, aunque con diferencias entre ellos, una concepción unilateral y militarista que se ha manifestado en métodos anarquizantes y aventureros.” (PGT;1972:45)

⁵⁶ De acuerdo con una de las organizaciones guerrilleras “Es necesario reconocer autocráticamente que a finales de la década de los 70 coincidiendo con un auge de la lucha de masas, la proliferación de nuevas organizaciones con una fuerte influencia del EGP, más la acumulación de fuerza guerrillera y expansión a nuevas regiones, se fue expresando una visión hegemónica y elementos de sectarismo sobre el desarrollo de la unidad en cuadros de dirección nacional y en cuadros y activistas intermedios del EGP, con la consiguiente reacción y aprehensiones de las organizaciones hermanas, las cuales tampoco estaban exentas de su propio sectarismo.” (EGP:1994c:4)

⁵⁷ Según Monteforte (análisis publicado en 1972) la sobrevivencia del PCS está vinculada a la capacidad para aprovechar las contradicciones entre los grupos dominantes en momentos de crisis, aunque esto se haya traducido en la carencia de una estrategia definida que no sea el “... aprovechamiento de los partidos progresistas para actuar en las elecciones y procurar la radicalización de sus programas...”, adicional a lo anterior, desde le triunfo de la revolución cubana el partido ha vivido un proceso de radicalización de sus bases. (citado por Benitez; 1989:214)

⁵⁸ La crítica a la estrategia del PCS no provenía exclusivamente del grupo de Carpio, ya en 1969 Roque Dalton, reconocido intelectual del partido había postulado públicamente que “sólo mediante la elaboración en concreto de la estrategia de lucha armada en El Salvador, de acuerdo con las condiciones concretas del país y sólo mediante el emprendimiento práctico de las tareas que imponga esa perspectiva estratégica podrá evitarse es peligrosa tendencia al quietismo (dentro del partido) que es, en último término, la contrarrevolución. (...) En el caso de nuestro Partido creemos que el momento es grave y lleno de inquietantes alternativas. Sin lugar a dudas se trata de una de las organizaciones revolucionarias más maduras, fuertes e influyentes de Centroamérica (...) Sin embargo los resabios conservadores determinan aún gran parte de sus posibles proyecciones y los limitan. Estos resabios pueden convertirse en freno definitivo para que el Partido pueda ocupar su puesto de vanguardia en la lucha del pueblo salvadoreño y alejarlo del lugar que le estaría destinado en la lucha de las masas centroamericanas contra el enemigo común.” (Lowie;1983:307)

⁵⁹ De acuerdo con Gilly, la crisis política “... estimula la radicalización de un sector de la pequeña burguesía, proveniente de tendencias cristianas, del movimiento estudiantil y de intentos guerrilleros anteriores que constituyen el Partido de la Revolución Salvadoreña y su organización armada, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Esta ruptura con el reformismo – comunista, nacionalista y cristiano- está impregnada todavía de foquismo y de concepciones militaristas de la revolución. Las dos organizaciones se proponen romper con el Estado, organizarse fuera de él, y por eso toman las armas; pero se constituyen también al margen de una ligazón con el movimiento de masas, el cual permanece controlado por los sindicatos y centrales ligados al Estado.” (1981:55)

⁶⁰ Para la organización Resistencia Nacional “el principal elemento aglutinador en aquella época, radicaba en la conciencia de la necesidad de dar organización e impulso a la lucha armada como vía hacia la toma del poder. La práctica política de quienes formaríamos el ERP, nos había demostrado que las estructuras orgánicas tradicionales

(partido Comunista, organizaciones sindicales, organizaciones políticas nacionales y estudiantiles, organismos gremiales y de masa etc.) por su concepción y su estructura orgánica, constituían impedimentos reales objetivos y subjetivos para que de su seno mismo surgiera la práctica militar ligada a una práctica política... Caíamos pues en el error de un desarrollo orgánico en una sola dirección: la construcción militar, abandonando la construcción del trabajo político en el seno de las masas y en el seno mismo del ERP.” (Resistencia Nacional; 1976:5)

⁶¹ Desde otra perspectiva, Grenier (1999:43-45) señala que el origen de la insurgencia salvadoreña, a quienes denomina “causantes” del conflicto armado en ese país estuvo relacionado con la existencia de crisis en el PCS, la Universidad Nacional, y la Iglesia Católica, instituciones de las que se originaron y de las que se integraron las guerrillas.

⁶² En un primer momento organizaron comandos armados y “cada compañero de un comando armado tenía la obligación de tener 15 colaboradores, y como eran compañeros que habían estado precisamente en el movimiento sindical, o bien ligados a la masa, aquellos 15 colaboradores eran generalmente dirigentes sindicales, activistas sindicales. Entonces cuando veníamos a sentir, ya teníamos 60 o 74 compañeros, que era un colchón en el que se movía el comando armado.” (Carpio; 1983:48)

⁶³ De acuerdo con Cienfuegos (1980:33) el trabajo político con el sector democrático del ejército fue considerado una prioridad, y desde 1975 se empezaron a enviar mensajes “... al sector del ejército que estaba contra el proyecto fascista, sector al cual la izquierda, debido a su dogmatismo y ortodoxia, no contemplaba como aliado posible táctico estratégico.”

⁶⁴ Entrevista con Francisco Jovel, ex miembro del PRTC. (Miranda 2001)

⁶⁵ Análisis detallados del golpe del 15 de octubre de 1979 se encuentran en Dada (2001); Lungo (1991); y Solórzano (1987); testimonios y análisis en el momento se encuentran también en José Ma. Calderon et al (1980). El trabajo más reciente sobre el tema es de Menjívar (2006) en el que hace una reconstrucción detallada y actualizada de este proceso.

⁶⁶“El ERP se lanzó junto con las LP-28 a la insurrección en la madrugada siguiente al golpe de estado, ocupando las ciudades periféricas a la capital, de donde posteriormente se retiraron luego de sufrir una poderosa y desproporcionada contraofensiva de fuerzas gobiernistas. El BPR ocupó los ministerios de Trabajo y Economía, tomando como rehenes a los ministros de esas carteras. También fueron ocupadas la Catedral de San Salvador y varios templos en la capital y otras ciudades.” (SEPLA;1979:6)

⁶⁷ Las FPL caracterizaban la economía salvadoreña como capitalista dependiente.

⁶⁸ Esta visión coincide con la de McClintock, para quién el FMLN fue el movimiento guerrillero más fuerte de América Latina. (1998:16)

⁶⁹ En su *Tiempos de Locura* (2006) Menjívar reconstruye el proceso que condujo a la decisión de lanzar la ofensiva del 81. La visión insurreccional del ERP y la RN se impuso a la perspectiva de Guerra Popular propuesta por las FPL. Asimismo, a partir de evidencias y testimonios muestra que las primeras dos organizaciones no contaban con los recursos y medios necesarios para ejecutar los planes acordados.

⁷⁰ En Menjívar (2006:272-296) se encuentra un análisis detallado de la ofensiva realizado para la dirección de las FPL por Rafael Menjívar Larín en enero de 1983.

⁷¹ Para algunos analistas, las medidas llevadas a cabo por la segunda junta de gobierno encabezada por Napoleón Duarte fueron un duro golpe para la oligarquía salvadoreña. Estas incluyeron la reforma agraria, la nacionalización de la banca y la nacionalización de las exportaciones.

⁷² Ya en las elecciones municipales de 1988 la Democracia Cristiana fue derrotada por Arena que empezó a ocupar espacios electorales no sólo en las ciudades sino también en las zonas rurales.

⁷³ Según Facundo Guardado – en ese entonces comandante de las FPL - la ofensiva de 1989 se empezó a planificar desde 1985, desde su perspectiva la meta era hacer colapsar al ejército y tomar el poder. (Entrevista con el Faro.net)

⁷⁴“Al tope... para negociar: la estrategia del FMLN.” Revista Envío Número 101. Enero 1990.

⁷⁵ La excepción en esta materia la constituye ORPA que desde sus inicios buscó desarrollarse en las zonas de la bocacosta sur occidental, altamente pobladas y cercanas a las plantaciones agro exportadoras.

⁷⁶ La constitución del Frente Unitario que operaba en las zonas montañosas del dentro del país; así como la reactivación de los frentes Augusto César Sandino y Santos Salazar del EGP y de las FAR respectivamente; y los intentos por crear fuerzas urbanas en las ciudades fueron esfuerzos orientados a cambiar esta situación.

⁷⁷ De acuerdo con una de las organizaciones insurgentes “Uno de los errores que contribuyó a dañar seriamente al movimiento de masas fue llevarlo a declarar públicamente la lucha para derrocar a Lucas García y enfrentarlo, de esa manera contra el gobierno, el ejército y las fuerzas represivas en general”, concluyendo que fue “... un grave error querer insurrectar a las masas si éstas no cuentan con un apoyo militar real de las fuerzas militares revolucionarias y populares.” (Conclusiones del pleno de 1984. FAR 1984)

⁷⁸ La ofensiva contrainsurgente urbana fue descrita por Payeras (1987).

79 La CEH documenta la acción militar desproporcionada y criminal en contra de la población civil.

⁸⁰ Para uno de los miembros de la Comandancia General de la URNG "...aunque militarmente no pudimos derrotar el proyecto militar contrainsurgente, sí tuvimos la capacidad de inviabilizarlo, y con ello se desató un proceso de desmilitarización del aparato del Estado y de la sociedad que tuvo como expresión inmediata, la desaparición de la represión como política de Estado." (Monsanto; 2000:14)

⁸¹ Estas nociones se toman del análisis realizado por Mires (2005) para analizar los cambios ocurridos en Europa del Este y la Unión Soviética a finales de la década de 1980 y principios de la siguiente.

⁸² Una crítica al llamado "paradigma de la transición" se encuentra en Carothers (2002)

⁸³ El triunfo de la revolución Sandinista implicó un importante aliento para los movimientos revolucionarios de Guatemala y El Salvador, lo que a su vez se constituyó en una variable adversa para el desarrollo de los mismos, tanto por la decisión norteamericana de evitar nuevos triunfos revolucionarios en Centroamérica como por el desarrollo de la ola conservadora. Como lo señala Figueroa Ibarra "... lo paradójico en esta gran ola revolucionaria es que aconteció cuando el mundo estaba caminando ya en sentido opuesto. Las revoluciones centroamericanas ocurrieron cuando el mundo observaba la intersección entre el final de una época de ascenso revolucionario y el principio de otro momento: el de la marea reaccionaria." (1995:71)

⁸⁴ Un panorama general de la "crisis centroamericana" y su resolución se encuentra en Torres-Rivas editor (1994).

⁸⁵ Con mayor precisión, la insurrección popular que terminó con la dictadura de Anastasio Somoza Debayle el 19 de julio de 1979 que en su momento expresó una amplia alianza de fuerzas políticas y sociales que posteriormente fue hegemonizada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN.

⁸⁶ Esta información fue confirmada por dos de los dirigentes revolucionarios guatemaltecos entrevistados.

⁸⁷ Revista Envío No. 36, junio de 1984

⁸⁸ En el caso guatemalteco, durante todo 1984 (año del inicio de la apertura política) las unidades de inteligencia militar capturaron y desaparecieron a decenas de dirigentes políticos; y muchos detenidos-desaparecidos en cárceles clandestinas fueron igualmente ejecutados. Desde el punto militar se mantuvo una presión permanente sobre las unidades de la guerrilla.

⁸⁹ Un análisis sobre las complejas relaciones entre conflicto, democratización y proceso de paz en Guatemala se encuentra en Torres Rivas (1997:13-17)

⁹⁰ En su pleno de 1984 las FAR afirmaron: "Es cierto que la maniobra electoral es parte de la política contrainsurgente, pero sería un error considerar, por ejemplo, que la constituyente se limitará a apoyar las medidas de contrainsurgencia. Debe tomarse en cuenta que la integran representantes de diferentes sectores de clase y tratarán de hacer valer sus intereses. (...) No es correcto partir del hecho de que las elecciones son una comedia y una farsa. (...) hay grandes sectores de la población que sí se confunden y creen en la maniobra. Por eso, subestimar estos procesos y no ponerles atención debida, puede llevarnos a cometer errores políticos serios." (FAR resolución del pleno ampliado de 1984). Por su parte, el Comandante en jefe del EGP planteaba en enero de 1985 al analizar la situación política del país: "Es en ese sentido que reiteramos que la maniobra aperturista, que el limitadísimo intento de reformismo que conlleva y que el cambio de integrantes del gobierno, no constituye ningún viraje histórico que altere la línea de Guerra Popular Revolucionaria, que es el camino del Pueblo de Guatemala para su liberación y para la construcción de una nueva sociedad, verdaderamente justa, plena, sana, libre y soberana." (Ramírez; 2002:48)

⁹¹ En la "Carta de los cuadros, militantes y combatientes que rompen con la Dirección Nacional del EGP a la DN y a los compañeros de esa organización..." el grupo en cuestión señaló entre otros puntos la falta de discusión interna, la ausencia de un análisis objetivo de la situación de guerra, la subestimación del enemigo y la incapacidad para recuperar la iniciativa estratégica. La dirección del EGP calificó la separación como una maniobra antirrevolucionaria. (Comunicado interno..., febrero 1984)

⁹² Probablemente parte de las diferencias que existían en las FPL y que concluyeron con el asesinato de Ana María y el suicidio de Marcial (principales dirigentes de esta organización) tuvo que ver con las posiciones en torno a la negociación. A principios de 1982 la segunda responsable de las FPL se manifestaba firmemente a favor de una solución política: "Nosotros siempre buscaremos la solución política, nos mantendremos firmes el tiempo que sea necesario, como se mantendrá, también, la lucha militar, la lucha de masas por todos los métodos y formas. Ahora bien, la solución política es una forma de lucha que un movimiento revolucionario no pude abandonar. Es una forma de decir al pueblo de que estamos consientes de la necesidad de implementar toda forma de lucha, no sólo necesariamente la vía militar y ante el mundo también." (Movimiento Mexicano por la Paz; 1982:88)

⁹³ Revista Envío, marzo de 1987 y marzo de 1988, números 69 y 81.

⁹⁴ En 1984 las FAR se pronunciaban sobre este tema en los siguientes términos: "Apoyar la negociación política como una forma de solucionar los conflictos, no quiere decir que estemos renunciando a la lucha revolucionaria. No podemos ver el problema mundial, regional o nacional, en medio de la disyuntiva revolución o pacificación. La pacificación no sustituye la revolución. La lucha por la paz y la negociación, son elementos que sirven para los

objetivos revolucionarios; son pasos, etapas, actitudes de un mismo proceso, donde no entran en contradicción sino que los primeros están al servicio del objetivo final.” (Pleno de 1984).

⁹⁵ De acuerdo con una ex miembro de la dirección del EGP entrevistada, los golpes militares “... a toda la infraestructura que teníamos en las ciudades en la parte a lo que nosotros llamamos la retaguardia estratégica porque nos proveía de dinero, artículos, confección y todo las cuestiones médicas y logísticos, todo eso se nos vino abajo. Y por este motivo tuvimos que hacer otra retaguardia que fue México y la montaña. Pero México fue un lugar donde nos establecimos. Logramos mantenernos en la penumbra con la cooperación la gente, haciendo núcleos y vínculos, eso si, estuvo disminuido los vínculos pero los recuperamos, jamás al cien por ciento. Pero a la ciudad nosotros nunca pudimos regresar, nunca.” (Guatemala, Agosto de 2005)

⁹⁶ Este tema de carácter ético moral ha sido pocas veces explorado, el problema que se planteaba era que la política de matanzas indiscriminadas impulsada por el ejército provocó un crecimiento en el reclutamiento de las organizaciones guerrilleras. Muchos de los nuevos alzados habían perdido parientes y amigos y esperaban de la insurgencia no sólo protección sino una respuesta contundente contra el ejército. En esas condiciones no le era posible a los mandos rebeldes conseguir respaldo interno suficiente para buscar acercamientos con el enemigo. Asimismo, para el alto mando del ejército la única salida política al conflicto consistía en el desarme inmediato de las fuerzas insurgentes.

⁹⁷ En la segunda mitad de la década de los ochenta una de las consignas que postulaba la guerrilla era “¡el diálogo es lucha, no rendición!” con la que se pretendía aclarar que estas aproximaciones no conducían necesariamente a la desmovilización de la insurgencia.

⁹⁸ Un ex miembro de la dirección del PGT entrevistado señaló al respecto: “Este proceso empezó con una nueva fase donde no se aceptaba la negociación, se hablaba más que todo del diálogo (...) donde la comandancia no asumía en su sentido real, ya que era una finta, una táctica tanto de parte del ejército como de URNG, tratando de ganar espacio, tratando de manipular la correlación de fuerzas. Fue en el 90 o 92 cuando las negociaciones empiezan a jugar un papel más preponderante hasta llegar a las negociaciones que fue el tema central, digamos, en la movilización de masas, el trabajo político/diplomático de las negociaciones del trabajo internacionales.” (Agosto de 2005)

⁹⁹ En 1981 el FMLN/FDR hicieron una serie de propuestas de diálogo a través de diversos líderes internacionales. En Agosto de ese año se presentó la propuesta “busquemos una solución Justa Al Conflicto Armado en El Salvador”, que incluía agenda, mecanismos y objetivos de la negociación. En 1982, año en que fue electa una Asamblea Nacional Constituyente, el FDR/FMLN ratificó su disposición a negociar, proponiendo un diálogo directo sin condiciones previas a través de delegados plenipotenciarios. Esta propuesta fue igualmente rechazada.

¹⁰⁰ Una revisión detallada de la iniciativa de Contadora se encuentra en Relación de Contadora, editado por Víctor Flores Olea (1988)

¹⁰¹ Aparentemente las posiciones dentro del ejército de Guatemala en torno a la negociación no fueron homogéneas; mientras que el sector duro se opuso a la realización de las mismas; un sector blando paulatinamente fue aceptando el proceso.

¹⁰² En la discusión del Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas la URNG adoptó la propuesta de la ASC como su posición negociadora. (Sieder; 1998:113)

¹⁰³ De acuerdo con Torres (1997:28) en el desenlace del proceso de negociaciones jugó un papel importante el presidente Arzú y su grupo de colaboradores que le imprimieron voluntad política al proceso. En reuniones “secretas” se dio un diálogo directo que permitió la creación de un clima de confianza que permitió la exitosa conclusión del proceso.

¹⁰⁴ El gobierno de Oscar Berger ha llegado a rutinizar y trivializar el reconocimiento de la responsabilidad del estado en casos particulares.

¹⁰⁵ La utilización del término coalición transicional para analizar a las insurgencias centroamericanas ha sido desarrollada por Ryan (1994).

¹⁰⁶ De acuerdo con Monsanto: “... nosotros, como URNG llevamos la propuesta de la ASC a la mesa de negociaciones, aunque conocemos que la mayor parte de esta propuesta no es aceptada por el gobierno y el ejército.” (1994:56)

¹⁰⁷ Se trató de una situación paradójica en la que la URNG a pesar de su situación militar no negocia su rendición pero sí su desaparición como organización guerrillera. Como lo explica Torres “el sacrificio orgánico del grupo alzado se explica por su debilidad militar, el cansancio de sus valedores internacionales y su agotamiento programático en las circunstancias que hoy día definen la cultura de occidente. ¿Lucha armada para exigir elecciones libres? ¿Por qué entonces negocia el Estado guatemalteco con una fuerza subversiva que experimenta tales flaquezas? La URNG tuvo como contraparte inicial gobiernos civiles igualmente débiles, prisioneros de un poder militar pleno de descrédito por sus crímenes contra la población civil. Y moviéndose en un escenario local donde empieza a

moverse una ciudadanía harta de la violencia y las inseguridades del conflicto. Condenados entonces a entenderse por la fuerza de la coyuntura, la URNG logró un éxito inicial al trasladar a la mesa de negociaciones, aspectos no integrados de un programa de reformas socioeconómicas y políticas con respaldo popular. Y son estos temas substantivos los que crean un clima equivoco para la construcción de la paz...” (1997:38)

¹⁰⁸ Las dificultades de URNG para poder articular este amplio movimiento social se empezaron a manifestar en 1995 cuando se convocó a participar electoralmente y se creó el Frente Democrático Nueva Guatemala FDNG. Este frente que surgió de iniciativas paralelas de organizaciones y dirigentes sociales autónomos de la URNG fue finalmente controlado por la organización insurgente. Muchos dirigentes cercanos a la URNG provenientes de organizaciones estudiantiles, de derechos humanos, campesinas, y sindicales se integraron al FDNG y asumieron parte de la dirección de este y fueron postulados a cargos de elección popular. EL FDNG logró elegir a 6 diputados al congreso y obtuvo poco más del 7 % en las elecciones presidenciales. Esta experiencia mostró las posibilidades de lucha electoral de la izquierda social y revolucionaria, pero también evidenció la incapacidad de la dirigencia para lograr acuerdos e incorporar organizaciones, grupos y personas que no se subordinaran a la estrategia guerrillera. Esto profundizó la desconfianza por parte de los dirigentes sociales hacia la URNG.

¹⁰⁹ Frente a la pregunta sobre si existía una alternativa a la negociación, el ex miembro de la Comandancia General de la URNG Gaspar Ilom (Rodrigo Asturias) respondió enfáticamente: “No creo que pudiera haber existido y haberse mantenido un tipo de acción política a través del movimiento social y del movimiento popular que en ese momento estaba recién saliendo de una época de gran reflujo por la represión que los había aniquilado. Yo creo que los espacios eran muy limitados para otro tipo de acción política. Es la negociación la que abre espacios, incluso, para el movimiento social y para la lucha reivindicativa para fortalecer las posibilidades que va construyendo la acción política a través de la negociación, en tanto que, la URNG incorporó a sus cuatro factores estratégicos al factor de negociación.” (Entrevista 2004)

¹¹⁰ En una de las entrevistas realizadas un ex oficial del EGP señalaba que “Desde que comenzaron las negociaciones, en los Frentes se nos habló de las negociaciones como un nuevo aspecto que se incorporaba a nuestra estrategia de Guerra Popular, pero visualizándola no como el desenlace del proceso sino como un aspecto más que nos permitía ganar políticamente. Creo que es en el 94 que se comienza a hablar más en serio de la firma de la paz y se percibe, para nosotros en la montaña, que hay estructuras de la Organización que se han hecho más a esa idea, particularmente de las estructuras de la ciudad capital y de las estructuras vinculadas al movimiento social. Desde los Frentes de la Montaña se les cuestiona. Incluso había la plática no pública entre las y los militantes más viejos de los Frentes de la Montaña que si se llegaba a "traicionar" la lucha con una firma de paz, nos rebelaríamos y aunque fuéramos un "puñadito" de gente perdidos en la montaña, la resistencia valía y sería significativa. Tanto es así, que en la II Conferencia Guerrillera se reafirma que la lucha militar es el aspecto decisivo para el triunfo revolucionario. Todo el tiempo estamos insistiendo en la necesidad de reforzar lo militar, de allí consignas como: "Todo para los Frentes, Todo para la Victoria". Sin embargo, prevaleció en la II Conferencia Guerrillera la posición del énfasis en lo militar, sin que eso significara necesariamente pensar en un triunfo militar que a esas alturas era imposible. Esto de todas maneras no resolvió las diferencias que existían al interior de la Organización y de hecho es uno de los problemas que tuvo el EGP cuando se llegó a la firma de la Paz: la falta de coherencia interna y unidad más profunda, sin que eso significara ruptura orgánica, pero sí diferentes interpretaciones.” (Guatemala, agosto de 2005)

¹¹¹ Un ejemplo de esto lo constituye el desarrollo del movimiento maya. Tanto la acción de organizaciones indígenas que pertenecían al ámbito de la URNG como el de las organizaciones indígenas que reivindicaban aspectos culturales, permitieron la constitución de este movimiento que logró el reconocimiento por parte del Estado de la existencia del pueblo maya. (Saenz de Tejada 2001).

¹¹² En las entrevistas realizadas con los dirigentes de la URNG en el marco de este proyecto, la mayoría reconoce desde la perspectiva actual que a mediados de la década el movimiento revolucionario guatemalteco no tenía otra alternativa a la negociación; sin embargo, en su momento entre la militancia se siguió postulando la posibilidad de continuidad de la lucha.

¹¹³ En ORPA se afirmaba que “El papel de lo militar es sobre todo golpear y minar militar y moralmente al ejército y en esa medida, permitir la manifestación de las demás expresiones de la lucha popular.” (Articulación para el desenlace;1995:11) En un documento interno de las FAR de diciembre de 1995 se señalaba enfáticamente que “nuestra estrategia sigue siendo la Guerra popular Revolucionaria” en la que la lucha armada jugaba el papel determinante. (Documentos para la reflexión Año 2 Número 20).

¹¹⁴ Se planteaban postulados como el siguiente: “tratamos de generar una mentalidad, actitud y posición basada en medidas orgánicas, en trabajos a realizar y en desarrollo a lograr para salir de lo indeterminado. Vemos posible dar un salto en el movimiento revolucionario. Este salto puede ser un triunfo o un avance muy sustancial que nos lleve a

posiciones cercanas a un triunfo o a la toma del poder, a lo que no hemos renunciado.” (Proyecto estratégico y situación de desenlace; p. 26)

¹¹⁵ Estos materiales son “Proyecto estratégico y situación de desenlace”; “Articulación para el desenlace”; “Grandes proyectos de la organización”; y “Coyuntura y situación actual del país”, todos fechados en enero de 1995.

¹¹⁶ Paradójicamente en el contexto de la ruptura de la Corriente Revolucionaria, el primer congreso del partido definió las Bases ideológicas del partido en los siguientes términos: “URNG es un partido político de izquierda, democrático, revolucionario, socialista y que practica la solidaridad internacional. Con un compromiso y práctica revolucionaria. Basado en la concepción e ideal democráticos. El partido reivindica la concepción y los valores de progreso, de transformación social y la emancipación espiritual de la humanidad que nos ha legado el pensamiento de Marx, Lenin y otros socialistas y revolucionarios, y la interpretación histórica y de permanente transformación y desarrollo de la realidad. Pensamiento que es necesario interpretarlo y aplicarlo de manera creadora a la realidad guatemalteca. Asimismo, recupera, incorpora y proyecta el gran acervo de calores acumulados en la historia de nuestro pueblo, reflejando la realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de nuestra Guatemala.” (2002:58)

¹¹⁷ La decisión de someter a elecciones tanto los cargos dirigenciales del Frente como las candidaturas ha sido objeto de distintas críticas, desde las posiciones “derrotadas” en estos procesos se critica el recurso a la construcción de mayorías (mayoriteo) sobre la base de trabajo político organizativo en el que en ocasiones se han denunciado prácticas clientelares. Desde la corriente hegemónica dentro del frente y “ganadora” de los últimos procesos internos, se ha cuestionado la legitimidad de este tipo de procesos en tanto que no existe un criterio para seleccionar a las personas más idóneas para los cargos, sino aquellos que, independientemente de su trayectoria, resulten electos en estos procesos. Adicionalmente, la vida política interna del partido quedó restringida a una dinámica electoral permanente (elecciones internas, elecciones municipales, legislativas y presidenciales) y a prácticas “electoreras”. (Handal;2004: 6)

¹¹⁸ En palabras de Schafik Handal pronunciadas el 16 de enero de 1991: "No venimos como ovejas descarriadas que vuelven al redil, sino como enérgicos reformadores y luchadores por los cambios...".

¹¹⁹ El impacto de este caso en la correlación de fuerzas para implementar los acuerdos de paz son analizados por Jonas (2000: 273-280)

¹²⁰ De acuerdo con Torres Rivas "... el descubrimiento del secuestro de la señora Novela por un comando de la ORPA en un momento local tan especialmente sensibilizado por la ola de secuestros criminales y cuando estaba a punto de discutirse el tema de la amnistía ha producido un virtual cataclismo político en el interior de las fuerzas de la izquierda desarmada. Los entretelones de la separación de Rodrigo Asturias, el involucramiento efectivo de la URNG y otros detalles son datos menores frente a la reacción que políticamente introdujo en el momento en que se decide la reinserción guerrillera.” (1997:41)

¹²¹ Sobre las consecuencias del secuestro de la señora Novela, una ex miembro de la Dirección Nacional de EGP y del comité ejecutivo nacional de la URNG señaló: “Yo creo que tuvo dos efectos hacia lo interno. Primero que distorsionó la propia negociación en el acuerdo de incorporación, nos dejó bastante mal parados sin la capacidad de defender aspectos importantes de algunos de los acuerdos, nos quito fuerza política. En lo interno creo que desgastó la confianza (...) había un compromiso muy fuerte de no hacer este tipo de acciones particulares y hasta ahora existe una sombra muy fuerte. Un hecho bien puntal es el caso de FAR y ORPA que han sido dos grupos que siempre han tenido tensiones que a partir de este hecho se fracciono mucho más.”

¹²² Analizando la posibilidad de terminar con las acciones armadas, un miembro de la Comandancia General afirmaba en 1994: “Tenemos que garantizarles a todos nuestros combatientes las condiciones de vida digna y decorosas que merecen tras tantos años de lucha por nuestro pueblo. No podemos ser tan irresponsables de dejar a nuestros compañeros sin saber como iniciar una nueva vida.” (Monsanto; 1994:49)

¹²³ Sobre esto, la FGT señaló: “Hay evaluaciones, respaldadas por la opinión de compañeros que nos sugieren que la desmovilización y entrega de armas debiera llevarse a cabo a la par del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Al no ser "vinculantes" estos compromisos dependemos de los mecanismos de negociación y de verificación. Hay que tomar en cuenta que la presión militar desaparece y que la presión política y social se debilita. Es muy importante evaluar esta tesis, Lo que sí hemos aprendido al respecto es que las confianzas políticas coyunturales que se pueden generar con el gobierno, no deben suplir mecanismos y cronogramas estrictos de cumplimiento, ni desmovilizar la fuerza de presión. Nosotros recomendamos que las reformas de carácter constitucional que se requieren para llevar adelante el proceso de cumplimiento de los Acuerdos se pacten en la negociación.” (FGT; 2003) Esto contrasta con lo planteado desde 1994 por un miembro de la Comandancia General de URNG sobre la posibilidad de una “paz armada”: “... en caso de que llegáramos a un acuerdo de alto al fuego, en caso decidiéramos nuestra desmovilización, ¿quién nos va a garantizar el cumplimiento de los acuerdos? (...) si no somos nosotros, si no es nuestra fuerza la que garantice el cumplimiento es muy difícil lograr ese cumplimiento.” “Cuando se firme la paz, el gobierno debe saber que nuestra desmovilización depende del cumplimiento de los

acuerdos de paz. Si este cumplimiento es parcial, nuestra desmovilización será parcial. Si el cumplimiento de los acuerdos es total, nosotros nos desmovilizaremos totalmente. (...)La desmovilización puede darse en un año, puede darse en año y medio, puede ser que nunca se dé, aún habiéndose firmado el acuerdo de paz y aún habiéndose firmado un alto al fuego. La guerra no termina con la firma de la paz.” (Monsanto; 1994:48-49)

¹²⁴ En enero del 2004 de 13 mil lisiados de guerra de ambos bandos sólo 8000 recibían pensiones por parte del gobierno. Estas pensiones, que corresponden como máximo a un salario mínimo (144 dólares estadounidenses) resultan insuficientes para garantizar la subsistencia de los ex combatientes. (Infopres; 23/01/2004).

¹²⁵ En Guatemala las movilizaciones de masas se dieron a finales de la década de 1970 y principios de 1980 para reivindicar y construir un proyecto revolucionario; en su momento un porcentaje importante de la población se movilizó por una revolución, en todo caso por la democracia popular y no por democracia liberal procedimental. Igualmente, la movilización social con orientación revolucionaria en el caso salvadoreño impidió que la primera junta de gobierno de octubre de 1979 (la junta revolucionaria “de Majano”) llevara a cabo el programa de reformas políticas, económicas y sociales – que incluían la democratización del país – y que en ese momento eran una opción para evitar la guerra civil. Sin embargo, las organizaciones guerrilleras orientaron la revolución antes que la reforma.

¹²⁶ La idea de transición desde abajo está inspirada en el trabajo de Elizabeth Wood (2000).

¹²⁷ La refundación de la República Bolivariana de Venezuela se dio a partir de la convocatoria a una asamblea constituyente y la aprobación de un nuevo orden constitucional; esto cumpliendo con las condiciones de la democracia procedimental. En agosto de 2006 puede pensarse que en Bolivia se seguirá este camino.

¹²⁸ En el modelo analítico que el autor de este trabajo está desarrollando la reducción de la desigualdad social a partir de la igualación política requiere: el pleno reconocimiento de los derechos políticos y el ejercicio por parte de las y los ciudadanos de esto; la sola participación resulta insuficiente pues se requiere además de un proyecto político igualitarista que promueva las políticas de igualdad; el sistema político electoral debe cumplir condiciones democráticas mínimas genéricamente agrupadas en participación, representación y competencia y que incluyen aspectos como el control del financiamiento político y la existencia de pluralidad de medios de información; y, la existencia de un estado con capacidades financieras y organizacionales para diseñar e implementar políticas de igualdad.

¹²⁹ Para un análisis de los sistemas políticos centroamericanos consultar Artiga (2000).

¹³⁰ Con las últimas reformas a la Ley electoral y de partidos políticos se estableció que los centros de votación no deben concentrarse exclusivamente en las cabeceras sino deben instalarse en los lugares poblados por más de 500 ciudadanos empadronados.

¹³¹ De acuerdo con ODonnell en los países del sur, el rechazo de cierta izquierda a la “democracia burguesa” dejó en estado de indefensión a estas frente a los golpes militares: buena parte de la izquierda no supo defender la institucionalidad democrática.

¹³² Para Rubén Zamora, líder histórico del FDR y primer candidato presidencial del FMLN la relación acuerdos de paz, inserción y elecciones era determinante para el cumplimiento de los acuerdos. En enero de 1992 señalaba: “A nuestro juicio no se puede separar la lucha negociadora de estos años de la lucha negociadora de estos años de la lucha popular que debe darse en 92 y 93 para que se cumpla lo acordado ni de la lucha electoral que culminará en 1994. Pretender separar la lucha negociadora, la lucha popular y la lucha electoral y posponer un posible gobierno de izquierda para el año 2 mil o para más tarde es un error. La elección del 94 no es cualquier elección. Verla como un hecho aislado es peligroso. Las elecciones del 94 son parte del proceso de negociación. Y es un desafío para la izquierda el ganar esas elecciones. Ahí veremos en definitiva quién ganó esta negociación, allí se va a decidir quién ríe mejor, si ríe la derecha o si ríe la izquierda. Porque el triunfo supremo de la actual derecha neoliberal no es ya liquidar la fuerza política de la izquierda sino ubicarla en un papel subordinado. Reducirla, convertirla en una “izquierda bonsai”, minúscula, colocada en el jardín de una “democracia” totalmente orientada a sus intereses empresariales. Por eso debemos jugar con inteligencia en las elecciones del 94.” (Revista Envío, No. 123 enero de 1992)

¹³³ La discusión y aprobación en Guatemala de las Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos planteadas en los acuerdos de paz se llevó más de 7 años, ya que fueron aprobadas en mayo de 1994. Estas reformas, llamadas de “primera generación” no resultaron satisfactorias para varios de los actores involucrados en este proceso. Actualmente continúan en discusión otro grupo de reformas denominadas “de armonización”.

¹³⁴ De acuerdo con Montoya, el debate ideológico al interior del Frente ha sido deformado por los medios de comunicación para presentar una imagen negativa de este partido. (2004:4)

¹³⁵ Sobre las diferencias entre los que se quedaron y los que abandonaron el FMLN Nidia Díaz, dirigente del FMLN señala: “En la historia del proceso de construcción de un partido unificado, la dinámica de la lucha de las ideas, de

los planteamientos, de la administración y de las diferencias ha conllevado a un proceso como de decantamiento de las aguas entre nosotros. La gente que se ha ido separando ya no coincide con el proyecto revolucionario democrático socialista y antepone intereses coyunturales o personales. El argumento que llevan ellos es que en el Frente reina el autoritarismo. Esta gente se va precisamente en la coyuntura de los debates de puestos dentro del partido o en la coyuntura de las elecciones.... Yo sigo trabajando en el frente con cargo o sin cargo, porque creo que el Frente tiene la razón en muchas formas porque hay un compromiso histórico con la sangre derramada.” (Inforpress; 4 de noviembre de 2005)

¹³⁶ (Revista envío. No. 127, junio 1992)

¹³⁷ Las explicaciones de esta primera división van desde la simple disputa de puestos de poder, hasta acusaciones contra Joaquín Villalobos de haberse vendido a la derecha, pasando por la disputa entre marxistas y socialdemócratas. Para González “En la primera disputa abierta por el control del FMLN, la RN y el ERP salieron perdiendo. El partido quedó en manos de las FPL, el PCS y el PRTC, fraguándose un pacto mediante el cual, aceptada la existencia de tendencias distintas, el primer grupo (FPL) controlaría la coordinación del partido, dejando a los otros dos, especialmente al tercero (PRTC), en una posición subordinada. Las Fuerzas Populares de Liberación, pues, se salieron con la suya, dando continuidad a su afán de décadas por hegemonizar el FMLN.” (Zamora por su parte señala que existían tres centros de discusión: la definición revolucionaria del partido, apoyada por las FPL, el PRTC y el PCS frente a una propuesta de definición socialdemócrata; el segundo correspondía a la evaluación de la situación nacional y la posibilidad de llegar a acuerdos con el gobierno; y el tercero el papel del partido y las alianzas; los que se retiraron proponían la ampliación en contra de la visión del centralismo democrático. (2004:104-105)

¹³⁸ Los dirigentes de estas organizaciones señalaron que el país necesitaba “... una nueva fuerza social que aglutine a los sectores no tan polarizados entre ARENA y el FMLN. Una fuerza socialdemócrata que junte a estas dos organizaciones con el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y con algunos disidentes del Partido Demócrata Cristiano (PDC).” (Revista envío No. 156, enero de 1995)

¹³⁹ Apoyaron subir el Impuesto al Valor Agregado IVA del 10 al 13 % así como a detener la reforma del sistema electoral.

¹⁴⁰ Semanario Proceso UCA, No.787 diciembre 1997.

¹⁴¹ Sobre la salida de Guardado y otros miembros del FMLN, en entrevista el ex comandante Ramiro Vázquez del FMLN señaló: “El problema es que aquí se mezclan otros elementos: al salir de la montaña, la derecha nos tuvo por primera vez en una mesa, supo quiénes y cuántos éramos, y le trazaron al FMLN, esa izquierda que venía saliendo con olor a pólvora, a monte y a clandestinidad, un eje de trabajo. Primero nos hicieron renunciar al pensamiento revolucionario que nos había llevado a construir uno de los movimientos guerrilleros más poderosos y osados del continente. Nos hicieron sentir vergüenza de ello y abandonarlo. Muchos murieron por andar en sus maletines folletos sobre el pensamiento de Marx o de Lenín. Cuando salimos de la guerra, cuando ya no nos mataban por andar eso, dejamos de estudiarlos, renunciamos al pensamiento. ¡Quebraron los modelos de partido que teníamos! Típicos de la izquierda, los abandonamos para transformarnos en grandes partidos de masas. En ese escenario, además de la descomposición de una izquierda auténtica, comenzó a surgir el oportunismo. Estos amigos que ustedes mencionan tienen que hacer un esfuerzo grande por limpiarse las cascaritas que les han quedado, que los identifica más con una posición divergente del pensamiento de izquierda, producto del oportunismo. Ellos son desertores de la izquierda.” (El Faro.net)

¹⁴² La DNP quedó integrada por 6 integrantes del EGP, 4 de las FAR, 3 de ORPA y 2 del PGT. La no existencia de una mayoría obligó a que en su momento las decisiones fueran tomadas a partir de alineamientos de los miembros de dirección provenientes de las antiguas guerrillas, en estos alineamientos la posición asumida por el EGP resultaba determinante.

¹⁴³ El listado de estos dirigentes es grande, y el mismo puede verificarse a partir de las listas de desmovilizados de las estructuras políticas que URNG entregó a MINUGUA. Los nombres de estos dirigentes no se consignan por razones obvias.

¹⁴⁴ En 1994 el EGP acordó que el militante de dicha organización “... fundamenta su concepción y visión del mundo en la concepción Marxista sin que ello implique la renuncia o menoscabo a la cosmovisión maya o cristiana.” (EGP:1994:5) Se trata de “un marxismo sin esquematismos, sin recetas ni dogmático; un marxismo que discierna científica y dialécticamente cuales son las demandas sociales y morales de mayor urgencia y cuáles son las fuerzas sociales que las exigen, necesitan y están dispuestas a llevarlas adelante, así como las formas y momentos de actuar en cada circunstancia y etapa.” (EGP;1994b;4)

¹⁴⁵ A lo largo de 1997 y 1998 desde distintos ámbitos al interior de URNG se impulsaron iniciativas tendientes a posicionar a este partido como una fuerza de oposición, denunciar el incumplimiento de los acuerdos de paz, y

enfrentar las políticas neoliberales. Sin embargo, los máximos dirigentes de dicho partido optaron por preservar una alianza tácita con el gobierno de Arzú para cumplir los acuerdos de paz. El FRG – partido de derecha – si capitalizó las inconformidades con el gobierno y se posicionó como el partido opositor. Urrutia, citado por Nuila Hernández (2004:23) señaló sobre este período: “La URNG se contuvo a sí misma y contuvo, por consiguiente, a los sectores sociales que seguían sus directrices o se identificaban con ella. Tan fue así que, en 1999, muchos columnistas y líderes políticos de izquierda, no organizados en la URNG, acusaron que se había dado una alianza entre el PAN y la URNG, que esa alianza había desactivado la lucha de clases y que, por ello, no se había avanzado en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.”

¹⁴⁶ Una explicación funcionalista de este proceso de desmovilización de la lucha social es desarrollada por Nuila Hernández (2004: 16-19)

¹⁴⁷ Al interior de la comandancia general de URNG existió el convencimiento de la necesidad de establecer alianzas con sectores progresistas del empresariado. En 1995 por ejemplo, Gaspar Ilom planteaba: “Hasta ahora el movimiento revolucionario y popular no tienen una alternativa política, entendida como una opción diferente. No se puede seguir llamando simplemente al abstencionismo, porque fracasará o se convertirá en una medida estéril. Una vez hecho el planteamiento, tenemos que ver cómo se puede operativizar, porque nos podemos quedar en un buen documento y un buen planteamiento que forme parte de la literatura del país, pero no de la vida política. El proyecto debe ser viable, realmente razonable e impecable, sin temor de incorporar formas incluso de participación capitalista y de sectores empresariales. Si nosotros no comprometemos a los sectores empresariales progresistas con ese proyecto tendrá muchas limitaciones.” (Situación de desenlace p. 24) Esta perspectiva está relacionada con la visión que el PGT mantuvo durante años en torno a lograr acuerdos con la burguesía nacional para derrotar a la oligarquía.

¹⁴⁸ De manera paralela se desató una pugna dentro del EGP en la que un miembro de la dirección de esta organización y del Comité Ejecutivo Nacional, coordinador además de la comisión de acompañamiento fue acusado de abuso sexual. Este caso exacerbó diferencias políticas – se cuestionaba desde URNG su gestión en la comisión de acompañamiento y particularmente en el pacto fiscal -, problemas históricos de las organizaciones, y una situación ético-moral compleja. Estas acusaciones y el manejo del caso “contaminó” y “sesgó” el debate interno que se realizaba en URNG, el señalado fue relacionado a las FAR y esta organización se deslindó del caso señalando que se trataba de un problema interno del EGP. Un análisis de este caso que recoge las distintas versiones del mismo se encuentra en Hernández (2005:455-462)

¹⁴⁹ Las reivindicaciones de la Corriente por el Rescate Revolucionario de la URNG eran: definición del carácter socialista y revolucionario de la URNG; oposición al gobierno del FRG; reconstrucción de la unidad partidaria a partir de las definiciones, la democratización y la renovación de la dirección partidaria; rescate de los Acuerdos de Paz; revisión del proceso de incorporación de ex combatientes; articulación de una amplia alianza nacional en cuyo centro estuvieran los intereses populares; sumarse al movimiento internacional de oposición a los contenidos neoliberales de la globalización. (Plataforma de la corriente.. 2001)

¹⁵⁰ Aunque en términos absolutos y relativos el FMLN en coalición con la USC subió en las votaciones con respecto a 1994 (331629 a 365689 y 24.99 a 28.88%), en estas elecciones ARENA se impuso en la primera ronda electoral.

¹⁵¹ Infopress centroamericana, 6 de abril de 2003.

¹⁵² El 4 de junio de 2003 la ex embajadora de Estados Unidos en el Salvador Rose Likins advirtió que en el caso de una victoria electoral del FMLN, EUA revisaría sus relaciones con el país. (Infopress Centroamericana 13 de junio de 2003.)

¹⁵³ Plataforma Por el Cambio. FMLN Agosto de 2003.

¹⁵⁴ De acuerdo a un estudio sobre la izquierda en Guatemala con relación al FDNG “... lo que debió ser una alianza amplia de organizaciones y movimientos populares y de izquierda, en donde cupieran todos y todas – ex militantes, intelectuales, artistas, promotores sociales, activistas, sindicalistas, Etc. -, se convirtió por el afán hegemónico y por el carácter excluyente de las fuerzas dirigidas por la URNG, en un partido monocolor. Poco a poco se fueron deshaciendo e todos aquellos que no se subordinaron a sus designios. Después vino el maridaje con el viejo Partido Revolucionario (PR) las luchas por el poder y la maniobra que impidió que Byron Morales, el popular joven líder sindical, se convirtiera en secretario general del FDNG, lo que sólo fue el preámbulo para el partidicidio, cuando la URNG ya era partido político legal y el FDNG era ya prescindible.” (2003:6)

¹⁵⁵ De acuerdo con Bornschin (2000:19) en 1999 UNID no era un partido y su integración a la alianza se debe a que sus miembros eran en parte intelectuales y “reconocidos integrantes de la izquierda” así como antiguos miembros de la URNG.

¹⁵⁶ Hasta la fecha todavía no resultan claras las razones que llevaron a los jefes guerrilleros a mantenerse fuera de la competencia electoral. Una interpretación es que se pretendía con esto evitar un enfrentamiento interno que condujera a la ruptura entre las organizaciones, otra, postularía que existió el temor de someter su liderazgo a la prueba electoral. Lo cierto es que ninguno de los comandantes en jefe de las antiguas organizaciones guerrilleras se

postuló a cargos de elección popular, perdiendo la posibilidad de proyectarse políticamente en el Congreso de la República. Por su parte, el último secretario general del PGT fue electo diputado y después de dirigir la bancada de la ANN durante el primer año de la legislatura pasó a mantener un perfil político bajo.

¹⁵⁷ En el año 2005 la diputada Nineth Montenegro y otros dos diputados abandonaron la Alianza Nueva Nación para formar un nuevo partido, el Encuentro por Guatemala.

¹⁵⁸ De acuerdo con Cabañas (2004:1) apenas unos días antes de las elecciones de 2003 “análisis internos de URNG avizoraban un crecimiento prolongado de esta organización y la posibilidad de competir en una segunda vuelta electoral. Es decir, la izquierda dibujaba escenarios opuestos a los imaginarios sociales preelectorales, lo cual constituyó no sólo un error de apreciación sino un importante divorcio con la realidad.”

¹⁵⁹ Como lo señaló uno de los dirigentes del FMLN: “Para nosotros el tema de la identidad de izquierda ha estado vinculado a la relación con el sistema. Desde ese punto de vista, la única fuerza que en este país cuestiona el sistema y se define como ‘antisistema’ es el FMLN, y posiblemente otros agrupamientos menores como la Tendencia Revolucionaria.”

¹⁶⁰ Un análisis detallado de los avatares de la consulta popular de mayo de 1999 se encuentra en Jonas (2000:357-400).

¹⁶¹ En síntesis, los aspectos a ser incluidos y modificados en la Constitución eran los siguientes: a) El reconocimiento constitucional de la Identidad de los Pueblos Maya, Xinca y Garífuna, dentro de la unidad de la nación guatemalteca. b) Definir y caracterizar al Estado guatemalteco como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe. c) Reconocimiento, respeto y promoción de los idiomas existentes en la República, incluyéndolos en el artículo 143. d) Oficializar los idiomas indígenas de acuerdo a los resultados de la Comisión Paritaria creada para tal efecto. e) Modificar el artículo 66 de manera que quedara estipulado que el Estado reconoce, respeta y protege las distintas formas de espiritualidad practicadas por los pueblos Maya, Garífuna y Xinca. f) La no-reelección de diputados al congreso de la República por más de dos períodos y el establecimiento de un número fijo y razonable de legisladores, sin perjuicio de su representatividad. g) Establecer en el artículo 203 expresamente las garantías de la administración de justicia. h) Reformar los artículos 207, 208 y 209, haciendo referencia a la Ley de la carrera Judicial. i) Reforma al artículo 210, para darle coherencia a las reformas señaladas en la literal g. j) Establecer las funciones y características de la Policía Nacional Civil. k) Limitación de las funciones del ejército a la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. l) Limitar y subordinar la participación del ejército en situaciones de fuerza mayor o desastre. m) Posibilidad de que el Ministro de la Defensa Nacional sea civil o militar. Los tribunales militares únicamente conocerán delitos contemplados en el Código militar.

¹⁶² Esto fue parcialmente reconocido por la URNG “por medio de la comisión de Acompañamiento, logramos incidir en la construcción de la institucionalidad del proceso de paz, es así como muchos compañeros y compañeras se incorporan a todas esas comisiones que se crearon para trabajar en el cumplimiento de los acuerdos. Eso abrió oportunidades de participación a sectores que antes no habían participado a esos niveles, pero la característica común fue que se dio dentro de un desarticulado movimiento político. Es decir, no había nadie, ningún ente que pudiera articular todo ese movimiento que se expresaba en las distintas comisiones que se fueron creando a partir del cumplimiento de los Acuerdos de Paz. La participación y la actuación de todas las organizaciones sociales se ha dado de la misma manera en que participa nuestro partido, de manera ineficaz, desarticulada. Por eso es que no hay una expresión articulada y orgánica conjunta de todas esas organizaciones sociales, la que si existió durante la guerra. (Monsanto 2000: 18).

¹⁶³ “Cuando se da la constitución del COS, el bloque duro que se da de alianza fue entre lo que era la ASC y la Coordinadora Si Vamos por la Paz, ambas influenciadas y altamente controladas por URNG. Una, la ASC donde se aglutina la comisión de masas del partido (URNG) dirigida por Wilson Romero y sus principales cuadros: Norma Cruz, Edwin Ortega, Luis Lara, ahí gira la ASC. La otra, fundamentalmente controlada por Arnoldo Noriega (...). Acá lo que se evidencia es la comunicación y búsqueda de contacto muy avanzado, entre un ala de URNG encabezada por Noriega y el sector empresarial, y los puntos de contacto que venían desde la CAAOP (Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz), ahí se gestó un ni el de acuerdo y comunicación en ciertos temas, de alianza entre PAN y URNG.” (Nuila Hernández; 2005:8)

¹⁶⁴ Existen diversos estudios sobre la negociación en este pacto. Las diversas perspectivas del mismo se encuentran en Palencia (2002); Noriega et al (2001); y, Nuila Hernández (2004 y 2005)

¹⁶⁵ Esta “apertura” abarcó la supuesta incorporación de oficiales del ejército en situación de retiro a la ANN. Esto provocó no sólo –de acuerdo a declaraciones de su secretario general Pablo Monsanto – rechazo desde el interior del partido sino también severas críticas desde otros grupos de izquierda.

¹⁶⁶ Jorge Schafick Handal falleció por un ataque cardíaco el 24 de enero de 2006. Sus funerales dieron lugar a una movilización popular en la que participaron cientos de miles de salvadoreños así como delegaciones de partidos de izquierda de América Latina.